



REFORMAS
A LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL

TOMO II

| | |
|-----------------------------------|------|
| BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA | |
| Nº. DE ORDEN | 3718 |
| UBICACION | |
| FICHA MATERIA | |

ALEJANDRO GANCEDO

REFORMAS

Á LA

CONSTITUCIÓN

NACIONAL

TOMO II



BUENOS AIRES

IMPRENTA Y CASA EDITORA DE CONI HERMANOS

68½ — CALLE PRINCE — 68½

1909



CONSTITUCIÓN NACIONAL



XXV

« Art. 55. — Ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1° de mayo hasta el 30 de septiembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación ó prorrogadas sus sesiones. »

Art. 55. — Ambas cámaras se reunirán *todos los años* en sesiones ordinarias *por derecho propio, sin necesidad de convocatoria*, desde el 1° de mayo hasta el 30 de septiembre. *Pueden también ser prorrogadas sus sesiones por resolución de las mismas y por simple mayoría, antes de fenecido el período de las ordinarias, para tratar los asuntos pendientes.* El Poder Ejecutivo ó los presidentes de ambas cámaras por *petición subscripta por una cuarta parte del total de diputados y senadores, pueden convocar extraordinariamente á las cámaras, cuando un grave asunto de interés ó de orden público lo requiera.*

Los asuntos de carácter político de su incumbencia que se suscitaren mientras el Congreso está en sesiones de prórroga ó extraordinarias, le pertenecen por derecho propio.

Á los fines de la renovación de las cámaras, se celebrarán sesiones preparatorias del 20 al 30 de abril, en las que no tomarán parte los diputados ó senadores que terminan el 30 del mismo mes.

Las reformas que introduzco á este artículo, puedo decir que se explican por sí mismas. Ellas son transcendentales, porque importan un cambio radical en el régimen parlamentario, y porque marcan un rumbo definido en las atribuciones propias del Congreso y las del Poder Ejecutivo.

Como según el inciso 11 del artículo 86, el Presidente es quien «hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso», y es costumbre, que si esta autoridad no lo convoca, no se reúne en sesiones ordinarias, la disposición del artículo 55 vigente es ilusoria, de tal manera que muchas veces ha dado comienzo á sus sesiones á fines de mayo porque el Presidente no había preparado oportunamente su mensaje y es preciso estatuir que el Congreso, como cuerpo autónomo que es, el más alto en la dirección de la cosa pública, tenga fechas fijas para iniciar sus sesiones con prescindencia de toda



otra autoridad y en esto consiste la primera modificación de la serie que propongo en este artículo.

¿Qué significado tiene el hecho de que el Congreso no pueda iniciar las sesiones ordinarias, si no mediante la convocatoria y apertura hecha por el presidente?

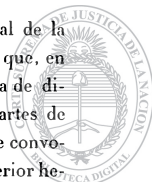
Que este alto cuerpo es una dependencia de otro más alto, del soberano *per tempore* que distribuye gracias sobre delincuentes y que sanciona ó veta leyes. Esto sería realmente irrisorio en el régimen democrático republicano de verdad, si no representara un caso típico de una perfecta monarquía. — Yo convoco las cámaras á sesiones, yo promulgo las leyes ó las rechazo, yo acuerdo gracia y conmuta penas decretadas por la justicia que no es sino una dependencia mía... Esto es digno de los reyes, de los emperadores, de los zares ó de los sultanes, pero nunca del Presidente de una república constituida para procurar la felicidad de todos y de cada uno, en un ambiente de franca confraternidad, de igualdad civil y política, de soberanía popular y de lo que, en una palabra, se llama gobierno de sí mismo.

Esta modificación que propongo se impone y representa un verdadero progreso institucional.

Como antecedentes de esta reforma referidos á



otros países, debo citar la ley constitucional de la República francesa, de 16 de julio de 1875 que, en su artículo 1º dice : « El Senado y la Cámara de diputados se reúnen cada año, el segundo martes de enero » (de pleno derecho y sin necesidad de convocatoria) « á no mediar una convocatoria anterior hecha por el Presidente » : el artículo 70 de la constitución de Bélgica, dice : « Las cámaras se reúnen de pleno derecho cada año, el segundo martes de noviembre, á menos que hayan sido reunidas anteriormente por el rey » : el artículo 86 de la constitución de Suiza, estatuye lo siguiente : « Los dos consejos (congreso) se asamblean cada año una vez, en sesión ordinaria, el día fijado por el reglamento » : el artículo 17 de la constitución de la república brasileña : « El Congreso se reunirá en la capital federal, independientemente de toda convocatoria, el 3 de mayo de cada año, si la ley no designa otro día » : el artículo 2º, sección 4ª, capítulo 1º, de la constitución de Estados Unidos (N. A.), dice : El Congreso se reunirá á lo menos una vez cada año : esta reunión tendrá lugar el *primer domingo de diciembre*, á menos que, por una ley especial, el Congreso fije otro día » : el artículo 2º de la ley orgánica del Riksdag de Suecia de 1866, dice : « El Riksdag



debe reunirse en sesión ordinaria, en virtud de la constitución (*Regeringsform*) del reino y sin convocatoria especial, el 15 de enero de cada año, ó el día siguiente, si éste cayera en feriado ».

Si además de estos antecedentes, entre los que están comprendidos países que viven en la monarquía, indagamos los que corresponden á las constituciones de nuestras provincias, vemos que, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Rioja, Mendoza, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, tienen la misma disposición con que encabezo el artículo de la reforma que propongo.

Corresponde el turno á la facultad de prorrogar las sesiones.

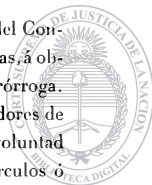
Especialmente en estos últimos tiempos, ó más bien dicho en esta década, en las postrimerías de la centuria de nuestra emancipación política, hemos presenciado el hecho, varias veces repetido, de que los presidentes de la Nación hayan confundido lamentablemente el significado de lo que se entiende por sesiones de prórroga y de lo que representan las sesiones extraordinarias. Las causas de tal confusión las hemos palpado por sus efectos. Las intervenciones á las provincias, *manu militari*, se han sucedido entre



el 1° de octubre y la fecha de convocatoria del Congreso para reunirse en sesiones extraordinarias, á objeto de tratar asuntos propios de sesiones de prórroga.

Evidente es, por demás, que los gobernadores de las provincias no son los exponentes de la voluntad de los pueblos, sino de la tutoría de los círculos ó grupos de hombres á quienes responden, porque, propiamente no tenemos en el país otro partido en actividad, que el del presupuesto, es decir, los afiliados del que manda en cada periodo : y los que permanecen en el ostracismo, en defensa de sus ideas liberales de verdad ó del sufragio, de sus intereses materiales, ó de su independencia personal, cuando no de todos estos bienes á la vez, son idealistas ó líricos : no tienen, ó no tenemos papel. Por consiguiente, las situaciones provinciales se encuentran siempre guardando un difícil equilibrio, apuntaladas por el ejército de línea como una valla, para impedir los avances del pueblo que incansablemente pugna por hacer valer sus derechos conculcados. Este es el estado permanente de las fuerzas políticas de las provincias y la presidencia es la cabeza de turco de estos desaguizados.

He traído estos antecedentes para demostrar que es cosa que no se discute, el conocimiento que tiene



el pueblo de las épocas convenientes para derribar el andamiaje burdo de las gobernaciones, según sus afinidades con el Presidente, ó con la mayoría parlamentaria, principalmente si es adversa.

Si atendiendo á los hechos consumados de las extraordinarias facultades presidenciales, el pueblo se pone de su lado, para quitarse de encima la mole del gobernante truán que gravita sobre los intereses generales de la casa, el momento oportuno para un golpe de mano es el receso de las cámaras, ó sea la época en que el Presidente se encuentra investido de la suma del poder público; y si el Presidente sostiene contra viento y marea al gobernante, el pueblo sabe que es preciso producir el escándalo mientras el Congreso sesiona. Como en el primer caso, el pueblo satisface los deseos del Presidente, éste ansía por llegar al 3o de septiembre y sin fijar su atención sobre la ley de presupuesto y otras no menos importantes sobre renta, propias de las sesiones de prórroga, deja producirse el receso, para sus enjuagues de lo que se llama *política presidencial* y después de consumado ésto, convoca al Congreso para tratar el *presupuesto en sesiones extraordinarias* !

Pero esto es muy burdo, se me dirá: y así y todo, esta es la realidad de hechos palpitantes que se prac-



tican con tanta *sans façon*, cual si se ejercitara por costumbre la suma bondad, ó se gobernara á un pueblo sin habitantes, ó se dispusiera de una suma tal de autoridad que permite considerar al Presidente en las condiciones de un monarca absoluto.

Hasta aquí llega la cuestión de la facultad discrecional acordada al Presidente para convocar las cámaras á sesiones extraordinarias ó de prórroga, confundidas cual si significaran una sola y misma cosa, cuando su aplicación es tan diversa.

Aunque es por demás sabido, tendré que repetir que las sesiones de prórroga, significan prolongar las ordinarias, dilatar ó diferir el plazo asignado á las primeras, á fin de tratar los asuntos de interés general que no han sido estudiados ó terminados en las ordinarias. En esta virtud, quien debe resolver este asunto es el Congreso, no el poder ejecutivo. El decreto del poder ejecutivo prorrogando las sesiones, importa una orden dada al Congreso para ocuparse de asuntos que tal vez, en el espíritu de las cámaras no hay la voluntad de tratarlos por no encontrarlos convenientes á los intereses bien entendidos del país.

El Congreso es el único poder llamado á resolver en esta cuestión, porque se trata de asuntos iniciados





ó entregados á su juicio, los cuales le pertenecen por derecho propio, ajenos á toda otra voluntad.

Una de las constituciones más modernas de los países, es la de la república del Brasil (24 de febrero de 1891) y á ella le pertenece esta declaración contenida en el artículo 17, capítulo I, sección 1ª, § 1, que dice : « Sólo al Congreso le pertenece deliberar sobre la prórroga ó aplazamiento de sus sesiones. » ¿ Por qué ? Porque se trata de asuntos que le pertenecen, que son propios de los resortes de su mecanismo, que sólo él debe resolverlos.

Recorriendo las constituciones de las provincias, vemos que Buenos Aires, Salta, Mendoza y San Juan (1) tienen la misma disposición de la reforma que propongo ; y las de Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Jujuy (2), tienen establecida la convoca-

(1) Las sesiones ordinarias podrán prorrogarse hasta sesenta días, previa una sanción que lo disponga (art. 73, cap. IV, Buenos Aires).

Las sesiones ordinarias podrán prorrogarse por una sanción de la aasmblea general que lo disponga (art. 79, cap. IV, Salta).

Las sesiones podrán prorrogarse por acuerdo propio de la legislatura, hasta sesenta días (art. 85, cap. IV, Mendoza).

La legislatura podrá prorrogar por sí sola sus sesiones hasta sesenta días (art. 43, cap. I, San Juan).

(2) Pueden ser prorrogadas sus sesiones por el poder ejecutivo ó por sanción de las mismas cámaras (art. 65, cap. III, Córdoba).



toria á estas sesiones por la misma legislatura, ó por el poder ejecutivo.

Vemos, pues, que las constituciones de las provincias son más adelantadas en este punto, que la constitución nacional vigente.

Los asuntos no terminados en las sesiones ordinarias y que por su importancia ó necesidad urgente de sanción, tales como el presupuesto, leyes de impuestos, etc., se imponen á la consideración del Congreso, no pueden ser materia de sesiones extraordinarias, como arbitrariamente se ha procedido en los últimos tres años. Los asuntos de tal cate-

Pueden ser prorrogadas las sesiones por el poder ejecutivo y por sanción legislativa (art. 106, cap. III, Entre Ríos).

Las sesiones ordinarias podrán prorrogarse hasta sesenta días, por el poder ejecutivo ó por disposición de las mismas cámaras (art. 91, cap. IV, Corrientes).

Las cámaras podrán prorrogar sus sesiones por una sanción de la asamblea por sí ó á petición del poder ejecutivo (art. 76, cap. IV, Tucumán).

Las sesiones ordinarias pueden ser prorrogadas por el poder ejecutivo ó por sanción de dos tercios de los miembros presentes de las mismas cámaras (art. 49, cap. III, Santiago).

Pueden ser prorrogadas sus sesiones por el poder ejecutivo ó por sanción de las mismas cámaras (art. 83, cap. IV, Catamarca).

Pueden ser prorrogadas sus sesiones por el poder ejecutivo ó por el Presidente (art. 25, cap. II, La Rioja).

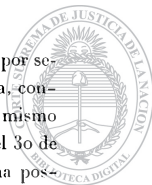
Las sesiones ordinarias podrán ser prorrogadas por la cámara ó por el poder ejecutivo, por un mes (art. 67, cap. I, Jujuy).

goria entran de lleno en lo que se entiende por sesiones de prórroga. Las sesiones de prórroga, continuación de las ordinarias, deben tener el mismo carácter de éstas : implican que el término del 30 de septiembre se ha transferido para otra fecha posterior, que puede fijarse de antemano ó que la marcan los asuntos pendientes.

El presupuesto, leyes de impuestos, y otras de carácter urgente para el ejercicio del año próximo venidero y para el progreso del país, no sancionados en el período de sesiones ordinarias, imponen la necesidad de la prórroga. Lo extraordinario es lo imprevisto, y cuando se habla de sesiones extraordinarias, es entendido que la razón que las informa es la gravedad del asunto de que se trata y que, por lo general se ha producido en un momento inesperado.

En lo concerniente á las sesiones extraordinarias, pienso que no solamente al poder ejecutivo es á quien corresponde hacer la convocatoria, sino que esta disposición debe ser también facultativa del Congreso.

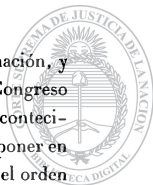
Entre los graves asuntos que pueden hacer necesaria la convocatoria á sesiones extraordinarias, es posible que haya algunos de orden político que afec-

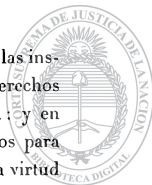


ten directamente al poder ejecutivo de la nación, y en tal caso, con la constitución vigente, el Congreso permanecería inactivo, impasible, ante acontecimientos transcendentales, quizá capaces de poner en peligro el organismo institucional, la paz, el orden y la salud de la república.

El Congreso no es un cuerpo inerte, que se mueve á impulsos de una voluntad superior intitulada presidente ; por el contrario, es un poder autónomo y superior á la presidencia misma de la república, porque es su juez ante quien tiene que rendir cuenta de sus actos cuando para ello fuese requerido. Por consiguiente, la Constitución debe contener disposiciones que garanticen el funcionamiento regular y eficiente de este alto cuerpo, sin cuyos requisitos deja de ser un poder y desaparece la armonía que debe reinar en la fuerza directriz del gobierno.

La constitución vigente ha acordado facultades propias de los reyes al presidente de la nación, y es acto de previsión, y más que de previsión, de patriotismo, cortar de raíz este mal, si queremos vivir en la república. Si hasta ahora no hemos tenido inconvenientes como el que apunto por razones de docilidad congresional, podrá acontecer mañana lo contrario, con un congreso de hombres indepen-





dientes y patriotas. Los pueblos progresan, las instituciones de verdad se abren camino, los derechos se fortifican y los deberes cívicos se cumplen : y en tal caso, preciso es anticiparnos á los sucesos para que los progresos que auspiciamos tengan la virtud de servir en el presente y adaptarse á lo porvenir.

Quienquiera que medite un momento sobre este grave asunto : — el Congreso no tiene rol alguno sino convocado por el poder ejecutivo — se dará cuenta que esto es una monstruosidad en el régimen republicano representativo federal : que en tales condiciones no tiene en sí la razón de su sér, ni el concepto de las responsabilidades que le son inherentes.

El Congreso debe tener, por la ley fundamental, vida y acción propia, sin que sea indispensable el decreto presidencial para su funcionamiento, así para reunirse en sesiones ordinarias, como cuando graves asuntos lo requieran, y este es el principio que contiene la reforma en cuestión, evidenciada por su carácter de permanente que lo distingue.

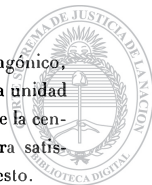
Cabe repetir una vez más lo que en varias partes de este trabajo he expuesto. Preciso que volvamos nuestro pensamiento al estado angustioso, inorgánico y de verdadero desequilibrio en que se encontraba el país á la caída del tirano Rozas, reempla-

zado por el partido tradicionalmente antagonico, que traia como emblema la organizaci6n y la unidad nacional, para que nos demos cuenta de que la centralizaci6n del poder era una necesidad para satisfacer los fines laudables que se habia propuesto.

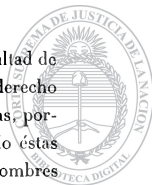
Cuando el gran Sarmiento se dirigia, en compa \tilde{n} ia de Vélez Sarsfield á la convenci6n de 1860, á Santa Fe, hizo manifestaciones análogas á las de Franklin en Norte América, trayendo á tela de juicio la Constituci6n. No creo, decia aquel alto personaje, que esta Constituci6n sea la mäs adelantada que podamos dictar, pero es la mejor que podamos establecer en esta época.

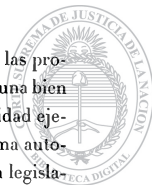
La disposici6n vigente de que sólo el Presidente tiene facultad para convocar las cámaras á sesiones extraordinarias la hemos copiado de Norte América y de otras constituciones monárquicas de la época de nuestra organizaci6n politica, y Norte América la tomó de la monarquía inglesa, dándole cabida en su *ensayo constitucional*, como decia Franklin, y todos los países americanos misonceistas de pega, siguen felices con el ensayo inadaptado á los progresos de la raz6n pública de esta hora de luz plena.

Dicho lo que precede, no indaguemos en las monarquías europeas y mucho menos en otras si tienen



ó no establecido el principio de que la facultad de reunirse en sesiones extraordinarias por derecho propio, es también atributivo de las cámaras, porque esto sería en ellos un sarcasmo, cuando éstas no son sino una dependencia de los superhombres irresponsables, inviolables y sagrados. Penetremos al interior de la cosa, y en las provincias encontraremos los más reveladores antecedentes de su verdadero progreso institucional. La constitución de Buenos Aires (art. 81, cap. IV), la de Córdoba (art. 63, cap. III), Corrientes (art. 92, cap. IV), Tucumán (art. 77, cap. VI), Salta (art. 80, cap. VI) y Mendoza (art. 84, cap. IV), tienen establecido que la convocatoria á sesiones extraordinarias podrá ser hecha por el poder ejecutivo ó por las cámaras á petición escrita de una cuarta parte de los miembros de cada una de ellas; la de Entre Ríos (art. 104), Santiago del Estero (art. 49) y Jujuy, la misma disposición anterior, con la diferencia de un tercio de la legislatura, en vez de un cuarto; la constitución de San Juan establece la convocatoria por el poder ejecutivo ó por siete miembros de cualquiera de las dos cámaras (son 24 diputados y 15 senadores); y la de La Rioja por la comisión permanente de la Cámara.





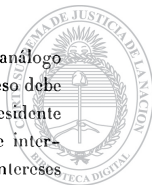
Esta disposición que es general en todas las provincias, demuestra que en todas ellas existe una bien marcada tendencia á democratizar la autoridad ejecutiva, despojándola por grados de la suprema autoridad de otros tiempos y transfiriéndola á la legislatura, rama del gobierno que recibe inspiraciones directas del pueblo y que es superior á todas las demás. Esto es lo que la carta grande debe tomar del conjunto de todas las cartas chicas, y en esto consiste esta parte de la reforma á este artículo.

La adición á este artículo, resolviendo que los asuntos de carácter político que se suscitaren mientras el Congreso sesiona extraordinariamente ó en el periodo de prórroga, y que son de su resorte, pueden ser considerados por este cuerpo, es de todo punto de vista conveniente. Supóngase que mientras el Congreso está reunido para tratar asuntos especiales, estallan movimientos subversivos en las provincias y se solicita por autoridad competente, la intervención federal, ¿es posible que el Congreso permanezca indiferente, dejando hacer y deshacer al Presidente de la nación en cuestiones que son del resorte exclusivo de este cuerpo, mientras está en actividad?

Cuando un asunto de esta índole ú otro análogo ó de mayor gravedad se produce, el Congreso debe abocarse el asunto, y de esta manera el presidente no tendrá objeto en retener los pedidos de intervención por creer que no conviene á sus intereses políticos tratarlos con la celeridad que merecen, como á menudo acontece.

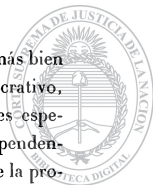
Como la enfermedad constitucional de que adolece el país está principalmente localizada en el uso y abuso de la autoridad discrecional del Presidente, especialmente cuando el Congreso no está en sesiones ordinarias, menester es que procuremos sanar al enfermo, evitando las causas que favorecen el mal, porque así podremos salir de la anormalidad, de la anarquía, para auspiciar el gobierno de verdad, amplio, dilatado, grande y beneficioso para todos.

Preciso es darse cuenta que no es de temer que el Congreso esté reunido un largo período de tiempo, por el contrario, esto es signo de buen gobierno, de saludable dirección de la cosa pública. Si se estipula un período determinado de tiempo para sus sesiones, es porque el cargo de congresal no está pagado por el tesoro, pues la dieta no es sino una ayuda de costas, y es justo acordarle otro período en el que debe dedicar sus actividades á sus asuntos



propios ó particulares. Este alto cargo es más bien una carga pública, antes que un empleo lucrativo, y es por esta razón que se exigen condiciones especiales de competencia, honorabilidad, independencia y juicio en el discernimiento. Así es que la prolongación de las sesiones de prórroga ó extraordinarias por nuevos asuntos que se suscitaren, no es un entorpecimiento para la marcha de los negocios del estado, ni mucho menos un mal para la armonía que debe reinar en las ramas del gobierno y la eficiencia de la vida cívica.

La última parte que comprende esta reforma estatuye en principio lo que se hace en la práctica, y ella viene á salvar una omisión constitucional, que podría dar lugar á entorpecimientos, en cierto modo justificados. Un diputado, por ejemplo, es tal hasta el 30 de abril, y sin la disposición que propongo, tendría perfecto derecho para asistir á todas las sesiones que la Cámara celebrare hasta esa fecha; y si bien es cierto que hasta ahora no se ha producido el caso, podría, en momentos aciagos del Congreso, producirse, y esto es lo que la constitución debe preverlo, para evitar inconvenientes que son siempre una rémora para el progreso del país.





Art. 55 a. — Si iniciada la acusación de juicio político á altos magistrados ó funcionarios de la Nación en sesiones ordinarias, no hubiese terminado el 30 de septiembre, las sesiones quedan de hecho prorrogadas hasta la terminación de aquél.

Este artículo es un agregado que propongo, para subsanar una imprevisión de la Constitución vigente.

Para evidenciar la razón de establecerlo en nuestra Carta, haré uso de un ejemplo.

Supongamos, que al final de las sesiones ordinarias se inicia una acusación contra el Presidente de la República, y antes que haya sido suspendido en el ejercicio de sus funciones, queda clausurado el Congreso. En este caso, ¿puede este cuerpo seguir conociendo en este asunto por acto propio? ¿Un Presidente á quien la Cámara le inicia juicio político puede decretar la prórroga de sus sesiones á esc ob-

jeto? ¿Á un Presidente se le puede exigir que sea el émulo de Sócrates, bebiendo la *cicuta*?

Tales son las interrogaciones que fluyen en el caso propuesto, con la Constitución vigente. Respondiendo á la primera, debo decir que, vencida la fecha del 3o de septiembre, el Congreso tendria forzosamente que suspender el juicio hasta la convocatoria del año próximo hecha por el Presidente para sesiones ordinarias, y el mal funcionario y jefe supremo de la Nación y de la religión católica, apostólica y romana, continuaria, muy campante, en el ejercicio de su poder absoluto, decretando, intervenciones, estado de sitio, y trasladando las personas desafectas á su persona á la Tierra del Fuego, á la Isla de los Estados, ó á algún rincón de la Puna de Atacama, y el Congreso y el país todo, burlados.

Respecto á la segunda pregunta, es evidente que el Presidente, constitucionalmente, podría prorrogar las sesiones, y el hecho cabe dentro de lo posible, pero no es menos cierto que un tal acto sería perfectamente ridículo : el reo, autorizando tribunal para su juicio!

La tercera interrogación se contesta por sí misma : en los tiempos que corren, y en nuestro país, no hay Sócrates.

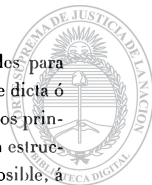




Bien, pues, mediante el artículo propuesto, estos inconvenientes se salvarían y la vindicta pública quedaría desagraviada. El Congreso proseguiría por acto propio los incidentes del juicio hasta su terminación, y comprobadas las graves faltas imputadas, el mal gobernante no podría continuar dirigiendo los destinos de la Nación.

El juicio político, es una atribución por demás delicada y cuando ella ha llegado á iniciarse, es porque se han ultrapasado los límites de las funciones constitucionales de las leyes, de la moral administrativa ó del orden público, y debe proseguirse sin interrupción. Por consiguiente este género de cuestión no tiene espera, porque se trata de cauterizaciones del cuerpo social, de higiene política de los altos funcionarios de la Nación.

Cuando se dice que el Congreso es juez político, no es posible suponer que su acción pueda quedar interrumpida por una imprevisión constitucional ó por la voluntad adversa del Presidente, porque en tal caso dejaría de ser juez. La estabilidad del Congreso como cuerpo político del Estado, es uno de sus grandes atributos, y como acusador y juez, su independencia es bastante y sus funciones deben ser inintermitentes.



Desde que el Congreso no tiene facultades para revecer por sí la Constitución, y las leyes que dicta ó sanciona no pueden modificar el espíritu de los principios que ésta contiene, es necesario que la estructura de esta misma, sea lo más completa posible, á fin de que no se preste á ser mal interpretada por falta de disposiciones claras y previsoras.

Nuestra Constitución debe contener todos las disposiciones necesarias y fácilmente comprensibles para la eficiencia del gobierno, porque es poco serio estar pensando á diario en su reforma ó en llenar omisiones.

Inglaterra feudal, tierra clásica de la libertad dentro de la monarquía, no tiene Constitución en esta forma, y más bien dicho, no tiene ninguna escrita, porque la tiene viva, latente : la compone el rey y el parlamento : luego no es antecedente para la reforma que propongo, como no lo son las constituciones de las demás monarquías, y en cuanto á la república francesa, el presidente no es responsable sino en el caso de alta traición (art. 6°, ley constitucional de 25 de febrero de 1875).

La Constitución de Estados Unidos (N. A.), no es tampoco muy explícita, no obstante las sucesivas enmiendas que ha sufrido, pero tiene de su parte el

carácter propio de la raza inglesa y la idiosincracia tradicional de costumbres de la madre patria que la declaran suficiente.

Nuestra Constitución, formada á base de la de esta última nación, tiene también disposiciones de la monarquía inglesa, sin poseer las calidades de raza, peculiares del inglés ó yankee y sin las tradiciones liberales que distinguen á estos pueblos. Estas causas hacen que seamos más explícitos en nuestra carta orgánica, pues sólo así hemos de evitar las generales tendencias á su falseamiento. Las leyes no se dictan para el hombre de perfección ideal, porque este tipo no existe, es más bien mitológico, sino para personas humanas, con más ó menos defectos y pasiones, y es preciso adaptarlas á él.







« Art. 63. — Cada una de las Cámaras puede hacer venir á su sala á los ministros del Poder Ejecutivo, para recibir las explicaciones ó informes que estime convenientes. »

Art. 63. — *Es facultativo de los ministros del Poder Ejecutivo, asistir ó enviar una exposición á las Cámaras, cuando éstas requieran informes ó explicaciones, sea en sesiones ordinarias, de prórroga ó extraordinarias.*

La reforma que propongo á este artículo tiene el doble objeto de establecer el principio que debe regir en este asunto, y la ratificación de hechos con el mismo motivo.

El artículo vigente ha dado motivo en diferentes ocasiones á interpretaciones diversas por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo, y comunmente se dice que un llamado á un Ministro, importa una interpelación; y el artículo propuesto viene á salvar estos inconvenientes.



Previamente debo afirmar que el contenido del artículo vigente no importa una interpelación.

¿Qué se entiende por interpelar, en derecho constitucional?

La contestación es obvia : hacer cargos, censurar, amonestar.

¿Á quiénes interpelan las cámaras?

Á los ministros del Poder Ejecutivo, en los pueblos constituídos á base de la monarquía, allí donde los monarcas son irresponsables, como dice la ley constitucional de Austria (21 diciembre de 1867), en su artículo 1° : *El Emperador es sagrado, inviolable é irresponsable*, y sólo los ministros lo son.

La interpelación al gabinete en los estados europeos importa la dimisión de éste, si no ha satisfecho los cargos formulados por la Cámara, ó su afianzamiento en caso contrario ; y entre la Cámara de Representantes y el Ministerio existe siempre un marcado antagonismo en estado latente, porque éste puede influir poderosamente para la disolución de aquélla, y en defensa, la Cámara llama al gabinete para destruirlo y hacerlo substituir por otro que comparta sus ideas.

Este es el objeto de la interpelación. La misma Constitución de Austria, en su artículo 21, dice :

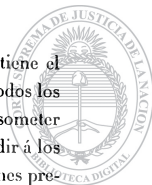
« Cada una de las cámaras del Reichsrath tiene el derecho de interpelar á los ministros sobre todos los asuntos que entran en sus atribuciones, de someter á su control los actos del Gobierno, de pedir á los ministros esclarecimientos sobre las peticiones presentadas, de nombrar comisiones á las cuales los ministros deberán suministrar todos los informes necesarios, y de formular sus apreciaciones bajo forma de indicación ó de resolución. »

Como se ve, este artículo estatuye con claridad y previsión lo que se entiende por interpelación, y lo que significa dar informes ó explicaciones sobre cualquier asunto, en cuyo caso, los ministros deberán entenderse con las comisiones nombradas con ese objeto.

El artículo 20 de la misma Constitución, dice, también : « Cada Cámara puede reclamar la presencia de los ministros... »

De manera que la interpelación requiere la presencia de los ministros en la sala de sesiones del Parlamento, y la petición de informes ó explicaciones ante comisiones especiales, fuera del recinto de sesiones.

El artículo 88 de la Constitución de Bélgica, dice : « Las cámaras pueden requerir la presencia de los



ministros », y el 89: « En ningún caso, la orden verbal ó escrita del rey no puede substraer á un Ministro de su responsabilidad. »

En ésta, como en las demás monarquías, la persona del rey es *inviolable* y sólo los ministros son responsables ante el Congreso, y de esta responsabilidad surge la interpelación.

Cuando alguna de las cámaras de nuestro país invita á los ministros del poder ejecutivo, á dar explicaciones ó informes sobre determinados asuntos, no los llama para colocarlos en el banco de los acusados, porque éstos no hacen otra cosa que transmitir las ideas que sostiene el poder ejecutivo y cuando el que está munido de este poder ha falseado la Constitución ó se ha hecho culpable por cualquier acto de su administración, para eso está el juicio político.

Al Presidente no se lo puede interpelar, porque ésto importaría rebajar su autoridad, deprimirla, y es por eso que el artículo se refiere simplemente, á recibir explicaciones ó informes de los ministros, como los asesores más bien informados en la marcha general del país, no para recriminarlos ú obligarlos á dimitir.

Desde que los ministros llevan á las cámaras la palabra del Presidente, la responsabilidad de éstos



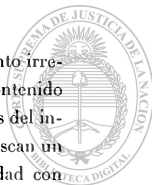


en el caso del artículo 63, es propiamente ilusoria; así es que, los llamados que hacen las cámaras á los ministros, no pueden tener el nombre de interpelaciones como se acostumbra en nuestro parlamento.

Francia, constituida también en república, participa del régimen monárquico en este asunto, y tiene establecida la interpelación al ministerio, así como la disolución de la Cámara de Representantes, y consecuente con estos principios, el artículo 6 de la ley constitucional de 25 de febrero de 1875, estatuye, lo siguiente : « Los ministros son solidariamente responsables ante las cámaras de la política general del Gobierno, é individualmente de sus actos personales. El Presidente de la República no es responsable sino en el caso de alta traición », á la inversa de lo establecido en nuestro país.

En los anales del parlamento argentino (1). se registran dos documentos importantísimos sobre la interpretación del artículo en cuestión, en los que el presidente Sarmiento, expuso sus ideas, con la lógica irreprochable de su esclarecido talento, en contra de la interpretación de interpelación aducida por el Congreso; y en estos documentos que honran su

(1) *Diario de sesiones del Senado*, páginas 439 á 450, y 517 á 520. Año 1873.



alta personalidad, he encontrado un argumento irrefutable en favor de la tesis que sostengo, contenido en el siguiente párrafo : « Si las preguntas del interrogatorio, hechas porque así *conviene*, buscan un hecho criminoso, arrancando al reo la verdad con preguntas indirectas sin semiprueba que conste de un proceso y previa acusación, *las garantías están violadas*; si un Senador las hace para establecer por la confesión la existencia de un delito en el Presidente, el Senador usurpa facultades de otra Cámara, y se *inhabilita* para juzgar en el delito de que se constituyó *juez pesquisador*; y la inusitada forma del interrogatorio, el impropio, *si es cierto*, ha traído en el ánimo del pueblo la idea de que se está tramitando una causa judicial. »

Efectivamente, si estuviese establecida en nuestra Constitución la interpelación, el Senado no podría ejercer esta facultad porque prejuzgaría : y en tal caso sólo podría estar reservada á la Cámara acusadora, que es la de diputados.

En el artículo que propongo, he establecido que es facultativo de los ministros, asistir ó enviar por escrito las explicaciones ó informes que solicitaren las cámaras, porque, como he dicho, los ministros, en nuestro régimen de gobierno, no son interpela-

bles, y porque en muchos casos así se ha procedido, como consta en los mismos documentos aludidos del presidente Sarmiento, en época del doctor Pellegrini, etc., la información escrita del poder ejecutivo ha reemplazado la inasistencia del ministro llamado.







« Art. 64. — Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo ó comisión del poder ejecutivo, *sin previo consentimiento de la cámara respectiva, excepto los empleos de escala.* »

Art. 64. — Ningún miembro del Congreso podrá retener ó recibir empleo ó comisión alguna del poder ejecutivo, sea ó no rentado. La aceptación de cualquiera de éstos, importa la renuncia del congresal.

El espíritu de esta reforma es el de independizar á todos y á cada uno de los miembros del Congreso de la perniciosa influencia del Presidente de la Nación que tantos trastornos ha ocasionado al país, á fin de que todas las leyes y en general las deliberaciones de las cámaras, tengan el sello de la ciencia y experiencia de cada uno, de la conciencia sana, sin reatos de ningún género y con la más entera independencia personal.

La estrictez en que está concebido este artículo implica la idea de la necesidad de un corte radical á los abusos que á diario se cometen.

— Usted sabe por experiencia propia, Presidente, que el cargo de gobernador en mi provincia origina demasiados sacrificios morales y materiales, sin recompensa alguna, si no fuera que mediante á él podemos llegar á obtener una diputación de cuatro años ó una senaduría de nueve. La exigüidad de los recursos con que cuenta la provincia no permite sueldos halagadores y todo el mundo quiere vivir de empleos y vive en realidad, porque es necesario conservar la adhesión de gentes decididas y prácticas en cuestión de elecciones. Por consiguiente, mis condiciones económicas son las mismas de siempre, y la dieta que tenemos los congresales no nos permite un ahorro con la carestía de la vida, supongo, por los elevados y múltiples tributos, sea que tengamos la familia en la provincia, y peor si las traemos á esta ciudad. En tal virtud, me veo en la necesidad de solicitar uno ó más empleos ó comisiones cuando llegue la oportunidad.

— Conozco sus condiciones de escasez de recursos y es por ésto que resolví traerlo al Congreso donde podrá prestar importantes servicios al país.





— ¿En qué repartición desearía usted colocarse conforme á sus aptitudes ?

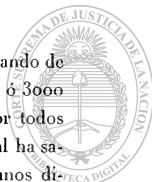
— Usted sabe que cuando hay necesidad no se elige, pero me parece que en el Consejo nacional de educación, Banco Hipotecario ó de la Nación, Obras de Salubridad. Consejo de Higiene, profesor en alguna Facultad ó colegio, en la Penitenciaría, ó en la intervención á alguna provincia, podría encontrarme bien.

— Perfectamente, mi buen amigo, conociendo como conozco sus prendas de carácter, su desinteresada obsecuencia, acepto su concurso de amigo y decidido partidario de mi política y puede esperar tranquilo, que en la primera vacante que se produzca ocuparé á usted.

— Me olvidaba también decirle, que tengo un hijo que lo he colocado en el colegio y desearía para él, un puesto en el que tenga poco que hacer para que no interrumpa sus estudios, y creo que en las secretarías de las cámaras, en impuestos internos ó en cualquier otra oficina pública podría estar bien. Esto lo hago, á fin de que él se costee sus estudios con su trabajo (sic).

.

La oportunidad llegó, y después de algún periodo



de tiempo, el congresal se encuentra disfrutando de una entrada cuyo monto es de 2000, 2500 ó 3000 pesos mensuales ó más y con pase libre por todos los ferrocarriles de la República. El congresal ha satisfecho sus anhelos, es ya poseedor de algunos dineros que el pueblo ha proporcionado, pero su conciencia de hombre y de ciudadano, su independencia personal y su patriotismo ha quedado reducido á la última expresión de desdén... puede ser que de ellos tengan un vago recuerdo, de sabor acre.

¿Y el pueblo?

El pueblo duerme: es bueno y dócil y el monarca es magnánimo, gobierna bien... es el jefe supremo de la Nación: y aparte de todo ésto, el país es rico: *much wheat, much meat*.

El diálogo transcrito no es sólo de ahora, pues viene de muchos años atrás, es consecuencia de un quiste constitucional, y lo veremos siempre repetido si no arrancamos el mal de cuajo.

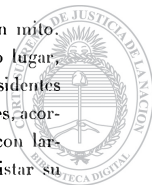
Yo podría señalar con nombres propios el ejército de diputados y senadores empleados en diferentes ramas de la administración, pero no lo hago para que sus nombres queden ignorados en este abuso permitido por la constitución en este largo periodo enfermo que parece que sin las unanimida-

des parlamentarias el gobierno fuerte es un mito.

En algunos casos el diálogo no ha tenido lugar, porque es costumbre inveterada en los presidentes de la República, anticiparse á las solicitudes, acordando empleos y comisiones que se pagan con largueza á diputados y senadores, para conquistar su adhesión incondicional.

Estalla un movimiento revolucionario en Santiago, el gobernador se hace el muerto y la revolución triunfa, allí va un S... (casi me equivoco, — á Santiago no va intervención): hay revolución en Corrientes, llevada á cabo por jefes de alta graduación del ejército, ó conato de revolución, allí va un senador; renuncia éste, se manda otro senador; se produce una vacante en el directorio del Banco hipotecario nacional, un otro senador ó diputado es el agraciado; hay vacantes en alguna de las facultades ó en los colegios nacionales, senadores ó diputados deben llenarlas.

Como los diputados y senadores, reelegibles indefinidamente, conforme á las prescripciones constitucionales vigentes, son siempre los mismos, lo que prueba que el pueblo está muy satisfecho de la conducta de sus representantes, quiere decir que en el país sólo hay ciento cincuenta personas hábiles y los



hijos y servidumbre entre los que se distribuye empleos y comisiones bien remunerados.

Esta es una de las graves enfermedades del país. Nadie se da cuenta que los cargos de diputado y de senador no están en las condiciones de un empleo público cualquiera, que representa una dignidad muy alta en las democracias, por las funciones que desempeñan y la responsabilidad y sacrificios que comportan. Estos cargos no deben ser tomados como medio de vida por los emolumentos que reportan, porque éstos no son sino simples ayudas de costas, como lo evidencian la condición de poseer una renta que permita al congresal, gozar de independencia personal para ser elegido. El congresal no puede ser pobre de solemnidad porque en tal condición su voto es acomodaticio.

Actualmente hace camino la carrera de congresal, y para llegar á la meta y poder empalmar los periodos sucesivos, las deshonestidades políticas, las falsías y la depresión moral de las personas se consideran vivezas ó virtudes.

Se ha prostituído de tal manera el cargo de diputado ó senador, que se han multiplicado en forma alarmante las aspiraciones, y hasta se puede decir que hay personas que mueren de congreso. ¿Cómo?



Las aspiraciones no satisfechas, traen malas digestiones y éstas degeneran en colitis y los colíticos se van. ¿Cuál es entonces la causa? El Congreso.

Si fulano es diputado, ¿por qué no he de ser yo? se oye á menudo, sin indagar los medios menguados de que se vale el electo, por lo menos las protestas de adhesión incondicional hechas al presidente, sin cuyo requisito se ha perdido lastimosamente el tiempo; y este estado de cosas infunde un tan grave mal que origina una verdadera anarquía en los partidos y en todas las esferas de la sociedad.

Estas ideas que emito están sustentadas por la palabra del doctor Pellegrini, en correspondencia enviada desde París y publicada en *La Nación* de 6 de enero de 1905. Los párrafos á que me refiero son los siguientes: « Los senadores y diputados no son representantes del pueblo de la provincia, sino del gobernador, y le deben obediencia. Si alguno se insubordina no será reelegido y perderá su puesto y su dieta.

« Si algunos senadores se permiten reunirse privadamente para tratar de cuestiones políticas, el hecho es denunciado como un *complot*, los culpables son llamados á la presencia del gobernador y duramente amonestados. Si se disculpan y se declaran



arrepentidos, se les perdona y pueden retirarse con alguna esperanza de ser reelegidos.

« El gobernador saliente designa á su reemplazante por sí y ante sí, como heredero testamentario. Esto es indispensable para garantizar la continuación de su política. Los senadores y diputados al Congreso, como los electores de presidente, los designa el mismo gobernador, y por ésto públicamente se refiere á ellos como *mis* senadores, *mis* diputados y *mis* electores y los negocia en block cuando se trata de alguna combinación política.

« ¿Y en el orden nacional? *mutatis mutandi*, hasta ahora ha sido lo mismo.

« ¿Y la opinión pública? Existe, pero es femenina... »

Estas afirmaciones hacen innecesario todo comentario.

Es, pues, obra patriótica eliminar de la Constitución los gérmenes que impiden el desenvolvimiento independiente y altivo de la entidad de legislador impidiendo la reelección é imposibilitando la obtención de empleos ó comisiones del poder ejecutivo. De esta manera, el presidente no podrá imponer su voluntad interesada é interesante hoy y todos los congresales podrán tener una acción eficiente para el país como



genuinos representantes de la voluntad del pueblo de la República.

Evidente es que, un congresal empleado ó sea dependiente del poder ejecutivo, es un elemento enfermizo, incapacitado para ejercer el cargo, desde que no dispone de la libertad de acción necesaria.

La armonía de los tres poderes en que está dividido el gobierno consiste en los justos límites de las funciones de cada uno, y en especial de los miembros que los componen, y es á este fin, que propongo la reforma de este artículo. Un diputado ó un senador que se elige debe renunciar los empleos ó comisiones que tiene para que éstos sean desempeñados por otras personas igualmente dignas y capaces, á fin de que se renueve la sabia intelectual en la cátedra, y se apliquen nuevos rumbos y prácticas convenientes á cada momento de progreso en los demás empleos.

Centenares de personas idóneas salen anualmente de nuestras facultades de ciencias y letras, incapacitados de ejercitar su actividad en puestos de alguna importancia porque todos ellos están acumulados ó reservados para los congresales (ó sus adláteres), de cuyos votos, el presidente no puede prescindir para satisfacer sus ideas políticas y preparar el tren para el sucesor que él debe imponer.





Á ésto responden las larguezas del presidente con los congresales, y en ésto consiste el permanente estado de revolución en que vivimos hecha por los de arriba á los de abajo; es decir, por el presidente en connivencia con los representantes del pueblo, contra el pueblo mismo.

De manera que, acordar facilidades á la presidencia para mancillar el crédito y el honor de los representantes al Congreso, para sacarlos de su verdadero rol, es prostituir la dignidad de tan alto rango.

Si como establece el artículo 51 de la Constitución, la Cámara de diputados es cuerpo acusador del Presidente de la República ante el Senado que es el tribunal de juicio, ¿ cómo es posible que los miembros de estas cámaras, llamados á desempeñar tan altas funciones, sean empleados á sueldo ó desempeñen comisiones rentadas del Presidente de la República? En Inglaterra mismo, donde el parlamento no llena estas funciones porque el rey es irresponsable, los miembros de la Cámara de los Comunes no pueden retener ni recibir empleo alguno.

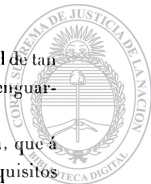
Los cargos de diputado y senador son dignidades de alto rango, porque el pueblo deposita en las personas que lo desempeñan toda su confianza y sus

destinos: por consiguiente, la responsabilidad de tan delicadas funciones es muy grande, para amenguarlas con prebendas presidenciales.

Empero, como con la actual carta orgánica, que á semejanza de las casas con *goteras*, tiene requisitos abiertos por donde se infiltra fácilmente el abuso y la corrupción, la enfermedad política del país es orgánica y general en todas las capas sociales, y es por ello que nadie advierte estos adesios constitucionales, ni nadie recrimina á la autoridad suprema que compra voluntades, ni á los que las ponen á precio.

¿ Hay dureza en estos términos ?

No hay la suficiente, cuando se palpa y se medita sobre las desgracias que afectan á la República ; cuando los que se creen grandes, dicen que gobiernan á fuerza de talento, en vez de decir á fuerza de terquedades y falsías ; cuando se ve que el pueblo enmudecido no puede hacer llegar el eco de sus desgracias á los poderosos ; cuando se ve que la autoridad comunal impone á la sociedad dispensar honores propios de los reyes, al Presidente de este país constituido en la democracia ; cuando, en fin, se tramitan descaradamente, en plena luz, diputaciones y gobernaciones entre el presidente y los caudillos ó gobernadores de las provincias, y cambiándose listas íntegras



de personas inadecuadas para estos cargos eminentemente electivos.

El hecho que paso á referir demuestra hasta qué grado se ha abusado de la atribución contenida en este artículo y la complicidad del Congreso en estos mismos abusos.

Fenecido el periodo ordinario de sesiones el 30 de septiembre de 1907, no obstante no haberse sancionado el presupuesto y leyes de impuestos para el año venidero, el poder ejecutivo declara intervenida la provincia de Corrientes y nombra interventor al senador nacional don Eugenio Puccio con fecha 22 de octubre del mismo año. El Congreso había sido convocado por el poder ejecutivo á sesiones extraordinarias para el 15 de noviembre próximo, en cuya fecha empezó sus sesiones y al día siguiente de instalado, el Senado recibió un despacho telegráfico dirigido desde la ciudad de Corrientes por el interventor, solicitando el consentimiento de la Cámara para aceptar el cargo que había aceptado veinticinco días antes y que estaba desempeñándolo, y el Senado, mansamente y sin más trámite, no obstante no saber *oficialmente* que aquella provincia estaba intervenida al sólo objeto de organizar su poder legislativo que estaba organizado, le acuerda el permiso solicitado.





Este asunto involucra varias cuestiones constitucionales :

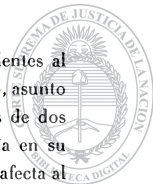
1ª El Presidente debió incluir en la convocatoria á sesiones extraordinarias la intervención á Corrientes ó por lo menos dar cuenta de este asunto, por cuanto él representa *un grave interés de orden* como lo dice la última parte del inciso 12 del artículo 86 ;

2ª El poder ejecutivo no debió nombrar interventor al senador Puccio, porque éste no podía obtener el *previo consentimiento* del Senado á que se refiere el artículo 64, sin cuyo requisito «ningún miembro del Congreso no puede recibir empleo ó comisión del poder ejecutivo» ;

3ª Habiendo el senador Puccio aceptado la comisión conferida y en pleno desempeño de ella, de hecho había quedado cesante en el cargo de senador ;

4ª No habiendo el senado recibido comunicación alguna del poder ejecutivo sobre la intervención á Corrientes, ni sobre el nombramiento de interventor del senador Puccio, no podía considerar el consentimiento que éste solicitaba, y en caso de hacerlo, debía declarar que éste había dejado de ser senador, por haber contravenido el artículo cuya reforma propongo ;

5ª El Senado sabía extraoficialmente que el poder



ejecutivo intervino en la provincia de Corrientes al solo objeto de organizar su poder legislativo, asunto rechazado por esa misma cámara, con más de dos tercios de votos un mes y días antes, y tenía en su seno un senador, fruto de la legislatura desafecta al Presidente; en consecuencia, no debió acordar el permiso solicitado por el senador Puccio, si no quería separarlo de la Cámara.

Demostrado queda, pues, que no sólo el Presidente había contrariado el espíritu y la letra del artículo en cuestión sino también el Senado, quien reconocía de hecho la ilegalidad de la legislatura, cuya legalidad había reconocido después de un largo debate, con la aceptación del diploma del senador Virasoro.

Por otra parte, el Presidente no podía decir que el nombramiento de interventor, hecha en la persona de un senador, estaba dentro de las facultades del inciso 22 del artículo 86, porque los empleos ó comisiones á congresales, quienes necesitan el previo consentimiento de la respectiva Cámara, no entran en los nombramientos en comisión en el receso de éstas.

Véase hasta qué punto es inconveniente el artículo 64 vigente y la manera de respetar las prescrip-

ciones constitucionales á que están acostumbrados los poderes públicos de la Nación.

Quiero rememorar con esta ocasión la opinión de uno de nuestros más grandes hombres públicos, con motivo de un proyecto de ley electoral por circunscripciones, debatido en 1883. El ex presidente doctor Nicolás Avellaneda, entonces, es á quien me refiero.

Recordaba que, sancionada en Estados Unidos la ley electoral de la nación por circunscripciones, en 1842, y dos años más tarde, con la Cámara, producto de esa ley, los opositores á la misma, decían : « El nivel intelectual de la Cámara de diputados descende. ¿Dónde están los oradores eminentes, los hombres de Estado con reputación adquirida delante del país y que han ilustrado las sesiones anteriores? » Á lo que el senador Sonner, contestó : « Podrá decirse, y para facilitar el argumento lo consiento, que haya decaído el nervio intelectual de la Cámara de diputados, pero ha crecido algo que vale tanto ó más que el nivel intelectual : *ha crecido la independencia de los diputados !* Porque ya no hay diputados que deban su nombramiento á combinaciones políticas que esclavizan, ni tengan por origen la acción de los poderes superiores, de los



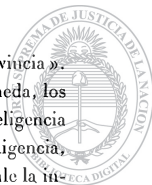
poderes centrales de la nación ó de la provincia ».

Á estas palabras, agregó el doctor Avellaneda, los conceptos que siguen : « Es poderosa la inteligencia en una Cámara ; pero tanto como la inteligencia, vale el decoro personal, vale la dignidad, vale la independencia, sin las cuales un diputado no es un diputado, porque es un instrumento servil. »

He traído la expresión sincera de esta eminente personalidad, que diera luz y brillo al ambiente político de otra etapa de nuestra vida institucional, para fortalecer mis ideas en favor de la tesis que sostengo.

La facilidad que el artículo 64 vigente acuerda al Presidente para dispensar favores á los congresales, es uno de tantos inconvenientes que contiene la Constitución del 53 ; ésta es una de las puertas que conduce al despotismo, á la clandestinidad de las presidencias, en las que el pueblo no interviene sino con una voluntad pasiva : cerrémosla para siempre, é iniciemos nuevos horizontes hacia la verdadera normalidad institucional, hacia la honradez ciudadana, hacia el reinado de la verdad pura, y después de cerrarla, echemos un velo al pasado y abracemos la libertad del presente y del porvenir.

¿Quién sería el Presidente que impondría gover-





nadores de provincia, que ungiera congresales, que interviniera en las provincias *manu militari*, que desatendiera la renta pública ó la malgastara, que hiciera figurar en los presupuestos, desde el hijo menor de edad hasta el último pariente que lleva el apellido, con un Congreso independiente, cuyos miembros no son inmediatamente reelegibles, ni pueden aceptar empleo ni comisión alguna del poder ejecutivo nacional, y otros atributos que se le acuerda, propios de su rol ?

Estoy seguro que, en las condiciones de estas reformas, cualquier ciudadano, medianamente ilustrado, como hemos tenido varios presidentes, no podría hacer sino un buen gobierno ; pues aunque quisiera no podría comprarse congresales, ni faltar á sus deberes, y la honradez de los mandantes y mandatarios sería asunto que no permitiría discusión.

Si estudiamos los antecedentes pertinentes de otros países, veremos que en las repúblicas como en la monarquía, existen estipulaciones análogas á la reforma que introduzco en este artículo.

La Constitución de Estados Unidos de Norte América, contiene la siguiente disposición, en la sección 6ª : « Ningún senador ni representante podrá,

durante el ejercicio de su cargo, ser nombrado para un empleo civil bajo la autoridad de los Estados Unidos. El que lo desempeñare, no deberá tampoco ser miembro de una ú otra Cámara. »

Francia, en la ley orgánica sobre la elección de diputados de 30 de noviembre de 1875, en su artículo 8º, dice : « El ejercicio de las funciones públicas retribuidas con fondos del Estado es incompatible con el mandato de diputado. »

Inglaterra en su *Act of settlement*, de 12 de junio de 1701, dice : « Ninguna persona que tenga un oficio ó un cargo retribuido por el rey, ó que goce de una pensión de la corona, estará en condiciones de servir como miembro de la Cámara de los comunes. »

La Constitución del imperio de Alemania del 16 de abril de 1871, en su artículo 21 del capítulo V, dice : « Cuando un miembro del Reichstag acepta un empleo retribuido por el emperador ó por un estado de la Confederación, ó cuando está investido por el imperio ó por uno de los estados de la Confederación de una función que comporta un rango ó sueldo más elevado que aquél que ocupaba, pierde su sitio y su voz en el Reichstag, y no puede volver á él sino en virtud de una nueva elección. »

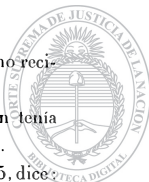


Art. 32. « Los miembros del Reichstag no reciben ninguna remuneración ni indemnidad. »

Iguales disposiciones á las que anteceden tenía Prusia, conforme á su Constitución de 1850.

La Constitución del Brasil, en su artículo 25, dice: « El mandato legislativo es incompatible con el ejercicio de toda otra función durante el período de sesiones », y en los artículos 23 y 24, estatuye que ningún miembro del Congreso, desde el día de su elección, no podrá celebrar contratos con el poder ejecutivo ó recibir de él comisiones ó empleos remunerados. Un diputado ó un senador no podrá ser presidente ó hacer parte del consejo de dirección de un banco, compañía ó empresa que goce de favores del gobierno federal en los términos de una ley. La inobservancia de estas prescripciones, importa la caducidad del mandato.

La sabia Constitución española de 1812, en sus artículos 129 y 130, establece, respectivamente : « Durante el tiempo de su diputación, contando para este efecto desde que el nombramiento conste en el permanente de cortes, no podrán los diputados admitir para sí, ni solicitar para otro, empleo alguno de provisión del rey, ni aun ascenso, como no sea de escala en su respectiva carrera. » « Del





mismo modo no podrán, durante el tiempo de su diputación, y un año después del último acto de sus funciones, obtener para sí, ni solicitar para otro, pensión ni condecoración alguna que sea también de provisión del rey. »

La Constitución de esta misma nación de 1876, en sus artículos 25 y 31, estatuye que los senadores y diputados no pueden aceptar empleo, título, comisiones, dignidades ú honores, etc., y en caso de hacerlo, cesan inmediatamente.

Bélgica, en su artículo 36, dice : « El individuo de cualquiera de las dos cámaras nombrado por el Gobierno para un empleo con sueldo aceptado por él, cesa inmediatamente de tomar asiento en ellas, y no puede volver al ejercicio de sus funciones sino en virtud de una nueva elección. »

Además de los antecedentes constitucionales de las naciones citadas, debo mencionar también otros tomados de las constituciones más adelantadas de nuestras provincias.

La de Buenos Aires, en su artículo 85, dice : « Ningún miembro del poder legislativo durante su mandato, ni aun renunciando su cargo, podrá ser nombrado para desempeñar empleo alguno rentado que haya sido creado, ó cuyos emolumentos se ha-

yan aumentado durante el período legal de la legislatura en que funciona, ni ser parte en contrato alguno que resulte de una ley sancionada durante su período. »

El mismo contenido ú otro análogo, contienen las constituciones de Santa Fe (art. 49), Tucumán (86), Catamarca (97), San Juan (49) y Jujuy (61).

¿Qué representa esta uniformidad en las Constituciones de los países más adelantados en materia institucional cuyas formas contractuales son tan diversas entre sí ?

La de que todos los pueblos civilizados han comprendido que la independencia del legislador es preciso garantizarla, porque sólo de esa manera es posible establecer el linde de los dos grandes poderes ejecutivo y legislativo, tan importante en el organismo constitucional. Si estos dos poderes no funcionan en la órbita propia de sus atribuciones, si al ejecutivo le es permitido ejercitar su influencia ilegítima en los miembros del Congreso á fin de que sus resoluciones tengan el sello de su voluntad exclusiva, este cuerpo no tendría razón de existir y por consiguiente más valiera suprimirlo. No. Antes que esto suceda es más necesario y conveniente estable-



cer restricciones y procedimientos que hagan de la voluntad del congresal un baluarte inexpugnable en sentido de su independencia personal ; que cada uno se dé cuenta de la alta misión que el pueblo le ha confiado y que es menester responder á ella á satisfacción : que un congresal no pueda delegar la facultad de pensar por sí al Presidente de la República ; y finalmente que, residiendo en el Congreso la suprema voluntad popular, éste debe desenvolver su acción con prescindencia absoluta del poder ejecutivo, en todas aquellas cuestiones que son de su propio mecanismo. Así lo han resuelto hasta las monarquías, y aún aquellas en las que los congresales no reciben emolumento alguno, y justo es que nosotros con instituciones liberales y ramas autónomas del gobierno, propendamos á la independencia del más alto cuerpo político del Estado, independizando á sus miembros de la influencia presidencial.

Finalmente, y como un antecedente ilustrativo de la cuestión, debo citar el hecho de que en la sesión del 15 de octubre de 1816, aunque sin resultado positivo, se discutió la moción del diputado Darregueira, consistente en la prohibición al director del Estado para conferir empleo alguno á los



diputados « durante su representación en el Congreso, ni después de la separación de éstos de la soberana corporación en el tiempo de un año, ó á lo menos dentro de seis meses. »

Véase con toda evidencia que en nuestros orígenes constitucionales existía ya este fondo de buena doctrina constitucional, inspirado en la honradez ciudadana de nuestros preclaros patriotas. Aquellos tuvieron la visión de los inconvenientes que originaría los empleos ó comisiones que podría acordar el poder ejecutivo á los miembros del Congreso durante la representación, para que en ningún momento la influencia del mandatario pudiera ser óbice á la libertad é independencia de los miembros del Congreso.

Si no prosperó esta idea en aquel entonces, no fué, sin duda alguna, porque primara la idea contraria á este sabio principio, sino porque el Congreso dejaba este punto, como todos los demás correlativos para ser tratados en la Convención que debía establecer las bases definitivas de la Constitución, por cuanto en el capítulo primero de la sanción segunda del reglamento provisorio, no estatuye principio alguna como fundamento para la existencia y funcionamiento del Congreso.





Empero, es un hecho curioso que mientras los ciudadanos que constituyeron el primer Congreso argentino, con la honradez propia de los tiempos que se llaman de atraso, significaron un propósito benéfico para el más regular funcionamiento de los poderes del gobierno, los convencionales del 53 establecieron la condición de la reelección y la posibilidad de la aceptación de empleos y comisiones del poder ejecutivo, previo consentimiento de la Cámara respectiva.

¿Qué es lo que acontece con esta disposición ?

Que las cámaras están siempre dispuestas á acordar estas gracias, y éste es ya punto que no se discute en esta época de tantos progresos, porque beneficia á todos por igual, por la gran ley de la reciprocidad.

Este procedimiento y sus funestas consecuencias es lo que querían evitar las ideas emitidas al respecto en el Congreso del año 16.

Además de lo dicho, y para que se vea hasta dónde llevaron su honradez y las tendencias del gobierno libre á la vez que la negación de las ideas nepóticas de los hombres de la primera hora, que estatuyeron en el reglamento, sección 3^a, capítulo II, artículo 16, lo siguiente : « El poder ejecutivo no po-

drá proveer empleo alguno civil ó militar, en sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad inclusive y primero de afinidad, sin noticia y aprobación del Congreso. »

Con lo expuesto, considero suficiente, como demostración de la conveniencia de prohibir en absoluto los empleos ó comisiones del poder ejecutivo en miembros del Congreso.







« Art. 65. — Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso; ni los gobernadores de Provincia por la de su mando.

Art. 65. — Los eclesiásticos no pueden ser miembros del Congreso; ni los gobernadores ni los ministros de provincia, hasta pasado un año de fenecido el período legal correspondiente al primero, y un año después de la renuncia ó cese del segundo.

Consecuentemente con la supresión del artículo 2° vigente, relativo al sostenimiento del culto católico, apostólico, romano, propongo la reforma de que los eclesiásticos en general no pueden ser miembros del Congreso.

Ante todo debo hacer notar que el artículo vigente se refiere sólo á los eclesiásticos del culto católico, porque á la época de la Constitución, no

había ciudadanos afiliados á otras creencias disidentes, y mucho menos sacerdotes argentinos que las representaran.

Hoy acontece lo contrario y puede decirse que todas las religiones del mundo tienen sus legítimos representantes entre nosotros con sus respectivos pastores que pueden ser ó son ciudadanos argentinos, máxime, con la reforma que propongo respecto á la naturalización obligatoria del extranjero.

De manera que, de conformidad al artículo vigente en cuestión, podría acontecer algún día que el Congreso se transformara en un campo de Agramante con los eclesiásticos seculares de todas las religiones ó sectas que podrían componer el Congreso, desvirtuando por completo el rol eminentemente político de este alto cuerpo.

Como tenemos establecida la libertad de cultos, no podemos decir que sólo los pastores católicos, apostólicos, romanos pueden ó no formar parte del Congreso; la habilitación ó la prohibición debe ser general, sin exclusiones, y entre una y otra, opto por la segunda.

Los eclesiásticos no pueden disfrutar de la independencia que requiere el cargo de congresal, porque, antes que todo, dependen de voluntades supe-



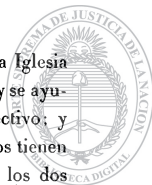


riores gerárquicas, cuya cabeza principal es el Sumo Pontífice de la respectiva iglesia.

El Congreso es un cuerpo político, allí no se debaten cuestiones dogmáticas ni se penetra al fuero interno de las personas, asuntos exclusivos de los religiosos.

En nuestro régimen institucional, sólo existe ó debe existir el gobierno político, en el que todas las cuestiones entran en el campo de la libre discusión, mientras que sus dogmas de fe ó verdades reveladas no la aceptan porque la infalibilidad de la iglesia, no es materia de controversia, puesto que es inmutable. Así es que, el gobierno político y el de las conciencias son tan diversos, que no es posible unirlos en nuestro modo de ser político.

¿Por qué en Inglaterra, Prusia y Rusia, los obispos, arzobispos, etc., elegidos por el monarca, son miembros de la Cámara Alta? Porque, el rey, el emperador y el zar, son los pontífices de las respectivas iglesias, son los supremos jefes espirituales y temporales; porque de esa manera son realmente sagradas é inviolables las personas que representan esas altas dignidades. Como poder no se puede pedir más. Los demás países monárquicos de Europa: Italia, España, Portugal, etc., permanecen aún con



las mismas antiguas prácticas de unión de la Iglesia con el Estado porque ambos se compensan y se ayudan mutuamente para el predominio respectivo; y es por esta razón que los arzobispos y obispos tienen su asiento en la alta Cámara. La unión de los dos poderes representa una protección mutua: y si así no fuera, las monarquías estarían más próximas á trocarse en repúblicas.

Si queremos que la religión de nuestros padres, que es también la nuestra, se dignifique más y más, debemos evitar su roce con la política, porque en vez de beneficiarla el poder temporal la deprime. El sacerdote no debe tomar parte en el debate de la cosa pública, sino en asuntos propios de su ministerio, en la dirección espiritual de sus afiliados; y la Constitución no debe desvirtuar su rol eminentemente político, permitiendo la entrada al Parlamento de hombres que no disponen de la independencia que requieren las funciones del legislador.

La segunda parte de la reforma propuesta tiene por objeto corregir malas prácticas, inducir á los gobernantes al cumplimiento del deber é higienizar el Congreso en sentido de la mayor honorabilidad y

competencia de los representantes que el pueblo debe designar.

En la actualidad, es cosa fácil hacerse elegir Senador, cuando se encuentra uno en el gobierno de provincia: y á este objeto se renuncia la diputación si la tiene ó se abandona cualquier negocio, pero ante todo, es preciso recibir el *exequatur* del jefe supremo de la Nación. En el gobierno, el más ignorante en cuestiones de gobierno es el más hábil para constituir una legislatura que responda á sus miras políticas, porque no tiene nociones sobre la responsabilidad del cargo de que lo ha investido su antecesor por derecho propio.

Con una legislatura en estas condiciones, como son las de las catorce provincias, si la elección de senador corresponde dentro del período del gobernador, es cosa fácil presentar la renuncia y hacerse elegir senador simultáneamente: y si es posible y conveniente, se suspende la elección por unos cuantos meses hasta la terminación del período de gobernador, á objeto de llegar al mismo fin.

De tan sabidas estas prácticas, ya nadie las discute, pues hay la creencia de que así debe ser, desde que no hay disposición alguna constitucional que lo prohíba.



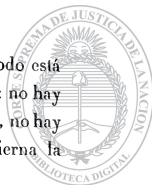
¿Es posible que sea tan reducido el número de las personas aptas para desempeñar el cargo de senador de las provincias?

Lo reducido es el nivel moral de las personas en general, por obra y gracia de nuestras instituciones adaptadas al régimen monárquico : todo para los que están arriba, para la comandita gubernativa, nada para los que no se doblan.

Los gobernadores de provincia pasan por las mayores bajas inferidas por el Presidente con el fin de llegar á la deseada meta, y son á la vez el desprecio de sus conciudadanos, pero todo es poco en cambio de una senaduría de nueve años hecha por la legislatura regimientada y obediente.

El gobernador acepta, sin ninguna repugnancia, la imposición de candidatos para diputados al Congreso, hecha por el Presidente, y algunas veces se deja imponer hasta su ministro y jefe de policía; éste á su vez, ordena á los jefes políticos y demás autoridades el triunfo ó el simulacro de elecciones, de los que saldrán ungidos diputados los elegidos anteriormente por el Presidente. ¿Cuáles son entonces las condiciones morales de los senadores que practican estas virtudes y que constantemente van del gobierno al Senado, y del Senado al gobierno ?





Esta es la razón de que en nuestro país todo está corrompido, desde la cúspide hasta el llano : no hay decencia, no hay dignidad, no hay honradez, no hay patriotismo, pero sobran negocios y gobierna la mentira política.

Mi propósito, con la reforma que propongo tiende á cortar este abuso : no impide que el gobernador saliente pueda ser elegido senador si ha hecho un gobierno de verdad y posee condiciones relevantes y meritorias, pues sólo así se comprende que la legislatura ajena á sus inspiraciones, pueda discernirle ese alto honor, después de un año de fenecido el período para el que fué elegido Gobernador.

Como el cargo de congresal es y será siempre apetecido por los hombres de la política, aunque más no fuera que por el honor de representar al pueblo de su provincia, el gobernante se vería obligado á hacer gobierno de verdad para llamarse acreedor á sus deseos, y cuando no fuere posible, preferiría renunciar el cargo para otros más aptos que el dimisente. Este sería el dilema includible en el caso de estatuido el artículo en la forma propuesta.

El ministro en provincia está en análogas condiciones á las del gobernador, y es por eso que propongo



la condición del transcurso de un año desde la fecha que renunció para poder ser elegido diputado ó senador. Es también práctica establecida la de renunciar el cargo para hacerse elegir diputado, y aun sin renunciar; porque, en esta época de tantos progresos, el pudor político no es conocido ni de nombre.

¿Quiénes llegan á ser ministro en las provincias y se sostienen en sus puestos?

Por lo general los más ignorantes, los que no opinan sobre nada, lo que en ninguna circunstancia pueden llegar á ser una fuerza política, especie de amanuences, pero con la suficiente habilidad para el manipuleo electoral, con el único propósito de encaramarse cómodamente en una butaca legislativa.

La condición del ministro con relación al gobernador es análoga á la de éste con el Presidente. De manera que un ministro que alcanza á obtener una banca en el Congreso es un degenerado político, porque el gobernador, para estar seguro de su obsecuencia, lo ha hecho pasar cien veces por las horcas caudinas y otras tantas le ha hecho alcanzar sillas para las visitas en su despacho.

En consecuencia, como la mayoría de los diputa-

dos y senadores está constituida por ex gobernadores y ex ministros de provincia, es posible clasificar la calidad de esa mayoría.

Atentas estas líneas, evidenciadas quedan las bondades de la reforma que propongo á este artículo.







« Art. 66. — Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el tesoro de la Nación con una dotación que señalará la ley. »

Art. 66. — Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el tesoro de la Nación con una dotación que señalará la ley *por cada sesión á que asistan, y que no podrá aumentarse en favor de los que estuviesen en ejercicio. Los permisos se acordarán en todo caso sin goce de dieta.*

La modificación que propongo á este artículo entra en el plan general de higienización del cargo de congresal.

El cargo de congresal es considerado hoy como un medio de vida más que como un alto honor discernido al juicio, competencia y honorabilidad de las personas, y en cierto modo con razón, desde que el pueblo no interviene libremente en las designaciones. Como he dicho más antes, además de los diez y

ocho mil pesos anuales que constituyen la dieta de los congresales, ó sea una renta sobre un capital de *trescientos mil pesos* al 6 por ciento de interés, el Presidente aumenta esos emolumentos con empleos y comisiones que duplican ó triplican la cantidad expresada.

Se comprende la impropiedad ó exageración de la forma actual de remuneración del congresal, á razón de 1500 pesos mensuales durante el año, si se recorren los diarios de sesiones y se ve el número de éstas en cada año. En 1905, por ejemplo, se han celebrado *trece sesiones ordinarias* (no hubieron de prórroga ni extraordinarias), de manera que cada sesión fué retribuida con la suma de *1385 pesos!*

Como el artículo en cuestión se refiere á remuneración por *servicios*, resulta que cada congresal recibe actualmente, 7500 pesos por servicio de los cinco meses, sin contar las innumerables inasistencias, y 10.500 pesos por los siete meses restantes que no sirve, dedicados al trabajo del empalme legislativo. Así es que, en ciento cincuenta congresales, invertimos 1.125.000 pesos por servicios y 1.575.000 por siete meses de descanso de las tan pesadas tareas del año.

La remuneración de los diputados ha sido iniciada

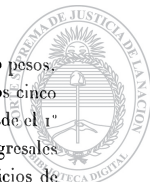


en 1856 (5 de septiembre), y se asignó 2400 pesos, en mensualidades de 480 y en relación á los cinco meses de sesiones ordinarias, á empezar desde el 1° de mayo de 1858, á objeto de que los congresales en ejercicio quedaran exentos de los beneficios de esta disposición; con el agregado de que, por las sesiones de prórroga ó extraordinarias no recibirían estipendio alguno.

Con fecha 3 de octubre de 1862, se dictó una ley fijando la suma de tres mil quinientos pesos por los cinco meses de sesiones ordinarias; y en 1881, sesión del 30 de septiembre, se sancionó otra, acordando á los senadores y diputados asistentes á las sesiones de prórroga ó extraordinarias el goce de la misma dieta fijada para las ordinarias por la ley anterior.

En 1886 se sancionó una dieta mensual de setecientos pesos, lo que hace un total de ocho mil cuatrocientos pesos anuales. Así es que, desde 1887 los congresales reciben una mensualidad por servicios y por no servicios.

Posteriormente, el Congreso hizo figurar en el presupuesto la suma mensual de 1500 pesos para diputados y senadores por los doce meses del año, sintiendo, como es consiguiente, que este número



de meses del calendario no sea factible de aumento.

De manera que de la buena doctrina pasamos á la mala y en ella permanecemos, contrariando la Constitución que se refiere á remuneración *por servicios*.

El artículo, tal cual lo propongo, está calcado en el espíritu del que está en vigencia, puesto que el senador ó diputado que no asiste á sesión por cualquier causa, no puede percibir retribución alguna, porque la retribución es correlativa de prestación de servicios.

Preciso es que nos demos exacta cuenta que el cargo de diputado ó senador no es sinónimo de renta ó de buen negocio, de manera de vivir, no quiere decir gana-pan. El congresal, quiere decir otra cosa muy distinta, pues, él gira en la alta esfera directriz de la cosa pública; él es, ó debe ser, fuente de luz y de armonía en todas las esferas de la actividad nacional; y como su papel es tan grande y honorífico, es cargo de sacrificio, no es adaptable á sueldo y por consiguiente no está pago. El diputado Cabral, del Congreso de 1856, oponiéndose al aumento de 600 pesos que hacía el Senado sobre la dieta anual de 2400 pesos votada por la Cámara de diputados, dijo: « Los honorarios que perciben los congresales, son una simple remuneración de sus servicios,



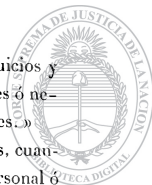
y no una satisfacción completa de los perjuicios y daños que sufrían al abandonar sus intereses ó negocios para trasladarse al lugar de las sesiones.»

Este fué el criterio de los primeros tiempos, cuando la honradez primaba sobre el interés personal ó sobre las menguadas aspiraciones, pero en estos últimos años se ha transformado por completo y se han colocado las cosas al revés.

Es preciso entrar de nuevo por la senda de la honradez en la que fué inspirado este artículo, porque de esta manera no podrán ser desvirtuados los sanos propósitos de los preclaros ciudadanos de la primera hora, ni mucho menos el alto papel de las funciones legislativas.

Tal cual propongo este artículo, es la interpretación fiel del que está en vigencia; en esta forma se remunera servicios, no se retribuye los honores del cargo con el tesoro de la Nación.

La condición de que los aumentos que se hicieren en la respectiva ley, por asistencia á sesión, no aprovechará á los diputados ó senadores en ejercicio, es justa y se recomienda por sí sola, pues, es indecoroso que los mismos congresales se adjudiquen aumentos para sí, como ha acontecido en estos últimos años, y lo que propongo, es regla de conducta y es-

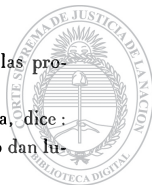


tipulación constitucional en la mayoría de las provincias argentinas.

El artículo 50 de la Constitución de Italia, dice :
« Las funciones de senador y de diputado no dan lugar á ninguna retribución ó indemnidad. »

Esta estipulación es común en países de Europa y América, y en cambio de ella se recompensa según el número de sesiones.

La última parte de la reforma que propongo á este artículo, es consecuencia de la primera. Desde que la retribución es sólo por servicios, los permisos de inasistencia deben ser sin goce de dieta, y aunque esto queda subentendido en este artículo, es conveniente estipularlo para evitar interpretaciones y abusos que perjudican el decoro de las cámaras.

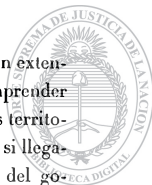




« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 1° Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales así como las evaluaciones sobre que recaigan, serán uniformes en toda la Nación, *bien entendido que ésta, así como las demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que fuese corriente en las provincias respectivas por su justo equivalente. Establecer igualmente los derechos de exportación.* »

1° Legislar sobre aduanas exteriores y establecer los derechos de importación y exportación, los cuales así como las evaluaciones sobre que recaigan, serán uniformes en toda la Nación. *Podrá, sin embargo, con dos tercios de votos de los miembros presentes, disminuir ó suprimir los derechos aduaneros en las aduanas terrestres y en los puertos de las costas marítimas ó fluviales, de los territorios nacionales del sur, que estime conveniente y por tiempo determinado, para el consumo y producción de los mismos. Esta facultad la tendrá el Congreso hasta que estos territorios sean erigidos en provincias.*

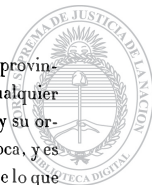


« ¿Quién había de pensar, el 53 ó el 60, en extender hacia el sur nuestra población y en comprender en los beneficios de la legislación tan lejanos territorios? ¿Quién ignora que, entonces, apenas si llegaban á ellos las preocupaciones del pueblo y del gobierno, cuando se consideraban las regiones australes como páramos desiertos, inhabitables y helados? ¿Quién ignora que hace veinte años, para los fines de la legislación, las columnas de Hércules de la República, se levantaban en realidad en Bahía Blanca? »

Así se expresaba el convencional Ayarragaray, en la Convención constituyente de 1898, sincerando la falta de previsión de este inciso por los que dictaron la Constitución vigente.

Efectivamente, entre las angustias y dificultades de todo género opuestas á la unidad nacional, con el pensamiento fijo en las catorce provincias, entre las que aun no se despejaba el horizonte de su política desarticulada y gauchezca; con un criterio asaz estrecho para los futuros progresos y para una administración inteligente que aun no podía diseñarse, en tales momentos nacía nuestra carta orgánica, plagada de defectos y de imprevisiones con relación á nuestro estado presente.

Los constituyentes del 53 y del 60, no considera-



ron sino el territorio poblado de las catorce provincias, del punto de vista político, más que de cualquier otro ; la armonía entre unos y otros estados y su organización era cuestión capital en aquella época, y es consiguiente que no tuvieran la visión clara de lo que estaba llamada á ser la inmensa extensión de la Pampa patagónica, en más de catorce grados geográficos de latitud, y los impulsos que requería para su más rápido y eficaz desarrollo.

Hoy, aun en estado de formación como estamos, de verdadera organización administrativa, empeñados en poblar nuestros dilatados territorios desiertos, debemos modificar el contenido de este inciso y depositar en el Congreso de la Nación facultades que le permitan impulsar el progreso en los territorios del sur para activar el crecimiento de su población, la explotación de sus riquezas y á fin de que puedan emerger cuanto antes á la categoría de estados autónomos, con leyes y gobierno propio.

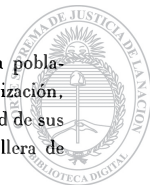
Un millón de kilómetros cuadrados encierran los seis territorios nacionales del sur, con una población de once centésimos de habitantes por kilómetro cuadrado !

Este antecedente es más elocuente que todo lo que pueda decirse en favor de la reforma propuesta. El

verdadero problema de estos territorios es la población, y, población quiere decir, riqueza, civilización, progreso, defensa nacional, en la inmensidad de sus costas marítimas, por un lado y de la cordillera de los Andes por la otra.

Además de los ferrocarriles y otros factores propicios á la colonización de sus feraces tierras y explotación de sus riquezas minerales, está el aliciente de la liberalidad comercial y vida barata de sus pobladores. ¿Cómo se conseguirá ésto? Fijando derechos reducidos ó no estableciendo ninguna, por tiempo determinado á la importación, ó finalmente estableciendo puertos francos. No incluyo en ésto á la exportación, porque los productos de nuestras grandes industrias se encarecen para el consumo nacional con la libre exportación, y nada hay que radique con más fuerza la población inmigratoria en los países favorecidos por elementos de trabajo, que la baratura de la vida.

El proyecto de reforma que propongo es con pequeñas variantes, el mismo que la comisión especial de la Convención de 1898, propuso á la asamblea, de conformidad al contenido de la ley de 20 de septiembre de 1897, sancionada por dos tercios de votos del Congreso, sobre reformas á la Constitución



nacional, uno de cuyos puntos principales lo constituía, el de facultar al Congreso para *la instalación de aduanas libres en los territorios del sur de la República.*

El Congreso, al sancionar esta ley, ha tenido la visión clara del progreso que importa para estos ricos territorios la reforma de este inciso: ha presenciado la anticipación de progresos inusitados; ha auscultado el enfermo y encontrándole de naturaleza robusta y fuerte, resolvía metodizarlo á un tratamiento rápido y enérgico para colocarlo en perfecto estado de salud.

Esto es lo que importa aquella resolución del Congreso, que la constituyente no supo llevar á cabo.

El Congreso comprendió, con esa resolución, que nuestra actual política económica, debe estar caracterizada por dos grandes objetivos: la mayor expansión comercial y la más rápida población de nuestros inmensos territorios desiertos.

La inmigración que se radica hoy en esta Capital, acudirá directamente á los puertos libres del sur, y por ellos, á difundirse en su interior halagados por la baratura de la vida y por tanta riqueza inexplorada; y si en las actuales condiciones y en un periodo dado de años, hemos de aumentar la población como diez, con los puertos libres y en el mismo periodo,



la acrecentaremos como cien ó como mil. ¡ Cuántas revelaciones de fuentes de riqueza nos darán los territorios del sur con el aumento de su población y el incentivo del trabajo y del capital puesto en juego!

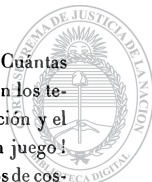
Tenemos no menos de tres mil kilómetros de costa sobre el atlántico en los territorios nacionales del sur y no es propio que una extensión tan grande esté despoblada y casi en completo abandono cual se encuentra hoy. Necesitamos también defender esa dilatada costa, y nada hay más eficaz á ese fin que la población y el trabajo.

Basta considerar los efectos causados en el puerto chileno de Punta Arenas, declarado libre, para convenir en que no debemos demorar en sancionar por una convención, la reforma del inciso propuesto.

Propiamente hablando, no se ha dado una razón concluyente por la Convención de 1898, para declarar no hacer lugar á la reforma sancionada por el Congreso respecto á este inciso, pues, no se produjo discusión alguna que fundara tal resolución.

Se presume que haya inspirado esta medida las siguientes opiniones, en la discusión que la precedió.

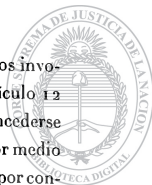
Algunos convencionales manifestaron que la reforma del inciso debía comprender también los te-

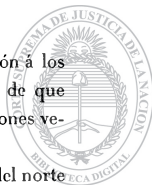


territorios del norte, con los mismos propósitos invocados en favor de los del sur ; otros, que el artículo 12 estatuíá, que « en ningún caso pueden concederse preferencias á un puerto respecto de otro, por medio de leyes ó reglamentos de comercio », y que, por consiguiente, no podía resolverse lo contrario sin modificar éste.

Respecto al primer punto, el convencional Ferrer demostró palmariamente que los territorios del norte, enclavados entre provincias argentinas, sin contacto directo con Europa, no están en igualdad de condiciones á los del sur, y por lo tanto no pueden ser beneficiados en contra de los intereses de las provincias circunvecinas.

« El propósito de la convención, — decía, — es abierto, franco, para proteger y poblar aquellos territorios, como una necesidad de la Nación : más : como una necesidad de soberanía : para que se sienta que los territorios de la Patagonia son verdaderamente territorios argentinos. Ese es el propósito que ha tenido el Congreso al incluir esta reforma : formar población argentina en los territorios del sur, para excluirlos mañana de toda discusión posible, para robustecer allí el derecho indiscutible de nuestra soberanía con el hecho incontestable de la población. »





¿ Pueden militar estos peligros con relación á los territorios del norte ? ¿ Quién se preocupa de que puedan ser tomados ú ocupados por las naciones vecinas ?

Las riquezas naturales de los territorios del norte y su capacidad productiva son las mismas que las de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes por las cuales están circundados, y los del sur están caracterizados por su aislamiento.

Entre otras consideraciones, el citado convencional, decía : « ¿ Se hallan en las mismas condiciones en sus relaciones exteriores los territorios del sur ? ¿ La inmigración y el comercio van á ir de la misma manera al Chaco y Formosa que á los territorios del Río Negro, del Chubut ó de Santa Cruz ? Afirmer esto sería desconocer las condiciones naturales de situación en que unos y otros se encuentran.

« Todo el comercio en los territorios del norte se verifica por nuestros grandes ríos ; ellos vienen á proveerse ¿ de dónde ? De aquí, de la Capital de la República, del Rosario ó de Santa Fe : pero no hacen comercio exterior, no tienen comercio directo con Europa, no pueden tenerlo : mientras que los del sur lo tienen, pueden tenerlo y lo tendrán. »

Así es que, el argumento de igualdad para todos los territorios : fué desvanecido por las razones anotadas y porque la sanción del Congreso se refería puramente á los del sur.

En cuanto al artículo 12 citado, no obstante referirse él á los puertos de las provincias, porque á la época de la Constitución los que hoy son territorios nacionales, no existían en este carácter, la prohibición es absoluta, y no podía resolverse la reforma del inciso en cuestión, sin modificar al mismo tiempo, el contenido de este artículo. Si el Congreso hubiese incluido este artículo en la reforma, ó todo lo que fuese pertinente, la Convención habría resuelto el problema satisfactoriamente, pero, no habiéndolo hecho así, consideró prudente declarar, no haber lugar á la reforma de este inciso.

Como de conformidad al inciso 27 del artículo 67, el Congreso ejerce una legislación exclusiva en los territorios federales, justo es dejar librado al criterio de este cuerpo, las condiciones, tiempo y lugares en que ha acordar estas franquicias aduaneras, hasta que cada uno de los territorios alcance á la categoría de estado autónomo, momento en el cual, esta autorización deja de existir.

En algunos puertos convendrá establecer la liber-



tad absoluta de cambios por el tiempo que el Congreso estime conveniente ; en otros será la supresión de los derechos á la importación solamente, ó la disminución de unos y otros, conforme lo indiquen las necesidades del aumento de la población y el desarrollo de la vida económica de cada territorio ; porque no es racional colocar á todos en igualdad de condiciones.



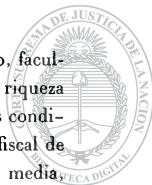


« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 2° Imponer contribuciones *directas* por tiempo determinado, y *proporcionalmente iguales* en todo el *territorio* de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. »

2° Imponer contribuciones *indirectas* por tiempo determinado, *equitativas y proporcionales á la población general* de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan.

Esta reforma que propongo es consecuencia lógica de las modificaciones introducidas en el artículo 4°, y ella importa autorizar, en casos extraordinarios, la imposición indirecta en la forma que hoy la tenemos como base de la renta ordinaria, porque á mi juicio, sólo en este caso se debe gravar el jornal del obrero.



La disposición del inciso 2° que comento, facultando la imposición directa, que grava la riqueza particular, en los casos que indica y demás condiciones, es también una copia del régimen fiscal de Atenas y de Roma, mantenido en la edad media, moderna y contemporánea por todas las naciones de Europa y América.

Atenas es la cuna del impuesto sobre la renta y sobre el capital, reservado para los casos de guerra y épocas de peligro público (1). Como la riqueza capitalista estaba en manos de la nobleza, inmune al impuesto para la renta ordinaria, sólo en casos extraordinarios era gravada la aristocracia ó clase gobernante. Roma tuvo también este mismo impuesto, aplicado á la riqueza en iguales condiciones que en Atenas.

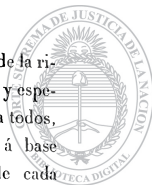
Así es que el inciso del artículo que comento puede decirse que es una copia fiel del carácter y tendencias que tuvo en su origen, aplicado á una sociedad formada á base de clases, entre las que mediaba un abismo entre la nobleza ó plutocracia y la esclavitud ó el hombre-cosa.

Como la divisa gubernamental de aquellas eda-

(1), GUILLAMIN Y COQUELIN, *Diccionario*, tomo I, página 899.

des era : de la nobleza y para la nobleza, ó de la riqueza y para ella misma, y en la actualidad, y especialmente en nuestro país, es de todos y para todos, lo que importa decir que el gobierno es á base de igualdad, del bienestar de todos y de cada uno, como está concebido el gobierno de las democracias, el inciso que rige no se aviene á los principios fundamentales en que reposa nuestra estructura política. Decir que la renta ordinaria ha de ser satisfecha por todos los habitantes, considerando iguales todas las capacidades y que sólo en casos extraordinarios en que peligre la nacionalidad se ha de recurrir á las contribuciones directas, las que debemos suponer, aplicadas á la fortuna particular, es ir en contra de la igualdad política, porque la desigualdad económica, contraria á ella, es la base de las plutocracias, antítesis de la dirección de la voluntad popular democrático-representativa.

En casi todos los pueblos de Europa existe el impuesto sobre la renta, una de las formas principales de la imposición directa, pero en ninguna de ellos tiene el carácter de su origen, copiado literalmente por nosotros. Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Estados Unidos, etc, tienen en vigencia este impuesto como base de renta para la vida ordi-



naria de estos estados, y suben ó bajan el porcentaje conforme á las necesidades públicas más ó menos exigentes.

Puede decirse que Inglaterra, en el siglo pasado, ha sido la nación que ensayó con mejor éxito el *income tax* en substitución de derechos de aduana sobre artículos importados de uso común y materias primas necesarias á su engrandecimiento fabril. Desde aquella época (1842) este impuesto, establecido provisoriamente, quedó consagrado en forma permanente, en razón de la equidad y de sus satisfactorios resultados.

Otras de las naciones bien organizadas en materia de impuestos, son Italia y Hungría. La primera tiene estatuido, por el artículo 25 del estatuto fundamental, lo siguiente : « Todos los habitantes contribuirán indistintamente, en *proporción de su haber*, á las cargas del Estado. » La segunda, tiene la ley número 8, de 1848, que dice : « Todos los habitantes de Hungría y sus anexos están sometidos sin distinción, igual y *proporcionalmente*, á todas las cargas públicas. » Así es que en estos dos países, las contribuciones directas forman la base principal de la renta pública.

En Estados Unidos, cuyo molde institucional ha





sido aprovechado por nosotros, tiene la imposición indirecta como la fuente principal de la renta fiscal. La uniformidad en las tasas, derechos, impuestos y sisas y la proporcionalidad al censo para la capitación ú otra tasa directa, son la base para su establecimiento y percepción (sección 8, art. 1°; sección 9, art. 4°, Const., 17 septiembre 1787). Esta es la razón de la carestía de la vida en aquella nación, y á no ser la hulla y el fierro, que posee en diversas partes de la Unión, fácilmente explotables, base sólida de la industria fabril portentosa que posee, el pauperismo tomaría proporciones alarmantes.

En Rusia no está gravado ni el capital, ni la renta y no obstante ser una de las naciones más ricas en productos minerales, su gran industria consiste en la agricultura y ésta es la que contribuye en su mayor parte á la renta fiscal, es decir el paisano, labrador ó campesino; pues, la nobleza terrateniente paga impuestos reducidos por las tierras que posee sin cultura. Además del tributo que grava el trabajo y los frutos de la agricultura, el paisano paga también el impuesto de capitación, y si se aleja más de 30 millas de la comuna, debe pagar de 7 á 10 chelines por su pasaporte.

Se ve, pues, que mientras en Inglaterra los dere-

chos de aduana reportan una suma igual á la que origina el *income tax*; en Italia, los mismos dan un 45 por ciento de los impuestos directos: en Estados Unidos, los derechos de aduana é impuestos internos, representan el 72 por ciento del total de la renta, y en Rusia la imposición directa es de un 27 por ciento de la indirecta.

Estos antecedentes demuestran lo que todos sabemos, que la vida en Norte América es excesivamente cara, lo mismo que en nuestro país, por el espíritu dominante de imitación y respeto que tenemos por las instituciones de aquella gran república.

Empero, en todo lo dicho y en lo que á impuestos se refiere no he encontrado en las demás naciones europeas nada que importe una semejanza con el principio establecido en el inciso 2° que comento.

Esto quiere decir que este inciso del artículo 67 es único en las instituciones contemporáneas de los pueblos, desenterrado de las prácticas establecidas, más de dos mil años atrás; y es por los fundamentos aducidos que propongo el cambio propuesto: *gravar el salario del obrero, en casos extraordinarios*, y la riqueza particular, para la satisfacción de los presupuestos públicos de la vida ordinaria de la nación.



En resumen, nosotros no podemos imitar á Atenas y á Roma que gravaban la riqueza particular sólo en casos de extrema necesidad pública, porque los propósitos del gobierno democrático republicano de hoy son muy diversos de los de aquella lejana época : nuestros anhelos están dirigidos en favor de la igual felicidad para todos, del bienestar social, y como el gremio obrero debe estar exento del tributo, conforme al artículo 4º, sólo en casos extraordinarios podemos gravar su pobreza. Éste es el espíritu que debe primar en la carta orgánica y en todas las leyes fiscales de la nación : esto es lo justo, lo racional, lo humano, y esto es lo que se llama gobernar, es decir, distribuir igual felicidad.



||





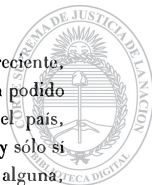
« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 7° Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Nación y aprobar ó desaprobar la cuenta de inversión. »

7° Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Nación y aprobar ó desechar la cuenta de inversión *que el poder ejecutivo presentará en las primeras sesiones ordinarias. Si el presupuesto no hubiese sido sancionado hasta el 1° de enero inmediato, quedará en vigencia el del año anterior.*

Esta reforma viene á llenar una sentida necesidad en la Constitución, adaptando una disposición previsor, contenida en constituciones modernas de otros países.

La dificultad que hemos tenido entre el Congreso y el poder ejecutivo, con motivo de la falta de previ-



sión en el inciso que comento, es de fecha reciente, y ella ha sido motivo de un conflicto que ha podido alcanzar proyecciones sensacionales para el país, cuyo resultado final no era posible prever, y sólo si sus consecuencias inmediatas que, sin duda alguna, hubiesen sido desastrosas para la marcha económica de la Nación; lo que pone en evidencia que nuestra gran Carta, adolece de deficiencias que es preciso corregir.

Me refiero al decreto del poder ejecutivo del 25 de enero de 1908, el cual merece un estudio á la luz de los hechos y de los principios constitucionales vigentes.

El poder ejecutivo había presentado al Congreso, con fecha 26 de junio de 1907, el proyecto de presupuesto y cálculo de recursos para el ejercicio de 1908, y desde esa fecha, en que se dió lectura en la Cámara de diputados, hasta el término de las sesiones ordinarias (30 de septiembre) no lo trató el Congreso, pero ni aun fué despachado por la comisión respectiva de la cámara. Terminan las sesiones ordinarias y sin querer darse cuenta el Presidente que este proyecto, así como las leyes de impuestos, son asuntos propios de las sesiones de prórroga y no de las extraordinarias, no habiendo sido tratados en las

ordinarias, dejó transcurrir un mes y medio, para dedicarse en este periodo de tiempo á hacer *política chica, menguada*, hasta que convocó al Congreso á sesiones extraordinarias para el 15 de noviembre, á los objetos siguientes : presupuesto y leyes de impuestos, créditos suplementarios y extraordinarios, y proyectos pendientes sobre ferrocarriles, obras públicas, etc., asuntos, todos, propios de la vida regular ú ordinaria de la Nación, con exclusión del único asunto que debia entregar á su deliberación, consistente en la intervención á la provincia de Corrientes que había llevado á cabo en los cuarenta y cinco días de receso de las cámaras.

La Cámara de diputados á cuya consideración estaba el proyecto de presupuesto, había sesionado el 15 de noviembre, 6, 13 y 16 de diciembre, sin que en ninguna de ellas se hubiese tratado asunto alguno de los incluídos en la prórroga y había suspendido sus sesiones desde la última fecha hasta el 25 de enero de 1908, fecha del decreto. El Senado permaneció también igual periodo de tiempo sin sesionar.

En esta virtud, el poder ejecutivo, decretó la vigencia del presupuesto del año anterior, el retiro de los asuntos enviados á sesiones extraordinarias y la clausura del Congreso.



Como este documento es el primero y único en su género en el país, lo transcribo á continuación, con los fundamentos que han servido de base para dicha resolución :



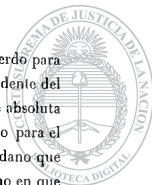
Buenos Aires, enero 25 de 1908.

Considerando que el poder ejecutivo en uso de las facultades que le acuerda el inciso 12 del artículo 86 de la Constitución nacional convocó al honorable Congreso á sesiones extraordinarias, por decreto de 15 de noviembre del año próximo pasado, para tratar asuntos de grave interés y de progreso público.

Que durante el tiempo transcurrido desde esa fecha no ha sido considerado por ninguna de las cámaras, ni puesto á la orden del día para su discusión, ni uno solo de los asuntos incluídos en la convocatoria.

Que entre estos asuntos se encuentra el proyecto de presupuesto que fué presentado en el mes de julio del año anterior, el cual, según el inciso 7° del artículo 67 de la Constitución, está obligado el Congreso á sancionar anualmente, y cuya falta perturba la marcha regular de la Nación, por cuanto sin él carece el Gobierno de los recursos necesarios para el sostén de instituciones como el ejército, la marina, la policía, el correo y los ferrocarriles, sin cuyo funcionamiento desaparecería el gobierno de la Nación, así como para el servicio de la deuda pública, cuya suspensión produciría la ruina del crédito nacional.

Que el honorable Senado no se ha reunido ni para dar en-



trada á los pliegos del poder ejecutivo pidiendo acuerdo para los nombramientos de intendente municipal y presidente del Consejo nacional de educación, cuya provisión es de absoluta y urgente necesidad, y que sólo ha prestado acuerdo para el nombramiento de intendente municipal del ciudadano que desempeñaba este puesto en comisión, el día mismo en que se hacía innecesario por haber sido aceptada su renuncia, como constaba á muchos de sus miembros y era del dominio público.

Que la prolongación de las sesiones del Congreso es contraria á la letra y al espíritu de la Constitución, la cual prescribe que sólo debe sesionar durante cinco meses y faculta al poder ejecutivo para que lo convoque á sesiones, con el único objeto de tratar asuntos de gran importancia.

Que tal proceder amengua la autoridad moral del poder ejecutivo y puede ser el germen de la anarquía y de la guerra civil.

Y, finalmente, que el Presidente de la República, que según los términos de la Constitución es el *jefe supremo* de la Nación y tiene á su cargo la administración general del país, está en el deber de velar por la paz y tranquilidad pública y mantener la marcha administrativa del Estado.

El Presidente de la República, en acuerdo general de ministros, decreta :

Art. 1º. — Declárase en vigencia para el año actual el presupuesto general de gastos de la administración sancionado para el año 1907.

Art. 2º — Decláranse clausuradas las sesiones extraordi-

narias del Congreso y retirados todos los asuntos sometidos á su deliberación.

Art. 3º. — Dése cuenta del presente decreto al honorable Congreso en el próximo período de sesiones ordinarias.

FIGUEROA ALCORTA.

MARCO AVELLANEDA, ESTANISLAO S. ZEBALLOS, MANUEL M. DE IRIONDO, RAFAEL M. AGUIRRE, ONOFRE BETBEDER, PEDRO EZCURRA, EZEQUIEL RAMOS MEXÍA.

Este decreto contiene dos puntos que es conveniente estudiar; uno es, la vigencia del presupuesto, y la clausura del Congreso, el otro.

¿El Presidente de la República está facultado por la Constitución para producir estos actos?

Esta es una de las cuestiones principales que es necesario dilucidar en el asunto de que trato.

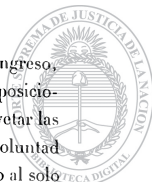
La Constitución no tiene disposición alguna *categorica* que acuerde tales facultades al poder ejecutivo; empero, conforme al espíritu dominante en ella, esta rama del gobierno es poder superior, está sobre el Congreso y sus deliberaciones. Él lo convoca cuando le conviene, y en caso contrario, el Congreso no está facultado para reunirse; el Ejecutivo considera los asuntos de prórroga como si fue-



ran materia de las extraordinarias, y el Congreso, sin hacer observación alguna acata estas disposiciones; es colegislador, y está facultado para vetar las leyes que, no obstante llevar el sello de la voluntad de ciento cincuenta representantes del pueblo al solo objeto de dictar leyes, debe primar su soberana voluntad; y aun las sesiones ordinarias no empiezan, si el poder ejecutivo no hace la apertura de las sesiones.

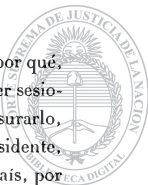
En tales condiciones, ¿el Congreso es, ó no, una dependencia del poder ejecutivo?

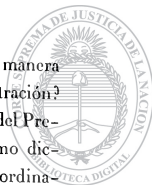
La contestación es lógicamente afirmativa. La Constitución no fija principios categóricos estableciendo la delimitación de los poderes legislativo y ejecutivo, ni establece tampoco resueltamente que el Congreso es un poder subalterno del poder ejecutivo, pero en diversos artículos, implícitamente estatuye esto mismo. Esos artículos, fielmente interpretados, quieren decir, por parte del ejecutivo, al Congreso: Tú no harás nada sin mi voluntad y sin mi anuencia; yo apruebo ó repruebo vuestros actos, y sin este requisito vuestras sanciones no tienen fuerza legal. ¿Qué quiere decir esto? Autoridad superior, soberanía, superintendencia, hegemonía del poder ejecutivo sobre el Congreso.



Y si esto es así, como lo es en realidad, ¿por qué, quien tiene en sus manos la facultad de hacer sesionar al Congreso, no ha de tener la de clausurarlo, cuando éste, conforme al criterio del Presidente, obstrucciona la marcha administrativa del país, por estrechas miras de ambición política? ¿Qué debe hacer un Presidente con la omnimoda y discrecional autoridad de que constitucionalmente está investido, cuando el Congreso, su subalterno, se empeña en hacerle el vacío, haciendo caso omiso de la ley fundamental de la vida del Estado, declarándose de hecho, en receso? ¿Debe, acaso, cruzarse de brazos, ante situación tan delicada, creada por ese alto cuerpo? Jamás. Si así procediera en tales circunstancias, diríamos que no tiene la conciencia de sus actos, ni tiene la capacidad suficiente para hacerse digno de la majestad del cargo que inviste. El Presidente de la República, en la disyuntiva del caos iniciado por el Congreso y la salvación del país, optó por lo segundo. Este acto se produjo en momentos de grande expectativa, de verdadera angustia para el comercio y la vida general de la Nación, y por consiguiente preciso era cortar por lo sano, y así se hizo, felizmente.

¿Qué se proponía el Congreso al no querer san-

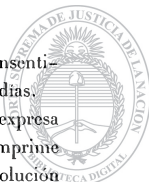




cionar el presupuesto, paralizando de esta manera todos los servicios públicos de la administración? ¿Quería provocar con este acto la renuncia del Presidente, con el aditamento de que éste mismo dictara otra nueva convocatoria á sesiones extraordinarias para considerarla? Es de suponer que sí, y esto era voz corriente; pero este no es el trámite para asunto de tanta magnitud, sembrando la desconfianza y el descrédito del país: el juicio político, franco y netamente caracterizado es lo que corresponde, cuando hay la conciencia de los actos y la certeza de faltas graves en el cumplimiento de los deberes del primer magistrado: es la línea recta el camino que conduce á las grandes soluciones; la emboscada es recurso exclusivo de personas que desafían penitenciaría, no es arbitrio del más alto cuerpo político del Estado.

El artículo 57 de la Constitución, establece, que ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente, y que *ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días sin el consentimiento de la otra.*

Bien, pues, ambas cámaras habian suspendido sus sesiones durante cuarenta días, ó sea veinte días hábiles (por tener acordado sesionar tres veces por



semana), sin que ninguna solicitara el consentimiento de la otra, pasados los tres primeros días.

¿Qué implica esta falta de las cámaras á la expresa condición establecida en este artículo, que imprime regularidad y orden en la tramitación y resolución de los asuntos de su incumbencia, con tanta mayor razón, cuando en este caso se trataba de la ley de presupuesto, en los últimos días del mes de enero del año en que éste debía ser puesto en práctica?

Esto quiere decir que, de hecho, el Congreso había cesado en sus funciones extraordinarias : estaba en pleno receso ; y este solo hecho lo autorizaba al Presidente para confirmar dicho acto y declarar, como lo hizo, la vigencia del presupuesto hasta las próximas sesiones ordinarias.

En nuestro país tenemos el prurito de adaptar leyes y prácticas de otros países sin llenar los más elementales principios de análisis, de tiempo, de medio y de sujeto, circunstancias que caracterizan el vasto campo de las ciencias sociales.

Para pintar el poder tan grande de que dispone el parlamento inglés, se ha inventado la gráfica expresión, de que todo puede hacer, menos de un hombre una mujer.

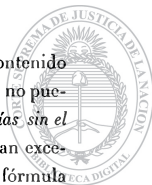
Esto ha llegado hasta nosotros y nuestros congre-



sales creen que estas prácticas son, lisa y llanamente aplicables á nuestro Congreso, y es, quizá, por esto que no han tomado en cuenta el contenido del artículo 57, considerando que podían reunirse en sesión cuando les pareciere bien, pudiendo suspender las sesiones por tiempo ilimitado á no ser el decreto que comento. Este es un grave error de nuestros legisladores.

Propiamente hablando, Inglaterra no tiene Constitución. «El parlamento inglés fué siempre, y es actualmente una asamblea soberana y *constituyente*. Él puede hacer y deshacer cualquier ley, cambiar la forma de gobierno ó la sucesión del trono, intervenir en la marcha de la justicia, abolir los derechos privados, los más sagrados de los ciudadanos. En una palabra, entre el parlamento y el pueblo no hay sino una distinción legal: en él, en efecto, reside la plenitud de los derechos y poderes del pueblo, como si el pueblo entero asistiese á sus sesiones » (1). En nuestro país acontece lo contrario. Tenemos una Constitución y ella marca el papel del Congreso y establece las reglas á que éste debe sujetarse para llenar cumplidamente sus deberes; está muy lejos de tener

(1) BRYCE, *La république américaine*, tomo I, página 61.



las facultades del parlamento inglés. El contenido del artículo 57 es imperativo — una Cámara no puede suspender sus sesiones *por más de tres días sin el consentimiento de la otra* — y cuando ambas han exce-
dido esta disposición, sin siquiera llenar por fórmula el pedido de consentimiento de ninguna de ellas, es porque tenían la resolución de no reunirse más; y si los congresales no pensaron así, la opinión pública que es el único juez del Congreso aplicando el artículo en cuestión así lo entiende. Evidente es, que el Congreso estaba en receso, cuando el poder ejecutivo dictó el decreto declarando en vigencia el presupuesto del año anterior. El decreto del poder ejecutivo ha debido decir simplemente : *encontrándose de hecho en receso el Congreso y no pudiendo suspender la marcha administrativa del país*, etc., se declara en vigencia el presupuesto, etc., sin retirar los asuntos incluidos en las sesiones extraordinarias.

¿Qué representa el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para la administración de un país ?

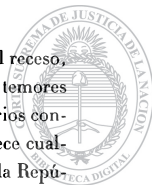
El presupuesto es fuerza, acción, energía, calor vital del Estado; es la ley de las leyes, porque, desde la más insignificante hasta la más transcendental disposición gubernativa, implica funciones que se desempeñan, y por consiguiente, gastos que se hacen ;

y negar la sanción del presupuesto, como lo ha hecho el Congreso, importa decir : entronicemos la anarquía, no haya poder ejecutivo, que se suprima la administración de la cosa pública, vaya el país al caos. Pero el poder ejecutivo, ha dicho, no! La Nación Argentina no puede ni debe volver á la anarquía; no va ni puede ir hacia el caos. El Presidente en uso de facultades, las más amplias y sobre los asuntos más delicados, que la Constitución le acuerda en el receso, decreta el presupuesto hasta que las cámaras se reúnan en sesiones ordinarias, porque quien dispone de lo más dispone de lo menos.

El Presidente de la República, sabe que no hay artículo alguno constitucional que le acuerde la facultad de darse un presupuesto, pero tampoco dice que el Congreso se ha de negar á sancionarlo y que por cualquier causa política ha de hacer abandono de sus deberes y del puesto. Es que en esta parte, como en muchas otras, la Constitución reconoce implícitamente como base, la honradez y honorabilidad que debe primar en los hombres que alcanzan estas altas posiciones; no ha tenido en cuenta las pasiones de los hombres y la estrecha política que se hace en un pueblo nuevo, en formación, como el nuestro.

Volviendo este asunto por pasiva, podrá interro-





garse : ¿ qué haría el Congreso, si durante el receso, el gobernador de una ó más provincias, por temores de alteración del orden público apresara á varios congresales y los retiene en la prisión ó acontece cualquier otro asunto grave y el Presidente de la República está imposibilitado para convocar el Congreso á sesiones extraordinarias ó no quiere hacerlo ?

¿ Se consideraría, acaso, impotente para hacer desaparecer la anormalidad y salvaguardar las instituciones, por falta de convocatoria legal del Presidente ?

No. El Congreso se reuniría y abocándose el asunto, lo resolvería como corresponde : éste sería su deber. Pero, no hay disposición alguna constitucional que acuerde esta facultad al Congreso, se dirá, es cierto, pero hay la suprema ley de la necesidad, para salvar al país de la anarquía, de la ruina, y poder hacer respetar las instituciones y la fuente de donde ellas nacen.

El error del Presidente de la República, en este asunto, no está en haber decretado la clausura del Congreso y vigencia del presupuesto durante el receso, sino en que, abusando de las facultades discrecionales que le acuerda la Constitución y con el deliberado propósito de ir en contra del rechazo de la

intervención á Corrientes, no prorrogó las sesiones quedando el Congreso en receso durante un mes y medio.

El presupuesto y leyes de impuestos, no son asuntos de sesiones extraordinarias. Cuando en las ordinarias no han sido tratados, por cualquier circunstancia, las sesiones de prórroga se imponen para su sanción, porque son asuntos propios é indispensables de la vida regular y ordinaria de la Nación. El inciso 12 del artículo 86, establece bien claro esta diferencia, porque expresa que la convocatoria á sesiones extraordinarias tendrá lugar, cuando *graves asuntos de interés público ó de progreso* lo requieran. En ésto, sólo entra lo imprevisto, lo anormal. Estos calificativos no cuadran á la ley de recursos y gastos de la administración, porque su ejercicio no permite intermitencias, son asuntos previstos para la vida normal del Estado.

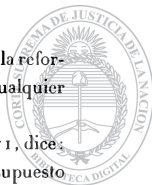
Si el Presidente hubiese prorrogado las sesiones ordinarias, no habría tenido la ocasión de dictar el aludido decreto, ni provocar las justas alarmas que experimentó el comercio y un estado de zozobra en las transacciones que ha durado bastante tiempo. Preciso es decirlo — no se puede jugar con la suerte de un pueblo encaminado en el rumbo de sus gran-



des destinos —y para que ésto no se repita, la reforma que introduzco en este artículo, salva cualquier dificultad al respecto, para lo sucesivo.

La constitución del Japón, en su artículo 71, dice:
« Cuando la dieta imperial ó cuando el presupuesto no haya podido ser establecido de una manera efectiva, el gobierno deberá aplicar el presupuesto del año precedente. »

Este es el antecedente á que me he referido en el el primer párrafo de este comentario.





« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 8° Acordar subsidios del tesoro nacional á las provincias cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, á cubrir sus gastos ordinarios. »

8° Acordar subsidios del tesoro nacional á las provincias *que lo soliciten en casos de calamidad pública.*

La autonomía de las provincias implica recursos propios para su existencia, renta para sufragar los gastos inherentes á su administración.

Un estado federal no es autónomo, cuando su economía insuficiente le obliga á solicitar recursos pecuniarios á la Nación para satisfacer necesidades superiores á sus propias fuerzas.

El contenido de este inciso tenía aplicación en la

época en que fué dictado, porque las provincias vivían en perpetuas querellas, con el arma al brazo y sin recursos, por el estado embrionario de nuestras industrias y el atraso de nuestras masas, y el poder central tenía que contribuir á la satisfacción de los presupuestos provinciales, siempre superiores á su capacidad.

Actualmente, todas las provincias encuéntranse en plena actividad, merced á los múltiples factores de progreso que la Nación irradia en todos los ámbitos del territorio : millones de hectáreas de tierra están entregadas á cultivos diversos ; las selvas vírgenes se explotan y las entrañas de la tierra se abren para extraer sus inagotables veneros de oro y de piedras preciosas ; el silbato de la locomotora ha descornado el velo de la ignorancia y nos ha hecho poseedores de riquezas no sospechadas, el telégrafo nos permite vivir como en familia, comunicándonos al minuto ; los capitales y el brazo extranjero se desbordan y fecundan la actividad industrial, y las ciencias, artes y letras se difunden y hacen camino en el espíritu nacional. En consecuencia, todas están en condiciones de disponer de la renta necesaria para los servicios de la administración con mayor ó menor desahogo, y no es conveniente dejar subsistente



esta facultad deprimente de la autonomía de los estados.

Los subsidios que el Congreso debe acordar á las provincias deben tener un carácter extraordinario, sólo en casos de desgracias ó calamidad pública, pero nunca para el ejercicio de la vida regular.

La constitución del Brasil en su artículo 5º, título I, contiene la misma prescripción que anoto como reforma.

En la actualidad, algunas provincias abusan de la atribución contenida en el inciso vigente, y en él se basan para sancionar presupuestos que no se adaptan á su respectiva capacidad económica, y por regla general hay lujo de empleos y sueldos excesivos.

La reforma propuesta viene á salvar esta anormalidad que desvirtúa uno de los atributos primordiales de la soberanía de los estados, la capacidad propia económica para llenar los fines del gobierno.







« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 11° Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, *sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales ; correspondiendo su aplicación á los tribunales federales ó provinciales, según que las cosas ó las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones* y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía natural ; así como sobre bancarrotas, sobre la falsificación de la moneda *corriente* y documentos públicos del Estado *y las que requieran el establecimiento del juicio por jurados.* »

11° Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía natural ; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de monedas y documentos públicos del Estado.

La primera parte de esta supresión se desprende lógicamente de las reformas que propongo, en sentido de que en todo el país no haya sino una sola justicia, la nacional ó federal. Así es que, la diferencia de jurisdicciones judiciales no tiene razón de ser, respecto á la vigencia de los códigos.

La segunda modificación es más de forma que de fondo, pues que la disposición vigente se refiere á la moneda corriente de la provincia de Buenos Aires de la época en que se sancionó la Constitución, y la reforma tiene más amplitud porque comprende la falsificación de moneda en general.

La supresión de la parte final del artículo es lógica, desde que propongo la eliminación del artículo 24 en lo que se refiere al juicio por jurados.





« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 13º Arreglar y establecer las postas y correos generales de la Nación. »

13º Legislar sobre correos, telégrafos y teléfonos de la Nación y todo otro medio de comunicación.

En 1853, las distancias entre las ciudades, además de ser inmensas eran desiertas y el establecimiento y mantenimiento de las postas, necesitaba la acción del gobierno general, para su permanente y eficiente funcionamiento, y es por ésto que la Constitución se refiere á su organización. Este factor de vialidad pasa á la categoría de reliquia histórica y ha sido reemplazado por los ferrocarriles, telégrafos y teléfonos y quizá, mañana se agregue á éstos la aerostación ó aviación, y justo es que, al hacer una reforma de la Constitución, se cambie el inciso vigente por el que propongo.





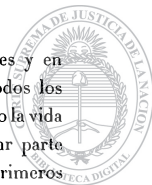
« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 15° Proveer á la seguridad de las fronteras ; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo ».

15° Proveer á la seguridad de las fronteras ; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos *á la vida civilizada*.

La reforma que propongo á este inciso importa mayor latitud al pensamiento de la reducción del indio que la estatuida en el inciso en vigencia.

Promover al indio á la vida civilizada encierra un pensamiento más grande que la conversión al catolicismo, é implica otros deberes de parte del gobierno de la Nación. Traerle á la vida civilizada quiere decir, acordarle medios de vida, ejercitarle en el



trabajo, educarlo, moralizar sus costumbres y en una palabra, poner á disposición de él todos los elementos necesarios para que, abandonando la vida nómada que lleva, entre de lleno á formar parte de nuestra sociedad, de la que son los primeros y los últimos. Y por otra parte, ¿acaso son más felices los que profesan el catolicismo que los de otra religión? ¿Acaso no tenemos establecida la libertad de cultos?

El Chaco y Formosa, deben contener no menos de doce á quince mil indios, y no es posible que sólo ha de ir la fe católica á enseñarles su doctrina; debe también haber libertad para otras religiones ó sectas.

Hasta el presente, el indio ha sido tratado en calidad de bestia feroz, de tal manera que en distintas ocasiones se ha cometido abusos y se ha llegado hasta hacer carnicerías horribles.

¿Cuál es la razón de estos hechos?

La de que el indio roba, y mata para robar; y yo pregunto, si es posible que el indio pueda vivir de otra manera, salvaje como es, sin hábitos de trabajo, sin nociones de moral, sin más Dios que su libertad ingénita, dueño absoluto de la selva virgen, que le pertenece por derecho propio. ¿Acaso, para



los primeros hombres del mundo, el asesinato y el robo, no eran timbres de honor? (1).

El indio está aún en los orígenes de la vida, defendiendo su libertad y sus dominios, y no podemos mirarle del punto de vista de nuestro estado de civilización, sino para disculpar sus defectos y excogitar medios para hacerle igual á nosotros, porque en él palpita el alma nacional, y más que ésto, el alma americana; es el rezago de los aborígenes de esta América que respira libertad y vida por todos los poros de su organismo; es el genuino representante de una raza fuerte y noble, próximo á confundirse en este gran escenario, absorbido por el elemento ponderado que, de todos los pueblos de la tierra converge á unir sus energías, con las energías naturales de esta tierra pródiga, y á la vez, ávida de brazos, para mostrarnos todos sus encantos, y hacernos poseedores de las riquezas que guarda en su seno.

Ya es tiempo que dediquemos áreas de tierra para el indio donde deben fundarse colonias agrícola-pastoriles con todos los elementos necesarios para su arraigo y prosperidad, acordando también recompensas de estímulo en tierras, al maestro de escuela

(1) I. BODIN, *Les six livres de la République*, éd. 1594.

y á todas aquellas personas que ejerciten su actividad inteligente en beneficio de su civilización. Con el rubro *Conquista del desierto*, en el presupuesto nacional debiera figurar una partida de tres ó cuatro millones de pesos por los primeros tres ó cuatro años para fundar colonias ganadero-agrícolas con bastantes miles de cabezas de ganado de toda especie, útiles de labranza, maquinarias, edificaciones y todo lo necesario para transformar el ambiente salvaje y desgraciado del indio, en centros de vida y de civilización ; distribuyendo entre ellos alimentos y ropas, bases indispensables de vida y por ende de su pacífica reducción, á la vez que la fecunda semilla de la escuela, mientras que los ferrocarriles y canales de navegación y de riego con su poderoso influjo, coadyuvarán en esta obra redentora, transformando la toldearía en ciudad y confundiendo todas las energías humanas en un solo y único propósito : el engrandecimiento nacional.

Justo y patriótico es el anhelo de que al celebrar el centenario de nuestra emancipación política, nuestro presupuesto nacional, contenga una partida en favor de la conquista real del desierto, que haga honor á nuestros crecientes progresos y á la fecha que estamos próximos á celebrar.





« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 17° Establecer tribunales inferiores á la Suprema Corte de Justicia, crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales. »

17° Establecer tribunales inferiores á la Suprema Corte de Justicia, crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones *á deudos de militares de jerarquía ó de servidores especiales de la República, que no posean bienes de fortuna* y no estén comprendidos en la caja nacional de pensiones y jubilaciones civiles; decretar honores y conceder amnistías generales.

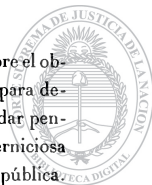
La reforma contenida en este inciso viene á corregir un abuso que consiste en el despilfarro de la renta pública, acordado á diario por el Congreso, sin tasa ni medida.

No necesito entrar en consideraciones, sobre el objeto de la renta y los fines de su aplicación, para demostrar que la latitud de la facultad de acordar pensiones, contenida en el inciso vigente, es perniciosa y ella da margen á derroches de la renta pública. Este hecho está demostrado, con el veto que el Presidente pone anualmente á un sinnúmero de pensiones que inconsultamente acuerda el Congreso. Obvio es manifestar que los fundamentos de este *no ha lugar*, son altamente justificados.

Actualmente no se computan méritos para acordar pensiones, pues una simple recomendación á un diputado es bastante.

La Nación invierte más de *diez millones* de pesos en retiros, pensiones y jubilaciones; y es el caso de preguntar, ¿el número de grandes servidores al país que no fueron remunerados á su tiempo, es tan crecido, que permita gravitar de manera tan pesada sobre el presupuesto, formado á base de sacrificios exigidos á la masa de la población, entre la que predomina la clase menesterosa que « economiza sobre el hambre y la sed » para satisfacer los impuestos que gravan sus consumos?

No! El número de los deudos de los grandes servidores es relativamente reducido. Lo que realmente

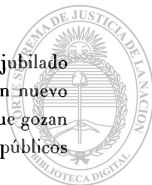


es grande en este asunto, es la generosidad del Congreso, para quien los dineros del Estado, parece que fueran *res nullius*; lo que es grande en este país, es la indiferencia del pueblo, intitulado soberano, por la cosa pública; y lo que también es realmente grande, es la inconsistente voluntad y el profundo desprecio que los de arriba tienen por los de abajo, cual si viviéramos en plena monarquía.

Si las pensiones se acordaran en justicia no tendríamos una erogación mayor de un 25 por ciento de la que hoy efectuamos. Este renglón del presupuesto importa una grave enfermedad, y es preciso curar este mal antes de que asuma mayores proporciones.

Conozco familias que gastan un lujo inmoderado porque aparte de su riqueza efectiva, disponen de pensión, y otros cuyo causante no ha prestado servicio ninguno al país. Se acuerdan jubilaciones á empleados inútiles ó perjudiciales para sacarlos del puesto, porque no hay la suficiente honradez ó valor cívico para exonerarlos, y asimismo se acuerdan retiros á militares. La causa primordial de las jubilaciones es la edad ó la incapacidad física en el largo desempeño de funciones públicas, en la imposibilidad de poder ocupar la actividad en otros puestos,





y por esta razón, las leyes establecen que un jubilado pierde su jubilación con la aceptación de un nuevo empleo, y no obstante ésto, hay personas que gozan de esta gracia y desempeñan varios empleos públicos rentados y perciben crecidos emolumentos.

Qué quiere decir ésto?

Que estamos en plena corrupción; que el país está enfermo, desde que surgió como entidad organizada y que es preciso depurarlo, lo que se conseguirá con sólo higienizar la ley fundamental.

La pensión es una gracia y como tal, está reservada á los grandes servidores del país ó á sus descendientes incapacitados del trabajo ó escasos de recursos para la vida, y cuando se habla de grandes servidores, no se debe confundir éstos con los adocenados, ó con los menesterosos de profesión.

Fallece un diputado quien jamás hizo otra manifestación que la de inclinarse en su cómoda butaca cuando lo tocan á tiempo, ó cree que debe dar su voto afirmativamente, y ¿qué hace el Congreso? Acuerda á los herederos la dieta del tiempo que le faltaba para terminar su período, y al año entrante se les da pensión por diez años, y antes de finalizar este período se le acuerda por otros diez más.

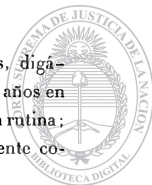
Muere un empleado cualquiera y los descendien-

tes heredan algunos meses de sueldo y la correspondiente pensión, además de haber vivido un largo tiempo á expensas del erario público.

No es sin razón que todo el mundo anda á la caza de un empleo, cuando no de una congresalía, á fin de existir holgadamente y asegurar el bienestar de la familia, sin necesidad de trabajar, desde que todos contribuimos al tesoro para sostener tanta indigencia.

Así es que los que sólo pagamos el tributo mediante el ejercicio de nuestra actividad en la permanente y titánica lucha de la vida y no hemos podido escalar un puesto público, no tenemos derecho á una retribución. Yo creo que no somos acreedores á ello, pero pienso de igual manera para la generalidad de los acuerdos que en tal sentido se hacen y para los que en vida han gozado de los halagos del presupuesto. Con motivo de la ley de pensiones y jubilaciones tratada en el Congreso en 1887, con ese espíritu suspicaz y clarovidencia del estadista, el diputado doctor Goyena, oponiéndose á la ley, porque no tenemos establecida la inamovilidad de los empleados de la administración como acontece en el régimen de las monarquías, decía : « Supongamos que se dicte la ley. ¿ Quiénes vendrán á obtener la





jubilación? Aquellos individuos indurados, digámoslo así, por espacio de treinta ó cuarenta años en un empleo, personas que no han salido de la rutina; que han hecho, por lo general, mediocrementemente cosas vulgares.

«Mientras tanto, los hombres distinguidos por las dotes con que la naturaleza los hubiera adornado, ó por la especialidad de su aplicación, que para ser extraordinaria no podría haber durado treinta ó cuarenta años, á pesar de haber prestado grandes servicios al país, quedarían privados de las ventajas de la ley.

«El que no ha servido sino para vegetar por largos años en una oficina administrativa, vendría á tener el premio de su inferioridad, cuando no el de la obsecuencia servil, el de una facilidad de carácter amoldable á todas las situaciones, habiendo inclinado perpetuamente su espina dorsal, para que á ninguno de los presidentes se le ocurriera alejarlo de su puesto, en nombre de ese artículo constitucional que autoriza al ejecutivo á nombrar ó remover los empleados según su albedrío.»

Estas palabras son el reflejo fiel de lo que acontece, y por lo tanto exime el comentario.

En esta misma ocasión, el diputado doctor Esca-



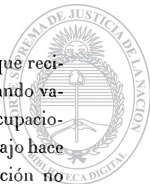
lante, decía : « Creo que la seguridad de la jubilación es desastrosa, que bajo el punto de vista de los intereses económicos no puede sostenerse, porque mata en los empleados el estímulo indispensable para el ahorro, para el adelanto, y porque inmoviliza sus fuerzas, produciendo la enfermedad de la empleomanía, que tan desastrosa es, tanto para la buena administración como para los intereses generales de la riqueza pública de un país, especialmente si es de escasa población como el nuestro. »

Cabe transcribir aquí una parte del mensaje del poder ejecutivo á las cámaras en 1887, urgiendo la sanción de la ley de pensiones y jubilaciones, para cerrar la puerta á la creciente anormalidad de concesiones particulares.

« El honorable Congreso ocupa una parte relativamente grande del tiempo de sus sesiones en discutir estas pensiones que responden en muchos casos á un interés individual no justificado.

« Se puede decir, en general, de toda pensión, que contribuye á debilitar la producción nacional ; — que quita aliciente para el trabajo á grupos más ó menos grandes de ciudadanos : — que, dando alimento seguro á familias enteras sin exigir de ellas esfuerzos para luchar por la subsistencia, crea gremios consu-

midores que devuelven á la Nación la sabia que reciben de ella : — que fomenta la inacción, dejando vacíos en la vida, que se llenan con estériles ocupaciones cuando no son vicios que la falta de trabajo hace nacer ; — que influye en el resto de la población no estipendiado por el gobierno, presentándole elejemplo pernicioso de una vida asegurada en cambio de una desocupación permanente ; — que quita los bríos naturales en virtud de los cuales cada ciudadano trabaja por la gloria de la patria y por el bienestar general ; — que sujeta al pensionista, y por su intermedio á otros ciudadanos, á la presión de los gobiernos, manteniéndoles dependientes de las oscilaciones de la hacienda pública y temerosos de todo cambio, aunque en él vaya envuelta la suerte del país ; — que es, en resumen, un elemento de desmoralización indirecta, que crea parásitos sociales, mantenidos en la ociosidad por el resto de la población laboriosa ; — que establece una exacción inicua sobre esa parte de la población obligada á producir no sólo lo que necesita para mantener su vida y responder á los gastos de la administración, sino también un suplemento para formar el presupuesto destinado al pago de las pensiones ; — y que forma, en fin, grupos privilegiados dentro de la población,





cuyo bienestar relativo fomenta ideas de antagonismo y de malquerencia entre los que trabajan, — ideas que refluyen en contra de la administración pública á la que se considera como responsable de esa desigual repartición de beneficios. »

Los inconvenientes apuntados en este párrafo del mensaje no pueden tener mayor evidencia ; nada es posible agregar á tan concienzuda exposición.

Esta es la demostración más acabada de que es preciso cortar una vez por todas el abuso de conceder pensiones á granel, como hace actualmente el Congreso.

El cuadro que sigue á continuación, nos permite ver, la proporción alarmante del crecimiento de las sumas invertidas en pensiones y jubilaciones de estos últimos años con la escasa población que tenemos, de tal manera que si continuáramos en este tren de graciosa obsequiosidad, con una población doble ó cuádruple de la actual, el número de los desocupados, merced á las frondosidades del presupuesto, alcanzará proporciones no sospechadas.

| | Pesos |
|------------|---------|
| 1868 | 205.064 |
| 1874 | 489.008 |
| 1880 | 732.000 |
| 1886 | 855.000 |

| | |
|-----------|-----------|
| 1890..... | 1.688.973 |
| 1892..... | 1.772.000 |
| 1893..... | 2.217.000 |
| 1901..... | 5.358.000 |
| 1906..... | 7.700.406 |
| 1907..... | 9.000.000 |



Como dice con sobrada razón el poder ejecutivo en su veto á una larga serie de pensiones votadas en 1907, la Caja nacional de pensiones y jubilaciones civiles, costeada con el 5 por ciento del sueldo de los empleados, con la renta de diez millones de pesos en fondos públicos de 6 por ciento y otros valores más, ha sido creada al efecto de libertar el presupuesto general de la administración, del permanente desorden de gracias y favores casi siempre injustificados que recargan al tesoro nacional de una manera excesivamente onerosa. Sin embargo, ésto no ha obstado para el acuerdo de nuevas pensiones de personas que no están comprendidas en la ley de la materia y sin razón ninguna que las haga acreedoras á esta gracia.

La reforma que á este inciso propongo tiene por objeto restringir esta facultad usada sin limitaciones. Las pensiones se acuerden á los deudos de los grandes servidores de la patria, cuando las condiciones económicas de éstos ó sus aptitudes no les permite

una holgada existencia. Y esto es justo, porque nunca están bien pagos los servicios de un hombre superior prestados á la República. Pero esto es lo excepcional, no lo común ó general.

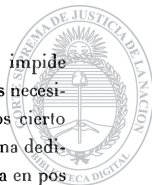
Así lo entendieron los constituyentes de 1826, cuando en el artículo 56, sección IV, entre las facultades del Congreso, estatuyeron : « Acordar premios á los que hayan hecho, ó hicieron grandes servicios á la Nación. » Los que así restringían esta facultad del Congreso, comprendían que la sociedad necesita estímulos que fomenten las grandes acciones de los hombres, distinguiendo lo superior de lo inferior, lo grande de lo pequeño, lo extraordinario de lo vulgar ó común ; y no tuvieron, seguramente, la más remota idea de que veintiseis años más tarde, se acordaría esa facultad en forma discrecional é ilimitada ; y mucho menos, que el Congreso pudiera aplicarla por motivos de simple complacencia.

En cuanto al ejército, pueden ser acreedores á esta gracia, los deudos de militares de grado superior cuya conducta y servicios prestados les ha permitido distinguirse entre los demás, cuando la opinión pública que nunca se equivoca, ha pronunciado su fallo inapelable y adjudica relevantes hechos y calidades personales sobresalientes.



Se dirá que la milicia es una carrera, que impide otro género de ocupaciones para sufragar las necesidades de la vida, es cierto, pero no es menos cierto que el hombre que con ó sin bienes de fortuna dedica todo su tiempo al cultivo de la inteligencia en pos de un grande ideal ó ejercitando una carrera liberal cualquiera, es también un batallador, trabaja para sí y para los demás en la esfera de su capacidad. Si éste ha llegado á la meta de sus aspiraciones, éste es un general triunfante, digno de su gloria y de los dones que este mismo triunfo le proporciona, pero si ha caído á la mitad de su carrera, antes de demostrar sus aptitudes y de sacar provecho de ellas, es nada más que un oficial de buena estirpe, quizá, caído en la jornada, inmerecedor aun de los bienes á que podría haber sido acreedor.

Escrito lo que antecede, llega á mi bufete, un documento patriótico, lleno de enseñanzas y de buena doctrina, relacionado con el punto que motiva este comentario. Él está subscripto por el expresidente de la república del Uruguay, doctor Julio Herrera y Obes (27 de marzo 1909), renunciando á la pensión vitalicia de 4800 pesos oro anuales « en uso de las facultades que el artículo 16 de la Constitución acuerda á la honorable asamblea general para decre-



tar honores y recompensas pecuniarias á los *grandes servicios prestados á la Nación*, que el Senado había sancionado ya por unanimidad.

La nota-renuncia fué presentada á la Cámara de diputados, porque no obstante sus cuarenta años de azarosa vida pública, los méritos de su presidencia de la República (1900 á 1904), su avanzada edad de más de setenta años y sus condiciones de extrema pobreza pecuniaria, había representantes que impugnaban este proyecto de ley tan justo como constitucional.

En este documento se lee el siguiente párrafo :
« Yo creo que los ciudadanos que se encuentran en mi situación política y personal, no solamente no deben ser nunca una carga pesada para el estado, sino que deben continuar prestando á la Nación, mientras puedan, todos aquellos servicios que de ellos dependan. Servir bien á la patria hasta el último día de la existencia es, sin duda, una conducta digna de elogio, pero en substancia es sólo el cumplimiento estricto de un deber de todo ciudadano que no reclama recompensas pecuniarias. »

.

« Cuando se decretan honores y recompensas á los servicios prestados á la Nación, es necesario que



esos servicios sean notorios, indiscutibles y de tal naturaleza, que formen una actuación política perfecta del ciudadano á quien se honra, una resultante vigorosa en el sentido de los grandes y permanentes intereses nacionales. »

Desgraciadamente, hasta ahora no hemos tenido en nuestro país ejemplos de esta clase ; por el contrario, aquí es muy común recibir jubilaciones en temprana edad, recibir nuevos empleos, y hasta simular comisiones para facilitar viajes dispendiosos á Europa, costeados por el tesoro de la Nación.





« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 19° Aprobar ó desechar los tratados *concluidos* con las demás naciones y los concordatos con la Silla Apostólica y arreglar el Patronato en *toda la Nación.* »

19° Aprobar ó desechar los tratados *firmados* con las demás naciones, á *que se refiere el inciso 14° del artículo 86.*

Consecuente con la supresión del artículo 2°, los concordatos y el patronato deben desaparecer de este artículo.

En cuanto al agregado que se pone en la reforma, lo conceptúo necesario, porque, mientras estas actas no hayan sido aprobadas por el Congreso, no puede decirse que los tratados están concluidos: y además de ésto, porque, por esta redacción, todos los tratados y negociaciones con las potencias extranjeras, á que se refiere el inciso 14° del artículo 86, deben tener la aprobación del Congreso.





« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 20° Admitir en el territorio de la Nación otras órdenes religiosas a más de las existentes. »

20° La Nación deberá procurar que todas las vías férreas, canales de navegación y telégrafos de la República, sean de propiedad del Estado.

Las vías de comunicación y transportes de la República, sirven intereses generales, son factores de civilización y de progreso, promueven la riqueza y el bienestar de todos y de cada uno, no son en sí mismo fuente de recursos para el Estado y no se hacen con ese fin, sino como simples medios para procurarlos indirectamente de las energías y actividades que desarrollan: luego, para hacer efectivos los bienes que con ellas se persiguen deben pertene-

cer á la Nación y estar administradas por el poder público.

Así como los correos, telégrafos, puertos, muelles, ríos navegables, etc., son de propiedad nacional y administrados por la Nación misma, los ferrocarriles y canales de navegación, deben estar en iguales condiciones.

Cuando no teníamos telégrafos ni ferrocarriles, el gobierno de la Nación mandaba construir caminos carreteros y establecía postas para el servicio de mensajerías, á fin de que los pueblos se encontraran unidos, se vincularan y por esas vías establecieran su comercio de ideas y de cosas, sin pagar ningún derecho de tránsito.

En los pocos años de vida que tenemos, hemos pasado de un salto, por decir así, de la lentitud á la celeridad, del transporte por caminos carreteros al que se hace por las cintas de acero. Todas las naciones del viejo continente, á la par de sus caminos, dominaron las aguas de sus ríos y construyeron embalses, diques niveladores, canales artificiales de navegación á la vez que de riego, y cuando llegó la era del ferrocarril habían terminado las vías de comunicación por agua, y nosotros aun no hemos dado principio á este género de obras.



Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Italia, etc., tienen una red de canales, complementados por el ferrocarril en muchas partes. Esos canales permiten conducir productos de peso y volumen considerable por tarifas reducidas y casi sin costo apreciable en las tres primeras, donde se ha inscripto en los canales : *Wasser frei*, agua libre. Allí los canales de navegación que en su origen pertenecieron á empresas particulares, fueron adquiridos por los respectivos gobiernos colocados en las mismas condiciones de los caminos carreteros : esta es la clave de la prosperidad del interior del territorio de aquellos países.

Nosotros, además de no disponer de este importantísimo medio de transporte, miramos aún con la mayor indiferencia los ríos caudalosos y los arroyos, contemplamos impasibles las corrientes presurosas que se pierden en el océano ó en algún inmenso lago interior inadecuado á las energías del trabajo. En una palabra, no dominamos las aguas, no aplicamos á ellas la ciencia, sistematizando grandes embalses y diques niveladores á lo largo del curso de los ríos para facilitar el riego de los campos en toda su extensión, como ha hecho Córdoba con el río Primero, y así dejamos pasar el tiempo, cual si se tratara de asuntos ajenos á nuestra capacidad, para



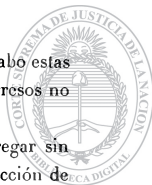
que otras generaciones más aptas lleven á cabo estas obras cuyas proyecciones involucran progresos no sospechados.

Al presente, sólo nos ocupamos de entregar sin medida y sin un plan meditado, la construcción de ferrocarriles á empresas particulares, vendemos las que son de propiedad nacional y permitimos la fusión de varias empresas para suprimir la competencia y entregar á su explotación avara los frutos de la riqueza de las regiones que sirven.

Las tarifas que el Estado fija no tienen por objeto determinar ganancias sobre su costo, sino cuando más obtener los gastos que ellas originan y los intereses que sus valores devengan.

Los ferrocarriles de empresas particulares no están en las condiciones necesarias para desarrollar la producción y consumo de que son capaces las vías de igual género del Estado, porque en las primeras se tiene sólo en vista las utilidades mayores que sea posible extraer para distribuir dividendos apetecibles; el capital particular es egoísta como el que más.

La sabia economía de las naciones consiste, á la vez que en la baratura de la vida, en el menor recargo del costo de producción y distribución de la riqueza, porque ésta es una de las fases principales que es



preciso considerar, en el propósito universal de triunfar en la competencia en los mercados de consumo, y los fletes ferrocarrileros elevados conspiran en contra de este propósito, y por consiguiente dificultan el progreso de la economía nacional.

En nuestro país, tan extenso, comprendido en treinta y tres grados geográficos de latitud y veintidós grados de longitud, con todos los climas del globo, con riquezas naturales las más variadas y sin mayores inconvenientes topográficos, está llamado á ser atravesado por el ferrocarril en todas direcciones, en extensión de miles de leguas. Por consiguiente, este es un asunto de la mayor importancia y requiere un plan bien meditado para la prosecución de las obras y el dominio que el Estado debe tener sobre ellas como propietario, para que la acción de estas vías respondan al verdadero fin de su construcción. He dicho en otra ocasión, que los ferrocarriles de largo recorrido son los verdugos de la actividad mediterránea, lo he afirmado ayer y lo repito al presente, en razón de que las empresas particulares tienen establecido tarifas que les proporciona altos rendimientos y en general, en los ferrocarriles nacionales no hay tampoco un criterio económico ó científico que los rija.



Á este respecto, el ministro Civit, en la memoria del ministerio de obras públicas de 1904, en su capítulo *Consideraciones generales*, haciendo ver los inconvenientes que para el progreso traen aparejadas las primeras concesiones, dice, es suficiente recordar la fusión de los ferrocarriles Central Argentino y Buenos Aires y Rosario, en que, con motivo de cambios en su legislación, las empresas se negaron á aceptar disminución en las tarifas propuestas por el poder ejecutivo.

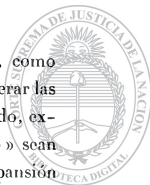
« En esta situación, no quedan sino dos caminos á seguirse : la *expropiación de las líneas férreas*, y la prolongación de las propias del Estado. Lo primero está previsto y autorizado por las leyes contratos, y á ello ha de irse indefectiblemente, y el país lo impondrá más tarde ó más temprano como una necesidad de orden, público y como una solución radical de todos los problemas que afectan á su prosperidad y engrandecimiento, cuando en breve su crédito y su poder financiero se lo permitan sin violencia ni enormes sacrificios. La administración no podía anticiparse á estos hechos, que fatalmente tendrán que producirse, y entonces no le quedaba — sin perjuicio de la realización de aquella idea — sino propender al desarrollo paulatino y metódico de la red ferroviaria nacional. Este



es el camino que ha adoptado resueltamente, como el más eficaz y positivo para regular y morigerar las tarifas de los ferrocarriles particulares, cuando, excediendo de su límite «razonable» y «justo» sean una traba ó entrañen un peligro para la expansión de la riqueza pública, y que con fletes excesivos abatan energías y paralicen industrias nacientes que necesitan de protección mientras crecen y se fortifican. Así se hace posible también una intervención equitativa que permita al gobierno suavizar tarifas que, por un error inexplicable pero que ya ha ocurrido, permanecen inmutables, tanto en épocas de prosperidad como de depresión comercial é industrial, olvidándose, por un beneficio privado momentáneo, que ambas están vinculadas por la misma suerte y los mismos intereses. »

El párrafo transcrito importa todo un plan de gobierno en materia de ferrocarriles; se encuentra en él un pensamiento maduro y vasto por sus eficientes proyecciones, y la visión clara y certera del convencido y del estadista.

El capital particular es egoísta y debe obtener el mayor rendimiento posible, y el gobierno que administra el dinero de todos para procurar con él la felicidad social, es altruísta, pues las utilidades que



percibe, son iguales á los beneficios que á todos reporta.

En los servicios públicos debe haber uniformidad en su dirección para que sean eficaces y desarrollen todas las actividades en la medida de la respectiva capacidad, y así como hay un solo criterio ó una sola ley para la administración de correos y telégrafos, una sola debe ser la que rija en los ferrocarriles. Las principales naciones de Europa lo han comprendido así. Alemania otorga concesiones por excepción, porque tiene como principio, que todas las líneas férreas deben ser del Estado, y del limitado número que eran en un principio, en 1898 tenía bajo su administración, 43.000 kilómetros, en los que están comprendidas todas las líneas principales ó estratégicas del imperio, quedando sólo 3000 kilómetros de vías auxiliares ó de servicios locales en poder de particulares. La Constitución de Alemania, contiene un capítulo especial sobre ferrocarriles que consta de siete largos artículos (41 al 47), todos concernientes al más regular funcionamiento para la defensa del territorio y el progreso comercial é industrial del imperio. Los artículos 45 y 46, respectivamente, dicen : « El contralor de las tarifas pertenece al Imperio ; que asegurará especialmente : 1° la



adopción en un breve plazo de reglamentos de servicio comunes á todos los caminos de hierro alemanes; 2° *la uniformidad y la baja de tarifas*, en el límite de lo posible: especialmente, una tarifa moderada y conforme á las necesidades de la agricultura y de la industria, para el transporte á largas distancias de carbón, coke, maderas, minerales, piedras, sal, fierro en bruto, abonos y otros objetos análogos, de manera á llegar, tan luego como sea posible, á la tarifa de *un pfening*. En caso de necesidades urgentes, especialmente de encarecimiento extraordinario de artículos de primera necesidad, los caminos de hierro están obligados á aplicar una tarifa especial y temporaria, á precio reducido, fijada por el emperador á proposición de la comisión competente del consejo federal ó *Bundesrath* (senado)... »

Bélgica, con el propósito de evitar la intervención financiera extranjera en su territorio, según lo expresa C. Colson en su *Transports et tarifs*, construyó una serie de líneas por cuenta del Estado, al mismo tiempo que hizo algunas concesiones: pero después de la guerra franco-prusiana, y teniendo en vista la defensa del territorio, á la vez que los intereses industriales, sistematizó la expropiación de los ferrocarriles particulares, y de los 4500 kilómetros de



vía existentes en 1898, 4000 eran de propiedad del Estado.

Francia, Italia y Rusia están dentro de este mismo plan de gobierno, y en el primero de estos países, las vías de comunicación estaban representadas en 1897, por la cantidad de 23.000.000.000 de francos.

Los móviles que han impulsado á los estados nombrados á tener la dirección y administración exclusiva en los ferrocarriles son dos y de diversa índole, pero ambas están dentro de la propia acción del gobierno general : la guerra, por lo que concierne á las líneas principales, ejes de la red, ó estratégicas; y las industrias, en su amplia acepción, para impulsar con tarifas apropiadas el desarrollo creciente de la riqueza pública. Ambas sirven intereses de orden público, de soberanía nacional y de progreso económico; de seguridad y de bienestar. Pero ¿esto es sólo patrimonio de la monarquía? No. Esto es aplicable hasta en los países donde reina la mayor libertad, y en la forma republicano-democrática de gobierno la más exigente.

Así como nos preparamos para garantizar la paz, haciendo de cada ciudadano un soldado, necesitamos ante todo, disponer de todas las grandes arterias, á nuestro beneplácito, para transportar elementos de



guerra de todo género en la forma y condiciones que requiera la defensa del territorio.

Felizmente, no tenemos ninguna guerra en perspectiva y ojalá que jamás la tengamos, pero si consideramos que es conveniente, como acto de previsión, mantener ejército y elementos bélicos, debemos también tener la dirección y administración de los ferrocarriles, elementos indispensables en la estrategia militar en la guerra moderna y muy especialmente en nuestro extenso país, circundado por cinco naciones, por el Norte, Este y Oeste.

El extranjero tiene cuantiosos capitales arraigados en el corazón mismo de la Nación en empresas de todo género, y en especial, en el ramo de ferrocarriles, y es preciso prever acontecimientos, asegurando la defensa de nuestra soberanía.

Si, por otra parte, tratamos este asunto del punto de vista económico, es aún más necesario que el Estado tenga verdadera soberanía en la dirección y administración de estas vías, para mantener el perfecto equilibrio que deben guardar las tarifas con el progreso y protección que requieren las industrias nacientes, ó con las regiones asoladas por epidemias ó malas cosechas, y con las fuentes de mayor producción, para estimularlas en la medida de su mayor prosperidad.



¿El Estado es mal administrador de los ferrocarriles en nuestro país?

Si tenemos mala administración, es porque al presente todo se hace por favoritismos y por consiguiente todas las faltas se disculpan; porque los frenos de la máquina gubernamental están cambiados, ó como decía el doctor Pellegrini, porque el manubrio funciona á la inversa. Tengamos un poder ejecutivo respetuoso de todos los derechos, con facultades limitadas por restricciones intergiversables; un Congreso independiente, compuesto de ciudadanos los más espectables del país, en los que estén representados todos los matices de la opinión; una justicia recta y de verdad, independiente de todo poder extraño; y la opinión pública, fiel exponente de un pueblo en posesión de todos sus derechos y con la conciencia de sus deberes, tal cual modelo en este libro, y veremos si hay mala administración en las ramas del gobierno. Es que en la gran armazón gubernamental todo está íntimamente ligado ó eslabonado, todo es correlativo. Cualquier función pública desarticulada, en medio de la armonía del conjunto, hace el mismo efecto de la rotura de un diente ó de cualquier otra pieza importante del engranaje de una máquina : en este caso, se suspende el



movimiento, se repara el desperfecto y se continúa.

La existencia de este artículo en nuestra Constitución es de todo punto de vista de la mayor importancia, para estimular las energías del trabajo con bajas tarifas y propender á la mayor expansión de la riqueza pública.







21° *b* Designar, de entre los jefes de mayor graduación del ejército, la persona que ha de desempeñar el cargo de comandante en jefe de las fuerzas de mar y de tierra de la nación en caso de guerra.

Este inciso viene á reemplazar al 15° del artículo 86. Se comprende que en las monarquías, sea el monarca el jefe nato del ejército de mar y de tierra, especialmente en caso de guerra, como acontecía en los primitivos tiempos, y más tarde en la edad media y en los tiempos modernos, por razones que es obvio mencionar. Entre nosotros podría acontecer esto mismo, si entre las condiciones para ser presidente de la Nación, estuviese la de estar comprendido en la más alta jerarquía militar, á guisa del más fuerte de la tribu; pero, como esta condición no existe ni podemos establecerla, el inciso 15° del artículo 86 que establece imperativamente que el



Presidente es comandante en jefe de las fuerzas de mar y de tierra de la nación, sea en tiempo de paz ó de guerra, no se armoniza con las principales calidades que debe reunir el Presidente cuya misión es más alta que la de mandar ejércitos y que sólo por una coincidencia puede ser, á la vez que el primer estadista, el primer jefe militar; y sabido es que en este caso, el Congreso acordaría á esta alta autoridad, tan graves responsabilidades.

Este país está constituido para vivir en paz, impulsando todas las energías de la actividad nacional en el trabajo fecundante, sin aspiraciones guerreras, ni de predominio sobre los demás países ó territorios: y tan es así, que el arbitraje, como fuente de aguas claras del derecho internacional, ha consagrado en hechos fehacientes y palpitantes que le honran y enaltecen. Por consiguiente, los jefes de alta graduación, pueden llegar á la presidencia y han llegado, pero no son, por su calidad de tal, los llamados á dirigir los destinos del país para ensanchar las arterias de la riqueza nacional y satisfacer los anhelos de la felicidad social.

Más que jefes militares, para la presidencia de la república, necesitamos hombres de luces, experimentados, de energías ponderadas, pensadores de

alta talla y de moral insospechable, y los hombres de estas condiciones, por lo general, no serán aptos para dirigir el ejército en tiempo de guerra. En tal caso, los verdaderos comandantes en jefe son los generales en actividad, sin las responsabilidades inherentes al primero; y en época de paz, el Presidente, no tiene necesidad de ostentar ese segundo título, pues siempre es el jefe de la administración general de la nación, y á esta jefatura está subordinado el ejército en cuanto á su organización y distribución, conforme á los planes que dicta el Congreso.

Cuando se dictó la Constitución de 1853, dominaba en todas las esferas el espíritu guerrero. Tronchado el árbol de la guerra civil, era necesario evitar el desarrollo de los retoños, porque el sacarlo de cuajo, tenía que ser obra de la ciencia, que, con el vapor y la electricidad, descubre lo ignoto, identifica el pensamiento, acorta distancias, establece sobre rieles la unidad nacional, y prepara todas las actividades hacia el triunfo de la paz, en cuyo campo se radica y florece la guerra de las energías económicas. Sí. En aquella época, todo lo resolvía la espada, y además de la anarquía permanente del país, nuestras fronteras eran materia de discusión con los países vecinos, y ya se aproximaba la guerra que sostu-





vimos con la república del Paraguay. Estos antecedentes, predisponían á los hombres de pensamiento de aquella época, á mirar en cada Presidente, un alto jefe del ejército. No era posible entrar de lleno al dominio de la razón y se hacía necesario el imperio de la fuerza. Á este estado de cosas responde el inciso 15° del artículo 86, el cual no está de acuerdo con los progresos alcanzados y con la omnipotencia que por la Constitución vigente se acuerda al poder ejecutor de las leyes del Congreso.

El Congreso, que es el poder que declara la guerra ó la paz, es quien debe designar, la persona que ha de tener el comando en jefe de las fuerzas de la Nación. En las múltiples facultades del poder ejecutivo no cabe ésta, ni está obligado tampoco á tener la competencia y pericia necesarias para el desempeño eficaz de tan delicadas funciones. Y no se crea que por el inciso que propongo se amengüa la entidad presidencial. Por el contrario, se la enaltece, porque queda siempre superior á la autoridad del primer jefe del ejército.

Como se verá, este inciso, á la par de otros, relativos al poder ejecutivo, tiende á hacer desaparecer la faz monárquica de esta autoridad que en determinados momentos reúne la suma del poder público, y por lo

tanto, las garantías constitucionales se extinguen, y las libertades públicas no pasan de ser una mera fantasía. La enfermedad de la política argentina tiene sus raíces en la autoridad discrecional é ilimitada del Presidente, acordada por la Constitución que nos rige : todos los que han escalado esa alta posición, se han dado clara cuenta de esta enormidad, han palpado los gravísimos inconvenientes del sistema y y no han tenido la patriótica inspiración de reconocerlo oficialmente y presentar un plan de reformas, para vivir de lleno en la república. Este es el cargo que hago á los presidentes pasados, al presente y quizá, mientras viva, á los que vengan. Considéranse reyes, adquieren un continente señorial, se hacen dispensar honores de príncipe, tienen guardias de honor, y disponen de la fuerza y hacen ó ejecutan lo que les parece bien, son jefes de todo y para todo, y á la forma de gobierno que instituye una especie de zar de las Rusias con el título de presidente, llamamos nosotros : representativa republicana federal, democracia, *self-government*. Lo mismo acontece en Estados Unidos de Norte América.

La sección 2ª, del artículo III, de la Constitución americana, dice : « El Presidente será general en jefe del ejército y armada de los Estados Unidos y de la



milicia de los diversos estados cuando sea llamada al servicio activo. »

Estudiando J. Bryce (1) los poderes y deberes del Presidente, en tiempo de guerra, dice : « Es á la vez, comandante en jefe de los ejércitos, y cabeza del poder civil y ejecutivo. Abrahan Lincoln concentró en sus manos una suma tal de poderes, que ningún inglés los tuvo desde Olivier Cromwell. Es verdad que, por razones especiales, las leyes ordinarias fueron suspendidas durante la guerra de secesión. Pero será siempre lo mismo en crisis semejantes, y esta suspensión hace del Presidente una especie de dictador. »

« En ningún país de Europa, existe un personaje comparable al Presidente. Estudiemos los países de régimen parlamentario, como Inglaterra, Italia, Bélgica : no se asemeja ni á su soberano, ni á su primer ministro : éstos no son jefes de partido, y el primero no es otra cosa. El Presidente, tendrá menos prestigio, pero dispone de una autoridad más grande que la de un monarca de Europa. »

El inciso 15 del artículo 86, está, además, conforme con lo que disponen las constituciones de todos los países de estructura monárquica.

(1) *La république américaine*, tomo I, página 104.



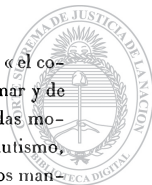


La Constitución de Bélgica, por ejemplo, en su artículo 86, dice : « El rey comanda las fuerzas de tierra y de mar, declara la guerra... » ; la de Países Bajos (art. 60) : « El rey tiene el comando en jefe de las fuerzas de tierra y de mar... » y el 58 : « El rey declara la guerra... » ; la de Alemania (art. 63) : « El conjunto de las fuerzas de tierra del imperio constituye un solo ejército, colocado, en tiempo de guerra y de paz, bajo las órdenes del emperador... » : Prusia (art. 46) : « El rey tiene el comando supremo del ejército » ; Italia (art. 5°) : « El rey comanda todas las fuerzas de tierra y de mar... » ; España (art. 52) : « El rey tiene el comando supremo del ejército y de la flota ; él dispone de las fuerzas de mar y de tierra » ; Grecia (art. 32) : « El rey es el jefe supremo del Estado, él comanda las fuerzas de tierra y de mar, declara la guerra... » ; Japón (art. 11) : « El emperador tiene el comando supremo del ejército y de la marina » ; Rusia (art. 1°) : « El emperador de todas las Rusias es un soberano autócrata y absoluto... » ; Francia, bajo la monarquía, en su Constitución de 1830, en su artículo 13, dice : « El rey es el jefe supremo del Estado ; manda las fuerzas de mar y tierra, declara la guerra... »

Véase, pues, cómo la atribución que acuerda

nuestra Constitución al Presidente, de ser « el comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y de tierra de la Nación », es atributo propio de las monarquías, de la fuerza sin contralor, del absolutismo, de la inviolabilidad é irresponsabilidad de los mandatarios; no se aviene á la forma contractual de las democracias, al gobierno libre, al *self-government*. Esta facultad es también una de las grandes armas de los poderosos, así como la de nombrar obispos, arzobispos y demás prelados de las respectivas iglesias; y como en algunos de los países nombrados y otros no citados, hoy entran á la sucesión del trono, personas del sexo femenino, resulta que las mujeres tienen la dirección de la guerra, la declaran, mandan ejércitos y nombran altos dignatarios eclesiásticos. ¿No es esto algo ridículo en los tiempos que corren, en pleno siglo xx?

Con lo expuesto, creo suficiente, para demostrar la conveniencia de sustituir el inciso 15 del artículo 86, por el que propongo.





« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 22° Conceder patentes de corso y de represalias, y establecer reglamentos para las presas. »

22° Decretar intervención en el territorio de las provincias, conforme al artículo 6°, porque esta es facultad exclusiva é indelegable del Congreso.

Como el inciso 22 vigente y el que propongo son de diversa índole, los comentarios debo separarlos para su estudio en dos distintos capítulos.

I

Este inciso está suprimido de hecho, por cuanto, según ley de 29 de agosto de 1856, quedó sancionada la adhesión á los principios de derecho maríti-

mo, consignados en la declaración hecha en París por el Congreso de plenipotenciarios, el 16 de abril de 1856, por la cual quedó abolido el corso. En este congreso, el conde Alejandro Walewsky, secretario de negocios extranjeros de Francia, dijo : « El congreso de Westfalia ha consagrado la libertad de conciencia : el congreso de Viena, la abolición de la trata de negros y la libertad de la navegación de los ríos ; y es digno del congreso de París, los principios marítimos siguientes : 1º abolición del corso ; 2º el pabellón neutro cubre la mercadería enemiga, excepto el contrabando de guerra ; 3º la mercadería neutra, excepto aun el contrabando de guerra, no es secuestrable ni bajo pabellón enemigo ; 4º los bloqueos no son obligatorios sino en tanto que son efectivos » (1).

Con iguales propósitos y en la misma ocasión, lord Clarendon, ministro de negocios extranjeros de Inglaterra, expuso que el corso patentado « era una piratería organizada y legal ; uno de los más grandes flagelos de la guerra, que los progresos de la civilización imponía que tocara á su fin. »

Así es que las patentes de corso y de represalia no tienen razón de ser, porque su abolición es un hecho

(1) LESUR, *Annuaire historique universel*, tomo 38, página 68. 1856.



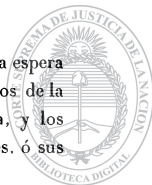
consumado, conquista inscripta en el derecho internacional; y por más que España y Norte América no hubiesen adherido á estos principios, en la última guerra de 1898, no atentaron contra ellos.



II

No me fatigaré en repetir que la anormalidad de la política argentina, impone la necesidad de una poda racional del poder discrecional de que dispone el Presidente de la República.

Con la actual Constitución, la autoridad del Presidente en el receso de las cámaras, es la de un soberano absoluto: dispone del ejército y de la fuerza toda, á su albedrío: interviene en las provincias á voluntad, para sostener ó derrocar gobernadores y decreta el estado de sitio, y como en todo momento, remueve los secretarios de Estado, y en general, todos los empleados de la administración, etc., etc., y es el caso de preguntar, ¿cómo es posible que en un país así constituido podamos gozar del precioso dón de la libertad? No: no es posible: y es por esta razón, que el pueblo está mirado en la triste condición de siervo, como lo estaba en la época floreciente



del feudalismo en Europa. Todos estamos á la espera de su beatífica resolución para todos los actos de la vida cívica. Es sumo pontífice en política, y los gobernadores de provincia son sus apóstoles, ó sus sacerdotes del *Santo Oficio*.

El contenido del artículo 6° de la Constitución, no fija con claridad el linde del poder intervencionista, según algunos, y esto fué materia de discusión en 1862, 67, 68, 69 y 1894, á objeto de reglamentar ese artículo por una ley.

En 1869 se sancionó un proyecto presentado con ese motivo, el cual fué vetado por el poder ejecutivo. Esa sanción estatúa que toda intervención deberá previamente ser autorizada por ley; que en el receso de las cámaras sería del resorte del poder ejecutivo, con la condición de someter todo lo actuado al Congreso, dentro de los diez días siguientes al de apertura.

Cuando, como en el caso del artículo 6° se trata de un acto eminentemente político como el que está indicado, se dice: gobierno federal, debe comprenderse que se refiere al Congreso que es quien resuelve la contienda y al poder ejecutivo quien la ejecuta.

Esto no puede ser materia de duda, y si el artículo 6° no fué más explícito, ha sido, evidentemente, para

dejar á la discreción del Presidente de la República el uso de esta facultad, como lo comprueba el inciso 19° del artículo 86 relativo al estado de sitio, que importa más que una intervención.

Estas atribuciones que para hoy son criticables, á la época de la Constitución (1853), fueron necesarias. Aun era un problema la unidad nacional, porque las raíces que echara la anarquía, desde nuestra emancipación política, no era posible arrancarlas en un solo día. El país estaba empobrecido y casi arruinado, y propiamente sin industrias; las provincias dominadas por caudillos ensoberbecidos: las ciudades aisladas unas de otras, con distancias enormes que recorrer para llegar á esta Capital, con el gaucho malo ó el indio de la selva en asecho en los caminos, que imponían la necesidad de hacer testamento antes de emprender el viaje. En tales condiciones, las facultades políticas extraordinarias acordadas al Presidente, en el receso del Congreso fueron una necesidad, y sólo así pudo llegar á dominarse la guerra civil entre las provincias y en los tradicionales partidos de cada una de ellas. En aquella época, para dar instrucciones al interventor, se hacía una especie de código, con artículos para todos los casos que pudieran ocurrir, como aconteció con las otorgadas el 12

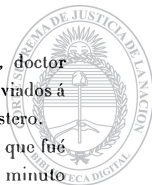


de noviembre de 1853 á los comisionados, doctor Benjamín Lavaisse y coronel Marcos Paz, enviados á las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.

En la actualidad, no hay ni sombras de lo que fué el país en aquella época y baste decir que al minuto se saben las cosas que acontecen hasta en los parajes más apartados de la República; que por ferrocarril nos trasladamos á Jujuy en veinticuatro horas, y que el Presidente de la República interviene en las provincias con toda eficacia con jefes del ejército destacados previsoramente, y repone gobernadores á los diez minutos de promovido un movimiento revolucionario por ciudadanos que han tomado el camino de *ultima ratio*, agobiados por el peso de una larga tiranía.

Hoy puede reunirse el Congreso en menos de veinticuatro horas de la convocatoria, y esto importa decir que este cuerpo no puede delegar en el Presidente, facultades que le son propias, porque no hay ni debe haber otra autoridad suprema para dirimir las cuestiones políticas de los estados que el Congreso, cuando éstas salen de la esfera del mecanismo local.

Con motivo de la intervención á San Juan, por el poder ejecutivo, en 1857, interpelado el ministro del



interior por el diputado Laspiur, el ministro negó el derecho de la interpelación, manifestando que el poder ejecutivo era quien por la Constitución estaba facultado para ejercer ese acto, y que « si el Gobierno no procediera como corresponde en la esfera de sus atribuciones, no son las cámaras, sino la opinión pública quien debe juzgarle ». Esto último no aceptó el Congreso, pero prevaleció la idea de que el « gobierno federal », á que se refiere el artículo 6°, quiere decir poder ejecutivo nacional. Esto podía hacerse en aquella época, pero hoy no es aceptable.

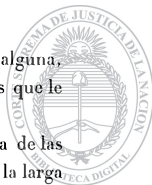
En 1860, el poder ejecutivo presentó un proyecto de ley para intervenir la provincia de la Rioja y la competente *autorización* para declararla en *estado de sitio* si fuere necesario, y llamado el ministro del Interior para que diera informes al respecto, dijo : que las autoridades constituídas no habían solicitado la intervención nacional, que no obstante haber nacido de un motin el actual gobierno, había un orden completo: que la provincia no estaba convulsionada ni anarquizada, que sus autoridades manifestaban acatamiento y sumisión al gobierno general. El senador Elías, manifestó su sorpresa por el pedido de autorización para declarar en estado de sitio una provincia que estaba en perfecta paz y tranquilidad, y que



el Congreso no podía delegar en autoridad alguna, una de las más grandes y graves atribuciones que le confiere la Constitución.

No obstante esta manifestación, y en vista de las razones aducidas por el ministro, relativas á la larga distancia (más de 200 leguas), y á las dificultades de todo género para tener una comunicación rápida y eficaz, se hacía necesaria la sanción de la ley tal cual fué proyectada. Así se hizo. El presidente Derqui nombró interventor al senador, coronel Ciriaco Díaz Vélez, en quien delegó la facultad de decretar el estado de sitio si lo consideraba necesario, y éste á su vez transfirió su comisión con todas sus facultades al teniente coronel José Olegario Gordillo.

Esto es lo que se hacía en los primeros tiempos de nuestra organización política, y los artículos constitucionales pertinentes fueron hechos á ese fin. La tiranía de Rosas había concluído en Caseros, pero las devastaciones del incendio por ella producido, continuaron en la República, y era preciso una autoridad enérgica y una rápida ejecución en el plan de apagar tanta llama: y como esta última condición (rapidez) no era posible satisfacerla por las largas distancias y los interminables desiertos que separaban los pueblos, fué menester reemplazarla por la



amplitud de facultades y atribuciones de los comisionados.

Hoy no tenemos aquel desgraciado y lamentable estado de cosas, ni la necesidad de ejercitar la autoridad en la medida que acuerda la Constitución. No obstante, el país sigue creyendo que nuestro código fundamental es lo más adelantado del mundo, sin poner mientes en que no podemos elevar al gobierno, una personalidad que sea el exponente de la verdadera soberanía popular. El presidente que viene es hechura del presidente que va; el gobernador que sale, impone el gobernador que entra.

¿Dónde está la juventud; dónde los hombres experimentados; dónde el saber, la honorabilidad, el patriotismo? Se escucha á intervalos, y nadie contesta, con sobrada razón. Qué hemos de hacer los interpelados, si la Constitución nos ha quitado todas nuestras armas y las ha depositado en manos del Presidente de la República como *supremo elector*.

Á diario se dictan leyes políticas y enmiendas á las mismas, y el resultado es siempre negativo. Se constituyen colegios electorales para elegir Presidente de la República ó gobernadores de Provincia, y los miembros que los forman no conocen el nombre del candidato, sino algunos minutos antes de la elec-

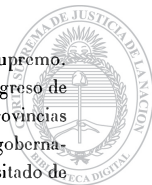


ción, á raíz de la orden del respectivo jefe supremo. Se practican elecciones de senadores al Congreso de la misma manera. Las legislaturas de las provincias no saben á quién van á elegir, mientras el gobernador no los sorprende con algún amigo necesitado de su cofradía. Se aproxima la elección de diputados al Congreso ó á la Legislatura, y nadie conoce el nombre de los candidatos hasta que los chasquis ó correos especiales de confianza, transmiten personalmente las órdenes del gobernador á las autoridades de campaña el día de la elección.

No faltan incautos que se presentan en algunas partes á disputar una elección al oficialismo, para retirarse avergonzados en presencia del escándalo oficial que los abruma. El pueblo se levanta en masa en vista de tanta arbitrariedad, y derroca el nepotismo imperante, y por telégrafo se ordena la reposición del gobernante. No se rinde cuenta á nadie de estos sucesos, ni nadie la exige.

Todos los esfuerzos son inútiles; todos los sacrificios, vana ilusión.

Á esto podrá contestarse, que en las postrimerías de la presidencia del general Mitre, se discutió libremente candidaturas para sucederle, y llegó al poder, quien tuvo la mayor suma de opinión. Es cierto.





Pero esto acontece cuando la honradez acrisolada dirige la conciencia de los hombres, no en esta época en que cunde el doblez y la mentira como elementos más eficientes de la política argentina.

Pasada la Constitución de Estados Unidos, para la aprobación de los estados, la convención de Virginia la discutió calurosamente, y entre los opositores á ella encontrábanse eminentes personalidades. Henry, dijo en una ocasión : « Dicese que esta Constitución reúne inmensas ventajas, pero cuando paso á examinarla de cerca, á mi me parece horrible. Entre sus muchas deformidades, noto yo en ella *tendencias monárquicas... Su defectuosa é imperfecta forma, podría dar lugar á que se perpetrase la mayor de las iniquidades, si se hallaran en el poder hombres de mala fe.* »

Á propósito, en carta que Washington escribía á Henry (Patricio), le decía : « Yo quisiera que fuera más perfecta la Constitución que hemos hecho, pero creo sinceramente que *es la mejor que podría formarse en esta época.* »

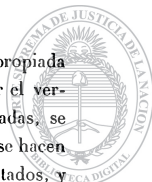
Bien, pues, los temores que le asaltaban á Henry, llegaron á tener una realidad harto cruel en los nietos de la idea.

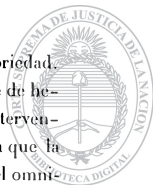
Este es el mal que corroe nuestro organismo, mal conocido sólo por sus efectos, razón por la que, los

encargados de curarlo, no aciertan con la apropiada medicación, desde que no han sabido hacer el verdadero diagnóstico. Se dictan medidas aisladas, se pronuncian algunos discursos patriotericos, se hacen transacciones por reelecciones á empleos rentados, y allí termina todo : el pueblo no vota y todos marchamos sin rumbo, sin saber adónde vamos, ni en quién fijar nuestra mirada en este permanente naufragio político, en el que todos actuamos de manera desgraciada, por obra y gracia de nuestra razón de ser : de la Constitución vigente. Reformémosla honradamente y dejemos la presidencia para cualquier ciudadano, seguros de que su actuación será irreprochablemente honesta y progresista, no importa las ideas que haya tenido en otra actuación.

En medio siglo de vida organizada, se han decretado ochenta intervenciones á las provincias ! Esto, sin contar las clandestinas, que son las peores.

Si nos ocupáramos en el análisis de estas intervenciones, en las que siempre ha primado el abuso del poder, sea para reponer gobernadores amigos (de la presidencia), situaciones nepóticas, ó para derrocarlos, é imponer la exaltación de personas que inspirasen mayor confianza, sería cuestión tan larga, que saldría de los límites y de la índole de este trabajo,





además de que son hechos de pública notoriedad.

No obstante, como muestra y por tratarse de hechos de actualidad, voy á referirme á una intervención inconstitucional y á otra más arbitraria que la primera, por la única y exclusiva voluntad del omnipotente Presidente de la República. No necesitaría nombrar las provincias á que me refiero, porque no hay quien no sepa que se trata de Corrientes, caída en desgracia, y de Santiago, eternamente maltratada.

Pocas provincias han sido tan favorecidas por buenos gobernantes en estos últimos años, como la de Corrientes. La evidente prueba de esto la hemos tenido en el gobernador derrocado últimamente por el Presidente de la República, señor Juan Esteban Martínez, á quien no conozco ni de vista, y si, sólo por su actuación discreta y honesta.

El gobernador Martínez, podía ser todo lo bueno que se quiera, pero tenía el grave defecto de su filiación política mitrista. Es cierto que este partido había sido llamado á compartir las tareas del gobierno y tenía dos hombres de su seno en las carteras de hacienda y de obras públicas, lo que no fué óbice para que el Presidente, sin causa ninguna justificada, abandonando á estos colaboradores de la primera

hora, decretara la caída del gobernador Martínez para colocar otro de su amañio en lugar de éste.

En su origen, la querella estaba concretada á la legalidad ó ilegalidad de la legislatura, porque ésta se encontraba duplicada. La legislatura opositora al gobierno solicitó la intervención nacional, y posteriormente, cada una de ellas eligió un senador al Congreso. Antes de que se tratara el pedido de intervención, y después de un largo debate, el senado aceptó el diploma de la legislatura gubernista (esto fué en junio). En septiembre la Cámara de diputados sanciona la intervención, la cual pasada en revisión á la de senadores, fué rechazada porque este cuerpo había resuelto ya el problema, declarando la legalidad de la legislatura cuyo diploma aceptara.

Pareció que en esto debía terminar este asunto, pero no aconteció así, porque un Presidente tiene demasiados resquicios por donde escurrirse cuando quiere hacer prevalecer su omnipotente voluntad. Fuerzas de línea hicieron el simulacro revolucionario, y diez días después de la clausura del Congreso, el Presidente de la República con la suma del poder de que dispone en el receso, decretó la intervención, sin que ninguna de las autoridades constituidas la solicitara.





El artículo 6° establece las condiciones necesarias para decretar intervención. El fin de la intervención es el de garantizar la forma republicana de gobierno ó repeler invasiones de otra provincia, y *á requisición de sus autoridades constituídas*; á éstas las sostiene ó repone, en el caso de ser depuestas.

El pedido de intervención anterior á estos sucesos había ya terminado con la aprobación del diploma del ingeniero Virasoro y con el rechazo del proyecto intervencionista por el senado. Así es que los poderes legalmente constituídos funcionaban regularmente, ninguno de ellos requirió la intervención, porque ninguno de ellos fué depuesto, y es en estas condiciones que el Presidente decreta la intervención, « al sólo objeto de organizar su poder legislativo » organizado.

¿Cuáles son las piezas del proceso que sirvieron de base para medida de tanta transcendencia?

Según el considerando 3°, que el ejecutivo había recibido solicitudes de vecinos nacionales y extranjeros que pedían garantías para sus vidas y propiedades. Pero, esto tenía un remedio sumamente sencillo: bastaba ordenar al general Ortega que dejara tranquila á Corrientes, y se trasladara con las fuerzas de su mando á cuidar las fronteras brasileña ú oriental.

En los considerandos 8° y 9°, dice que es doctrina sancionada la de que una intervención rechazada hoy puede ser sancionada mañana, y cita las intervenciones de Buenos Aires, Santa Fe y San Luis de 1893, sin darse cuenta que estos hechos no tienen nada que ver con el de su intervención.

En aquella fecha, el Congreso la rechazó, no encontrando causa justificada para acordarla, y es el mismo Congreso quien la sanciona, comprendiendo, más tarde, que era necesario.

Este caso es distinto de aquéllos : el Congreso rechaza la intervención y el Presidente jactanciosamente, la decreta al siguiente día, para que se vea que él tiene en sus manos todos los resortes del poder.

En este asunto hay algo más curioso todavía.

El poder ejecutivo, contra la práctica constitucional establecida de prorrogar las sesiones para tratar asuntos de urgente necesidad, estando aun pendiente la sanción del presupuesto, no cumplió este precepto y dejó pasar un mes y medio, dentro del cual se practicó tanta buena cosa en Corrientes. Convocado el Congreso á sesiones extraordinarias, y reunido el senado el 16 de noviembre, se daba lectura de un telegrama del senador Puccio, dirigido desde



Corrientes, solicitando permiso para desempeñar el cargo de interventor que hacía tiempo lo desempeñaba.

Oficialmente, el senado no sabía absolutamente que se hubiese intervenido Corrientes y un miembro de su seno que está en desempeño de la misión de interventor, pide permiso para aceptar tal cargo, y el senado, que un mes y días antes había rechazado el proyecto de intervención, sobre tablas le acuerda la licencia.

El senado dejó pasar todo como en familia, reconociendo de hecho la legalidad de la intervención y acordando permiso á un miembro de su seno que había dejado de ser senador, por el hecho de haber aceptado un cargo discernido por el poder ejecutivo, « sin el *previo* consentimiento de la cámara », como lo dice imperativamente el artículo 64 de la Constitución.

Este senador es el señor Eugenio Puccio, quien después de seis meses de estado interesante en que tuvo esa provincia para constituir una legislatura, hecho que pudo realizarse con toda imparcialidad en un mes ó dos, el 22 de abril del año pasado, dió á luz el fruto de tanta infecunda como negativamente ejemplarizadora labor.





El decreto dice, más ó menos, así: « Habiendo tenido lugar en el día de hoy (9.30 a. m.) la instalación definitiva de la honorable legislatura de la provincia... póngase en posesión del mando á S. E. el señor gobernador de la provincia, doctor Juan E. Martínez, el día de *mañana á las 4 p. m.* », para que la honorable legislatura disponga del tiempo necesario para iniciarle juicio político y suspenderlo del cargo antes de que se reciba.

Efectivamente así se hizo, por una simple mayoría, no obstante exigir la constitución, dos tercios de votos para dicho acto; y con esto quedó consumado el plan.

He penetrado al detalle de cosas que son de notoriedad pública en el país, para rememorar estos hechos que, sin duda alguna han de influir en el sentido de las reformas que propongo.

El asunto de Santiago es de índole diversa.

En Santiago se gobierna como en la generalidad de las provincias, por no decir en todas. El gobernador es quien hace legisladores, diputados y senadores al congreso, con la misma vieja y conocida máquina y así se hizo antes, ahora y siempre.

En la firme convicción de que nada se conseguiría por la acción tranquila de los partidos en favor de la



normalidad institucional, elementos de varios partidos, unidos bajo el nombre de coalición resolvieron derrocar la situación imperante, la que con los abusos más descarados había colmado la medida de aquel pueblo laborioso.

En efecto, á las diez y media de la mañana se llevó á cabo un movimiento revolucionario, trágicamente sangriento, que dió por resultado la prisión del gobernador y la entrega de las demás autoridades á la junta revolucionaria.

Antes de las once de la mañana del mismo día, el comandante Mauriño, jefe de la fuerza del 19 de línea, allí destacada para apuntalar al gobierno, se presentó á los revolucionarios, les obligó á deponer las armas y en nombre del Presidente de la República, repuso al gobernador derrocado, quien se hizo el muerto con falta de sentimientos fraternales inconcebibles, y aun embadurnado la cara con la sangre del hermano que por él la derramara, después de haber declarado triunfante la revolución.

¿No es, acaso, éste el colmo de las arbitrariedades que puede cometer el jefe del Estado? ¿Por qué intervenía *manu militari* en asunto tan grave?

Porque, como he dicho antes, en el receso del Congreso, constitucionalmente dispone de la suma

del poder público ; no hay quien se oponga á sus designios y á la monstruosidad de su autoridad.

Total, los revolucionarios no son tales para la justicia *provincial* de Santiago, á los que se les sigue un juicio por delitos comunes.

Queda en pie el telegrama del presidente al gobernador, confeccionado con un surtido de improperios y groserías contra los revolucionarios, dignos de una persona no del cargo que desempeña ; y el Congreso se ha hecho mudo, sordo y ciego. El Presidente no ha llevado una palabra á aquel alto cuerpo, ni nadie averigua lo que aconteció. ¡ Pobre Santiago ! ¿ Y esto es vivir en un país bien organizado, donde hay un Congreso que tiembla ante la idea de irritar la ira del mandatario ?

Esto no es una república, porque huele á monarquía.

La segunda disolución de la Duma de Rusia, conforme al ukase imperial del 16 de junio de 1907, fué á consecuencia de que los diputados no aceptaron una imposición del zar, contraria á la que ellos consideraban una depresión y una injusticia. Esto ha hecho la Cámara de diputados de Rusia, y lo harían los cañes si tuvieran congreso...

Tenemos también otro hecho muy reciente en



cuestión de intervenciones. Le tocó, por segunda vez, el turno á San Luis.

La mayoría de la legislatura de esta provincia creyó que debía hacer juicio político al gobernador Adaro y se preparaba para ello, pero el gobernador que tiene facultades análogas á las que le acuerda la Constitución nacional al presidente, no permitió semejante desmán, y como las cosas no podían quedar en este estado de permanente anarquía, la legislatura solicitó la intervención del gobierno federal y el poder ejecutivo la acordó, con fecha 4 de marzo de este año.

El artículo 1° dice : « Declárase intervenida la provincia de San Luis, con objeto de *garantizar el goce y ejercicio de sus instituciones.* »

Desde luego, esto es una nueva forma de decreto que hasta hoy no había estado en uso, y él no se amolda, según los hechos producidos, ni al artículo 5°, ni al 6° de la Constitución.

El 5° dice, que « el gobierno federal garantiza á cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones », siempre que cada una de éstas dicte su constitución « bajo el sistema representativo republicano », etc., « y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación pri-



maria ». ¿Falta algo de ésto en San Luis? ¿No tiene una constitución en las condiciones constitucionales prescritas, su administración de justicia, su régimen municipal y su educación primaria?

El artículo 5° no podía servir de base para decretar la intervención.

El 6° dice: El gobierno federal interviene para garantizar la forma republicana de gobierno ó repeler invasiones exteriores y á *requisición de sus autoridades constituidas*, para sostenerlas ó restablecerlas, si hubieren sido depuestas por la sedición ó por la invasión de otra provincia.

Para que la intervención sea decretada, es preciso entonces que sus autoridades la *requieran* si hubiesen sido depuestas por la sedición ó por la invasión de otra provincia. De manera que, si las autoridades no han sido depuestas, no pueden requerir la intervención. Dentro de estas condiciones, el gobierno federal interviene para garantizar la forma republicana de gobierno.

En San Luis no ha habido invasión de otra provincia, ni ninguno de los poderes ó autoridades ha sido depuesto por ningún motivo; luego, no procedía tampoco la intervención con fundamento en este artículo. No obstante, la intervención es decretada



al objeto que se indica en el artículo 1° transcripto, en la forma la más lata concebible, á objeto de consumir un escándalo.

De todos modos el argumento más serio que podía hacerse en favor de la intervención, era el de que, manifestando la mayoría legislativa que se encontraba cohibida por la fuerza para celebrar sesión, lo que importa una anormalidad en el juego armónico que debe regir á los poderes, y si se quiere apurando el argumento, podía decirse que con ese motivo, la forma republicana de gobierno estaba subvertida ; y en tal caso correspondía la intervención al solo objeto de garantizar el libre funcionamiento de la legislatura. Si el Congreso hubiere estado en sesiones era el caso de enviar una comisión parlamentaria á estudiar los hechos, y según ellos decretar ó negar la intervención, porque acontece á menudo en este género de cuestiones, que los juicios políticos responden simplemente á aspiraciones mal comprimidas de predominio político y llegan hasta inventar motivos estrafalarios para el juicio. Así es, que en las condiciones actuales, cuando la legislatura anuncia *urbi et orbi* que va á iniciar juicio político al gobernador en el receso del Congreso, como en este caso, vale más prepararse con toda resignación, á asistir á



los funerales de la autoridad que inviste el primer mandatario provinciano : es preciso enterrar al muerto.

La riqueza en acontecimientos políticos de nuestra historia se encuentra en las épocas que corresponde al receso de las cámaras.

Cualquiera se hubiese imaginado que el interventor doctor Julio Botet, iría á San Luis, con el objeto de hacer respetar el libre funcionamiento de la legislatura, desde que el poder ejecutivo se lo impedía, al decir de la mayoría intervencionista, pero muy lejos de eso, el interventor sin hablar palabra del asunto con el gobernador, declara cesante al gobernador por «razones de mejor servicio», perfecta y legalmente constituido y aprobado por una intervención nacional anterior y convoca al pueblo para una nueva elección. ¿Qué hace el poder ejecutivo nacional ante medida tan arbitraria? ¿Qué ha de hacer sino aprobarla, desde que esa fué la consigna, dada la amplitud de los términos del decreto, confeccionado ex profeso?

Todos los diarios de la Capital, adictos y adversos á la presidencia han levantado al unísono su voz airada para criticar al interventor y al poder ejecutivo nacional por esta arbitrariedad sin ejemplo,



que deja á la voluntad omnipotente del presidente las situaciones políticas al parecer mejor garantidas.

Este es el fruto de las intervenciones de la presidencia en el receso del Congreso que debasta instituciones, como la langosta los campos mejor cultivados.

¿ En qué país bien organizado se ha visto, que solicitada la intervención al sólo objeto del libre funcionamiento del poder legislativo, el interventor nombrado dicta su primer decreto en esta forma : « por razones de mejor servicio, queda separado del cargo de gobernador de la provincia, don L. Adaro, y convócase al pueblo á nueva elección de gobernador » ?

¿ Qué ha hecho el pueblo de esta Capital ; qué los partidos, la opinión pública, los hombres espectables ante un hecho como éste, en el que más que en cualquier otro se mira con repugnancia el ukase de un monarca absoluto, sin freno ni valla que sujete sus desmanes ?

No hay pueblo ; no hay partidos ; no hay opinión pública ; no hay hombres espectables patriotas ; no hay nada : sólo hay un presidente, que vale más que un zar de las Rusias.

Para terminar con este esbozo intervencionista de



última hora, debo mencionar la cuasi-intervención nacional del 19 y 20 de marzo de este año, en Córdoba, en vísperas de la elección de diputados y senadores provinciales.

Conviene exponer previamente los antecedentes de este asunto.

Como á los gobernadores, de cualquier filiación política que sean, les conviene estar bien con el presidente, y máxime en este caso, por ser el gobernador de la docta ciudad, decidido partidario del general Roca, sabedor el doctor José A. Ortiz y Herrera de que el presidente no se encontraba satisfecho de su conducta, por no darle participación en los elementos de la legislatura provincial, le dirigió á éste una carta en la que, para sincerar su adhesión á la política presidencial, le pedía que le indicara las personas de su agrado ó de su amistad para hacerlas elegir (*sic*) senadores y diputados, con motivo de la próxima reintegración de estos cuerpos. En respuesta, el presidente, al mismo tiempo de agradecerle sus manifestaciones de cordialidad y adhesión, le manifestaba que para solucionar la cuestión candidatos, se entendiera con su concuñado, diputado nacional, quien se encontraba en la estación Jesús María. El gobernador, considerándose desairado con esta indicación, por





tratarse de una persona con la que no le ligaba ningún vínculo de amistad, ordenó á sus amigos la inmediata proclamación de la lista íntegra de los del círculo gubernista. Esto aconteció un mes antes del 21 de marzo, fecha de la elección. Comprendiendo el presidente todo lo que pasaba, porque no es práctica en el país hacer proclamaciones con *tanta anticipación*, recogió el guante y dijo : allá veremos.

¡ Á cuántas reflexiones da origen este entredicho ó estas aspiraciones encontradas entre presidente y gobernador, jugando con la voluntad soberana del pueblo cual si se tratara de rebaños ; quitando y poniendo rey como en un tablero de ajedrez !

¿ Cómo resuelve el presidente este problema ?

Decretando una intervención militar : ordenando al general, jefe de la cuarta región militar con asiento en Córdoba, que se apodere de las armas de la nación que posee la provincia el día vispera de la elección y haciendo presentar candidatos de su agrado para la reintegración de las cámaras.

En esta contienda, como acontece en todas las de igual género, no se ha presentado el pueblo con la conciencia de sus derechos y deberes, por más que se dice que hubo lujo de libertad : ha desfilado en dos bandos, según órdenes recibidas, para hacer ho-

nor al *manubrio* de la máquina provincial y al de la gran máquina electoral nacional : ¿ Á quien pertenece el triunfo ? Al gobernador, pero temo la represalia.

Preciso es haber vivido en provincia, para darse cuenta lo que ese retiro de armas significa. En ello se veía la caída inevitable é inmediata del gobernador, y es consiguiente que el presidente considerara descontado el triunfo, fundándose en que con tales actos brotan partidarios, como plantas ante la mirada extática de los fakires.

¿ Porqué no ha descendido del poder el doctor Ortiz y Herrera ?

Por que la excepción hecha por el presidente en este caso y la circunstancia de intervenir en víspera de la elección, ha provocado simpatías de la opinión en favor del gobernador, de las que se ha apercibido el primero.

El gobierno nacional tiene distribuido en las catorce provincias de 80 á 100.000 fusiles mauser y remington, á objeto de garantizar el triunfo de candidatos oficialistas en *elecciones libres*, y lo repugnante del asunto materia del comentario, es el hecho de singularizarse con aquella provincia, dejando á las demás en pie de guerra. Sabido es que después





de la revolución que en Santiago se llevó á cabo el próximo pasado año, en la que tan hábilmente se hizo el muerto el gobernador Santillán, el presidente le mandó varios cajones de armas y municiones.

Preciso es hacer notar la conducta serena y altiva que el gobernador de Córdoba ha usado en este caso, en su telegrama al ministro del interior y en su nota al general Rodríguez (2). Empero, creo que esto mis-

(2) Señor ministro del interior :

« Comunico á V. E. que en virtud de la orden del ministerio de guerra transmitida á este gobierno por el general Rodríguez, comandante de la cuarta región militar, en el día de mañana á las 10 a. m. y á las 2 p. m. en la capital y departamentos de la provincia deberán serle entregadas todas las armas pertenecientes á la nación precisamente en vísperas de las elecciones para la renovación parcial de la legislatura, que habrán de tener lugar el día 21, y precisamente cuando el rumor público pregonara intentonas subversivas.

« Esto, á raíz del hecho ya conocido de haber sido secuestradas por el jefe de policía de esa capital algunas armas que el comerciante de esta plaza, don Tulio Bigi, embarcaba por cuenta de este gobierno, en previsión de la medida tomada por el ministerio de guerra, de lo cual se tenía conocimiento extraoficial.

« Todo lo cual creo de mi deber llevarlo á conocimiento de V. E. por cuanto desde hoy queda este gobierno en imposibilidad de garantizar seguramente el orden en el territorio de la provincia y la seguridad de sus cárceles, sin los medios de defensa á que por la constitución y por la seguridad misma del gobierno está obligado.

« Con este motivo saludo á V. E. con la consideración distinguida.

« José A. Ortiz y Herrera. »

Contestando la notificación del general Rodríguez, el gobernador le dirigió la siguiente nota :



mo será motivo para que la sentencia de su caída se cumpla en hora no lejana. Ojalá que este pronóstico no se cumpla, y en caso de cumplido, descaría que no se continúe adelante en los desmanes.

Cuando la corrupción política en que hoy navegamos á toda vela no habia hecho aún su gran camino; cuando las capitales de provincia no estaban militarizadas, con batallones permanentes del ejér-

«Tengo el agrado de acusar recibo á la nota del 17 del actual, com uni-cándome haber dispuesto proceder al retiro de las armas del gobierno de la nación, á cuyo efecto solicita sean impartidas las órdenes necesarias para que su entrega tenga lugar el día 19 á las 10 a. m. en esta capital y el mismo día á las 2 p. m. en los departamentos.

«No me sorprende la medida tomada por V. S. desde que ella responde á cumplimentar órdenes del ministerio de la guerra, que el mismo señor general comunicó á este gobierno el 10 del corriente de que las armas debían quedar á disposición de V. S. para que las retirara del servicio de la provincia cuando V. S. lo estimara conveniente.

«Habiendo llegado á juicio de V. S., el momento oportuno ó *conveniente*, en las vísperas de que el territorio de la provincia se verá excepcionalmente agitado con motivo de la lucha que se desarrollará en doce departamentos convocados á elección para el domingo 21, y no pudiendo discutir la facultad con que el gobierno de la nación por intermedio de V. S. recoge las armas que son suyas, debo significarle que en esta misma fecha imparto telegráficamente órdenes con el objeto de que aquéllas sean recibidas por los oficiales que V. S. ya ha destacado *estratégicamente*, con una anticipación que demuestra su previsión, en los varios lugares detallados en la nota que contesto.

«Debo dejar constancia, sin embargo, de que el plazo acordado por V. S. es angustioso y que si medita un instante sobre la gran extensión del territorio de la provincia y de cada uno de los departamentos, y especialmente sobre la dificultad de comunicaciones dentro de cada uno de



cito de la Nación como hoy ; cuando aun se tenía concepto del patriotismo y de la honradez cívica ; cuando se practicaban elecciones de verdad luchando los partidos en franca lid, se consideraba un oprobio el envío de tropas de la Nación á las capitales de los estados y aun cuando se les remitía armas, los partidos pro-

ellos, va á hacer imposible la concentración de las armas en los puntos señalados por V. S. á la misma hora de día 19, es decir, 48 horas después de la comunicación.

Debo asimismo dejar constancia de que las armas de la nación que V. S. ha creído conveniente retirar, en este momento sirven para tener armado el piquete del guardia cárceles, que custodia la penitenciaría de esta ciudad con 625 reclusos, y la cárcel de Río IV con cerca de 200 ; para armar la policía móvil, la policía montada que en destacamentos de cinco ó diez hombres como máximo hacen periódicamente el recorrido de la campaña, y varias en ocasiones han salido para hacer respetar y garantizar el orden y la libertad de sufragio en elecciones que, como la de Río IV y en esta capital el año pasado, hacen honor á este gobierno.

Estas armas han servido á las policías rurales dotadas recientemente, y de ellas mismas se sirve el escuadrón de seguridad, cuyos beneficios ha palpado esta ciudad, mereciendo aplauso de la prensa independiente.

En consecuencia, producido el desarme general del gobierno, que nunca se alzó en armas contra el gobierno de la nación, que no ha estado prevenido para este evento, hasta tanto pueda adquirir elementos de seguridad, y para la defensa de los intereses generales, quedará desde hoy á merced de cualquier intentona, imposibilitados de hacer la custodia segura de sus cárceles, ni de reprimir con oportunidad y eficacia movimientos subversivos posibles, que el rumor público pregona.

Todo lo que en esta misma fecha llevo á conocimiento del ministro del interior, para dejar deslindadas las responsabilidades.

Saludo á V. S.

José A. Ortiz y Herrera.

testaban enérgicamente hasta que conseguían el retiro de la tropa ó de las armas, á fin de que el gobernante se impusiera al pueblo por sus propios méritos y por la honradez en sus procederes. Pero en estos benditos tiempos todo marcha al revés, y el que *manda* elige la presa y distribuye el botín, sin que nadie ose levantar su voz en favor de la justicia y en contra de la impudicia.

Es para rememorar estos antecedentes que hago mención de esta cuasi intervención.

Por las razones que anteceden, se ve con toda evidencia que no podemos dejar el recurso de la intervención, recurso supremo, á la discreción y buena ó mala fe del gobernante. Entre nosotros, las intervenciones pasan como cosas de categoría inferior ó asuntos de menor cuantía y sin mayores proyecciones, no obstante ser una de las disposiciones más delicadas y transcendentales en el régimen federal de gobierno.

En 1842, el gobierno de Rhode-Island, restringió el derecho de sufragio, permitido solamente á los propietarios; con este motivo se formó un partido de oposición, el cual, con una elección fuera de los términos legales, constituyó un gobernador, una legislatura y un poder judicial, frente de iguales po-



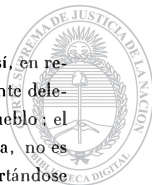


deres. Uno de éstos pidió intervención, y el gobierno federal creyó que no tenía el deber de mandarla y no la mandó. Para solucionar el conflicto, el gobernador que solicitaba la intervención fué á uno de los estados vecinos, sacó de allí tropas, é invadió el estado de Rhode-Island, y entonces fué la intervención (3).

¿Por qué el gobierno no accedió al primer pedido de intervención? Porque es conveniente que los estados, autónomos como son, resuelvan sus cuestiones internas dentro de su mecanismo propio; pues aunque para ésto sea necesario sacrificios dolorosos, los resultados que de esa manera se consiguen, serán siempre más benéficos que los que derivan de un poder extraño á la autonomía local.

Es por demás delicada la facultad de intervenir en la política de los estados, y no es posible mirarla de otro punto de vista, porque de lo contrario, se llega fácilmente al abuso, como acontece entre nosotros; se desvirtúan procedimientos, se corrompen conciencias y se quiebran las más acerasadas voluntades. En consecuencia, el único poder en condiciones de intervenir las provincias es el Congreso, el más alto

(3) *Diario de sesiones* de la Cámara de diputados, discurso del doctor Beracochea.



poder político del Estado, el que reúne en sí, en renovación constante, la soberanía directamente delegada por el supremo mandante, que es el pueblo; el ejecutivo, como su mismo nombre lo indica, no es sino *ejecutor, administrador, gerente*, y apartándose de esta esfera de acción, pisa los umbrales del absolutismo. Así es que la alta dirección del gobierno del país reside en el Congreso, en el cuerpo que delibera y resuelve lo que se ha de hacer, no en el que ejecuta sus mandatos.

Á punto de cerrar este comentario, la opinión pública está conmovida por otro nuevo acontecimiento que no es posible dejarlo de lado, en el propósito de referirme sólo á hechos palpitantes, por lo menos iguales á los anteriormente producidos cuando no peores.

La situación creada por intermedio del senador Puccio en Corrientes, ha resultado ser una mala cosa: el gobernador está en pugna con la legislatura, y se han producido prisiones y secuestros de legisladores. Solicitada la intervención por la mayoría legislativa, el poder ejecutivo ha decretado la intervención (abril 1/4) á objeto á garantizar á este cuerpo el ejercicio de sus funciones constitucionales, nombrando en el mismo decreto, al diputado nacional

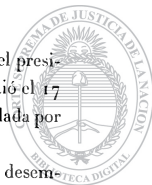
doctor Pedro Olachea y Alcorta, primo del presidente, en calidad de interventor, quien partió el 17 del mismo mes á desenredar la madeja, enredada por obra y gracia de la presidencia.

Según la costumbre establecida, para el desempeño de la misión conferida, al interventor acompaña un coronel del ejército con la tropa necesaria.

En otras ocasiones se nombró anteriormente el interventor y un secretario en estos casos, porque la ostentación de fuerza se consideraba innecesaria, bastando tan sólo la presencia del representante del gobierno de la nación, en la provincia intervenida para la normalidad de la vida del estado, por que á ninguno de los poderes provinciales se le ocurriría la insensatez de atentar en manera alguna contra las decisiones del gobierno federal.

El envío de fuerzas en este caso, nos hace suponer que el fin de esta intervención sea el mismo del escándalo de San Luis, pero conociendo como conozco las condiciones de honradez del doctor Olachea y Alcorta, me resisto á creer que él consuma tal acto.

Queda, pues, demostrado, que la facultad de inter-



venir en las provincias debe ser exclusiva del Congreso é indelegable ; y que en caso de producirse en acontecimientos que la requieran, en época del receso, el Congreso se reunirá á ese solo objeto, por invitación especial é inmediata.





« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

23° Fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y guerra; y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos. »

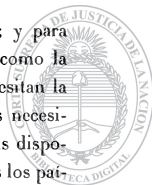
23° Fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y de guerra; y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos. *El ejército permanente de tierra en tiempo de paz será formado por voluntarios enganchados, destinados y conscriptos, en número necesario para guardar las fronteras del territorio y efectuar la conquista pacífica del desierto. Sólo pueden ser conscriptos, los analfabetos de 18 á 25 años. En igual época, el de mar tendrá el personal necesario para el sostenimiento de la escuadra y vigilancia de costas. La marinería, estará constituida por la población marítima de la Nación, comprendidos los mecánicos y obreros de navíos.*

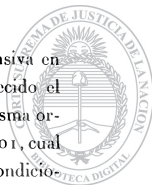
Los pueblos dan forma á sus instituciones conforme á sus necesidades é idiosincracias, adaptados á

los progresos de la época en que viven; y para garantizar estas mismas instituciones, así como la soberanía de su territorio y posesiones, necesitan la fuerza de las armas. Por consiguiente, estas necesidades son diversas: de la misma manera las disposiciones que las rigen, no se adaptan á todos los países, sin pecar de un espíritu inexperienced y rutinario.

Desde que Europa empezó á salir de su estado inorgánico de la edad media para tomar el contorno de un conjunto de pueblos autónomos cual la distingue en la actualidad, pueblos formados por distintas razas, con antagonismos tradicionales, con límites no bien definidos, con tendencias de predominio político entre unos y otros y la constante preocupación de aumentar y mantener su dominio en lejanas comarcas conquistadas en Asia, Africa y América, desde entonces y aprovechando los progresos hechos en el arte de la guerra, las naciones empezaron á dar forma orgánica y metódica al ejército, distinguiéndose aquéllas cuyo antagonismo se ha acentuado con más vigor.

Francia y Alemania han dado la nota más alta en la preocupación de hacer de cada ciudadano un soldado y disponen de un efectivo de más de 500.000 hombres en tiempo de paz. Esta es la verdadera paz





armada de estos países, dispuestos á la ofensiva en cualquier momento. Á este fin han establecido el servicio obligatorio bajo banderas, y esta misma organización hemos tomado nosotros desde 1901, cual si estuviésemos en las mismas ó análogas condiciones á las de aquellos países que, además del estado bélico en que se mantienen, necesitan atender, respectivamente, 10.984.400 kilómetros cuadrados con 50.200.000 habitantes en Asia, Africa y América : 2.596.500 kilómetros cuadrados con 12.500.000 habitantes en Asia y Africa (1).

Entre estos dos países hemos preferido á Alemania y de él hemos copiado no sólo su organización técnica, sino hasta los más insignificantes detalles propios de una monarquía en permanente estado de guerra. En una palabra, sin una Alsacia y Lorena y sin un palmo de tierra distante de nuestro territorio indiscutible y con la bandera del arbitraje desplegada á todos los vientos de la confraternidad internacional, nos hemos *germanizado* en forma que halaga nuestra vanidad de pueblo fuerte y civilizado, cual si estuviésemos abocados á una guerra que no tiene espera.

(1) *Almanach de Gotha*. 1906.



En ésto como en muchas otras cosas estamos pagando tributo al arte de copiar que tanto nos distingue, basados en que éste es un país nuevo y que por sus riquezas debe poseer todos los llamados progresos de la culta, guerrera y conquistadora Europa, pues, en caso contrario, nos consideraríamos en atraso. Con cuánto recelo debemos mirar los regresos de nuestros hombres públicos de Europa, acostumbrados como están á argentinizar prácticas y costumbres vetustas de las monarquías con espíritu y tendencias, medio económico, político, sociológico, geográfico y necesidades muy diversas de las que acusa la hora presente de nuestro pueblo.

La organización militar que hemos adoptado no es para este medio: no lo exige nuestro estado político, social ni geográfico: es como las plantas de invernáculo costosas é inadecuadas.

El servicio militar obligatorio es perjudicial, además de innecesario en nuestro país. Es innecesario, porque, habiendo fijado amistosamente los límites de nuestro territorio, sin antagonismos de raza con los países vecinos, sin ni asomos de guerra fratricida, no necesitamos el efectivo de ejército que costeamos actualmente, ni mucho menos la forma de conscripción que sirve de base para su constitución. El cui-

dado de las fronteras y la conquista del desierto, que es en lo que el ejército debe estar ocupado, requiere la mitad ó una tercera parte del ejército permanente que hoy tenemos. Es perjudicial, porque inmoviliza 15 ó 20.000 hombres del trabajo reproductor, por un período de tiempo en el que serían capaces de producir muchos millones de pesos para engrosar el monto de la riqueza nacional, y además de ésto, ocasionan un enorme gasto, improductivo, del tesoro nacional. El presupuesto de guerra y marina, sin contar los gastos extraordinarios, evidencia esta afirmación, pues, corresponde á una tercera parte del total de gastos de la administración.

Todos los pueblos tienen sus épocas de locura y de sensatez. Nosotros estamos en la primera, porque se nos ha ocurrido que la Argentina debe ser la primera potencia naval y militar de Sud América. En nuestro estado actual, esta pretensión comporta sacrificios muy crecidos, sin provecho positivo alguno : por otra parte, no se llega á satisfacer este lujo de poderío, porque uno lo quiera, pues ello tiene que ser la resultante lógica y natural de una crecida población, de una riqueza superabundante, de orden y juicio en la dirección de la cosa pública, y de instituciones ponderadas conforme á la idiosincracia del





pueblo, y al espíritu nacional en todos los habitantes que viven en el suelo.

Norte América, por ejemplo, sin marina de guerra y sin la organización militar que caracteriza á las principales naciones de Europa, afrontó la guerra con España, y la veterana marina española cedió al empuje irresistible de la improvisada marina yankee. Es que los pueblos, en las condiciones que dejo anotadas, son invencibles, y es la fuerza de un cúmulo de circunstancias y de los acontecimientos que los declara potencias de primer orden para la guerra. Para que Estados Unidos haya llegado á esta altura, era preciso que realizara previamente el portentoso desarrollo de su riqueza, como lo hizo, é identificara al elemento que afluía á sus playas con el alma nacional. Estados Unidos es la primera potencia de América, política y económicamente hablando, porque no puede ser otra cosa.

Cuando he objetado la conscripción, conversando con distinguidos militares del ejército, fundándome en el entorpecimiento que experimenta la juventud estudiosa que representa la cultura y la ilustración del periodo venidero, se me ha contestado que este régimen tiene la alta importancia de ser el mejor método educativo del joven selvático, ineducado y

analfabeto; y que los conscriptos en estas condiciones, regresan á sus hogares, sabiendo leer y escribir y respetar.

Con este motivo, es que propongo la limitación de la conscripción á los analfabetos de 18 á 25 años, y porque creo realmente que el servicio que prestan en las filas del ejército, es tan beneficiosa para éstos como para la Nación. Como el número de éstos tiene que ser, relativamente reducido, él se adapta á poder constituir en unión con voluntarios enganchados y destinados, un ejército de 5 á 6000 hombres, cantidad más que suficiente para el resguardo de nuestras fronteras y el desierto.

El ejército formado con voluntarios, que son aquellas personas escasas de hábitos de trabajo ó sin recursos y los destinados por infracciones á leyes militares, no es una invención de hoy, sino de la larga experiencia de los pueblos. Inglaterra, Norte América y otros países lo tienen establecido desde muchos años atrás y no lo abandonan porque siempre ha dado los mejores resultados: y en nuestro mismo país lo hemos tenido, desde que nos constituimos, con ventajas positivas en todo sentido.

Dejemos á la vieja Europa que extreme su espíritu militar, que los hombres se tornen en máquina de





guerra con ciega obediencia, que extremen sus aprestos bélicos, que sofoquen el grito de libertad de sus colonias y protectorados esquilados por el tributo y entonemos nosotros el canto al trabajo reproductor: extraigamos los frutos de nuestra tierra pródiga sin distraer con motivo de vanas pretensiones, los elementos que fortifican la riqueza y llegará la época no lejana, en que, sin pensarlo, nos llamaremos hijos de una nación rica, fuerte y poderosa, y en una palabra, de las que tendrá la hegemonia sudamericana. Preparémonos para la guerra, poblando nuestro inmenso territorio desierto, abriendo surcos y arrojando la semilla para llenar nuestros graneros y abastecer á Europa pletórica de población: imitemos en ésto á Norte América y seremos respetados dentro y fuera del continente. Esto es lo que nos corresponde en la hora presente, *sin el militarismo regional que hemos copiado literalmente de Alemania*, cual si hubiésemos hecho de propósito para dar el último golpe á la autonomía de los estados.



« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

24° Autorizar la reunión de las milicias de todas las provincias ó parte de ellas cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones ó repeler las invasiones. Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la Nación, dejando á las provincias el nombramiento de sus correspondientes jefes y oficiales y el cuidado de establecer en su respectiva milicia la disciplina prescrita por el Congreso. »

24° Legislar sobre organización, disciplina, armamentos y demás disposiciones pertinentes al ejército. Dictar planos generales de ejercicios militares en las escuelas y colegios de la Nación y polígonos de tiro en éstos y en todos los centros de población de la República. Decretar la reunión de todas las fuerzas de mar y de tierra de la Nación en caso de guerra, en las condiciones que estime más conveniente.

En el artículo cuya reforma propongo se dispone que las milicias de las provincias sean organizadas por el Congreso y que el nombramiento de jefes y oficiales se haga por el gobierno de las mismas.

Esta disposición ha sido dictada en época que no teníamos propiamente ejército, cuando el telégrafo y el ferrocarril eran para nosotros desconocidos, y cuando aun no habíamos salido del caos de la guerra civil. Por consiguiente, era necesario dejar habilitadas á las provincias para cooperar, dentro de sus propios medios, á la defensa de sus instituciones y de su territorio.

Hoy no se toma en cuenta esta disposición, ni los gobiernos de provincia hacen nombramiento alguno de jefes y oficiales de sus milicias, luego, la ley de conscripción que Francia la declaró abolida en su constitución monárquica de 1830, es atentatoria de este artículo constitucional.

Si queremos hacer de cada ciudadano un soldado, con las necesarias nociones para que sea un elemento ponderado en caso de guerra, preparémosle desde la escuela, inoculándole principios de civismo, de altivez ciudadana á la vez que los conocimientos necesarios para la guerra y adiestrándole especialmente en el tiro al blanco.





En las escuelas y colegios de la República es donde, sin interrupción á los demás estudios ú otra dedicación de la actividad futura, es posible hacer el aprendizaje en mejores condiciones que en cualquier otro momento.

Más que la vida de cuartel (tan desprestigiada hoy en Alemania), que el cúmulo de reverencias reglamentarias, ejercicios de marchas, etc., importa saber tirar al blanco, y más que todo tener conciencia de los deberes para con la patria, tener el verdadero concepto del deber ciudadano, conocer la moral cívica, y en una palabra, tener alma nacional. Esto es lo que actualmente no tenemos porque la masa ciudadana está descuidada y el extranjerismo nos está absorbiendo, y es preciso formarla en la edad en que todas las cosas se toman con cariño y por consiguiente, son inolvidables, en la que se ignoran los prejuicios, de tal manera que parecen gravadas en el bronce.

Esto es más beneficioso que la conscripción.

La conscripción no hace soldados ni forma caracteres. Será buena para el analfabeto pero no para el joven educado é instruído. Un soldado que hizo su aprendizaje en la escuela y en los polígonos de tiro, vale por diez soldados sin instrucción escolar ó colegial, salidos de los cuarteles de la conscripción.

Suiza, conforme al artículo 13 de la constitución, no puede tener ejército permanente. La instrucción militar se hace en las escuelas y colegios, acordando premios de estímulo. Cada ciudadano es poseedor del arma y accesorios que la nación le confía (art. 18, constitución): la oficialidad se elige entre los estudiantes de carreras universitarias, y son preferidos para los empleos públicos, con la obligación de dar conferencias del régimen militar. Allí se considera perjudicial la permanencia de oficiales en el ejército, porque, escasos de tiempo para estudios superiores, no progresan, se hacen naturalmente holgazanes y se cristalizan en sus conocimientos rutinarios. Los ciudadanos van todos los domingos á los polígonos de tiro, voluntaria ú obligatoriamente, según las edades. El ejército suizo es tan bien organizado en su simplicidad, que no le va en zaga á ningún ejército de cualquier otra nación, y se explica, porque como el ciudadano no tiene el trabajo forzado de un largo tiempo bajo banderas, cuando son llamados van todos con cariño y con verdadero amor patrio á prestar sus servicios.

Esta es la organización militar que hemos debido imitar, porque ésta se aviene al régimen republicano representativo democrático de nuestro país, á la eco-



nomía en los presupuestos públicos y al aumento de la riqueza nacional, sin distraer elementos útiles dedicados á las diversas industrias, y éste es mi propósito que encierra la reforma que propongo á este artículo.

Norte América mismo que, como dice Carnegie, propiamente no tiene ejército permanente. « El presidente puede llamar á las armas más soldados que ningún otro jefe de estado, pues, en caso de guerra, puede movilizar las milicias que pueden reunir unos siete millones de hombres. ¿Qué son los ejércitos francés, alemán ó ruso, comparados al de la democracia? Y este gran ejército no cuesta un céntimo al Estado, pues, ordinariamente sus individuos se dedican á sus ocupaciones pacíficas y no se movilizan sino en caso de necesidad. »

Este es otro ejemplo palpitante de la reforma que propongo á la organización del ejército de la Nación.







« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

« 26º *Declarar en estado de sitio, uno ó varios puntos de la Nación, en caso de conmoción interior y aprobar ó suspender el estado de sitio, declarado durante su receso, por el poder ejecutivo. »*

Este artículo, entra también entre los que á mi juicio debe ser suprimido, por las mismas razones expuestas con motivo del inciso 23.





« Art. 67. — Corresponde al Congreso :

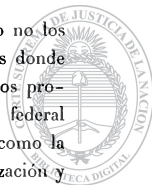
« 27° Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la Nación, y sobre los demás lugares adquiridos por compra ó cesión en cualquiera de las provincias para establecer fortalezas, arsenales, almacenes ú otros establecimientos de utilidad nacional. »

27° Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la Nación y *demás territorios federales, así como* sobre los demás lugares adquiridos por compra ó cesión en cualquiera de las provincias para establecer fortalezas, arsenales, almacenes ú otros establecimientos de utilidad nacional.

La modificación que contiene este artículo es de las que por sí misma se explican. Los territorios federales que hoy tenemos y que están administrados por el gobierno general, no eran tales á la época de

la Constitución, razón por la cual el artículo no los menciona. Según ley de 1862, los territorios donde no hubiere llegado la acción de los gobiernos provinciales, quedaban al amparo del gobierno federal y bajo su jurisdicción. Leyes posteriores, como la de 1884 han sido dictadas para su organización y administración.

Como en el hecho, el Congreso legalizar para estos territorios que no provienen ni por compra ni por cesión propiamente, es conveniente legalizar esa jurisdicción en la forma que lo propongo, hasta que, dentro de los términos constitucionales, sean erigidos en provincias.





« Art. 69. — Aprobado un proyecto de ley por la cámara de su origen, pasa para su discusión á la otra cámara. *Aprobado por ambas pasa al poder ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.* »

Art. 69. — Aprobado un proyecto de ley por la cámara de su origen, pasa para su discusión á la otra cámara. *Si ésta lo aprueba sin observaciones queda convertido en ley.*

Las razones que he tenido para la modificación de este artículo las expongo en los artículos 71 y 72 que siguen á continuación, razón por la que omito los comentarios á éste.



« Art. 71. — Se reputa aprobado por el poder ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. »



La supresión de este artículo es lógica, del punto de vista de la eliminación del veto entre las facultades acordadas al poder ejecutivo nacional; porque sin esta facultad, las sanciones del Congreso son leyes de la Nación.





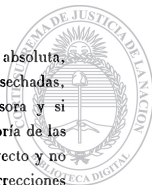
« Art. 70. — Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuere adicionado ó corregido por la cámara revisora, volverá á la de su origen; y si en ésta se aprobasen las adiciones ó correcciones por mayoría absoluta, *pasará al poder ejecutivo de la Nación*. Si las adiciones ó correcciones fuesen desechadas, volverá segunda vez el proyecto á la cámara revisora y si aquí fueren nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, pasará el proyecto y no se atenderá que ésta reprueba dichas adiciones ó correcciones si no concurre para ello el veto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. »

Art. 71. — Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese adicionado ó corregido por la cámara revisora, volverá á la de su origen; y si en ésta se

aprobasen las adiciones ó correcciones por mayoría absoluta, *quedará convertido en ley*. Si las adiciones fuesen desechadas, volverá segunda vez el proyecto á la cámara revisora y si aquí fueren nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, pasará el proyecto y no se atenderá que ésta reprueba dichas adiciones ó correcciones sino concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

La reforma de este artículo se reduce á la supresión de la parte que dice : « pasará al poder ejecutivo de la Nación ».

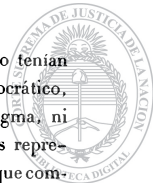
Esta disposición es con el objeto de que el poder ejecutivo ponga el « cúmplase » ó el veto á lo sancionado por las cámaras. Empero, como, conforme al estudio del artículo 72, la facultad de vetar las sanciones del Congreso queda suprimida, la necesidad de que una ley sea promulgada por el poder ejecutivo no tiene razón de ser. La facultad de aprobar es correlativa de desechar, y negándose lo segundo, queda de hecho abrogada la primera : quien no puede desechar, no puede aprobar.





« Art. 72. — Desechado en todo ó en parte un proyecto por el poder ejecutivo, vuelve con sus objeciones á la cámara de su origen : ésta lo discute de nuevo y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez á la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría el proyecto es ley y pasa al poder ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí, por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del poder ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año. »

Propongo la supresión de este artículo porque él no entra en el molde de las democracias representativas. Infiltrado está en nuestra constitución, porque los constituyentes tuvieron el deliberado propósito



de constituir un presidente rey, ó porque no tenían el verdadero concepto del gobierno democrático, concepto que hasta hoy veo que es un enigma, ni pusieron mientes en el linde de los poderes representativos de la soberanía popular y del rol que compete á cada uno de ellos en la armazón que se llama gobierno democrático.

Entre las múltiples atribuciones inadecuadas del poder ejecutivo, encuéntrase la facultad de vetar las leyes sancionadas por el Congreso.

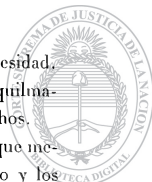
En su origen el veto sirvió como arma de defensa del pueblo, contra las deliberaciones abusivas del senado romano constituido por patricios; lo ejercitaban tribunos ó magistrados plebeyos (493 antes de Cristo). Su institución marca un progreso para su época, porque ello importaba delegar una parte importante de soberanía en favor de los dos heredados de derechos políticos. *Yo me opongo ó yo prohibo*, son frases sinónimas que hoy implican superioridad de quien las aplica sobre el cuerpo que las acata; y desde que el segundo pueblo, ó sea la última clase social romana, no tenía parte en la deliberación de la cosa pública, justo era acordarle esta facultad á guisa de último baluarte levantado en defensa de sus intereses vulnerados. Como es consiguiente, esta facul-

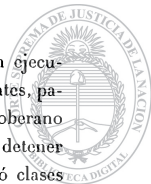
tad era ejercitada sólo en casos de extrema necesidad, cuando el pueblo se encontraba realmente esquilma-
do por el tributo ó vilipendiado en sus derechos.

Esta facultad no siguió el proceso social que media entre la desaparición del poderío romano y los tiempos modernos, porque en ese largo periodo de la edad media, no existía sino el *señor* laico ó eclesiástico, dueño absoluto de sus siervos: lo que hoy llamamos pueblo, propiamente no existía. El pobre, el industrial, el labrador ó siervo no tenía voz ni voto, porque no tenía sobre qué deliberar, nada le pertenecía.

En los tiempos modernos resurge esta facultad y vemos que en Polonia (1562), cualquier miembro de la cámara baja con su *veto* ó *sisto activitatem*, podía detener las deliberaciones de la dieta y hasta disolverla, facultad que más tarde fué suprimida á consecuencia de la anarquía permanente que produjo su abuso.

Posteriormente, todas las monarquías europeas inscribieron en sus constituciones esta facultad acordada á los monarcas. Constituido el gobierno á base de la nobleza y del clero, « quienes tienen gran interés en conservar sus prerrogativas, por sí mismo odiosas », y no pudiendo el pueblo tomar directa-





mente resoluciones activas y que demanden ejecución, sino en forma de elegir sus representantes, parece que el monarca, que es el verdadero soberano de la Nación se adjudicó esa facultad para detener los avances del parlamento sobre el pueblo ó clases laboriosas, ó sea para salvaguardar el imperio de su soberanía.

De todos modos, desde que el monarca es el único soberano de la Nación, inviolable é irresponsable, la facultad de veto le pertenece por derecho propio.

Montesquieu (1), es el primero y quizá el único que ha estudiado la facultad de veto, inscrita en el régimen monárquico, y dice : « Como es necesario que el monarca tome parte en la legislación para defenderse, es menester que lo haga por medio de la facultad de *impedir*. El poder ejecutivo no haciendo parte del legislativo sino por esta facultad, él no debe tomar parte en los debates legislativos. No es necesario que él proponga, porque, pudiendo siempre desaprobare las resoluciones, puede rechazar las decisiones de las proposiciones que no le parecieren de su agrado. »

La práctica constitucional de Estados Unidos

(1) *L'esprit de lois*, libro VI, cap. VI, ed. de 1788.

(N. A.) es conforme á estas ideas. El poder ejecutivo no presenta proyectos á las cámaras ni envía sus ministros á tomar parte en los debates, y tiene la facultad de veto suspensivo solamente.

Nosotros hemos tomado de aquella constitución la facultad de veto del ejecutivo, pero le hemos agregado la condición de colegislador. De manera que el poder ejecutivo nacional tiene facultades propias de la monarquía puesto que toma parte en los debates legislativos por medio de sus ministros, conforme al artículo 86, inciso 4° y al 92 de la constitución, y veta su propia obra.

Explicable es que el monarca, llámese rey, emperador ó zar, ponga el veto á una sanción del parlamento, del que la alta Cámara es hechura del soberano y la baja existe por su voluntad, sobre un asunto en el que no han prevalecido sus ideas, pero ese *yo me opongo* de una voluntad prevalente, no encuadra en el régimen de una verdadera democracia representativa, no se amolda á los principios que rigen el gobierno de sí mismo, porque en este sistema no hay otro *yo* que el de la soberana voluntad popular cuyos poderes ha delegado.

Los tres poderes que constituyen nuestro régimen de gobierno tienen funciones propias, independien-



tes entre sí, y no es posible acordar supremacías del poder ejecutivo sobre las decisiones del que dicta las leyes y fija rumbos á la dirección de la cosa pública, en cuales leyes el ejecutivo toma también la parte que le corresponde en el debate de los asuntos que las motiva.

En todo caso, el único habilitado para oponer el veto á las sanciones del Congreso debería ser el pueblo, único soberano de la nación, pero como éste no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, no puede haber autoridad que haga uso de esta facultad.

Si tuviésemos como en Europa la división de clases, el gobierno de la nobleza ó sea la neta monarquía, las observaciones que hago no tendrían razón de ser ; pero, como pretendemos vivir en república, ellas son de todo punto justificadas.

En Inglaterra, cuyas instituciones han servido de base á Estados Unidos, por lo cual su constitución es una mezcla de principios republicanos y monárquicos, el rey es el soberano y su vasallo el pueblo ; es irresponsable ante los hombres y sus leyes, y los demás poderes y autoridades, unas en el hecho y otras por derecho, son sus subalternos, representan delegaciones de su poder omnímodo, y se comprende

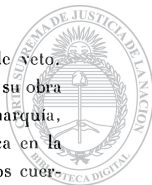


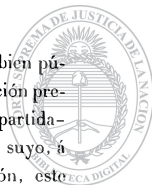
que en tales condiciones tenga la facultad de veto. Se comprende también que Montesquieu, en su obra y capítulo citado, influenciado por la monarquía, porque en su época no conoció la república en la forma que hoy la auspiciamos, dijera : « Los cuerpos legislativos no deben tener la facultad de juzgar la persona que desempeña el poder ejecutivo, y por consiguiente, la conducta del que ejecuta sus deliberaciones. Su persona debe ser sagrada, porque siendo necesaria al estado para que el cuerpo legislativo no se haga tiránico, desde el momento en que él fuese juzgado ó acusado, no habría más libertad.

Como dice muy bien Tiffany (1), la facultad de veto no tiene una justa aplicacion en el gobierno general de Estados Unidos, por la forma democrática en que está constituido. « El ejecutivo no ha menester protección contra las usurpaciones de la autoridad legislativa. Todos están igualmente interesados en la preservación del conveniente equilibrio, y pueden preservarlo eficazmente sin el poder de veto del presidente. »

« Un presidente sabio, discreto y prudente raras veces ejercerá este poder. El caso debe ser tal, que

(1) *Gobierno y derecho constitucional*, páginas 175 á 182.





el error del Congreso esté patente, y que el bien público demande imperativamente la interposición presidencial. Pero en manos de un presidente partidario, ó que tenga concebido un plan político suyo, á cuyo triunfo dedique su poder y protección, este veto es un poder perjudicial y peligroso, y bien puede cuestionarse si el interés público no ha sufrido más que ganado con su ejercicio.

«Las razones que aconsejan que el rey de Inglaterra tenga el poder de veto absoluto sobre las *leyes propuestas* del parlamento, no tienen una justa aplicación al gobierno general de los Estados Unidos, ordenado, establecido y administrado por el pueblo mismo. En Inglaterra el rey es una rama esencial del departamento legislativo y ni es elegido ni responsable ante el pueblo. La ley le asigna el atributo de soberanía ó preeminencia. Se dice que tiene dignidad imperial; y en constituciones anteriores á la conquista, es con frecuencia llamado *basileus é imperator* títulos respectivos de los emperadores de oriente y occidente.

«Él es el declarado *jefe supremo* del reino en los asuntos civiles y eclesiásticos, y de consiguiente, no inferior á hombre nacido sobre la tierra, no dependiente de nadie, ni responsable ante nadie.



« Además de este atributo de soberanía, la ley atribuye al rey absoluta perfección en su carácter político. El rey no puede errar: es decir, todo lo que merezca reparos en la dirección de los negocios públicos, no debe imputarse al rey, ni es por ello responsable personalmente á su pueblo.

« En teoría, reina por derecho divino: *Dei gratia*, no *populi gratia*; y tal es también la teoría de sus responsabilidades. El gobierno es suyo, el pueblo se compone de sus súbditos: el estilo real es, *mi reino, mis súbditos, mis vasallos*, etc.

« Este es el principio y la filosofía del poder de veto que existe en la constitución británica. »

Así es que la facultad de veto acordada por nuestra Constitución al poder ejecutivo, además de declararlo poder colegislador, no se adapta á nuestro organismo político porque es propio de los ejecutivos irresponsables, de los monarcas. soberanos *per vitam*.

En 1857, el presidente Urquiza vetó siete leyes sancionadas por el Congreso y entre ellas estaba comprendida la ley electoral, según la cual se prohibía la inscripción en el registro cívico y el voto á los soldados, cabos y sargentos de tropa de línea, y el Congreso cedió á esta imposición.



El presidente actual vetó el año próximo pasado una ley sobre pensiones, en la cual estaban comprendidos deudos de guerreros de la independencia y en las sesiones inmediatas pasó una nota al Congreso retirando el veto recaído sobre éstos.

Estos simples antecedentes, demuestran que esta facultad no ha sido ejercitada con acierto entre nosotros y no podrá serlo, por la sencilla razón de que es más fácil que se equivoque una sólo persona que ciento cincuenta congresales.

Por consiguiente, es necesario suprimir la facultad de veto de nuestro código fundamental, rindiendo culto á un principio de la más sana democracia del gobierno libre.

La atribución de colegislador del poder ejecutivo la considero conveniente, por cuanto en la práctica diaria del manejo de los intereses nacionales, está perfectamente habilitado para iniciar proyectos tendientes á la mejor administración y al progreso del país y llevar al seno de las cámaras la palabra experimentada y eficaz de sus colaboradores, los ministros.



« Art. 75. — En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia ó destitución del Presidente, el poder ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión, ó inhabilidad del Presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la causa de inhabilidad ó un nuevo Presidente sea electo. »

Art. 75. — En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, renuncia ó destitución del Presidente, el poder ejecutivo será ejercido por el vicepresidente *primero*, y *en defecto de éste, por el vicepresidente segundo de la Nación*. En caso de destitución, muerte, dimisión ó inhabilidad del Presidente y vicepresidente *primero y segundo* de la Nación, *el poder ejecutivo será desempeñado en primer lugar por el presidente del Senado y en segundo por el presidente de la Cámara de dipu-*

tados, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad, ó un nuevo presidente y vicepresidente primero y segundo sean electos, á cuyo efecto se convocará á elección dentro de los diez días siguientes al de la asunción del mando.

La reforma de este artículo consiste en el establecimiento de dos vicepresidentes de la Nación, en vez de uno.

La razón de esta modificación es obvia. Habiendo tres ciudadanos elegidos directamente por el pueblo de las provincias, territorios nacionales y capital federal, hay mayores probabilidades de que el período para el que han sido designados, pueda ser terminado con mayor regularidad y eficacia que con dos.

En el caso actual, en el que habiendo fallecido el Presidente y en desempeño de la presidencia se encuentra el vicepresidente, la situación política del país puede llegar á ser angustiosa, si el Senado, cuya mayoría es adversa á la política presidencial, quisiera resolver la cuestión del próximo período administrativo en favor de personas de su credo político, viniendo á ser él, el verdadero elector. La simple mayoría de este cuerpo, reunido un mes antes de finalizadas las sesiones ordinarias, elige su presidente para el receso, á los efectos de la acefalía de la presidencia de la Nación. Evidente es la inconve-





niencia que puede resultar de la presidencia en un cuerpo político que está en pugna con el Presidente de la Nación: tanto más cuanto que este mismo cuerpo es juez único de los actos del Presidente. Es, pues, á todas luces, necesario alejar lo más posible la realización de que el presidente del Senado, ó en defecto de éste, el de la Cámara de diputados, ocupe la presidencia de la República, porque de esta manera el funcionamiento regular y armónico de estos dos poderes, ejecutivo y legislativo, seguirá el curso normal de los propios deberes de cada uno. Este es el bien que haría la existencia de dos vicepresidentes en vez de uno solo. El hecho de la acefalia es así más remoto que con las disposiciones vigentes.

Por otra parte, no veo ningún inconveniente en la administración de la cosa pública ni en los horizontes de la política con la adopción del segundo vicepresidente.

La Constitución de las Repúblicas del Perú y de Bolivia son las únicas que contienen la disposición de las dos vicepresidencias, no encontrándose otro antecedente al respecto.

El general Victorica hizome notar la importancia de esta cuestión y por considerarla justificada la acepté tal cual la presento.





« Art. 76. — Para ser elegido presidente ó vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, ó ser hijo de ciudadano nativo, haber nacido en país extranjero, *pertenecer á la comunión católica, apostólica, romana* y las demás calidades exigidas para ser senador. »

Art. 76. — Para ser elegido presidente ó vicepresidente *primero y segundo* de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, ó ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. *Son inelegibles como presidente ó vice los parientes dentro del primer grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente ó vice en ejercicio.*

La reforma capital que propongo á este artículo, es la supresión de la condición de pertenecer á la comunión católica, apostólica, romana, porque considero que el ciudadano que profesa esta religión, no



es más sabio, más honrado, más patriota, y en general, más apto para dirigir los destinos de este país, que otro ciudadano de cualquier otra religión ó secta. En una palabra, ninguna religión es condición de competencia ni de honorabilidad.

¿ Por qué nuestros constituyentes no imitaron en esta parte la constitución norteamericana, cuando en casi todos de sus estipulaciones hemos calcado la que nos rige ?

Por qué, menos prácticos que los constituyentes de aquella república y con creencias basadas en un solo principio religioso, aportado por los conquistadores de Sud América, desde la primera hora, no nos fué dado variar de pensamiento y la condición fué establecida.

En los debates del 53, hubo convencionales que decían que la libertad de cultos era contraria al derecho natural, y hasta se proyectó un artículo concebido en estos términos : « Para obtener empleo alguno civil en la Confederación Argentina, se necesita que el individuo profese y ejerza el culto católico, apostólico, romano. »

El diputado, sacerdote Lavaisse, quien pensaba que « sin daño de la religión ni menoscabo de los principios constitucionales, podía conciliarse muy

bien la fe en el dogma con el amor á la patria, la austeridad del sacerdote con las libertades del hombre, los deberes de la religión con los del ciudadano, refundidos en la moral y en la ley », manifestó estar en oposición á ese artículo. Que aceptaba de él la parte referente al gobernante y altos funcionarios del estado « por razón de la intervención que la misma Constitución les da en la celebración de concordatos, mantenimiento de cultos y protección de la iglesia por el derecho de patronato » : que consecuentemente, este criterio no podía ser aplicado á los empleados inferiores ; que se oponía también á que se dijese « profese y ejerza, pues esto era dar lugar á indagaciones odiosas, para cerciorarse acerca de las verdaderas creencias del individuo, las que sólo Dios alcanza á penetrar » : y terminó modificando el artículo propuesto en esta forma : « Los altos funcionarios que componen el gobierno federal de la República, han de pertenecer á la comunión, católica, apostólica, romana. »

Entre los diversos argumentos que se hicieron en contra del artículo propuesto, el convencional Zapata, aparte de otros fundamentos, expuso la inconveniencia del artículo, porque « concediéndose el voto activo á los ciudadanos, cualquiera que fuesen



sus creencias religiosas, no se podía privarles del pasivo sin una infracción del derecho natural, como sucedería si se les privase de representar á sus con ciudadanos ».

Agotada la discusión, fué rechazado el artículo en las dos formas propuestas.

En la discusión del artículo 43 (47 de la Constitución vigente), el diputado Zenteno, religioso ultramontano, volvió á la carga, haciendo moción para que entre las condiciones exigidas para ser senador, se incluyera la de pertenecer á la religión católica, apostólica, romana, y fué nuevamente derrotado.

Puesto en discusión el artículo 73 de la comisión, correspondiente al 76, cuya reforma propongo, el diputado Lavaisse, consecuente con sus ideas, dijo, que entre las condiciones necesarias para ser presidente y vicepresidente, debía establecerse « la de pertenecer á la comunión católica, apostólica, romana, fundándose en la atribución 8ª del artículo 83 (8ª del 86 que rige) del proyecto de constitución, que « concede al ejecutivo los derechos de patronato nacional, la celebración de concordatos, de pase de bulas, breves, rescriptos del sumo pontífice ». Agregó, *que no creía que tal ó cual creencia fuese un requisito indispensable en el gobernante, sino que conviene*



más al país, que el que lo gobierne profese su misma religión ».

Esta adición fué aceptada y quedó el artículo en las condiciones del que actualmente rige.

Estos son los principales antecedentes de la convención del 53, relativos á este artículo, y de ellos se desprende que la condición cuya supresión indico, fué establecida como lógica consecuencia de las disposiciones á que se refería el convencional Lavaisse, sin que ésto importara para él una condición *sine qua non*; y téngase presente que ésta era la palabra de un sacerdote virtuoso, á la vez que patriota y austero ciudadano.

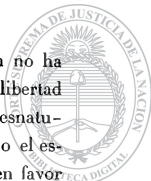
Además de los antecedentes mencionados, conviene hacer notar que la condición de pertenecer al culto católico, apostólico, romano para poder ser elegido presidente es contraria á la libertad de cultos, porque obliga á los ciudadanos de otras religiones á dar su voto solamente por ciudadanos católicos.

Consecuente con la reforma que propongo al artículo 2º, y la supresión de los incisos 8º y 9º del artículo 86, la condición de pertenecer á una determinada religión, debe ser excluida de la Constitución.



Es conveniente no olvidar que la religión no ha realizado conquistas políticas favorables á la libertad para que persistamos en una hibridez que desnaturaliza la eficiencia del gobierno libre. Cuando el espíritu liberal de los pueblos se hacía sentir en favor de la abolición de la esclavitud, el cristianismo formaba en las filas contrarias á esta gran conquista; y mientras la *servidumbre* desaparecía más tarde en todas partes, los obispos y prelados se obstinaban en hacer uso del *jus primae noctis*.

Dejemos á la religión que siga su camino como las demás, en entera libertad, dirigiendo la conciencia privada de las personas, y establezcamos que el hombre, no importa á que religión pertenezca, siempre que tenga condiciones de honorabilidad y competencia, es apto para desempeñar la presidencia de la República.





« Art. 77. — El presidente y vicepresidente duran en sus empleos el término de seis años; y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un período. »

Art. 77. — El presidente y vicepresidentes *primero y segundo* duran seis años en el ejercicio de sus *funciones*; y no pueden ser reelegidos, *ni alternando los cargos*, sino con intervalo de un período.

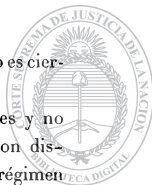
Esta reforma es consecuencia lógica de la que propongo en el artículo 75, respecto á la creación de un segundo vicepresidente.

Respecto á la no reelección, introduzco también la reforma conveniente de que un vicepresidente, primero ó segundo no puede ser presidente y viceversa; y he creído conveniente hacer esta proposición, porque ya ha llegado el caso entre nosotros que el vicepresidente de la República se haya presentado

como candidato á la presidencia, aun cuando es cierto que no llegó al fin de la jornada.

Las reelecciones son siempre perjudiciales y no deben ser admitidas en estos casos porque son disposiciones que no entran en el cuadro del régimen democrático de verdad, en el cual no sólo no hay hombres indispensables, sino que la rotación de los hombres, desde que el gobierno es de todos y para todos, debe practicarse, conforme á este principio, en la sucesión de los tiempos.

Las otras modificaciones son de forma.





« Art. 79. — El presidente y vicepresidente disfrutarán de un sueldo pagado por el tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna. »

Art. 79. — El presidente y vicepresidentes *primero y segundo* disfrutarán de un sueldo pagado por el tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Nación ni de provincia alguna.

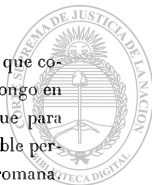
Esta reforma se explica por el artículo 75, por consistir ella en sólo el agregado de la vicepresidencia segunda de la República.





« Art. 80. — Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente, prestarán juramento en manos del presidente del Senado *(la primera vez del presidente del Congreso constituyente)*, estando reunido el Congreso, en los términos siguientes : « Yo N. N., *juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios*, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente ó vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. *Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden.* »

Art. 80. — Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidentes *primero y segundo*, ante la asamblea legislativa presidida por el presidente del Senado, harán la afirmación siguiente : « Yo N. N., presidente (ó vice primero ó segundo) de la Nación Argentina, *prometo solemnemente cumplir la Constitución y las leyes de la Nación ; y velar por la integridad de su territorio y el mantenimiento de su soberanía.* »



Esta reforma es lógica consecuencia de la que corresponde á los comentarios de la que propongo en el artículo 76, respecto á la condición de que para ser presidente de la República es indispensable pertenecer á la comunión católica, apostólica, romana. Si conforme á la reforma se suprime esta condición, el juramento no tiene razón de ser porque el presidente puede pertenecer á cualquier otro credo político y no sería dable obligarle á prestar el juramento estatuido en la Constitución vigente para recibirse del cargo.

¿Qué es el juramento? Un compromiso, una afirmación de hacer ó no hacer tal ó cual cosa; y cuando este acto es político, como en este caso, el juramento es más válido cuando se dice «juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios...» que en el caso de decir: prometo solemnemente?

No es posible hacer esta afirmación, porque en la práctica hemos visto que, con excepción de uno solo, todos han jurado en falso, y la prueba más evidente es que el pueblo no puede votar, y que el presidente que viene es hechura del que va.

La parte final del juramento vigente dice: «Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden.»

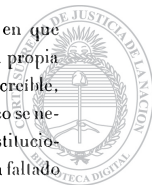
Eso de «Dios me lo demande», es cuestión de

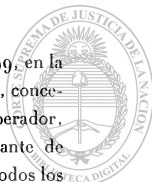
conciencia inadaptada á la época presente, en que las conciencias han adquirido una elasticidad propia de la expansión de los gases, rayana en lo increíble, y lo de « la Nación me lo demande », tampoco se necesita expresarlo, porque hay artículos constitucionales que dicen, que cuando el presidente ha faltado á sus deberes, la Cámara de diputados le iniciará juicio político y el Senado fallará sobre él como juez.

La fórmula del juramento que rige no se adapta á nuestros progresos políticos y sociales: ella ha nacido en el paganismo, en los organismos supersticiosos, en la barbarie que necesitaba testigos invisibles pero poderosos para afirmar los compromisos contraidos. Al presente nos encontramos muy civilizados para creer que sin el juramento, nuestros procedimientos han de ser diversos de los que nos corresponde afianzados en él.

En la edad media, época en que era sanción del derecho público, la prevalencia del poder espiritual sobre el poder temporal, es cuando se afianzó con más vigor el juramento religioso, de tal manera que nadie era consagrado emperador, si no prestaba *juramento de fidelidad* prometiendo defender los intereses de la Santa Sede.

El primero de estos juramentos que conserva la





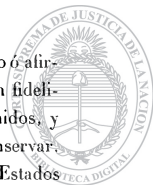
historia es el que prestó Carlomagno en 799, en la basílica de San Pedro, ante el papa León III, concedido en estos términos : « Yo Carlos, emperador, prometo, en nombre de Jesu-Cristo, delante de Dios y de San Pedro, proteger y defender todos los intereses de la Iglesia Romana tanto como sabré y podré hacerlo, con el recurso de Dios. »

En el sacramento del vaticano del siglo ix, se registra esta fórmula de juramento : « Yo, N., N., rey de los Romanos, por la gracia de Dios futuro Emperador, prometo y juro, delante de Dios y de San Pedro, ser en adelante protector y defensor del soberano pontífice y de la Santa Iglesia Romana, en todas sus necesidades, guardando y conservando sus posesiones, sus honores y sus derechos, tanto como sabré y podré, con el socorro de Dios, en pura y buena fe. Que así Dios me ayude y los Santos Evangelios ».

Podría decir que este es el punto de partida del juramento reglamentario inscripto en las constituciones monárquicas, el que, con algunas variantes ha llegado hasta nosotros.

Las monarquías lo conservarán hasta que el socialismo las transforme en repúblicas.

Estados Unidos es la primera república que, apar-



tándose de las viejas prácticas, dice : « juro o afirmo (1) solemnemente que desempeñaré con fidelidad el cargo de presidente de los Estados Unidos, y que emplearé mis mejores medios en conservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos », sin traerlo en asuntos humanos y públicos, á Dios ni á los santos evangelios, asuntos propios de la conciencia privada, ajenos á la sanción política.

La Constitución de Bélgica de 1831, no obstante ser monárquica, tiene establecida la más amplia libertad de cultos, porque no tiene como Inglaterra, Alemania y Rusia, etc., religión propia y el juramento del rey, es el siguiente : « Juro observar la Constitución y las leyes del pueblo belga, conservar la independencia nacional y la integridad del territorio. »

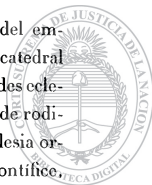
Rusia, en pleno dominio de la monarquía absoluta, y por consiguiente de atraso en materia de instituciones, tiene establecido el juramento, en las condiciones de una cuestión fundamental, y él debe ser prestado por todos los súbditos, desde la edad de doce años y se presta en las catedrales, monaste-

(1) De esta expresión hacen uso los cuáqueros, porque éstos no juran.

rios é iglesias parroquiales: y el juramento del emperador es asunto de gran solemnidad en la catedral de Moscou, en presencia de todas las dignidades eclesiásticas y políticas: revestido de púrpura y de rodillas, dirigiéndose al soberano Señor de la iglesia ortodoxa greco-rusa, de la cual es soberano pontífice, dice: «que Dios quiera aclararme, instruirme y guiarme en mi importante misión de zar y juez del imperio de todas las Rusias, que la alta sabiduría que es el atributo de la divinidad me asista, que mi corazón esté en la mano de Dios, que toda cosa concurra á la ventaja de los pueblos que me están confiados y á la gloria de Dios, y en fin que me sea dado obtener en el día del juicio una palabra favorable ».

En frente de este símbolo de atraso, propio de las primeras edades, justo es colocar el juramento de la Constitución del Brasil, la más adelantada de las que registran las instituciones de las naciones; dice así: «Yo prometo mantener y ejecutar con perfecta legalidad la Constitución federal, promover el bien general de la República, observar sus leyes, sostener la unión, la integridad y la independencía.»

¿Es dable creer que el zar de las Rusias va á ordenar mayor ó menor número de ejecuciones de sus





súbditos con ó sin el juramento prestado en la forma que lo hace?

Absolutamente, el juramento no le afecta en ningún sentido: él está empecinado en el absolutismo de su poder y en que el pueblo debe estar sojuzgado como vil esclavo á su exclusiva voluntad, sin ni asomos de la libertad que en otros países goza.

Con y sin el juramento, el zar será lo que es y nuestros presidentes lo mismo, siempre que estemos adheridos al viejo molde: eso de traerlo á colación á Dios como testigo, para faltar al juramento, como acontece á diario, no es serio y por lo tanto, el acto de la asunción del cargo de presidente, solemne en sí mismo, es suficiente garantizarlo con la afirmación de fiel cumplimiento de los deberes del cargo, tal cual lo propongo. El hombre para quien la honradez y la moralidad de sus acciones son un alto culto, no necesita del juramento para hacer honor á sus virtudes: y en cambio, el ciudadano dispuesto para el abuso y obcecado en él, con ó sin la forma del juramento, será siempre un mal presidente.





« Art. 81. — La elección del presidente y vicepresidente de la Nación se hará del modo siguiente :

« La Capital y cada una de las provincias nombrarán por votación directa, una junta de electores, igual al duplo del total de diputados y senadores que envían al Congreso, con las mismas calidades y bajo las mismas formas prescriptas para la elección de diputados.

« No pueden ser electores los diputados, los senadores, ni los empleados á sueldo del Gobierno federal.

« Reunidos los electores en la Capital de la Nación y en la de sus provincias respectivas, cuatro meses antes de que concluya el término del Presidente cesante, procederán á elegir presidente y vicepresidente de la Nación por cédulas firmadas, expresando en una la persona por quien votan para presidente y en otra distinta la que eligen para vicepresidente.

« Se harán dos listas de todos los individuos electos para presidente y

otras dos listas de los nombrados para vicepresidente, con el número de votos que cada uno de ellos hubiere obtenido. Estas listas serán firmadas por los electores y se remitirán cerradas y selladas dos de ellas (una de cada clase) al presidente de la legislatura provincial y en la Capital al presidente de la municipalidad, en cuyos registros permanecerán depositadas y cerradas; y las otras dos al presidente del Senado (la primera vez al presidente del Congreso constituyente). »

Art. 81. — La elección del presidente y vicepresidentes primero y segundo de la Nación, se practicará directamente por el pueblo de la República, seis meses antes de la expiración del término del presidente cesante.

La capital federal, las provincias y los territorios nacionales, conforme á la clasificación establecida en el artículo 37, formarán distritos electorales, de manera que cada uno tenga un solo voto para cada cargo, que será el que resulte de la simple mayoría de los sufragantes dentro del sistema proporcional, de tal manera que las tres mayores unidades de votantes, en orden decreciente respondan al presidente y vicepresidentes primero y segundo.

Como se ve, la reforma que propongo á este artículo es fundamental; y he preferido el cambio de sistema, protestando estar inspirado en el propósito

de que el fruto de esta elección sea el genuino exponente de la voluntad popular, sin delegaciones que desvirtúen su esencia.

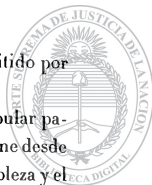
¿Qué razón hay para que el pueblo delegue en un determinado número de personas su facultad de designar los ciudadanos que han de regir sus destinos, cuando puede y debe hacerlo directamente?

Se delega una facultad cuando no es posible ejercerla personalmente; cuando concurren circunstancias que impiden hacer uso de ella convenientemente. Pero hay facultades que son indelegables, porque son eminentemente personales y entre ellas está la del voto. Estatuir que el pueblo ha de concurrir al comicio para emitir el voto en favor de un limitado número de personas para que éstas hagan lo que él debe hacer, es, más que una anormalidad, una impropiedad, un falseamiento de la verdad del sufragio.

El ciudadano, cuando vota, no sólo ejerce un derecho, sino que al mismo tiempo cumple con un deber impuesto por la mancomunidad de intereses políticos, económicos y sociales.

Evidente es que hay más facilidad en inclinar la voluntad de unos cuantos electores en favor de combinaciones políticas no siempre saludables para los



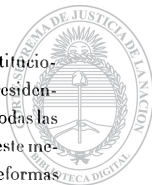


intereses generales, que el voto directo emitido por el pueblo de la República en urnas libres.

El sistema de electores por delegación popular para la designación del primer mandatario viene desde los primeros tiempos de los pueblos. La nobleza y el clero son quienes eligen, así como en la edad media, desde el siglo iv, los reyes son elegidos en asambleas constituidas por los obispos y señores. « Así procedían los visigodos en España ; los anglosajones en la Gran Bretaña : Francia en la primera y segunda raza de sus reyes, y especialmente en Germania ». En aquellas épocas el pueblo no pasa de ser un simple espectador como acontece aun entre nosotros. « En el concilio celebrado en 787, en Calcut, en Inglaterra y en el canon XII declara que los reyes, para ser legítimos, deben ser elegidos por los obispos y los señores » (1). Aquí están los orígenes del sistema de electores de presidente que tenemos en nuestra constitución, al simple objeto de que el soberano de la nación que es el pueblo, no elija en verdad el mandatario que ha de regir sus destinos.

Necesario es poner á contribución la más acriso-

(1) *In ordinatione regum, nullus permittat pravorum prevalere assensum ; sed legitime reges á sacerdotibus et senioribus populi eligantur. Pouvoir du Pape sur les souverains au Moyen áge, par M***, ed. 1839.*



lada buena fe y los más sanos principios institucionales para arrancar de cuajo el sistema de presidentes y gobernadores electores que corrompen todas las conciencias y vulneran todos los derechos, y este medio, de la elección directa, unido á las demás reformas que propongo, resuelven, á mi manera de entender, el problema de la soberana voluntad popular.

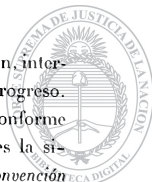
Las repúblicas de Venezuela (art. 63), Ecuador (58), Perú (80), Bolivia (38) y Brasil (47) „tienen establecido en sus respectivas constituciones, el voto directo para la elección presidencial y nada obsta para que nosotros lo instituyamos también.

El doctor Augusto Montes de Oca, en su importante obra de derecho constitucional (1), refiriéndose á Estados Unidos, nos demuestra con numerosos ejemplos, la exaltación de presidentes elegidos por minorías populares: y si no presenta ejemplos argentinos de la misma indole, no obstante haber copiado de aquella república la forma indirecta de la elección, es porque en nuestro país todas las elecciones son *canónicas* — las hacen los jueces de paz, comisarios y comandantes del gobernador — triunfa siempre la voz del oráculo consultado ó sea la palabra

(1) Tomo II, página 328 y siguientes.

de orden del presidente. En la última elección, intervino la *convención de notables*, y esto es ya un progreso.

La manera como se ungen presidentes, conforme á lo estatuido en la constitución vigente, es la siguiente : El presidente de la Nación, ó la *convención de notables*, designa el nombre del pariente más cercano del que desempeña la presidencia en el primer caso, ó del político más *ecuánime*, ó pecador arrepentido, en el segundo. Esta orden se transmite inmediatamente á los *señores de los feudos*, ó sea á los gobernadores. Éstos á su vez, llaman á los jefes políticos de los departamentos, ó jueces de paz, comisarios y receptores de rentas (estos últimos para que faciliten los fondos para la quema de cohetes de la india y otros gastos menudos), y les ordenan hacer triunfar la lista de *electores* que conviene á las inspiraciones del supremo jefe del unicato nacional. Esto es, sencillamente, todo. Los electores (*sic*) se constituyen en colegio electoral en la capital de la República, con la creencia de que realmente *eligen* y dan el nombre del ciudadano católico, apostólico, romano que ha de dirigir los destinos del pueblo argentino. Reúnese después el congreso del presidente y ratifica lo que se llama elección : y desde aquí se inicia un nuevo período de seis años para distribuir



gracias y favores, con los dineros que suministra la masa del pueblo laborioso y el que obtiene del trigo y la carne que brota de esta tierra pródiga, al impulso del brazo y del capital extranjero.

El solo hecho de rememorar estos antecedentes aceptados y respetados por todos con ingenuidad de niño, subleva el espíritu argentino menos liberal y más misoneísta.

Bien, pues, traigo el voto directo como el mejor remedio para este mal, para concluir con la tutoría de unos cuantos políticos que se consideran árbitros en la dirección y administración de la cosa pública, cual si manejaran sus propios intereses.

Otra reforma de importancia es la que propongo respecto á la calidad del voto emitido por cada provincia ó distrito electoral.

Conforme á lo que dispone nuestra Constitución, las provincias y la Capital federal tienen tantos votos como el duplo de diputados y senadores : de manera que los estados que tienen mayor representación en el Congreso son los que más pesan en el cómputo general, imposibilitando así la influencia de la mayoría de las provincias para la designación del primer magistrado de la administración, siuviésemos elecciones de verdad.



Conforme á la actual representación, si los partidos ó personas dirigentes que disponen de los electores de la capital federal y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se ponen de acuerdo sobre la candidatura A ó B, la hacen triunfar, sin más trámite, y los votos de las once provincias restantes adjudicados al candidato C quedan reducidos á cero. Esto puede acontecer fácilmente hoy ¿y qué no sucederá mañana, con la radicación de la inmigración en esta Capital y la provincia de Buenos Aires, cuando el número de sus representantes excede de la mitad del total? Que la Capital y Buenos Aires solos resolverán la cuestión presidencial y las catorce provincias restantes y los territorios federales no tendrán importancia para la resolución de tan transcendental asunto.

Este es un peligro cercano que es preciso prevenirlo para evitar dificultades internas en lo porvenir.

La elección de presidente debe ser hecha por el pueblo de la República, de manera que cada distrito electoral represente un voto, porque así es posible evitar las absorciones de las provincias que por su situación geográfica, su extensión y sus riquezas aumentan considerablemente y día á día su población: y también, porque sólo así hemos de cimentar con



más eficacia el federalismo de verdad, sin que sus vínculos se resientan ó se rompan.

Las entidades políticas deben tener igual representación en este caso porque se trata de la elección del primer magistrado de la Nación. Si en el Senado cuerpo compensador de las resoluciones de la Cámara de diputados y del Presidente en ciertos casos, hasta la facultad de ser tribunal político en el enjuiciamiento del primer magistrado, tienen igual representación cada uno de los estados, con mayor razón deben tenerla en el caso en cuestión. ¿Á qué quedaría reducida la entidad de los estados de nuestra federación, si sólo dos ó tres de ellos hacen la elección de presidente?

Difícil es preveer lo que podría acontecer en presencia de hechos que desde ya pueden producirse, pero, de todos modos, tales acontecimientos serían demostrativos de un hondo malestar político, en presencia de una federación impracticable.

Cuando en Estados Unidos se consideraba imposible la federación de los estados, porque los de escasa población, mala situación geográfica y escasez de recursos no les permitía tener igual representación en el Congreso, temiendo ser absorbidos por los poblados, extensos y ricos, surgió la idea de que el Se-





nado como centro de gravedad entre la otra Cámara y los demás poderes, debía estar constituido por igual número de representantes de cada estado, cualquiera que fuese su población. Esta idea salvadora resolvió la magna cuestión.

Este criterio es el mismo que debemos hacer primar en este importante asunto, y es fundado en los antecedentes que preceden, que propongo que cada distrito electoral de la República tenga un solo voto en esta elección, á los efectos de computarse en el escrutinio final que debe realizarlo el Congreso.

La parte final de este artículo se refiere al papel que la junta popular que se estatuye en el artículo siguiente (82), debe desempeñar como tribunal escrutador de primer término.

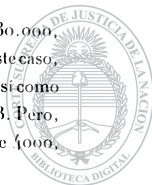
La elección debe ser á base de listas de presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo de los partidos que se presentan al comicio: y el escrutinio debe adjudicar los cargos proporcionalmente, debiendo tener en cuenta que si el partido ó grupo cuyo número de votantes no alcanza á la mitad más uno del inmediato superior, en caso de presentarse tres partidos ó grupos con candidatos propios, no podrá estar representado con ningún candidato.

Supongamos que en el distrito electoral X, el par-

tido A haya tenido una suma de votos como 30.000, el B, como 25.000 y el C, como 4000. En este caso, la presidencia y la vicepresidencia primera, así como la segunda, pertenecerán á los partidos A y B. Pero, si el partido C tuviese 13.000 votos en vez de 4000, debería ser acreedor á uno de los cargos.

La junta escrutadora deberá previamente hacer el cómputo del total de votantes de cada lista ó partido para saber cuáles tienen representación y cuáles no : al grupo que arroje mayor número de votos, le corresponderá la presidencia : al inmediato inferior, la vicepresidencia primera : y al tercero, si la hay la vicepresidencia segunda. ¿Cómo se adjudicará la presidencia en la primera lista? Un ejemplo hará comprender fácilmente.

Si los votos están en este orden : para presidente, por M 15.000, para vicepresidente primero por D 10.000, y vicepresidente segundo por F 11.000 : es claro que la presidencia corresponderá á M. En el caso de que las tres unidades de votos sean iguales, la presidencia corresponderá siempre á M, porque por la calidad de los votos le pertenece : pero si hacemos que F, para la vicepresidencia segunda, por ejemplo, hubiere los 15.000 votos, 10.000 para la presidencia para M, y 11.000 para la vicepresidencia





primera por D, la presidencia sería adjudicada en este grupo á F. De manera que á la lista que corresponde un candidato, éste será el que tenga mayor número de votos prescindiendo de la clasificación que hayan hecho los parciales, porque en tal caso, tan competente debe considerarse á uno como á otro. Si hay igual número de votos para cada uno de los tres cargos de una lista corresponderá la designación al que se le haya adjudicado el cargo en esa lista. Si dos ó más listas tienen el mismo número de votos para la presidencia, así como en el total, se elegirá al que tenga mayor edad, y si ambos fueren de la misma edad, se sorteará. El candidato común á dos ó más listas que obtuviera mayoría parcial sobre el mayor número de cualquiera de los de las listas, aunque con diversas denominaciones, será presidente.

Los ejemplos siguientes harán comprender fácilmente la forma propuesta.

I

Lista A

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| Para presidente por M | = | 10.000 |
| — vice 1° — D | = | 9.000 |
| — vice 2° — F | = | <u>11.000</u> |
| Suma de votos . . . | | 30.000 |

Lista B

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| Para presidente por P | = | 8.000 |
| — vice 1° — N | = | 14.000 |
| — vice 2° — R | = | <u>6.000</u> |
| Suma de votos . . . | | 28.000 |



En este caso la presidencia corresponderá á F, la vicepresidencia primera á N y la vicepresidencia segunda á M.

II

Lista A

Para presidente por M = 10.000
 — vice 1° — D = 10.000
 — vice 2° — F = 10.000
 Suma de votos... 30.000

Lista B

Para presidente por P = 8.000
 — vice 1° — N = 14.000
 — vice 2° — R = 8.000
 Suma de votos... 30.000

Sería : N, presidente : M, vicepresidente primero.
 y D, vice segundo.

III

Lista A

Para presidente por M = 10.000
 — vice 1° — D = 8.000
 — vice 2° — F = 7.000
 Suma de votos... 25.000

Lista B

Para presidente por P = 10.000
 — vice 1° — N = 7.000
 — vice 2° — R = 8.000
 Suma de votos... 25.000

Si P de mayor edad que M, será N presidente : M vice primero y D vice segundo. Si M mayor edad que P, será M presidente : P vice primero y D vice segundo.



IV

Lista A

Para presidente por M = 10.000
 — vice 1° — D = 9.000
 — vice 2° — F = 6.000
 Suma de votos... 25.000

Lista B

Para presidente por F = 8.000
 — vice 1° — N = 11.000
 — vice 2° — R = 6.000
 Suma de votos... 25.000

F, presidente: N, vice primero: M, vice segundo.

Entendido es que si surgieran algunos inconvenientes en este ligero estudio, una ley apropiada reglamentaría en todos sus detalles la más justa aplicación de este régimen eleccionario.

Se comprenderá fácilmente que esta forma de elección responde al propósito de la representación proporcional en la designación de los candidatos que han de desempeñar por turno y en los casos prescritos por la Constitución, el poder ejecutivo de la Nación, por una parte: y por otra, tendría la ventaja que movería todos las fuerzas de opinión del país, condición educativa y eficiente de la vida cívica, á fin de que realmente el pueblo sea quien elija el primer mandatario de la administración de la cosa pública. En este caso, todas las fuerzas de la opinión se pondrían en juego, porque ningún partido estaría segu-

ro del triunfo hasta que el escrutinio general hecho por el Congreso no fuese llevado á cabo.

Este sistema que propongo no se presta á mutuas de los comités de partidos ni de autoridad alguna, y se quita al Congreso la facultad de elegir que actualmente la tiene en caso de no haber mayoría absoluta en la elección de los electores : pues, en tal caso, serían siempre las provincias de mayor representación quienes resolverían el caso, con el aditamento de que el presidente del Senado que es el vicepresidente de la República, designaría en definitiva, en caso de empate.

La elección del primer magistrado debe ser hecha por el pueblo de la República, no por el Congreso. Este cuerpo no debe tener otra misión en este caso, que la de clasificar los votos de los distritos electorales y proclamar los nombres de las personas que han merecido la confianza popular.







« Art. 82. — El presidente del Senado (la primera vez del Congreso constituyente) reunidas todas las listas, las abrirá á presencia de ambas cámaras. Asociados á los secretarios cuatro miembros del Congreso sacados á la suerte, procederán inmediatamente á hacer el escrutinio y anunciar el número de sufragios que resulte en favor de cada candidato para la presidencia y vicepresidencia de la Nación. Los que reunan en ambos casos la mayoría absoluta de todos los votos, serán proclamados inmediatamente presidente y vicepresidente. »

Art. 82. — Á los treinta días después de la elección, reunida en cada distrito una junta popular igual al duplo de diputados y senadores de cada uno, en los que tengan por lo menos cinco congresales, y en los de inferior representación en número de diez, procederán á hacer el primer escrutinio, el que será público, dentro de diez días consecutivos, cuyo resultado lo proclamarán y comunicarán, adjuntando los antecedentes electorales, á los presidentes de ambas cámaras del Congreso.

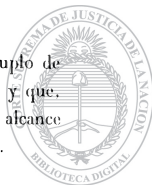
Como la forma de la elección que propongo es *directa* y se hace necesario un primer escrutinio de distrito, considero que éste debe hacerse por una junta especial formada por ciudadanos que, por su calidad de mayores contribuyentes, circunstancia que presume condiciones de independencia personal, sea una garantía de honradez cívica.

Actualmente, el tribunal de escrutinio que interviene en la elección de diputados al Congreso, está formado en cada provincia, por el juez nacional de sección, por el presidente de la corte de justicia y presidente de la legislatura del distrito respectivo: pero como, según el artículo 94 de esta reforma, los jueces de cualquier categoría que sean no pueden tomar parte en escrutinio de elecciones ni en ningún otro acto de política militante, porque desvirtúa la majestad de su alta y delicada investidura, es más conveniente, y está más en armonía con el acto electoral que ese escrutinio se practique por ciudadanos del pueblo, independientes de toda autoridad.

Como la labor de la junta está en razón directa de la población de los respectivos estados, y hay provincias que tienen demasiada población con relación á otras cuyo número de habitantes es muy escaso, he creído conveniente establecer que la junta popular



de primer escrutinio sea formada por el duplo de
diputados y senadores de cada provincia, y que,
aquellas cuya representación duplicada no alcance
á diez, estarán constituidas por este número.







« Art. 83. — *En el caso de que por dividirse la votación no hubiese mayoría absoluta, elegirá el Congreso entre las dos personas que hubierén obtenido mayor número de sufragios. Si la primera mayoría hubiese cabido á más de dos personas, elegirá el Congreso entre todas éstas. Si la primera mayoría hubiese cabido á una sola persona, y la segunda á dos ó más, elegirá el Congreso entre todas las personas que hayan obtenido la primera y segunda mayoría.* »

Art. 83. — *Á los sesenta días de practicada la elección directa del pueblo, se reunirá en asamblea el Congreso presidida por el presidente del Senado ó en su defecto por el presidente de la Cámara de diputados. En este acto se abrirán los pliegos cerrados y sellados de las elecciones, á cuyo fin actuarán como secretarios tres congresales de cada partido militante en las elecciones, elegidos por votación nominal de la asamblea, y se procederá á hacer el escrutinio general y definitivo en una sola sesión pública, computando un solo voto por cada distrito electoral, y proclamarán los nombres de los electos*

para los respectivos cargos de presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. En caso de igual número de sufragios, será reputado elegido el de mayor edad. El resultado se publicará por los diarios y se comunicará á los electos.

El contenido de este artículo no impone la necesidad de mayores explicaciones, porque de suyo es explicativo, y como responde á una forma de elección diversa de la vigente, no es comparable al que substituye.

Es punto importante por la transcendencia del acto que actúen congresales en calidad de secretarios para la apertura de los sobres que contienen la elección escrutada por la junta popular de los distritos electorales y el acto mismo del escrutinio general, pero es también conveniente que esos secretarios salgan de las filas de los partidos que han actuado en la lucha presidencial, á fin de que unos y otros se controlen y el acto sea la resultante de la verdad de los hechos producidos, lealmente aquilatados y medidos. Estos secretarios deben ser el fruto de una elección especial de la asamblea, en las cuales se ha de procurar el juicio, la honradez y la competencia y es por demás sabido que las mayorías libres nunca se equivocan.

En caso de igualdad de sufragios propongo de-



clarar elegido el de mayor edad, conforme á la disposición contenida en el artículo 47, párrafo 2 de la adelantada constitución del Brasil, porque es evidente que este solo hecho, supone mayor experiencia y aptitudes en dos personas igualmente dignas por otros conceptos, y á fin de evitar dificultades y de que el Congreso viniera á hacer en definitiva la elección.

Las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, en caso de empate resuelven esta cuestión por la suerte y la de Perú establece la elección del Congreso.

En el primer caso de éstos creo que no es asunto de resolver por la suerte, porque siempre es conveniente procurar la mayor garantía de las calidades superiores que deben reunir las personas en condiciones de merecer tan alta distinción: y en el segundo, creo que la designación del Congreso podría fácilmente desvirtuar el voto popular por las razones que al respecto he dado en el artículo 81.







« Art. 84. — Esta elección se hará á pluralidad absoluta de sufragios y por votación nominal. Si verificada la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará segunda vez, contrayéndose la votación á las dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la votación y si resultare nuevo empate, decidirá el presidente del Senado (la primera vez el del Congreso constituyente). No podrá hacerse el escrutinio ni la rectificación de estas elecciones, sin que estén presentes las tres cuartas partes del total de los miembros del Congreso. »

Art. 84. — Las legislaturas de provincia y el Congreso para la Capital y territorios nacionales, nombrarán por sorteo de entre los ciudadanos mayores contribuyentes la junta popular. No podrán formar parte de esta junta los diputados y senadores nacionales, los legisladores de provincia, ni ningún empleado á sueldo ó en comisión remuneratoria de la Nación ó de las provincias.

Debiendo ser organizada esta junta por un poder político, porque el pueblo no podría hacerlo directamente, considero que ninguno está en mejores condiciones para llenar esa misión que las legislaturas en las provincias y el Congreso para la Capital y territorios nacionales. Conforme á las reformas que propongo, estos poderes políticos tendrán la suficiente independencia para hacerlo, sin responder á otra autoridad que á la de la conciencia de cada elemento de los que las forman y por consiguiente sus procedimientos tendrán que ser intachables.

Las demás condiciones que figuran para optar á esta distinción, son las mismas estipuladas en el artículo 81 para la calidad de electores de presidente, y ellas consultan la independencia de la delicada función que comporta.





« Art. 85. — La elección del presidente y vicepresidente de la Nación, debe quedar concluída en una sola sesión del Congreso, publicándose en seguida el resultado de ésta y las actas electorales por la prensa. »

Art. 85. — Una ley especial será dictada dentro de las prescripciones que anteceden, á los fines de asegurar la mayor libertad y eficiencia de la elección.

Como la Constitución hace declaración de principios generales, en los que no entran los detalles en el procedimiento, justo es autorizar al Congreso para dictar las leyes que los complementen: y es fundado en este principio que propongo este artículo.





« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

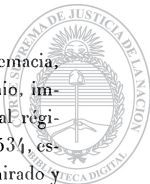
1° *Es el jefe supremo de la Nación* y tiene á su cargo la administración general del país. »

Art. 86. — El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

1° Es el jefe de la administración de la Nación.

« *El Rey es el jefe supremo de la Nación*, el Rey es el jefe supremo del Estado », « el rey como jefe supremo de la Nación, etc. », « el Presidente de la República es el jefe supremo de la Nación ».

La primera disposición pertenece á la constitución de Francia de 1830 (art. 13); la segunda y tercera á las de Italia y Portugal y la cuarta á la de Chile : de manera que este principio de gobierno ó atributo del poder ejecutivo lo hemos tomado de Francia monárquica ó de la república unitaria de Chile, ó de ambas á la vez.



Jefe supremo implica en este caso supremacía, superioridad absoluta, eminencia, predominio, imperio, soberanía, términos que se adaptan al régimen monárquico. El acta de Cromwell de 1534, estipulaba que el rey debía ser : « aceptado, mirado y reconocido como *único y supremo jefe* sobre la tierra de la iglesia de Inglaterra ».

Francia estatuyó el mismo atributo y las demás monarquías que no lo han establecido es porque él es innecesario desde que los soberanos son sagrados, inviolables é irresponsables : y Chile lo adoptó también porque se constituyó en el régimen unitario, el cual no es sino una forma de la monarquía : allí el presidente *nombra y remueve á su voluntad*, los ministros del despacho, los consejeros de estado, los ministros diplomáticos, los intendentes de provincia y los gobernadores de plaza, lo que importa decir que en Chile hay realmente un supremo jefe de la Nación.

En nuestro régimen de gobierno el poder supremo pertenece al Congreso, al cuerpo político que dicta leyes y códigos, poder directriz de los destinos de la República : la justicia aplica los códigos y las leyes y el poder ejecutivo ejecuta las leyes administrativas y dirige el mecanismo de su incumbencia,

esta rama del gobierno no tiene poder supremo, no tiene soberanía.

Desde que el Congreso puede separar del cargo al presidente de la República, éste no puede ser jefe supremo de la Nación, es simplemente jefe de la administración.

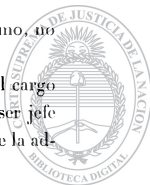
Preciso es recordar que uno de los considerandos de mayor fuerza que aducía el presidente, como fundamento del decreto del 25 de enero de 1908, fué. á no dudarlo, el de ser *jefe supremo de la Nación*.

¿ Por qué traía este argumento el poder ejecutivo?

Porque el jefe supremo de la Nación está sobre todo, es poder soberano, es eminencia, cima, predominio.

Dado este antecedente, es evidente que este atributo no debe tener el ejecutivo nacional, á fin de evitar entorpecimientos que podrían ser de fatales consecuencias entre los poderes que constituyen el gobierno.

La forma que propongo á este artículo es la misma contenida en la constitución unitaria de 1826 (art. 81, cap. III, sec. V): ella se armoniza más con la índole del régimen federal y con el carácter general de las reformas que propongo.





« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

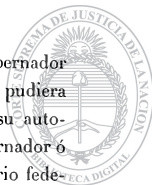
« 3º *Es el jefe inmediato y local de la capital de la Nación.* »



Este inciso debe ser suprimido.

Son tan múltiples y altas las funciones del presidente, que la que se acuerda por este inciso las empequeñece. Desde que por el inciso 1º se establece que « es el jefe supremo de la Nación y tiene á su cargo la administración general del país » no se necesita adjudicarle también el gobierno *inmediato y local* de la Capital. No puede ni debe tenerlo, porque desvirtúa la majestad del cargo y se le atribuye facultades propias de una autoridad subalterna, como es la del gobierno municipal.

Como á la época de la Constitución del 53, no se había fijado la capital de la República, pero se presumía que ésta debía ocupar una ciudad capital de



provincia, donde á la vez debía residir el gobernador de la misma, y á fin de que el presidente no pudiera llegar á ser prisionero de palacio, ó de que su autoridad no fuese amenguada por la del gobernador ó de sus dependencias, en el radio del territorio federalizado, se estatuyó la jefatura inmediata y local del presidente en el territorio de la Capital.

Era tan difícil la situación del país en aquel histórico momento, que hacía necesario, el establecimiento del inciso que comento. Se temía y con sobrada razón, que apagado el principal cráter del volcán, podía ponerse en actividad otro de mayores proporciones. La opinión de las provincias estaba dominada por una permanente anarquía: Buenos Aires desconocía la Constitución y acechaba las autoridades por ella creadas, y las dificultades con la República del Paraguay estaban ya delineadas.

La ley de la Capital interina de la Nación del 53 (de 13 de diciembre), evidencia esta aseveración, pues no obstante estar descontada la presidencia del general Urquiza y de que éste designaría la ciudad del Paraná para capital provisoria de la República, el Congreso constituyente no creyó conveniente fijarla, porque, como decía el diputado Zavalía, era necesario prever el peligro de una disolución del



país, lo cual podrá acontecer si se determinase un punto fijo para capital, en el que después de un cambio político, las autoridades nacionales quedaran muy cerca de los peligros ó demasiado lejos para conjurarlos.

El artículo 1° de esta ley, dice : « La capital provisional de la confederación será la ciudad capital de provincia donde fijase su residencia el gobierno federal por todo el tiempo que en ella residiese. »

¿Qué hubiera sido del gobierno nacional, en tan difícil situación si instalado en una capital de provincia, la autoridad del presidente hubiese tenido que estar subordinada á la del gobernador de la provincia respectiva, jefe nato del municipio en aquellos años?

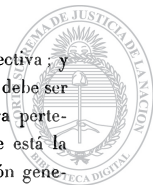
El inciso 3° en esa época fué toda una previsión para la eficiencia del ejercicio de la autoridad nacional porque no tenía casa propia, y constituyéndose en locatario tenía necesidad de disponer á voluntad de la llave, y eso importaba la mencionada atribución del presidente de ser el jefe inmediato y local de la Capital.

Aquella causa singular desapareció por completo y de ella sólo nos queda el recuerdo. La nación argentina es hoy indivisible y poderosa y esta populosa

ciudad, culta y progresista es su capital efectiva ; y por consiguiente, el presidente no puede ni debe ser el jefe inmediato y local, porque esa jefatura pertenece á la autoridad municipal, sobre la que está la del presidente como jefe de la administración general de la Nación, conforme al inciso 1° del mismo artículo.

Esta hermosa Capital, la primera de Sud América, necesita ponerse á la altura de sus progresos morales y materiales y al espíritu libertario que respiran las instituciones de la república con el juego armónico de las distintas ramas del poder. El municipio necesita que las autoridades que dirijan su belleza edilicia, su vialidad, beneficencia é higiene, sean el exponente de su voto libremente ejercitado, porque este atributo de las agrupaciones sociales es conquista hecha y no discutida en todos los pueblos civilizados, desde la más remota antigüedad, y si en sus orígenes no alcanzó los progresos que hoy revela es porque nació en la época de la monarquía.

El Congreso de 1860, por ley de 25 de septiembre, sancionó por vez primera, el establecimiento de la municipalidad en la capital provisional del territorio federalizado (Paraná), conforme al artículo 3° de la ley número 201, de 3 de octubre de 1858.

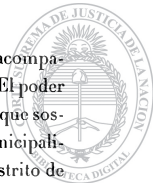


¿Cómo debía ser constituido este cuerpo según la ley?

Por la exclusiva voluntad de los habitantes del municipio, en forma electiva, sin la intromisión de la autoridad nacional, en ninguna forma. Esta institución nació perfectamente autónoma, libre de tutorías ó de extrañas influencias que la desvirtuaran.

Trasladadas las autoridades nacionales á esta ciudad, declaraba capital provisional de la república, según ley de 1^o de octubre de 1862, la cual era á la vez residencia de las autoridades de la provincia, la municipalidad continuó siendo una institución provincial, hasta que en 1881 después de la ley de capital efectiva se sancionó la ley creando la municipalidad en forma distinta de la de 1860. En ésta se acordaba que el consejo se formaría por elección directa de los habitantes del municipio y el intendente sería nombrado por el presidente de la república. Haciendo uso de la gráfica expresión de Goyena : la municipalidad, en la capital propia de la república, estaba ligada por el cordón umbilical al poder ejecutivo de la Nación : pues se le quitaba al vecindario la facultad de hacer sentir su influencia en lo más importante del régimen municipal, cual es la autoridad ejecutiva.





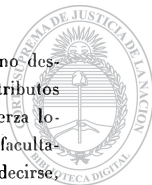
En el mensaje con que el poder ejecutivo acompañaba el proyecto de ley municipal, decía : « El poder ejecutivo no admite las exageraciones de los que sostienen, como en Norte América, que la municipalidad debe gobernar directamente por sí el distrito de la Capital, ni las teorías contrarias que profesan los sostenedores de un gobierno municipal absolutamente popular é independiente, dentro del seno mismo de la república.

« Admitir lo primero, sería llevar más allá de lo que un celo discreto aconseja la concentración de la administración local en los gobiernos políticos.

« Adoptar lo segundo importaría ponerse en pugna con la Constitución y arrancar al gobierno nacional elementos de acción y de influencia, propios y legítimos, que son indispensables para conservar su poder constitucional. »

Como se ve, el poder ejecutivo abogaba por la centralización de la administración como poder político, oponiéndose al despojo de elementos de acción y de influencia que consideraba necesarios é indispensables para el poder.

Si nuestra municipalidad tuviera las atribuciones acordadas á las de los Estados Unidos de Norte América, las que disponen hasta de la policía local, po-



dría considerarse racional la necesidad de no desprenderse el poder ejecutivo de algunos atributos propios de la autoridad, como es el de la fuerza local constituido por la policía: pero como las facultades del cuerpo municipal, se reducen, puede decirse, á la higiene, vialidad, beneficencia y ornato de la Capital, no encuentro la razón de que el presidente sea el jefe inmediato y local para dirigir estos servicios ó para nombrar los empleados que han de hacerlos. No veo la necesidad de que el poder ejecutivo, deba llevar la centralización de la administración hasta los resortes de esta rama, propios del gobierno comunal autónomo; ni alcanzo á comprender tampoco la necesidad de la acción é influencia del poder municipal ó de los que lo constituyen para conservar el poder constitucional, cuando, con este fin, basta y sobra con ser el jefe de la administración general del país.

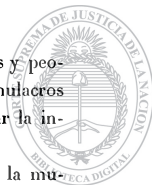
La fuerza, es un atributo del gobierno y de la fuerza dispone el poder ejecutivo nacional, desde que es el jefe del ejército de mar y tierra, y de la policía local. ¿De qué puede servirle la autoridad municipal que presta importantes servicios al municipio, inofensivos para los fines y propósitos constitucionales del primer magistrado? Si no existiera la tendencia

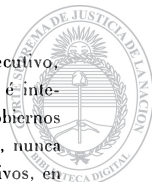
inconfesable de que el ejército de empleados y peones municipales son necesarios para los simulacros eleccionarios, nadie sería capaz de descifrar la incógnita.

Posteriormente, y por ley del Congreso, la municipalidad llegó á ser una simple dependencia del poder ejecutivo nacional, quien nombraba directamente al intendente y concejales, sin que los vecinos de la Capital tuvieran intervención alguna en su designación.

En la actualidad el consejo es electivo, y el intendente nombrado por el ejecutivo. En el mensaje con este motivo dirigido al Congreso, con fecha 5 de junio de 1906, se ve claramente, que el primer magistrado está poseído al respecto, de la más sana doctrina, cuando dice: « Lo que hay, pues, como gobierno del municipio, sólo puede permanecer como transitorio por razones especiales: pero no con carácter permanente, sin que, por otra parte, en ningún caso, el presidente de la República deje de ser el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación ».

La constitución actual de la municipalidad es inapropiada por cuanto los orígenes de sus autoridades dirigentes son diversos: el consejo nace de la





voluntad popular y el intendente ó poder ejecutivo, de la autoridad providencial siempre parcial é interesada. Esta designación es propia de los gobiernos monárquicos, de los regímenes absolutistas, nunca de los gobiernos democráticos representativos, en los que toda autoridad emana de la voluntad popular.

En Norte América, los alcaldes ó intendentes y los concejales son elegidos directamente por los electores de la ciudad, y en varios Estados por leyes recientes, se ha estatuido que los dos partidos en que ordinariamente está dividida la opinión, estén representados en el consejo y aun los *policemen* están divididos entre los mismos, y no obstante, no hay entorpecimientos entre la autoridad municipal y el jefe político ó gobernador del Estado.

Siuviésemos que copiar todas las instituciones de Norte América, propias de la idiosincracia de aquel pueblo, ya que las tenemos como modelo en todo y por todo, tendríamos un conglomerado imposible é inaplicable á nuestras costumbres ó modos de ser, y si he mencionado lo que antecede, lo he hecho, no para que nos sirva de modelo, sino para demostrar que éstos, como muchas otras cuestiones, debemos resolverlas con el propio criterio, á base de honradez y patriotismo, inspirado en el es-

píritu liberal de la Constitución y en que no es índice de buen gobierno, depositar tanta suma de autoridad en un sólo hombre cuyas atribuciones son tan múltiples y elevadas, como delicadas sus responsabilidades.

He tratado en esta parte de la autonomía municipal, porque la causa que la ha obstaculizado hasta el presente, es la facultad acordada al Presidente en el inciso 3° cuya desaparición propongo por las razones que anteceden.





« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 4º Participa de la formación de las leyes con arreglo á la Constitución : *las sanciona y promulga.* »

4º Participa de la formación de las leyes con arreglo á la Constitución.

Esta reforma consiste en la supresión de las palabras : *las sanciona y promulga.*

Propiamente el poder ejecutivo no sanciona las leyes si no tiene la facultad de vetar las sanciones del Congreso. Es poder colegislador, porque presenta proyectos y los sostiene y defiende por intermedio de sus secretarios de Estado, quienes no pueden votar. Los ministros no resuelven ; discuten ó informan simplemente.

El poder ejecutivo no puede, tampoco, promul-

gar las leyes, porque no pudiendo vetarlas su aprobación es innecesaria.

¿Dónde está ó en qué consiste la autonomía del poder legislativo, si sus resoluciones han de depender de una autoridad superior que asiente ó no sobre ellas?

Pero, en nuestro régimen de gobierno el poder ejecutivo no tiene poderes superiores sobre el Congreso, sobre este cuerpo que es su acusador y juez. El linde de estos poderes está establecido por el significado propio de las palabras con que cada uno está designado : legislativo y ejecutivo. El primero dicta las leyes y el segundo las ejecuta y vigila su aplicación.

Por consiguiente, las sanciones del Congreso, conforme á las prescripciones y forma estipulada para su tramitación, son leyes de la Nación, dentro del orden de las reformas que proyecto.

Los comentarios sobre la reforma del artículo 72, explican más detenidamente las razones que abonan en favor de que el poder ejecutivo debe ser colegislador, pero sin la facultad de vetar y promulgar las leyes, porque éstas son facultades correlativas : sin la una no existe la otra. Si estudiamos las constituciones monárquicas de Europa, encontramos en ellas



el mismo artículo que critico, igual en su forma y fondo. La constitución de Francia de 1830, en su artículo 17, dice : « Sólo el rey sanciona y promulga las leyes. » La constitución de Bélgica, en su artículo 69, establece : « El rey sanciona y promulga las leyes. » Italia en su estatuto fundamental, artículo 7º, dice : « Sólo el Rey sanciona las leyes y las promulga. » Japón, en el artículo 6º de su constitución, estuye : « El Emperador sanciona las leyes y vigila su promulgación y ejecución. »

¿ Por qué esta uniformidad en las monarquías ? Porque en todas ellas el monarca es parte integrante del parlamento, desde que tiene la facultad de disolverlo, debe tener también la de promulgar ó vetar las leyes. Esto demuestra su poder sin contralor. El soberano es todo y está sobre todo.

Bien, pues, habiendo establecido en nuestra Constitución que el « presidente sanciona y promulga las leyes », le hemos acordado facultades propias de los superhombres, del supremo poder : hemos instituido la autoridad presidencial con atributos de rey ó emperador.







« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 5° *Nombrar los magistrados de la Corte suprema y de los tribunales federales inferiores con acuerdo del Senado.* »

5° Nombra los interventores, en los casos del inciso 22° del artículo 67, con acuerdo del Senado.

Las razones en que me fundo para la supresión de este artículo, están consignadas en el artículo 2° de la reforma y en el 94 y siguientes de la sección III, capítulo I.

Este inciso que propongo, no es sino una consecuencia del 23 del artículo 67 y del propósito demostrado en diversas partes de este trabajo, de disminuir las facultades discrecionales de que por la Constitución actual, dispone el presidente.

Su principal parte dispositiva consiste en que el nombramiento del interventor debe ser hecho con acuerdo del Senado.

La razón fundamental de esta disposición está en la alta misión que desempeña un interventor. Como representante del gobierno federal, es portador de la rama de oliva, y representa la ley y el respeto de las instituciones locales: estudia y analiza antecedentes y dicta su fallo si es necesario, preside el juego armónico y legal de los partidos, á objeto de restablecer la forma republicana de gobierno alterada. Su filiación política debe ser equidistante de los partidos, en cuanto sea posible, para estar cerca de todos y no lejos de ninguno. Consecuentemente, y para no dejar la responsabilidad del nombramiento sólo al presidente y como un contralor al mismo, conviene que en él intervenga el Senado, así como lo hace hasta en nombramientos de carácter inferior á éste: pues de esta manera se tiene la seguridad de que los nombrados serán prenda de rectitud y honrabilidad.

Con raras y honrosas excepciones, todos los interventores que han desfilado en las intervenciones anteriores no han podido sentir esa honda satisfacción que experimenta la conciencia del deber cum-





plido. Muy pocos serán los que han escapado a las instrucciones interesadas del presidente para forjar candidaturas acomodaticias y hacerlas triunfar. Este es el peor de los males de las intervenciones ejecutadas hasta hoy, cuyo ejemplo ha corrompido de tal manera la honestidad política de las personas que ha formado escuela. ¡ Quién acata con mayor decisión las órdenes superiores, es la divisa !

En cuanto el interventor ha sido nombrado, y no obstante la reserva de las instrucciones, está descontada su obsecuencia hacia el superior y todo lo que va á hacer en la desgraciada provincia que ha llegado al deplorable extremo de necesitar de él para normalizar su vida institucional.

Sobrada razón tenía el diputado Magnasco, cuando decía á la cámara : « las intervenciones en nuestra tierra, son sencillamente *dictaduras* ».

Este mal nace de la política absorbente del primer magistrado, y ya que no es posible sacar de sus manos esta designación, arma poderosa, es preciso restringirla, y á ésto tiende, principalmente, la condición de que el nombramiento se haga con acuerdo del Senado.

Consecuencia inmediata de esta medida seria la disminución de los casos de intervención : porque los

desmanes y abusos de los gobernantes apoyados por el presidente tendrán que desaparecer .

Gobernador amigo político del presidente, significa tener carta blanca para el uso y abuso de la autoridad, en homenaje á la paz que imponen las fuerzas conservadoras del país, siempre que permanezca fiel á la consigna de enviar representantes al Congreso é imponer sucesor en el gobierno, que sean la expresión de la voluntad del gran elector.

Esta reforma, con otras más de la misma índole, traería como lógica consecuencia, una mejora radical en el ambiente político general del país : los gobernadores serían más respetuosos del deber y de la ley, y procurarían la fuerza de la autoridad, en la opinión sana y consciente de sus conciudadanos; y el Presidente, en igualdad de condiciones, podría dedicarse con más ahinco á la administración del país, sin perder el tiempo en procura de combinaciones políticas, cosas propias de los partidos y de la opinión nacional libremente ejercitada.





« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 6° *Puede indultar ó conmutar las penas por delitos sujetos á la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de diputados. »*

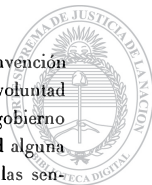
Creo que debe suprimirse este inciso, porque delimitados los poderes judicial y ejecutivo por este proyecto de reformas á la Constitución, de tal manera que cada uno gire en la órbita de sus atribuciones propias, y considerando que la autoridad del presidente de la república no es ni debe ser superior á la de la Suprema corte de justicia, no es á él á quien debe acordarse esta facultad.

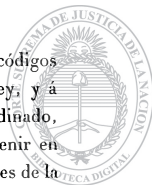
El indulto y la conmutación de penas es gracia que acuerdan los monarcas con su poder soberano

sobre todos los demás poderes: es vieja invención de la reyecía, como símbolo de la suprema voluntad luego, su adaptación á nuestro régimen de gobierno en el que el poder ejecutivo no tiene facultad alguna judicial y por consiguiente no puede rever las sentencias de los jueces, es arbitraria y atentatoria de atribuciones que no entran en su esfera de acción.

El mal político de este país, fomentado y robustecido por la Constitución, consiste en la extraordinaria ramazón de la autoridad del presidente, que además de ejecutivo es supremo legislador y más que juez, porque revé los actos de la justicia y acuerda gracia cual soberano de la Nación. Este mal debemos hacerlo desaparecer para vivir en el régimen democrático de verdad. La justicia es una sola, y ella debe ser intangible é impecable y sus resoluciones deben tener el sello rígido de su estructura, ó no es justicia. La justicia es poder autónomo y sus sentencias no pueden estar subordinadas á la voluntad de ningún otro poder. La supresión de este inciso es un freno que restringirá, sin duda alguna, la criminalidad, ante la inexorable ley que á todos nos nivela.

La sociedad, es decir, el pueblo de la Nación por



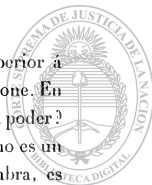


medio de sus representantes, ha dictado sus códigos de justicia y ha establecido los jueces de la ley, y á esos códigos y á sus jueces debe estar subordinado, sin que una autoridad extraña puede intervenir en última instancia con las parcialidades peculiares de la irresponsabilidad.

El magistrado judicial ha aplicado la ley, y ella debe primar é imperar. La autoridad del Presidente de la República en este género de asuntos está fuera de lugar. Si los monarcas inventaron la gracia ó perdón y siguen dispensándolo, es porque ellos hacen las leyes y hasta imponen las costumbres. Establezcamos nosotros que los tres poderes que forman el gobierno, son autónomos, como debe ser y como lo establezco por el artículo 2°, y el presidente no tiene que hacer nada con los encausados ó sentenciados por la justicia.

La parcialidad y el abuso son las características de la facultad acordada en el inciso que comento. Se asegura que una mujer vendia indultos por sumas variables entre cien y mil pesos, y por más que yo no dé crédito á ésto que no tiene nombre, temo que hasta allí podamos llegar !

Piensen los hombres de ley, discurran sobre el particular y contesten si la justicia de la Nación no se en-



cuentra deprimida cuando hay un poder superior a ella que indulta y conmuta las penas que impone. En esta virtud, cabe preguntar ¿la justicia es un poder? No. Es una simple autoridad mayor, luego no es un poder en el sentido constitucional de la palabra, es una dependencia. Á esta conclusión es preciso llegar conforme el inciso vigente que comento. El presidente no puede, en ningún caso, desempeñar actos de juez supremo ó acordar gracia, colocándose más arriba de la justicia, porque esta facultad es sólo propia de los soberanos irresponsables de las monarquías.

Además de estas consideraciones, basadas en principios de derecho incontrovertibles, cabe referir el hecho de que, por lo general, cuando los presidentes han usado de esta facultad, han abusado de ella, porque no han sido agraciados los más acreedores á ese beneficio, sino los mejor recomendados, ó aquéllos que han dispuesto de mayor número de influencias.

Así es que, aun mirado de este punto de vista, la disposición establecida en este inciso no satisface ninguna exigencia, y por lo tanto, es conveniente suprimirla de nuestra carta orgánica.

El año próximo pasado, el Presidente acordó gracia á un encausado, *festejando las bodas de plata de un*



prelado de la iglesia católica, y posteriormente ha dispensado favores análogos á éste (1).

He afirmado que la facultad de indultar y conmutar penas, es de origen monárquico, y es de ese régimen que la hemos copiado inconsultamente. « Toda administración de justicia emana del Rey, y se ejerce en su nombre por jueces que él mismo elige é instituye », dice el artículo 47 de la constitución de Francia de 1830, que también ha servido de base á la nuestra. « El Rey tiene el derecho de conmutar ó atenuar las penas pronunciadas por los jueces, con excepción de las emanadas por las cámaras contra los ministros de estado », pertenece á la constitución belga. « El Rey tiene la facultad de indultar á los delincuentes, con arreglo á las leyes », estatuye la cons-

(1) INDULTOS Y LIBRETAS. — Desde hace seis días está en gestación un decreto indultando á varios presos por diversos delitos. En las antecámaras del ministerio de justicia se aseguraba ayer que el desenlace era inminente.

Entre los favorecidos habrá, seguramente, algunos que resulten ante la ley acreedores al beneficio; pero nos consta que se hacen trabajos en favor de otros, que no reúnen las condiciones exigidas. Sus padrinos, en cambio, han reunido libretas electorales.

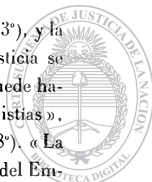
Háblase de un detenido cuyo defensor ha prometido contribuir con cincuenta votos al acto comicial de mañana.

Todos los informes favorecen á este candidato al indulto, hasta el de la comisaría de investigaciones, en cuyo archivo, tan mentado, deben constar, sin embargo, circunstancias agravantes para el condenado: su reincidencia, entre otras. (*La Nación*, octubre 17 de 1907.)

titucion española de 1812 (art. 171, inc. 13º), y la de 1876, en su artículo 74, dice : « La justicia se administra en nombre del Rey. » « El Rey puede hacer gracia, conmutar penas y decretar amnistias », pertenece á la Constitución de Italia (art. 8º). « La judicatura en el Estado se ejerce en nombre del Emperador. Los juicios y sentencias son expedidas en nombre del Emperador », establece la constitución de Austria, en su artículo 1º. « Los juicios se administran y ejecutan en nombre del Rey (art. 86). El Rey tiene el derecho de hacer gracia y reducir las penas » (art. 49), dice la constitucion de Prusia. « La justicia se administra por cortes en virtud de la ley y en nombre del Emperador », contiene el artículo 57 de la constitución del Japón.

¿Qué nos demuestran estos antecedentes? Que ejercitándose la justicia en nombre del Rey ó del Emperador, ella es una dependencia del soberano y por consiguiente, éste puede indultar ó conmutar penas. Su poder está sobre la justicia, como sobre el parlamento.

La uniformidad de esta facultad en todos los países de régimen monárquico, demuestra evidentemente que es atribución inapropiada al gobierno democrático representativo, y por lo tanto es anacrónica y no debe existir más en nuestra carta orgánica.





« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 10° Nombra y remueve á los ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado ; y *por sí sólo nombra y remueve los ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías, los agentes consulares y demás empleados de la administración cuyo nombramiento no está reglado de otra manera por esta Constitución.* »

10° Nombra ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, directores de Bancos y de la caja de conversión, jefe de la contaduría y del tesoro, con acuerdo del Senado, y otros que por esta Constitución ó por leyes especiales deban satisfacer esta condición. Nombra los ministros del despacho y los agentes consulares, los jefes de reparticiones á propuestas de los ministros respectivos ; y á propuesta de los mismos elevadas por los primeros, todos los demás empleados de



la administración, excepto los comprendidos en el artículo 89, y de los porteros y ordenanzas de las oficinas que deben ser nombrados por los jefes de las respectivas reparticiones. Con excepción de los ministros del despacho, todos estos nombramientos á base de competencia y buena conducta, terminan treinta días después de la expiración del mandato presidencial, pudiendo recaer los nuevos nombramientos en las mismas personas.

No podrá acumularse en una persona dos ó más empleos ; pero los profesores podrán tener hasta tres cátedras.

La reforma fundamental que proyecto en este inciso, consiste en que todos los empleados de la administración tienen un tiempo fijo de duración mientras su conducta responda al fiel cumplimiento de sus deberes. La condición de que estos nombramientos deben terminar treinta días después de finalizado el mandato presidencial, es con el objeto de que el nuevo presidente, tenga tiempo suficiente para hacer los cambios que estime conveniente, si no prefiere dejar subsistentes todos los empleados con un sólo decreto.

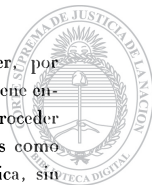
La importancia de esta reforma para los empleados y para la administración, no puede ser puesta en duda.

El que ocupa un puesto, sabe que no puede ser

exhonerado mientras cumpla con su deber, por espacio de seis años, y por consiguiente tiene entera libertad de acción para discurrir y proceder en el desempeño de sus deberes y derechos como ciudadano en las funciones de la cosa pública, sin rendir cuenta de sus actos á ningún empleado superior. Dado nuestro régimen de gobierno, es preciso garantizar por todos los medios lícitos, la independencia ciudadana, levantar el nivel moral del empleado digno, y en este sentido esta reforma satisface estas condiciones para los sesenta ó setenta mil empleados nacionales que tenemos hoy y su aumento de mañana, en razón del aumento de población y de la exigencia de nuevos servicios públicos, porque es preciso tener en cuenta que un empleado es siempre un ciudadano, con voz y voto.

Por otra parte, el empleado que cumple satisfactoriamente sus obligaciones está seguro en su puesto sin que pueda ser reemplazado, y con la seguridad de que la nueva presidencia confirmará su anterior nombramiento. Acontecería con ésto lo mismo que para los buenos esposos con la ley de divorcio, éstos no la temen.

La condición de que en la provisión de empleos deben intervenir los jefes de repartición es de suma





importancia porque nadie más que éstos están habilitados para conocer las aptitudes de cada uno de sus subalternos. Esto responde á la justicia que debe primar en la designación de los empleados inferiores: y no se diga que esos altos empleados han de obedecer órdenes superiores, porque, como son inamovibles mientras dure su buena conducta, no pueden tener temor de destitución.

La provisión de empleos es asunto de mayor importancia de la que ordinariamente se le asigna, y es preciso que las prescripciones que la estatuyen respondan á la competencia y honorabilidad de cada uno, al fiel cumplimiento de sus deberes en conciencia, á la independencia de los mismos para la vida cívica, y esto último se consigue con la duración que se asigna al empleado, mientras subsista su buena conducta en el desempeño de su tarea cotidiana.

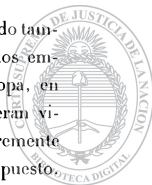
Eso de decir: el presidente *nombra y remueve* todos los empleados de la administración es demasiado arbitrario y hace de un presidente, un rey: representa un absolutismo de monarca. Nombro y separo del puesto, porque es mi voluntad hacerlo, es facultad que no se amolda á la esencia del gobierno libre de las democracias representativas.

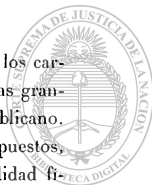
Esta reforma, es preciso tomarla de otro punto de

vista. El progreso de las sociedades ha marcado también un rumbo en cuanto á la duración de los empleados de la administración. En toda Europa, en los tiempos modernos, los nombramientos eran vitalicios y cada empleado podía venderlo libremente por sumas en relación con la categoría del puesto. Posteriormente ha desaparecido esta disposición en las monarquías y ha sido reemplazada por un determinado número de años para optar á la jubilación.

En la forma republicana democrática, en la que el gobierno es de todos y para todos, en la que no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento, ni fueros personales ni títulos de nobleza (art. 16), como acontece entre nosotros, la sabia intelectual y la actividad personal, es necesario que lleve su influencia progresista cada seis años, á las esferas gubernamentales, y que modifiquen el ambiente administrativo del país. De esta manera habremos puesto un coto á la empleomanía que representa una plaga en un país nuevo como el nuestro, y al mismo tiempo, abrimos nuevos horizontes á la actividad y á la preparación de otros factores sociales que necesitan ejercitar también sus facultades.

La permanente renovación de los elementos sociales en la dirección y administración de la cosa pública.





basada en la igualdad y en la equidad para los cargos y beneficios hace que ella sea una de las grandes ventajas del gobierno democrático republicano. La cristalización de los empleados en los puestos, hasta que la avanzada edad ó una imposibilidad física los inhabilite, es propio de las monarquías y del nacimiento privilegiado de las personas.

He suprimido la palabra «remueve» del inciso vigente, porque ella es demasiado imperativa y discrecional, como facultad acordada al presidente y es aun repugnante á nuestra forma de gobierno antiabsolutista. El presidente de la república no debe tener la facultad de separar á un empleado de su puesto porque le dé la gana de hacerlo, sino cuando tenga causas justificadas de mala conducta y para ésto no necesita la disposición suprimida.

Preciso es establecer las cosas en su lugar. Se cree generalmente que un empleado competente no puede conservar su puesto, si sus ideas políticas no conciben con las del presidente, quien tiene la facultad discrecional de removerlo, y no se tiene en cuenta, que el empleado no es del presidente, sino de la Nación, ni es, ni debe ser un autómatas; sirve los intereses del país, no los intereses del presidente. Este es un grave defecto de nuestros hombres de go-



bierno que es preciso corregir : y es por esto mismo que para los puestos más encumbrados se busca con preferencia las masas débiles, los servidores más obsecuentes, con menosprecio de la capacidad y del talento, porque éstos dicen lo que piensan y sienten, porque saben opinar con franqueza y sinceridad respecto á instituciones, hombres y cosas. Necesario es corregir este error : los hombres que dicen lo que sienten, no son hombres peligrosos y tienen iguales derechos á los que, faltos de discernimiento, no saben hablar, ni decir lo que corresponde á su tiempo.

Conversando con un amigo, hace pocos días, me refería que, siendo diputado al Congreso, viajaba á una de las provincias del interior, conjuntamente con un gobernador y recordando de personas domiciliadas en la provincia del gobernante, le dijo á éste :

— ¿ En qué se ocupa el doctor A ?

— Lo tengo en la cámara de justicia.

— ¿ Conoce usted á N ?

— Sí. A éste lo tengo en la legislatura.

— ¿ Qué hace B ?

— A éste lo tengo conmigo en la policía.

Los gobernadores creen que las personas ocupadas en la administración les pertenecen, cual si se



tratara de cosas propias : es decir, se consideran señores feudales.

La última parte agregada á este inciso, tiene por objeto cortar un abuso y combatir la plaga de la empleomanía.

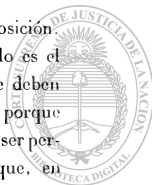
Centenares de personas podría contar, que tienen tres, cuatro y hasta cinco empleos rentados, sin tener la capacidad necesaria, ni el tiempo requerido para desempeñarlos cumplidamente.

Excusado es demostrar que la buena administración de los intereses públicos se resiente con tan desmedida é injusta acumulación de empleos en una sola persona. En este caso, es muy común, encontrar personajes á quienes no se les conoce personalmente en las oficinas en que debieran desempeñar el respectivo empleo ; y es aún más común, que en los colegios y facultades científicas, el profesor diga á los alumnos : — yo no podré venir hasta tal día de la semana entrante, porque soy pobre y tengo otros empleos que atender.

Poner inconvenientes para evitar este abuso que redundaría en mal de la administración de la cosa pública, creo que es obra de patriotismo. Así lo han entendido los autores de las constituciones de las catorce provincias de la república, cuan-

do en todas ellas tienen establecida esta disposición.

Otra reforma que propongo á este artículo es el nombramiento de porteros y ordenanzas que deben hacer los jefes de cada repartición pública, porque estos servidores inferiores inmediatos deben ser personas de la confianza de esos jefes, y porque, en cierto modo es ridículo que el presidente de la república se ocupe en nombrar hasta los porteros de las distintas oficinas, cual acontece hoy.







« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 11° *Hace* anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras en la sala del Senado dando cuenta en esta ocasión al Congreso del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando á su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. »

11° *Concurre* anualmente á la apertura de las sesiones del Congreso *el 1° de mayo*. Reunidas ambas cámaras en el recinto del Senado *presididas por el presidente de este cuerpo y en su defecto por el presidente de la de diputados*, dará cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando á la consideración del Congreso las medidas que juzgue necesarias y convenientes.



La reforma que propongo á este artículo es correctiva de las que se indican en el 55. Si conforme á lo que éste dispone, que las sesiones ordinarias han de empezar el 1º de mayo, sin necesidad de convocatoria, la concurrencia del poder ejecutivo para exponer la marcha del país y sus necesidades, no es de todo punto indispensable (1). El presidente debe concurrir á la sesión de apertura, pero el Congreso no puede diferir para otra fecha ese acontecimiento. El Congreso dispone de un periodo de tiempo determinado para las sesiones ordinarias en las que deben tratarse todos los asuntos que sean sometidos á su deliberación, y por lo tanto no puede acortarlo iniciando sus sesiones cuando al poder ejecutivo le parezca bien hacerlo, como á menudo acontece.

El artículo en vigencia establece que « el presidente hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso », y se ha creído siempre que si él no lo hace por un decreto de convocatoria, fijando el día para dicho acto, el Congreso no puede reu-

(1) Art. 121 de la constitución española, 1812 : « El Rey asistirá por sí mismo á la apertura de las Cortes ; y si tuviere impedimento, la hará el presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. »



nirse. Esta es realmente la práctica parlamentaria que hemos seguido hasta hoy, pero como el artículo 55 establece que el « Congreso se reunirá en sesiones ordinarias todos los años el 1° de mayo », pienso que este cuerpo puede iniciar sus tareas este día aunque el ejecutivo no lo convocara especialmente.

¿Qué haría el Congreso, si como el presidente deja transcurrir quince ó veinte días en convocarlo, lo tuviera así indefinidamente ?

¿Dejaría vencer el 30 de septiembre sin reunirse?

La contestación negativa no tiene espera. Evidente es que en tal caso el Congreso se reuniría en sesiones ordinarias, si transcurrido un tiempo relativamente largo el presidente no hiciera la apertura de las sesiones. Este es asunto en que no cabe discusión. Pero ¿ acaso no es lo mismo la demora corta ó larga del *soberano* para la convocatoria ? Si el Congreso puede declarar abiertas las sesiones ordinarias después de un mes ó dos que el Presidente no las convoca, también puede hacerlo en la fecha del 1° de mayo, respondiendo á un mandato constitucional imperativo : las cámaras se *reunirán* el 1° de mayo, etc., quiere decir que están obligadas á iniciar sus tareas en ese día. La disposición del inciso cuya reforma

propongo, no dice otra cosa sino que el ejecutivo hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, y no fija fecha para ello porque ella está sobreentendida ya, conforme el artículo 55, que debe ser el 1° de mayo.

Es, pues, una mala práctica, la del Congreso de esperar un decreto del poder ejecutivo para iniciar su periodo de sesiones, y esto hace recordar disposiciones análogas de la monarquía: « El Rey abre y cierra las sesiones de las cortes; el Rey hace la apertura del parlamento », son términos que implican superioridad del soberano sobre el cuerpo legislativo y que, por consiguiente, no cuadran á nuestro régimen de gobierno.

Que la Duma de Rusia necesite ser convocada expresamente por el emperador de todas las Rusias para sesionar, se explica; pero que el Congreso argentino esté pendiente de la voluntad presidencial para iniciar su labor parlamentaria y llenar así los fines de la misión confiada por el pueblo para la felicidad de todos y de cada uno, no se comprende sino por una aberración de los que primero han interpretado los artículos pertinentes de la Constitución, en momentos en que se creía que era necesario cimentar la autoridad ejecutiva, como la única





soberana para asegurar la paz y el orden en los incultos y anarquizados pueblos de la confederación : y á ese propósito responden otros artículos más, cuya reforma propongo.

Antes de auspicar el régimen de los soberanos pergaminosos de origen divino, sagrados, inviolables é irresponsables, los primeros en la jerarquía de los poderes gubernamentales, vivamos saboreando aunque más no sea que en la idealidad, los deleites del gobierno libre, con poderes autónomos, sin resabios de despotismo ni de gérmenes monárquicos, armónicamente dispuestos para que llenen los fines del bienestar social.

He citado en varias partes de este trabajo, la constitución española de 1812 como modelo de constitución liberal, y me veo obligado á mencionarla con este motivo, en apoyo de las ideas que sostengo. El artículo 172, inciso 1°, dice : *No puede el Rey impedir bajo ningún pretexto la celebración de las Córtes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen ó auxiliasen en cualquiera tentativa para estos actos son declarados traidores y serán perseguidos como tales.*

Si así son las restricciones que se establecen para la

autoridad del soberano de una monarquía, evidente es, que las que se imponen al presidente de una república democrática federal representativa, deben ser mayores, si realmente se quiere vivir en un ambiente de verdad institucional, de franca confraternidad.





« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 12° *Prorroga las sesiones del Congreso ó lo convoca á sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden ó de progreso lo requiere.*»

12° Convoca el Congreso á sesiones extraordinarias, cuando un grave asunto de interés ó de orden público lo requiera. *Los asuntos pendientes en las sesiones ordinarias no son materia de las extraordinarias, sino de las de prórroga.*

En los comentarios al artículo 55 he expuesto las razones demostrativas de que la prórroga de las sesiones corresponde al Congreso y no al poder ejecutivo, porque su objeto es terminar los asuntos pendientes que le pertenecen por derecho propio. La constitución española de 1812 faculta al Rey y á las



Córtes mismas para prorrogar las sesiones, en su artículo 107.

El agregado que propongo á este artículo es de todo punto importante porque él mantiene una especie de conflicto latente, ó mal entendido de las atribuciones del presidente.

Ha sido siempre práctica establecida, que el presidente, antes de finalizar el periodo de sesiones ordinarias, prorrogara éstas por decreto para tratar determinados asuntos de interés público pendientes, pero en el último periodo de gobierno se ha procedido de distinta manera, abusando el presidente de las atribuciones discrecionales que le acuerda la Constitución.

Finalizadas las sesiones ordinarias el 30 de septiembre de 1905 y pendientes aún del Congreso las leyes de presupuesto, aduana, sellos y otros servicios públicos y no convocadas las cámaras á sesiones de prórroga, quedaron éstas en receso. Transcurridos dos días, con fecha 2 de octubre del mismo año, se dictó el decreto de convocatoria á sesiones extraordinarias para el día siguiente, á objeto de tratar los proyectos de ley pendientes.

El año siguiente de 1906 aconteció igual cosa que el anterior. Fenecidas las sesiones ordinarias y que-



dando pendientes el presupuesto y otros asuntos urgentes y de imprescindible necesidad, no fueron prorrogadas las sesiones, y el 3 de octubre se dictó el decreto convocando el Congreso á sesiones extraordinarias para tratar los asuntos mencionados.

El siguiente año de 1907, se procede de la misma manera. El presupuesto y leyes de impuestos no fueron sancionados hasta el 30 de septiembre de ese año, y el poder ejecutivo, con fecha 9 de noviembre del mismo, convocó las cámaras para tratar esos asuntos.

La causa del abuso de las facultades ejecutivas en este último caso es de notoriedad pública y la he expuesto más antes en el capítulo respectivo, no obstante, diré dos palabras al respecto, por más que esto importe una repetición.

En la provincia de Corrientes funcionaban dos legislaturas. Una de éstas solicitó la intervención nacional y el Presidente se inclinaba á acordarla; despachado favorablemente el pedido por la Cámara de diputados, fué rechazado en el Senado. Terminadas las sesiones ordinarias el 30 de septiembre, el Presidente envió á Corrientes el 3 de octubre del mismo año, un comisionado en calidad de amigable componedor del desaguisado correntino, el cual no pudiendo cortar el nudo gordiano renunció el encargo. El



poder ejecutivo, aprovechando el receso de las cámaras, el 11 del mismo mes decretó la intervención como se estila hoy, con fuerza de línea, etc., etc., y el día 14 era nombrado interventor el doctor Carlos Dimet, quien tampoco se encontró capaz de hacer ciegamente lo que desde aquí se le transmitía en forma de instrucciones, y renunció el cargo. Un nuevo decreto de 22 de octubre lo colocó en la intervención al senador nacional don Eugenio Puccio, quien satisfizo plenamente los deseos del primer magistrado de la administración.

Encarrilada así esta cuestión, en la fecha mencionada se convocó al Congreso para tratar el presupuesto, etc., y estos polvos trajeron aquellos lodos. El Congreso no lo trató y el presidente se vió obligado á dictar el célebre decreto de 25 de enero de 1908.

Para ésto sirvió el receso del Congreso del 30 de septiembre al 15 de noviembre de 1907, deliberadamente resuelto por el *soberano* que dispone de las sesiones de tan alto cuerpo.

Evidente es que si el presidente hubiese prorrogado las sesiones ordinarias, él no hubiese podido decretar la intervención sin que el Congreso se avocara el asunto, y convocándolo á sesiones extraordinarias en las que sólo se trata *graves asuntos de interés*



público, entre los cuales, á su juicio, no podía estar comprendida la intervención á Corrientes, la intervención oficiosa tenía que continuar sin inconveniente alguno, como en efecto aconteció.

Ante estos hechos, dígase que es conveniente dejar subsistente la facultad discrecional del presidente de convocar al Congreso á sesiones de prórroga ó extraordinarias, ó ser su cabeza dirigente.

Como la costumbre hace la ley, otros presidentes que vengan, fundados en antecedentes no controvertidos, procederán de igual manera ó irán más lejos que los anteriores, si no se pone coto al abuso ó no se limitan las atribuciones en la medida que corresponde.

Si estas torcidas interpretaciones, hubiesen sido aplicadas en la incipiente de nuestra vida institucional, y rectificadas más tarde con un criterio honrado de verdad, nada tendríamos que observar al presente: pero cuando ha acontecido lo contrario, y seguimos una marcada tendencia á buscar subterfugios para desviarnos del recto camino de la verdad que informan los más elementales principios de gobierno democrático republicano, es necesario poner un dique á esa corriente, para que no lleve sus contagios malsanos á las edades venideras.





« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 13° Hace recaudar las rentas de la Nación y decreta su inversión con arreglo á la ley ó presupuestos de gastos nacionales. »

13° Hace recaudar las rentas de la Nación y decreta su inversión con arreglo á la ley ó presupuestos de gastos nacionales, *debiendo mandar publicar mensualmente los ingresos y egresos en un diario de la Capital, por licitación, además del Registro oficial.* Todo funcionario que intervenga en la entrega de sumas de dinero no determinadas por ley será personalmente responsable.

Este inciso vigente, tiene una estructura propia de una sociedad constituida bajo el régimen monárquico: se cobra la renta y se paga conforme á la ley, pero no se da cuenta de ésto al pueblo, porque

él no es el soberano : ésto significa y no otra cosa, el artículo vigente.

Una de las misiones más delicadas del hombre público es el manejo del tesoro, porque se trata de los dineros que el pueblo aporta á la masa común para la satisfacción de las necesidades comunes que él mismo ha creado.

Recaudar la renta y aplicarla conforme á la ley, no es suficiente en nuestra forma de gobierno, en la que el pueblo es el soberano y que, por consiguiente, su veredicto es necesario é indispensable para su propia satisfacción y la de las personas ocupadas en su administración.

Es cierto que el inciso 7.º del artículo 67 dice que corresponde al Congreso aprobar ó desechar la cuenta de inversión de los gastos de la administración conforme al presupuesto, pero esto no es suficiente : porque si el Congreso efectúa esta operación, nada de ello se publica y el pueblo todo de la República queda ignorante de la aplicación de muchas leyes, de la recaudación é inversión de los caudales públicos. Así es que este artículo citado no satisface al ojo escudriñador y celoso de la opinión pública. El pueblo que costea los presupuestos públicos debe y necesita tener la certeza de que la renta es administrada



con escrupulosa honradez, y es en atención á este anhelo público que he hecho el agregado de la publicación mensual en un diario de la Capital, por licitación pública, además de hacerlo en el *Registro oficial*.

El actual sistema de falta de publicidad de la recaudación é inversión de la renta es atentatoria de la soberanía popular, y lo único que con ello gana el poder administrador es la desconfianza consiguiente que el pueblo abriga.

Este principio de publicidad respecto á la aplicación del tesoro nacional, es elemental en el gobierno republicano democrático y es raro que habiendo nosotros tomado por base la constitución americana no hayamos estatuido lo que aquélla contiene al respecto. El artículo 1º, sección 9ª, dice : « Ninguna cantidad podrá extraerse del tesoro que no sea para los usos destinados por la ley : de tiempo en tiempo se publicará un estado ó balance regular de la entrada y salida de los caudales públicos. »

Así es que allí están suprimidos los gastos fuera de presupuesto, como debiera ser también entre nosotros con la aplicación estricta de la disposición contenida en este inciso : y está ordenada la publicación del balance de la entrada y salida de la renta.



Los acuerdos de gabinete á los objetos de arbitrar recursos, representa un pernicioso sistema de administrar la renta pública.

Si consideramos al poder ejecutivo con las facultades que la Constitución vigente le acuerda, muy superiores por cierto á las que propongo en este proyecto de reforma, los acuerdos de gabinete valen tanto como una ley, y ¿cuál es el congresal que empleado á sueldo del ejecutivo ó próximo á recibir una comisión honorífica ó favor, observe un acuerdo que importe un gasto ó la creación de algún puesto innecesario acordado á la cofradía de algún elector?

Este es un abuso que es preciso cortar una vez por todas, y si no entramos por el buen camino, las leyes no tienen importancia, desde que un acuerdo de gabinete puede desvirtuarlas ó contrariarlas.

Á propósito, nadie ignora que hay otro abuso de parte del ejecutivo y que es preciso hacerlo notar, y es la costumbre de resolver en acuerdo de gabinete cuáles son las leyes, principalmente sobre obras públicas, que es preciso ponerles el verdadero cúmplase y cuáles no, después de clausurado el congreso.

Como es consiguiente, este es un abuso del ejecutivo sobre el Congreso, que sólo puede ser llevado á cabo en estas épocas en que nada se respeta, en que



al ejecutivo se le considera como un poder superior al Congreso.

Investigando antecedentes en nuestros anales parlamentarios, respecto á la reforma que propongo, he encontrado la sanción de la Cámara de diputados del 3 de agosto de 1855, de lo siguientes artículos :
« Art. 1º. — Se publicarán mensualmente los estados particulares que manifiesten los ingresos y egresos y situación de cada una de las aduanas nacionales y demás oficinas fiscales que perciban rentas. »

« Art. 2º. — En los mismos términos que el artículo anterior, la contaduría general publicará un estado de los ingresos, egresos y de la situación del tesoro nacional. »

El celo y delicadeza que informan estos artículos, reflejo fiel de la honradez de nuestros hombres de la primera hora, es lo que importa la reforma que propongo á este artículo.







« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 14° *Concluye* y firma tratados de paz, de comercio, de navegación, de alianza, de límites y de neutralidad, *concordatos* y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las potencias extranjeras : recibe sus ministros y admite sus cónsules. »

14° Firma tratados de paz, de comercio, de navegación, de alianza, de límites, de neutralidad y de *arbitraje* y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las potencias extranjeras : recibe sus ministros y admite sus cónsules.

La reforma de este artículo consiste en suprimir los *concordatos* y en el agregado de tratados de *arbitraje*. Lo primero es consecuencia lógica de la nega-



ción de sostenimiento del culto; y la segunda lo hace más explícito al artículo, con tanta mayor razón, cuanto que hemos sentado como principio inquebrantable de derecho internacional, esta forma de definir nuestras diferencias con los demás Estados.

En los comienzos de nuestra organización política, ya resolvimos establecer el principio de arbitraje como norma de conducta, para cimentar la paz y la concordia con los pueblos civilizados.

El 2 de septiembre de 1856, el Congreso argentino resolvió adherir á la resolución del Congreso internacional de París de 1856 en la forma siguiente: « Siempre que entre dos Estados se susciten serias dificultades, antes de apelar á las armas, recurran á los buenos oficios de un poder amigo, en cuanto esto sea compatible con las circunstancias: por encontrarse estos principios de acuerdo con el espíritu de nuestras instituciones y la política manifestada por el gobierno argentino. »

Posteriormente á esta fecha, hemos cimentado con hechos positivos este principio de paz y de confraternidad internacional, lo hemos puesto en práctica con Brasil, Chile y Bolivia en nuestras disidencias de límites y hemos asistido á varios congresos

internacionales, en los que hemos sostenido siempre la misma tesis.

Suprimo la palabra « concluye » porque en realidad, esta expresión compete á la acción del Congreso, que es quien aprueba ó desecha los tratados firmados por el poder ejecutivo : es decir, da su última palabra, concluye el asunto.

Esta expresión ha sido tomada de la constitución de la república de Chile, la cual en su artículo 82, inciso 19°, refiriéndose á las atribuciones del presidente, dice : « concluye y firma tratados, etc. » : debiendo hacer notar que hay constituciones monárquicas como la de Bélgica, por ejemplo, que no tienen tal disposición, porque los tratados deben ser materia de ley, de manera que la firma del presidente al celebrarlo, no expresa la definitiva voluntad, por más que se tenga la seguridad de la aquiescencia del Congreso.







« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 15° *Es comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y de tierra de la Nación.* »

La supresión de este inciso está explicada en el inciso 21° *b*, del artículo 67, razón por la que no la comento en esta parte.





« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 17° Dispone de las fuerzas militares, marítimas y terrestres y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación. »

17° Dispone de las fuerzas militares, marítimas y terrestres y corre con su organización y distribución *en las fronteras del territorio y en el desierto ; y en caso de tener necesidad ineludible de situar parte de ellas en las capitales de provincia, sólo podrá hacerlo con acuerdo del Senado, hasta que haya desaparecido la causa determinante.*

Largos años de experiencia, nos han demostrado lo que en varias partes de este trabajo he hecho notar, y es el omnímodo y discrecional poder de que dispone el presidente de la república : de manera que, cuando en sus deliberaciones no prima un es-



píritu de sincero patriotismo, se entroniza el abuso, todos los resortes legales se enmohecen, entúrbianse las aguas de la fuente, y en la paciente vida de la democracia ultrajada y escarnecida, no se espera sino la primera chispa anunciadora de sus reivindicaciones para erguirse como soberana, rompiendo las ligaduras que la oprimen.

Este enorme poder del presidente, acordado en la hora psicológica de nuestra organización política, á raíz de acontecimientos que imponían la necesidad de una sola voluntad firme y enérgica, capaz de contener el desborde de pasiones mal comprimidas, preparadas para la anarquía, es menester que sea disminuído y controlado hoy que vivimos en paz y armonía, dedicados al trabajo fecundante, para evitar desviaciones inconvenientes del poder, los que traen siempre resultados, cuyas consecuencias no es posible prever.

Si la organización nacional fuese calcada á base de la monarquía, con poderes absolutos y discrecionales propios al jefe del Estado, nada tendríamos que observar; pero como la base del gobierno democrático reside en la soberanía del pueblo, el cual debe mirar por la excelencia de sus derechos, es él quien ha de imponer las disposiciones convenientes

para que las autoridades creadas por él mismo no puedan abusar de las facultades que le ha conferido.

Las fronteras terrestres de la Nación que representan miles de leguas y nos delimitan con cinco estados extranjeros, están abandonadas en toda su extensión, porque la fuerza de línea desempeña otra misión más alta : permanece en las capitales de provincia, custodiando gobernadores advenedizos que están muy lejos de ser los exponentes de la voluntad ciudadana, y con la orden terminante de ahogar las manifestaciones populares en demanda de sus fueros y de la autoridad conferida ultrapasada.

Este es el papel que desempeñan en nuestro país, los distinguidos jefes y oficiales del ejército nacional, y conste que lo confesamos con dolor. El soldado argentino en las capitales de provincia, no es sino un instrumento de la política absorbente del presidente de la república. No se diga que las *necesidades de la Nación* imponen tal medida, porque la Nación no computa entre los bienes que fomenta el reinado de las oligarquías adueñadas de los destinos de las provincias, como los señores feudales de sus siervos y feudos. Las necesidades á que se refiere el artículo cuya reforma propongo, alude con la distribución de la fuerza militar, no se refiere al apuntala-



miento de situaciones de fuerza que el abuso de las imposiciones oficiales crea, sino á la custodia y seguridad de las fronteras y del orden público.

El Chaco y Formosa, son vastos territorios desiertos, guarida de salvajes y malhechores, y sólo hay unos cuantos soldados y oficiales internados en el primero: el fuerte de la fuerza está colocado estratégicamente en una estación de ferrocarril sobre los límites de Santa Fe y Santiago, pronta á responder al llamado del jefe supremo para ahogar la libertad cívica que pugna por desempeñar el rol de su incumbencia. Esto es lógico del punto de vista del modo de ser de los presidentes, conforme á las bases de la actual Constitución y á los abusos del poder que ella presenta, pero no lo es del punto de vista del gobernante honrado, respetuoso de los sagrados derechos de los ciudadanos.

El jefe del Estado que es fiel mandatario del pueblo, no precisa de la fuerza de línea, porque tiene de sobra con la fuerza moral que le acredita la corrección de sus procederes y el respeto de sus conciudadanos.

Siuviésemos que enumerar los múltiples hechos que registra la vida de las provincias, en los que el ejército ha sido autor ó cómplice, en favor ó en con-





tra de las autoridades locales, abordáramos un tema interminable á la vez que innecesario, porque está en la conciencia de todos, el papel funesto de la fuerza de línea en nuestra achacosa democracia, prematuramente envejecida.

¿Qué razones puede aducir el presidente de la república para cohonestar la resolución de estacionar batallones de línea en las capitales de provincia?

Si á juicio del presidente, las situaciones de provincia tienen de su parte la mayor suma de voluntades y los gobernantes, por sus relevantes condiciones el respeto de sus conciudadanos ¿qué necesidad tiene de establecer fuerzas de línea en sus capitales?

Este hecho se explica en diversas maneras.

Los caudillos de provincia, situacionistas, muy posesionados de su papel de mentores del pueblo, le asignan una importancia económica transcendental. Dicen que la estadia de un batallón de línea en la capital, activa y engrandece el comercio, porque los gastos de proveeduría y los sueldos que recibe son distribuidos en las casas y mercados de la localidad. ¡Desgraciada la provincia que tenga necesidad de tales recursos para su vida económica, y más desgraciada aún, la que vende su libertad por cosa tan baladí!

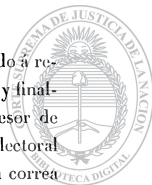


El presidente no explica la razón, porque es costumbre no hacerlo, desde que nadie le interroga, pero si llegara este caso improbable, diría que lo hace en homenaje al orden público ; lo que nos conduciría á plantear el duro pero ineludible dilema : ó todas las provincias son ingobernables, ó todos los gobernantes son espurios y necesitan de la fuerza nacional para conservar su existencia.

Lo primero no es aceptable, porque la cultura en las masas hace camino : las fuerzas conservadoras son bastante poderosas para imponerse al desorden ; la intelectualidad no es atributo de una docena de hombres, sino de centenares ó miles, y finalmente, porque el caudillo del interior de otrora se va, y se va para no aparecer más en el escenario.

No siendo cierto lo primero, es incuestionable la exactitud de lo segundo.

Digase lo que se quiera, y arguéntese de la más extraña manera, y no se encontrará razón alguna que niegue el postulado que es carne en la conciencia nacional : las fuerzas de línea en las capitales de provincia, son enviadas por el presidente de la república, para ahogar las libertades populares ; para que sean enviados al Congreso, diputados aptos para ingresar al incondicionalismo ; para que expirado el



periodo del gobernador, éste ingrese al Senado a retribuir *al gran elector* los servicios prestados ; y finalmente, para que este mismo, deje un sucesor de iguales calidades, y funcione la máquina electoral con los mismos elementos, formando así una correa sin fin.

El ejército nacional está en las provincias, á guisa de baluarte, ¿ para qué? para defender la inmoralidad gubernativa, la anormalidad de la vida cívica, la corrupción política, en contra de los dictados del patriotismo, de la Constitución y de los anhelos populares.

Así se emplea la autorización discrecional que el artículo que comento acuerda al primer magistrado : así se hizo ayer y así se procede hoy, y no se oye una voz en el Congreso que interroge al poder ejecutivo, qué necesidades tiene la Nación para situar las fuerzas de línea en las capitales de provincia.

Como recrimino al Congreso por su actitud pasiva, podrá hacérseme este argumento : ¿ por qué se establece que con la anuencia del Senado se podrá situar el ejército en las capitales de provincia ?

La razón es obvia : yo pienso de esta manera, del punto de vista de las reformas que proyecto. Si los senadores, así como los diputados no están habilita-



dos para aceptar puesto alguno del primer magistrado, y no han de poder ser reelectos sino después de un período de cuatro años, el Senado dejará de ser un cuerpo incondicional, para ser una entidad perfecta, respetable y respetada, al cual no podrá dirigirse el presidente, sin estar munido de documentos que sinceren su actitud en cada caso.

Por otra parte, si las reformas que propongo fuesen llevadas á cabo, terminariamos, una vez por todas, con las presidencias clandestinas y con los unicatos presidenciales : antecedentes que estarían relegados al olvido, ó cuando más, en las condiciones de reminiscencia de una época prehistórica, de nuestra democracia del porvenir.

La condición de que la fuerza de línea colocada en una capital de provincia ha de desalojarla, á la terminación ó desaparición de la causa que motivó su envío, tiene por objeto poner á cubierto los derechos inviolables de la soberanía de los pueblos, del poder absorbente del presidente de la Nación. Esta reforma no tiene mayor importancia para los hombres honrado y patriotas al frente del gobierno del país, pero la tiene en alto grado, para los que no acusan estas calidades, y en los diversos períodos de gobierno transcurridos hubiere desempeñado un importantísimo papel.



Antes de terminar esta exposición, debo hacer notar otro grave inconveniente que nace del estacionamiento de cuerpos del ejército en las capitales de provincia, así como en la capital federal.

Es cosa que no se discute, el que en nuestro país no hay, ni puede haber revolución armada, sin que parte del ejército esté comprometido. No necesito rememorar los movimientos revolucionarios del 74, 90, 93 y 904, porque son acontecimientos de ayer, para demostrar que todos ellos han sido llevados á cabo á base del ejército de la Nación, con batallones íntegros comprometidos, y con distinguidísimos jefes de alta graduación. En estos casos se increpa siempre á los jefes y oficiales, exponiendo que ésta no es la misión del soldado : pero éste es un cargo injusto, porque los jefes y oficiales no son parias ni mercenarios, son argentinos como los que más y ellos pierden más que cualquier otro ciudadano.

Evidente es, que el Presidente, cualquiera que él sea, debe tener como su principal norma de conducta, cimentar y garantizar la paz que es el sol que ilumina todos los espíritus y todas las energías ponderadas de la riqueza nacional : y entre los diversos factores que á este ideal conducen ¿no es acaso uno de los principales, alejar el objeto que es materia de

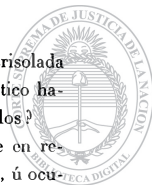
tentación, para los que anhelan con la más acrisolada sinceridad, regenerar el país en sentido político haciendo uso del supremo derecho de los pueblos ?

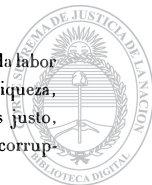
¿ Es posible que haya alguien que piense en revolución, estando el ejército en las fronteras, ú ocupado en conquistar el desierto y reducir á los aborígenes del Chaco, Formosa y Tierra del Fuego á la vida civilizada ?

¿ Quién puede pensar en revolución, sin batallones ni milicias organizadas en las provincias, ni en la Capital ?

Cada día que pasa se acentúa con más firmeza el espíritu conservador y la tendencia revolucionaria va extinguiéndose como una antorcha que se apaga — felizmente estamos llegando á esta jornada por todos apetecida — pero es conveniente acelerar y cimentar fundamentalmente esta conquista y aparte de muchos otros factores que á este fin conducen, uno de ellos es el que apunto como eficaz.

Cuando el país fué constituido, era una necesidad acordar la facultad discrecional que contiene el inciso vigente y él tuvo toda la eficacia que sus autores le asignaron. Posteriormente degeneró en arma dispuesto para sostener oligarquías como hasta el presente: pero en el momento actual, en que todas las





fuerzas del país están empeñadas en la fecunda labor de acrecentar la producción y por ende la riqueza, que prospera en la paz y en la libertad, no es justo, ni es honrado que mantengamos la facultad corruptora del inciso que comento.

La fuerza, cuya alta misión es la defensa nacional, está desviada de su papel, y los destacamentos en las provincias son el germen latente : de la anarquía, si los jefes inspirados en sentimientos patrióticos son más ciudadanos que soldados, ó de la oligarquía, si, respetan más las órdenes inadecuadas é irrespetables que los deberes que impone el llamarse argentino. Así es, que bajo cualquier faz que se considere esta cuestión, se verá siempre que el ejército está mal en las provincias. Este es asunto sobre el que no cabe discusión : lo hemos palpado ayer y lo vemos hoy : y á propósito, ¿ cuál es, en la actualidad, la capital de provincia que no tiene un cuerpo de ejército de la nación ?

¿ No es acaso cierto que en Corrientes, es un jefe nacional con mando de fuerza quien convulsiona la provincia y el gobernador legal es derrocado ? ¿ Y no es cierto que en Santiago del Estero la fuerza nacional desempeñó un papel diverso reponiendo un gobernador que se habia hecho el muerto, según su

propia expresión? Y finalmente, ¿no es deprimente para un jefe ú oficial de escuela ocuparse en derrocar ó en hacer revivir gobernadores?

Aparte de todos estos inconvenientes, la autonomía de las provincias con batallones íntegros en sus capitales, permanentemente, está perdida, en homenaje al *jefe supremo de la Nación*, que todo lo avasalla.

Volvamos por la normalidad de esta autonomía, por el alto papel del soldado argentino, por el orden, por la paz y por el progreso, reformando el inciso en la forma que propongo.





« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 19° *Declara en estado de sitio uno ó varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, sólo tiene esta facultad, cuando el Congreso está en receso, porque es atribución de este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23.* »

Atentos los fundamentos aducidos para la eliminación del artículo 23, queda impuesta la supresión de este inciso, con tanta mayor razón cuanto que por éste se autoriza al poder ejecutivo para usar de esta tan delicada facultad, de cuyo uso se ha llegado á los mayores excesos. Pero, justo es hacer notar en honor del actual presidente el no haber hecho uso

de esta facultad, en momentos de agitación obrera, y muy especialmente en los nueve primeros días de mayo de este año. Y á esta manera de encarar el asunto, desconocida para los anteriores presidentes, algunos de los cuales gobernaron en permanente estado de sitio, se debió la terminación de la huelga general.





« Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones :

« 22° El presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión, que expirarán al fin de la próxima legislatura. »

22° El Presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión, que expirarán *en las sesiones extraordinarias inmediatas que se celebraren, ó el 31 de mayo de las próximas sesiones ordinarias del Congreso.*

Esta reforma consta de dos partes. La primera implica que cuando el Congreso está en ejercicio debe él llenar todas sus funciones de tal, y entre és-

tas cabe la de legalizar los actos del ejecutivo, como son los nombramientos en comisión hechos en época del receso.

Las facultades propias del Congreso ó del Senado solamente se transfieren al presidente, durante el receso, es decir, mientras no está en ejercicio, sea ordinaria ó extraordinariamente : pero cuando funciona, no puede delegar facultad alguna, porque el receso ha desaparecido.

Supongamos que el Congreso está en sesiones extraordinarias ó de prórroga, y es derrocado el gobierno de una provincia : en este caso y bajo el imperio de la actual Constitución, ¿el poder ejecutivo, estará habilitado para decretar la intervención haciendo caso omiso del Congreso, por no funcionar éste ordinariamente ?

Es claro que no. De la misma manera los nombramientos producidos en comisión ó provisoriamente durante el receso, deben ser visados por el Senado en las sesiones extraordinarias ó de prórroga, así como las que se produzcan mientras sesiona el Congreso.

La segunda parte de la reforma tiene por objeto limitar el plazo fijado en el inciso vigente para la duración de los nombramientos en comisión.





Este inciso está calculado para que los acuerdos del Senado no pasen de una ficción, si se le ocurre al presidente. Un nombramiento en comisión, hecho el 1° de octubre, por ejemplo, cuando las cámaras están en receso, termina *al fin de la próxima legislatura*, es decir, el 30 de septiembre del año siguiente y como el Congreso está nuevamente en receso después de esta fecha, la misma persona puede ser nombrada el 1° de octubre de este año hasta el 30 de septiembre del siguiente, y así sucesivamente, sin necesidad alguna de acuerdo para un nombramiento definitivo.

¿Cómo es posible que un nombramiento en comisión, producido en el receso de las cámaras por una delegación provisoria de facultades, ha de perdurar los cinco meses de sesiones ordinarias, hasta que el Congreso clausure sus sesiones?

¿Qué objeto tiene entonces la facultad que la Constitución acuerda al Senado para acordar ó no un nombramiento en cinco meses de sesiones ordinarias?

Cuando el ejecutivo hace un nombramiento provisorio en el receso, debe solicitar el acuerdo correspondiente en las primeras sesiones del Congreso por respeto á las atribuciones de este alto cuerpo, y espor

esta razón que se fija la fecha del 31 de mayo como término de ese nombramiento, dejando el período de un mes para el trámite necesario.

El inciso vigente ha sido tomado de la constitución de Estados Unidos de Norte América, transformado viciosamente en la nuestra.

La constitución de aquella nación, en su artículo 2º, sección 2ª, dice : « El presidente podrá llenar las vacantes que ocurriesen durante la suspensión del Senado, concediendo comisiones interinas que terminarán cuando el cuerpo vuelva á continuar sus sesiones. »

La parte final de esta disposición, significa que, la legalización de los nombramientos interinos con el acuerdo del Senado, se ha de hacer en las primeras sesiones de este cuerpo, no al final de las sesiones ordinarias.

Con lo expuesto, considero suficiente para demostrar la bondad de esta reforma.





« Art. 87. — Ocho ministros secretarios tendrán á su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente, por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Una ley especial deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministros. »

Art. 87. — Ocho ministros secretarios, á saber : *del interior, de relaciones exteriores y justicia, de hacienda, instrucción pública, guerra, marina, obras públicas, comercio y agricultura*, tendrán á su cargo el despacho de los negocios de la Nación, refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Una ley deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministros.

La reforma contenida en este artículo, es sólo á los efectos de excluir la rama del culto, consecuente-

mente con lo expuesto en el artículo segundo suprimiendo su sostenimiento, y demás que son correlativos de éste.

Incluyo el ramo de justicia á la cartera de relaciones exteriores porque es más propio de ésta que de cualquier otra, por motivo de asuntos judiciales que entran en el dominio del derecho internacional, y porque acordando á la justicia el carácter de independencia que debe singularizarla, la acción del ministro en esta función es por demás limitada. El ministro de justicia, en las condiciones de las reformas que propongo, es el intermediario entre el poder judicial y el poder ejecutivo.





« Art. 89. — *Los ministros no pueden por sí solos en ningún caso, tomar resoluciones, á excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.* »

Art. 89. — *Los ministros nombrarán los oficiales de sus secretarías y demás empleados inferiores, en las mismas condiciones y por igual periodo de tiempo á que se refiere el inciso 10º del artículo 86. Podrán también por sí solos tomar resoluciones concernientes al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos. Para ser ministro se requiere ser ciudadano nativo en pleno ejercicio de sus derechos.*

Los ministros, en la actualidad, tienen un papel secundario, no responden á la categoría del cargo : no pueden ni deben ser simples secretarios del presidente para refrendar sus actos, pues que también



tienen graves responsabilidades en todos los asuntos en que intervienen. Los ministros necesitan colaboradores eficaces en sus empleados inmediatos de secretaría y deben ser nombrados por ellos, y cuando hay cambio en alguno de éstos, esos empleados deberán permanecer en sus puestos, porque no desempeñan empleos políticos y tienen completo dominio en los asuntos de su incumbencia. ¿No es acaso, ridículo que el presidente, *nombre y separe por sí solo* los oficiales de las secretarías de los ministros, de conformidad al inciso 10° del artículo 86? Esto no puede ser, porque es demasiado arbitrario. ¿Á qué queda reducida la categoría de un ministro de estado si el presidente puede destituir sus empleados de secretaría y reemplazarlos en cualquier momento por quienes le dé gana de hacerlo?

Un ministro es una alta entidad política, y por lo tanto, es conveniente acordarle la facultad de nombrar sus empleados inmediatos de secretaría. Por otra parte son tan múltiples y elevadas las atribuciones del presidente y de tantas responsabilidades, que no es propio, ni regla de buen gobierno, entorpecer su acción en los grandes negocios de estado, con nimios asuntos que amenguan su alta investidura.

Desde algunos años á esta parte, no hay puesto



por insignificante que sea, que no dependa directamente de la voluntad presidencial. Los ministros tienen á veces sus candidatos, y cuando llega el crítico momento de pedir la venia al presidente para hacer extender el nombramiento, éste le dice : — Yo me comprometí antes que usted. Haga extender el decreto nombrándolo á fulano.

— Pero...

— No hay pero. El nombrado debe ser quien yo indico.

¿Qué hace el ministro ante semejante negativa ?

Qué ha de hacer, sino continuar considerándose ministro.

Á este estado hemos llegado en estos últimos años por obra y gracia de las facultades arbitrarias acordadas por la Constitución al presidente de esta monarquía con el nombre de república.

La segunda reforma que propongo á este artículo es de transcendental importancia, del punto de vista de la nacionalidad de origen y para demostrarlo, basta hacer notar que un ciudadano naturalizado no estaría en condiciones de desempeñar el ministerio de relaciones exteriores y por más que sus condiciones de competencia y honorabilidad parecieren in-

sospechables, no sería propio y el pueblo no abrigaría confianza en sus procederés.

El único antecedente que encuentro al respecto, pertenece á la libérrima constitución monárquica de España de 1812, la que en su artículo 223, dice:

« Para ser secretario de estado se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanía.





« Art. 94. — El poder judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. »

Art. 94. — El poder judicial será uno solo en todo el territorio de la Nación y tendrá su asiento principal en la capital de la República, donde estará formado por la alta corte de justicia y demás tribunales inferiores. En las provincias será ejercida por una corte ó tribunal de apelación y uno ó más jueces en lo civil, comercial, criminal y de pobres y menores; y en los territorios nacionales por jueces con apelación ante el tribunal de la capital de la provincia más inmediata. Los jueces de cualquier categoría que sean, no podrán tomar participación alguna en elecciones, escrutinios ú otros actos políticos.

La reforma de este artículo encierra dos cuestiones de la más alta y capital importancia que sin reticencias las planteo, con la íntima convicción de que hago obra buena; una sola justicia para toda la Na-

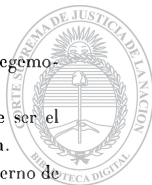
ción es la primera, y la independencia absoluta de su carácter, la segunda.

Tiempo era ya de que se iniciara en nuestro país este género de cuestiones, haciendo honor á los progresos institucionales de la época en que actuamos y á los que auspician las sociedades de todos los pueblos, en procura de una justicia de verdad, positiva, autónoma, inmaculada y éstos son los atributos en que traduzco el pensamiento de esta reforma.

Nada hay que conmueva más hondamente el organismo individual que los intereses materiales, principalmente, cuando se los considera lesionados; y por consiguiente nada hay más grande que la justicia de verdad, que el fiel de los derechos sin falsas pesas.

Si hay una rama del poder que, en un país democrático como el nuestro, debe extender su autoridad niveladora, con un solo régimen, una sola voluntad y un solo designio en todos los ámbitos del territorio, y sin herir ningún derecho, grande ó pequeño, social ó político, es sin duda alguna la justicia. Desde que todos los habitantes de este país disfrutamos de la misma libertad y tenemos iguales derechos ante la ley, « sin fueros personales ni títulos de nobleza », también debemos ser regidos por los





mismos principios de justicia y la misma hegemonía de los magistrados que la administran.

Iguales derechos y una sola justicia, debe ser el ideal de toda sociedad libre y bien organizada.

Y á propósito, ¿cuál es el concepto moderno de justicia ?

La aplicación de los principios que rigen las relaciones de los hombres y de las cosas : la ejecución de la ley ; la estricta razón del derecho discernido en favor de quien lo justifica ; la suprema voluntad y el recto juicio de la autoridad independiente de todo otro poder que dirime la contienda. En su acepción más lata, es fuerza que manda, brazo que ejecuta, hacha que desbasta, espada que corta.

Y siendo esto así, como en realidad lo es, ¿cuándo estará mejor administrada la justicia ? ¿Cuándo hay uniformidad en el pensamiento y en la hegemonía de los encargados de administrarla, ó cuando se hace uso de procedimientos y criterios diversos y sin la independencia para ejercerla ?

Evidente es que en el primer caso, porque la mejor garantía de los derechos reside en el pleno conocimiento de los elementos sociales, de que no hay sino un solo punto de mira, una sola medida, un solo procedimiento y un solo criterio que la aplica.



En los primeros tiempos de las sociedades, la justicia era administrada por el Rey. Á este respecto Bodin (1) dice : « Todos los antiguos y sabios políticos están de acuerdo, en que los reyes no fueron establecidos para otra cosa que para hacer justicia, como decía Herodoto hablando de los Medos y Cicerón refiriéndose á los romanos... No solamente los príncipes medos, griegos y latinos sino también los capitanes en jefe, considerados como soberanos entre los hebreos no tenían otra calidad que la de jueces... La razón principal que puede mover á los príncipes á juzgar personalmente á sus súbditos, es la obligación mutua que existe entre ellos y el príncipe. »

La sabiduría de Salomón, como es sabido, consistía en su manera de administrar justicia.

Montesquieu, refiriéndose á los primeros reyes de Roma (2), dice : « El Rey comandaba los ejércitos : tenía la intendencia de los sacrificios ; *el poder de juzgar los asuntos civiles y criminales*, etc.

Con pequeñas variantes y durante largos años, el poder de juzgar ha sido un atributo de los magistrados que ejercían el poder ejecutivo.

(1) *Les six livres de la république*, edición de 1594.

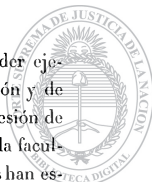
(2) *L'esprit des lois*, tomo 1, página 255.



Estos principios rigieron largo tiempo. En la edad media son los señores feudales y la cleresía en sus feudos quienes administraban justicia. En la edad moderna, con el progreso de las sociedades organizadas en naciones, el derecho público hace camino y se inicia la justicia en forma diversa de la anterior : el gobierno monárquico de los estados europeos reconoce, propiamente dicho, dos poderes : ejecutivo y legislativo y un semipoder que es el judicial, por cuanto éste no es sino una dependencia del primero. Los jueces son nombrados por el ejecutivo y administran justicia en nombre del Rey, quien delega en ellos esta atribución.

De aquí nace la facultad que tiene el soberano para rever los actos judiciales en materia criminal, cuando acuerda gracia y conmuta penas. Esta facultad en las repúblicas democráticas, es absurda y monstruosa y en todo caso ella debiera ser atributo del más alto tribunal judicial.

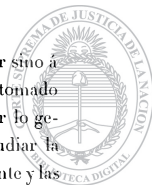
El derecho público contemporáneo en los países democráticos ha sancionado ya la conquista de que la justicia es el tercer poder del estado, pero no hay país alguno que haya puesto en práctica este gran principio y nada más justo que nosotros lo establezcamos.



La justicia debe ser independiente del poder ejecutivo, y sus juicios, dentro de la constitución y de las leyes, deben ser considerados como expresión de última voluntad. El ejecutivo no debe tener la facultad de poner su mano donde los magistrados han estampado el sello de sus altas funciones, en salvaguarda de la salud social.

El congreso de 1817, con la noción más clara que la de los constituyentes del 53, sobre la independencia de los tres altos poderes que constituyen el gobierno y en especial, de la del poder judicial, en el reglamento provisorio, promulgado por bando solemne el 31 de enero de 1818, en su artículo 2°, sección IV, capítulo I, estatuyó lo siguiente: « *El poder judicial no tendrá dependencia alguna del poder ejecutivo supremo* y en sus principios, forma y extensión de funciones, estará sujeto á las leyes de su instituto. »

Demostrar la inconveniencia de la separación de la justicia en fuero nacional y fuero provincial, es asunto que ante la luz de los hechos, no presenta mayores dificultades ; pero antes de exponer estos antecedentes, preciso es que indagemos el origen de esta dualidad.



Tratándose de instituciones no podemos ir sino a Estados Unidos, de cuya constitución hemos tomado lo bueno y lo malo que aquella contiene y por lo general sin método racional. Allí vamos á estudiar la justicia, su organización, su espíritu dominante y las causas concurrentes de su eficiencia, y de su análisis resultarán enseñanzas que es preciso aprovechar.

Previamente, debo recordar que la organización y atribuciones del poder judicial de nuestra Constitución, son una copia literal del mismo asunto de la constitución de Estados Unidos. ¿Acaso ésto importa que este régimen sea el más adelantado, el que permita la justicia más rápida, más barata y más cierta, ó el que más se amolde á las costumbres y necesidades de la sociedad para asegurar sus múltiples progresos?

La dilucidación de este asunto es de la mayor importancia, porque, para nosotros, todo lo que tiene el sello de United States of America, se acepta sin discusión alguna, á guisa de principios apotegmáticos, como si las ciencias sociales tuvieran la universalidad de las matemáticas, cuando es por demás sabido que las razones que las particulariza, son el sujeto, el medio y el tiempo.

La justicia en Estados Unidos no es lo que puede



llamarse la última palabra de la ciencia, amoldada al criterio científico, á un principio de uniformidad y á la delimitación incontaminada como poder autónomo. Esta rama del poder contiene defectos capitales; impuestos por la necesidad, al sancionar la constitución en 1897.

Con otro motivo he expuesto las dificultades que parecían insalvables para constituir la unión americana. Trece estados independientes entre sí, con diversas tendencias, formas peculiares de gobierno, situación geográfica, extensión, economía y población diversas también, como sus costumbres procuraban constituir una sólo Nación y es consiguiente que para llegar á ese fin fuese necesario establecer una serie de recíprocas concesiones de parte de los convencionales de los estados. Como es sabido, esto no fué suficiente. La revisión de la Constitución por la legislatura de los estados confederados, fué una nueva vía crucis por la cual tuvo que pasar la obra de los constituyentes.

La situación de Estados Unidos era en esos momentos por demás delicada y angustiosa: porque, á la escasez de recursos con que contaban y á las perspectivas de anarquía palpitante, se agregaba el fantasma de la monarquía inglesa que las acechaba, y

que la clarovidencia de sus patriotas descubría sus tentáculos entre las brumas de la atmósfera que respiraban.

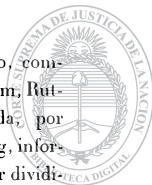
En cada uno de los estados se libraron acalorados é importantísimos debates en los que no escaseó el talento y el patriotismo de sus grandes hombres en franca discusión y las enmiendas excedieron de doscientas, pero en resumen pudo conciliarse la aceptación de un número reducido entre las que figuraba ésta : « *los miembros del Senado y de la Cámara de diputados, no podrán desempeñar cargo alguno civil bajo la autoridad de los Estados Unidos* » (sec. 6ª, art. 1º).

Estados Unidos se dió, pues, una constitución acomodada á las dificultades del momento, dadas las circunstancias apremiantes que imponían la unidad nacional, no hizo lo que sus principales hombres consideraban que debía hacerse en las diversas ramas que componen el gobierno, sino lo que era posible.

Quiero remorar un caso concreto de esta afirmación, demostrativo del por qué cada uno de los estados de la Unión está representado en el Senado por dos miembros. La comisión nombrada para darle forma al pensamiento más ó menos uniforme de los convencionales y redactar las bases de la Constitu-



ción y la comisión revisadora de este trabajo, propuestas : la primera por Randolph, Gorham, Rutledge, Ellsworth y Wilson, y la segunda, por Johnson, Hamilton, Morris, Madison y King, informaron que la legislatura nacional debía estar dividida en dos cuerpos : el Senado y la Cámara de diputados, siendo el número de representantes para ambas cámaras, á base de la población de cada Estado. Massachussets, Pensylvania, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, fundados en su escasa población, y temiendo ser absorbidos por Connecticut, New York, New Jersey, Delaware y Maryland, opusieron tan tenaz resistencia, que fué necesario ceder, nombrándose una comisión de compromiso, iniciada por Pinckney, convencional por Carolina del Sur, obligándose á estar y aceptar lo que ella decidiera, la cual debía componerse de un diputado por cada Estado. Tras largos y acalorados debates, Franklin, representante de Pensylvania, triunfó con la fórmula de que la representación en la Cámara de diputados fuese con arreglo á la población, y que el Senado se compondría de un número igual para cada Estado, con prescindencia de la población, como estaba compuesta la comisión. « Este es el origen de esa composición singular y contraria á los prin-





cipios democráticos del cuerpo legislativo de los Estados Unidos y que se copió en la constitución de la confederación. Hamilton, Madison, Morris y todos los grandes hombres de la convención de los Estados Unidos fueron vencidos, ó más bien, sacrificaron sus principios para conseguir la unión de los estados menores » (3).

Así es que Estados Unidos se dió una constitución de circunstancias.

Franklin exteriorizó gráficamente este pensamiento, cuando dijo : « Estamos haciendo ensayos políticos : veremos lo que de ellos sale ». Efectivamente, no podían encontrar en aquella época, molde alguno constitucional que se acomodara al espíritu libertario en que nacía, y era forzoso hacer experiencias más ó menos felices, impuestas por la necesidad.

Bien pues, la constitución así formada por vía de ensayo y adaptada á especiales circunstancias en diversas condiciones á la de nuestro pueblo es, puede decirse, la misma que hasta ahora nos sirve de modelo inalterable.

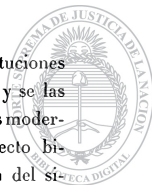
James Brice(4), al tratar de la justicia de los Esta-

(3) Convención nacional de 1860, discurso del doctor Vélez Sarsfield, sesión del 25 de abril.

(4) *La république américaine*, tomo II, página 122.

dos Unidos, dice : « Todas las viejas instituciones inglesas han sido transportadas, tal cual, y se las nota á menudo, en medio de las instituciones modernas que las rodea, como acontece con el aspecto bizarro que los tejados curiosos de una casa del siglo xvii presenta en medio de las terrazas de un arrabal de Londres. »

En la convención de 1860, impugnando el doctor Vélez Sarsfield la parte del artículo 97 de la Constitución del 53, referente á la atribución de la Corte suprema en el conocimiento y decisión de los conflictos entre los poderes públicos de una misma provincia, historió el estado de los pueblos de la Unión en la época en que se dictó la Constitución y fundamentó las causas de la competencia de los tribunales federales, expresándose así : « Eran tal los odios mutuos, que creían que cuando se tratara de los derechos ó intereses de los habitantes de un estado, en los tribunales de otro estado con un súbdito de él, la justicia no sería bien administrada. Esta fué la razón que se tomó para que las cuestiones de los habitantes de un estado en otro, sea cual fuere la naturaleza de ella, fuese cuestión juzgada por los jueces federales : pero no era sólo aquellas cuestiones que nacían de la Constitución, porque la jurisdicción de los jue-





ces era sobre las personas y sobre las cosas. Respecto á los extranjeros, se dijo lo mismo en sus pleitos con los naturales de un estado serán que ellos fuesen juzgados también por los jueces federales.

« Las cuestiones de los cónsules se juzgan lo mismo, en previsión de alguna injusticia que pudiera haber en el reconocimiento de sus derechos ó en la forma de juzgarlos y para que no trajesen cuestiones diplomáticas, se puso en la constitución de los Estados Unidos que habían de ser juzgadas esas cuestiones particulares por un juez de cuya sentencia pudiera apelarse á la corte federal á fin de que una cuestión diplomática no dependiese de un estado. »

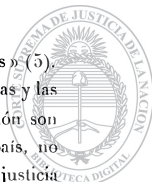
La organización judicial y el espíritu de las leyes, representan la mayor anarquía entre los diversos estados de la Unión, cada uno ha codificado sus leyes, informadas por sus costumbres y la jurisprudencia estatuida por sus jueces ó por la tradición desde la época colonial. El derecho es diverso entre los estados así como los procedimientos judiciales, y á no ser las condiciones especiales de carácter que distinga al pueblo yanqui, para el que las costumbres y las tradiciones valen tanto ó más que las leyes escritas, el tan diverso criterio de la justicia en todos los estados de la Nación, ocasionaria gravísimos trastornos.

Refiriéndose al inconveniente que comporta la diversidad de códigos, Bryce, dice : « Los jurisconsultos los más capaces y los más ilustrados condenan estos códigos que hacen el derecho más incierto y menos científico » : y téngase presente, que de conformidad á la sección primera del artículo 4º, cada estado está obligado á dar entera fe y crédito á todos los actos públicos, registros y autos judiciales de los demás.

La organización judicial en los estados es completamente diversa. Allí hay cortes de litigios comunes, cortes de registro y examen de testamentos, cortes de subrogación, cortes de prerrogativas, cortes de asises, cortes de huérfanos, cortes de sesiones generales de paz y de encarcelamiento, corte trimestral de condado, corte de Hustings, etc., etc.

« En una constitución, se obliga á ser puntual estipulando que, si el juez llega á la corte después de la media hora fijada para la apertura de la sesión, los abogados de las partes tienen derecho de entenderse para designar un ciudadano que administre justicia y que se pondrá inmediatamente á juzgar el proceso. Y en California, el juez no puede percibir su sueldo sino después de haber comprobado, que no tiene otras causas á juzgar, que las que





le han sido sometidas antes de noventa días» (5).

Además de que las prácticas administrativas y las costumbres en los diversos estados de la Unión son diametralmente opuestas á las de nuestro país, no podemos afianzar nuestra organización de la justicia dividida en nacional y provincial, en la nacional y de los estados de la unión americana. Allí está bien la división, desde que los estados tienen cada uno, sus códigos especiales, pero no entre nosotros, que hemos estipulado una sola codificación nacional para todo el territorio de la República. En nuestro país se tiene solamente la justicia provincial, á los efectos de aplicar los códigos nacionales con diversos procedimientos y criterio, favorecer al extranjero con dos fueros judiciales, á elección, y dejar el nombramiento de los jueces á los gobernadores de provincia.

Los jueces de los estados de la Unión son nombrados de diversas maneras. En unos lo son por el gobernador, en otros, por el gobernador con acuerdo de la legislatura, también los hay nombrados exclusivamente por este último cuerpo; y finalmente, el procedimiento más generalizado es el de la elección directa de todos los jueces por el pueblo: hoy

(5) BRYCE, obra citada.

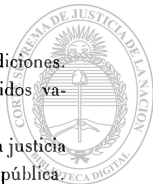
se cuentan treinta y un estado en estas condiciones. La duración del período por el que son elegidos varía entre dos y veintiún años.

Tal es el estado de anarquía reinante en la justicia entre los diferentes estados de esa gran república.

En la evidencia de que nuestra justicia de provincia no responde á los fines de su creación y de que en las naciones civilizadas no podemos encontrar el molde perfecto adaptable á la idiosincracia de nuestro pueblo y al ideal de la justicia más perfecta, es menester que discurramos por propia cuenta sobre lo que más conviene á los intereses argentinos.

Con el pensamiento de una sola justicia nacional en todo el territorio de la República, realizamos dos grandes conquistas de positivo é indiscutible valor, especialmente para las provincias: justicia de verdad, por una parte, y mayor garantía en el ejercicio de los derechos cívicos del ciudadano, por la otra.

Los gobernadores de provincia, conforme á nuestra Constitución y á la de los respectivos estados, están munidos de un poder equiparable al de cualquier monarca, en condiciones análogas á los que reúne en sí el presidente de la república, y como éste, impone también su sucesor y considera al pueblo co-





mo á súbdito, en vez de respetarlo como soberano.

Los jueces de las provincias son nombrados por el gobernador y su duración varía en un tiempo relativamente corto. No vale la pena de considerar el acuerdo que presta la legislatura para los jueces letrados, ó la corte de justicia para los jueces de paz, porque tanto la legislatura como la corte son *ad hoc*, para secundar la política del pequeño monarca, agente natural del gran elector nacional.

Estos hechos no son sólo de esta época, pues se remontan á los tiempos de nuestra organización, y aun á otros más lejanos, y lo evidencia el hecho que paso á citar.

Cuando se discutía en la convención constituyente de 1853 el artículo 41 de la Constitución, que corresponde al 45 de la que nos rige, á moción del representante por la Rioja, señor Regis Martínez, se discutió y aprobó la inclusión de los gobernadores de provincia entre los altos funcionarios pasibles de enjuiciamiento político por el Congreso de la Nación, disposición que fué suprimida en 1860, de conformidad á las bases de reforma presentadas por la provincia de Buenos Aires.

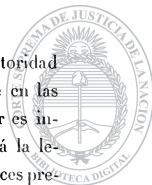
¿En qué se fundaron los convencionales del 53 para estatuirlo?

Martínez decía, que las « legislaturas no habían sido ni podían ser por largo tiempo sino cuerpos compuestos de hombres en su mayoría asalariados del poder ejecutivo, de otros muy especialmente afectos á él y casi en su totalidad influenciados por el gobernante, é incapaces por consiguiente de un juicio recto, imparcial é independiente », y que sólo con la medida que indicaba se haría desaparecer del suelo argentino el absolutismo y la irresponsabilidad de los mandatarios.

No traigo este antecedente para demostrar la constitucionalidad de lo que entonces se sancionó, porque mi opinión es contraria á ella, y sólo para robustecer la de que los gobernantes de hoy son iguales á los de ayer y que las legislaturas desentpeñadas por ciudadanos recompensados con larguezas oficiales, no son sino instrumentos ciegos de sus caprichos, veleidades y desenfrenado autoritarismo.

Los jueces de provincia como hechura de los gobernadores, son por lo general sus instrumentos en cuestiones políticas y muchas veces hasta en las de orden privado, lo que importa decir que la vida y los intereses de los habitantes de las provincias dependen en gran parte de la voluntad del primer mandatario. Un simple ciudadano no puede reclamar de





una injusticia del juez de paz, porque esta autoridad guarda los registros electorales é interviene en las elecciones, y por lo tanto para el gobernador es intangible. Se presentan personas respetables á la legislatura solicitando juicio político contra jueces prevaricadores; la prensa independiente aplaude la medida y lleva el hecho á conocimiento de los habitantes y la legislatura enmudece indignada por semejante atrevimiento. La regulación de honorarios de los abogados opositores al unicato gubernativo es irrisoria. En una palabra, la justicia de las provincias es detestable, ó más bien dicho, no hay justicia.

Séame permitido relatar un hecho muy curioso, al respecto, acaecido en Santiago del Estero y del que yo fuí testigo presencial. Se ventilaba un juicio en el juzgado de primera instancia en lo civil, en el que eran actores un extranjero domiciliado en Europa legalmente representado por un argentino desafecto á la política gubernativa, y un señor que era comisario principal de un departamento, es decir, amigo político del gobernador y demás miembros de la cofradía. Se trataba de la absolución de posiciones del segundo, y como éste no fuere práctico en estos asuntos, su abogado le dió como lec-



ción que negara todo cuanto se le preguntase : pero el abogado del primero incluyó en el interrogatorio una pregunta capciosa en la que un no, importaba una afirmación. El interrogado aplicó como en todas las demás preguntas, la regla que su instructor le diera y cayó en la red : y cuando el interpelante, dirigiéndose al secretario, le dijo : « pido que se haga constar esta categórica negativa », el juez replicó : « El señor... no ha querido decir eso, sino tal otra cosa, y esto es lo que debe hacerse constar. » Allí terminó todo : el amigo político del gobernador y del juez triunfó en toda la línea.

Á fin de que los jueces de provincia se independicen del gobernador, continuando en el sistema actual de dualidad, ¿ sería conveniente que estos fuesen designados por elección popular, como en Norte América ?

Sería ingrato el aprendizaje, y más ingratas aún las consecuencias que de ello surgirían.

¿ Quién no conoce la existencia y rol de la *máquina* electiva de Estados Unidos, constituida por profesionales, sin otro fin que las utilidades pecuniarias que á éstos les reporta en favoritismos, providencias, *fallos favorables*, pensiones, etc. ?

En Norte América se elige, por lo que ahí se llama



voluntad popular ó de la *máquina*, hasta el último alcalde de barrio, y los empleados triunfantes dan á la *máquina* desde el uno al 5 por ciento anual del montante de los sueldos: y para estimar la importancia de este renglón de entradas en la inmensa ramificación de esta maquinaria en todos los estados de la Unión, basta hacer notar que en sólo Nueva York, en 1888, el total de sueldos de los funcionarios de la ciudad alcanzaba á 11.000.000 de dollars. La sola presentación de un candidato para juez, representa ya un desembolso de 500 hasta 5000 dollars para los gastos preliminares (6).

¿Es posible que la justicia así constituida, merezca los honores de la imitación por nuestra parte?

Lo que hay en esto es que Norte América es un país *sui generis*, especialísimo: allí está completamente arraigada la idea de la nacionalidad y hay el más profundo respecto por sus instituciones y prácticas buenas y malas: la cuestión es no perder tiempo en disquisiciones teóricas ó problemáticas, porque hay la preocupación constante de hacer dinero á todo trance, y todo está organizado hacia este fin: y es este espíritu dominante, el que hace mirar las

(6) J. Bryce, obra citada.

máquinas, republicana y demócrata, con su cortejo de indecencias, compras y ventas de voluntades, etc., así como la deshonestidad de empleados superiores como la cosa más natural. Con este régimen electoral, fácil es afirmar que, por lo general, no son los más aptos y honestos los que desempeñan estas funciones, sino los que contribuyen con una mayor suma para hacer girar hábilmente el manubrio de la *máquina*. Estos simples antecedentes, bastan para decidirnos á repudiar este sistema de constituir los funcionarios judiciales en nuestro país.

Otra disposición inconveniente en la organización de la justicia en esta Capital, es la división en fuero federal y fuero ordinario ó de provincia, que no presenta ninguna ventaja ni satisface una necesidad pública: pues, en la Capital no debe haber otra justicia que la nacional, de la misma manera que se ha establecido para los territorios nacionales.

No faltará quien diga que el establecimiento de una sola justicia, y por ende la supresión de la justicia propia de provincia, es atentatoria de la forma republicana de gobierno, estatuida en el artículo 5º de la Constitución, para demostrar la improcedencia de la reforma.



Á esto debo contestar que con la supresión hecha en el artículo 5° y otros pertinentes, queda salvada toda la dificultad, sin afectar la forma representativa republicana de gobierno.

En efecto, conforme á nuestro régimen de gobierno, los poderes que representan directamente al pueblo son el legislativo y el ejecutivo, y es á éstos á quienes se refiere esa disposición, sobre lo cual no se propone reforma alguna. La justicia, la educación primaria y el régimen municipal, son según el artículo 5°, dependencias de los dos poderes mencionados y no entran propiamente en lo que se llama sistema de representación republicana: y es por esto que ese artículo, después de decir que las provincias dictarán una constitución de acuerdo con ese sistema dice, como otra cosa distinta del sistema, que asegurarán su administración de justicia, su educación primaria y régimen municipal.

De manera que si en la Constitución del 53 se hubiese establecido que la justicia que rija en el territorio de la Nación fuese una sola y que la educación en general estuviese á cargo del gobierno general, el gobierno de las provincias seria siempre ajustado al sistema representativo republicano, tanto más cuanto que la justicia no tiene en nuestro país la au-



tonomía que debe caracterizarla para ser realmente un poder, desde que los jueces son hechura del poder ejecutivo y sus sentencias son revisadas por éste.

La forma representativa republicana de gobierno no se altera con la justicia única en la forma que propongo, porque entre ésta y la actual, en cuanto á la forma, sólo hay la diferencia de que la justicia provincial, en vez de ser costeadá con recursos provinciales, lo es por el erario nacional : y que los nombramientos no los harán los gobernadores de provincia, sino la alta corte de justicia nacional.

La reforma que propongo importaría para Estados Unidos una revolución extraordinaria, por la sencilla razón de que cada estado tiene sus códigos propios y porque en casi todos ellos, los cargos de los magistrados son electivos, forman parte del régimen representativo : pero en nuestro país no acontece así, desde que tenemos un solo código nacional para cada rama del derecho y las diferencias en la composición de la magistratura son sólo de forma.

Además de ésto la estructura política de los estados de la Unión es diferente de la de nuestras provincias. Mientras nuestros gobernadores de provincia tienen atribuciones constitucionales análogas á las del presidente de la república, las de los estados



norteamericanos, no tienen semejanza alguna con la autoridad omnímota del Presidente, y entre sí tienen marcadas disparidades, no obstante ser regidos por la forma representativa republicana de gobierno.

Conveniente es repetir lo que al respecto dice James Bryce en su *République Américaine*, tomo II, página 161 : « *El presidente de la república es el jefe supremo de la Nación; sus ministros son sus subordinados; pero en los estados no hay nada semejante. Los principales funcionarios ejecutivos son elegidos directamente por el pueblo, y son independientes del gobernador del estado, á quien no deben su nombramiento, y solo en casos especificados por las leyes están sometidos á sus órdenes. No es necesario que el gobernador pertenezca al partido que tenga la mayoría en la legislatura, y aun los otros funcionarios del estado pueden no ser del mismo partido del gobernador. La política está fuera de las funciones del gobernador, y aun en los detalles de los asuntos ejecutivos, su libertad de acción es muy limitada.* »

Nuestros gobernadores en sus feudos tienen tanta autoridad como la del presidente en la Nación, nombran jueces y revocan sus sentencias, regimentan sus legislaturas, nombran todos los demás empleados y son los grandes electores locales. — « Los dejo en li-





bertad para que elijan diputados al Congreso, pero ustedes se comprometen á respetar la lista de legisladores provinciales que yo elegiré para la próxima renovación, para hacerme elegir senador nacional en el momento que me convenga », dijo hace poco un gobernador de provincia á los partidos que se aprestaban para disputarse la presa, y ambos partidos se consideraron satisfechos en acatar la orden.

Imagínese cualquiera, lo que será la justicia de provincia, dependiente del poder ejecutivo, con gobernadores de este jaez.

Para la mayor eficiencia de la soberanía nacional, las provincias han cedido parte de sus derechos en favor del gobierno general, y no implicaría alteración alguna en el régimen representativo republicano, si éstos dijeran : — No corremos con la organización, nombramientos y gastos que origina la justicia. Los estados de la unión americana, no han renunciado el derecho de codificar sus leyes y el de tener una milicia organizada, y nuestras provincias se han despojado de ambos, y no por eso hemos de decir que la forma representativa republicana de gobierno ó el sistema federal está alterado en una ú otra nación.

En nuestro país no hay sino un solo ejército na-



cional; un solo código, en sus diferentes ramos, un solo criterio para la justicia, y ¿qué tendría entonces de extraño que tenga un solo régimen, un solo procedimiento, y una sola hegemonía para su más exacta y fiel aplicación? ¿Hay algo que se oponga para que en el país podamos disfrutar de una justicia de verdad, niveladora para todos?

La resolución del problema que planteo en este artículo, se reduce sencillamente á una simple cuestión de buen sentido, de patriotismo y de verdad institucional, esclarecida por un anhelo público, porque en las provincias no hay justicia.

Tanto en la Constitución nacional como en las de las provincias no hay prohibición alguna referente á los empleados judiciales en actos políticos electorales y por el contrario, las leyes les dan participación importante en dichos actos. Como es consiguiente el rol de los jueces es también político, y no pueden substraerse á las afecciones que los poderosos provocan en ellos, y desvirtúan las altas funciones propias de su ministerio.

Si el juez de sección, procediendo en conciencia, falla en contra de los candidatos oficiales, no hace sino cavar su fosa: queda descalificado y próximo á marchar á otra parte, y si se presta á la componenda

ha perdido el prestigio de su autoridad: la disyuntiva es cruel, y desgraciadamente, se opta á menudo por lo segundo. No hablemos de los jueces de paz de las provincias, supremos electores departamentales, porque representan un desastre.

La justicia debe ser inmaculada y merecedora de los mayores respetos, porque en ella reside la fe pública, por lo tanto no debemos desvirtuar su carácter acordándole atribuciones que la empequeñecen, la desnaturalizan y la hacen perder su independencia.

Finalmente, debo manifestar que he cambiado la expresión « suprema », aplicada á la corte; por la de « alta », porque considero que ésta es más apropiada á las instituciones democráticas, así como la primera á las monarquías de donde la hemos tomado.



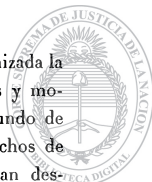


« Art. 95. — En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. »

Art. 95. — La alta corte de justicia nombra los magistrados de los tribunales inferiores, jueces, secretarios y demás empleados de la capital y de las provincias, jueces letrados y de paz en los territorios nacionales. Las vacantes se llenarán por ascenso y por antigüedad previamente establecida y en caso de igualdad se elegirá el de mayor edad.

Los jueces de paz de cada provincia serán nombrados por la corte ó tribunal de apelación de la misma.

El contenido de esta reforma implica uno de los principales atributos de la autonomía del poder judicial, porque le permite desenvolver su acción dentro de los propios resortes de su mecanismo, para asegurar su independencia y el exacto discernimiento del derecho.



No necesito investigar cómo ha sido organizada la justicia en los tiempos antiguos, medioevales y modernos, porque las sociedades del viejo mundo de los períodos mencionados, los que en muchos de nuestros progresos nos sirven de guía, han desarrollado su vida institucional, en un ambiente muy diverso del nuestro, con distinta organización, medios, tradiciones y tendencias sociales á las que hoy auspiciamos y si lo hiciera, particularizándome con algún estado europeo, favoreciendo la tesis que sostengo, se diría que el empleo es inaplicable, porque toda Europa respira auras de monarquía, por más que algunos estados saluden la república.

Sabido es, por otra parte, que la justicia es una derivación del poder ejecutivo en Europa y no obstante se dice que es uno de los tres poderes que constituyen el gobierno.

El concepto del poder en las monarquías es diverso del que debemos tener en nuestra forma de gobierno: allí, el parlamento y la justicia son en una ú otra forma, dependencias del monarca y entre nosotros su atributo más característico debe consistir en su organización autónoma.

En ningún país de la tierra existe una organización de la justicia en la forma que propongo pero



esto no quiere decir que ella no sea buena, ni menos adaptable á los pueblos libres. El que en las naciones más civilizadas, en sentido social y económico, no lo hayan inventado, para poner en práctica la conquista del tercer poder del estado, no quiere decir que este sistema no sea el que más se aviene á la justicia de verdad. No obstante los progresos de todo género realizados en Europa, de tal manera que, colocados en los primeros tiempos, parece que el estado actual no respondiera á aquellos en el largo proceso de los siglos transcurridos, la organización de la justicia ha seguido un camino retardatario. La justicia fué primero administrada por los reyes personalmente, y hoy por sus delegados que la desempeñan en su nombre. Se ha dicho que la justicia es un poder, y dados los términos constitucionales no lo es, porque es una parte del poder ejecutivo quien nombra los encargados de administrarla y revé sus actos ; es un poder en el nombre no en el hecho.

Los que desempeñan el cargo de juez en los países democráticos deben ser inmunes á las acechanzas de la política y los devíos interesados de la autoridad presidencial, y esto sólo se conseguirá desvinculándolos de este poder que maneja tantos y tan poderosos resortes de seducción.



El presidente de la Nación y los gobernadores en las provincias, nombran jueces á jóvenes recién salidos de la facultad: respondiendo, más que á su experiencia en el ejercicio de su profesión, que á sus condiciones de honorabilidad y reconocida competencia, á la amistad política de quien los recomienda ó al cercano parentesco que los liga.

El presidente puede ser un jefe del ejército, un médico, ó una persona no universitaria y nombra las personas que han de administrar justicia. No hablemos del ministro de instrucción pública, porque los ministros no hacen candidatos. Y, ¿es posible suponer que el presidente en tales condiciones sea más apto que la alta corte de justicia para hacer los nombramientos más acertados?

¿No es acaso justo que haya una escala de ascensos para los jueces, sin intervención alguna del poder ejecutivo?

No pudiendo constituir el poder judicial por elección directa del pueblo, porque este procedimiento sería de todo punto de vista perjudicial y contrario á los fines de la institución, es conveniente que se haga en la forma que propongo.

El poder ejecutivo no debe tener la facultad de nombrar jueces, porque la justicia sale del rol de sus



atribuciones; sus funciones no pueden confundirse con la de simples empleados de oficina; la misión de la justicia es grande, augusta, y por lo tanto no debe estar subordinada sino al espíritu de verdad que informan las leyes que dicta el Congreso y á las prescripciones de la Constitución.

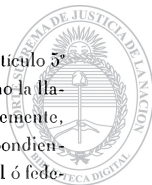
Puede hacerse la objeción de que por este medio se crea un poder permanente, como lo es en realidad, pero no podrá decirse que ello importe un peligro para las libertades públicas, porque es un poder completamente ajeno á la política, no dispone del ejército, ni tiene atribución alguna legislativa.

La organización que propongo viene también á corregir el adefesio de la división de la justicia de esta Capital, en fuero federal y ordinario ó común, porque al Congreso se le ocurrió interpretar la frase « tribunales inferiores » ó la Corte suprema de justicia, á que se refiere el artículo 94, como que implicaba el carácter de la justicia de provincia, es decir un fuero distinto del federal. Esta frase no tiene otra interpretación lógica que la siguiente: que los tribunales que estableciese el Congreso en el territorio de la Nación son inferiores en gerarquía á la Corte suprema, porque no debe haber sino una corte superior á los demás tribunales, no corresponden á

otro fuero distinto del federal. La parte del artículo 5° que se refiere á la justicia de las provincias no la llama inferior, ordinaria, ni común, sino simplemente, justicia de provincia en la que hay su correspondiente jerarquía, como debe existir en la nacional ó federal. No necesitamos, pues, buscar antecedentes en la constitución de Estados Unidos ni de ninguna otra nación, para explicar lo que con toda claridad expresa el artículo 94, mal interpretado por el Congreso y que presenta tantos inconvenientes por las cuestiones de competencia y por lo dispendiosa para el tesoro nacional.

De manera que con la reforma propuesta, puede decirse que la organización de la justicia remedia males orgánicos que es preciso corregir con sólo cambiar el origen de los nombramientos y la supresión de fuero federal y común en la Capital y fuero federal y de provincia.

Substituyo el artículo vigente por el que propongo, porque considero que está demás estatuir que el presidente no puede ejercer funciones judiciales ni arrogarse facultades propias de la justicia. Este artículo es propio de las monarquías, en las que, como he hecho notar, en un principio la justicia era administrada por los reyes y señores, y desde que



establecieron un cuerpo especial para administrarla, justo era que establecieran esa prohibición. El artículo cuya eliminación propongo es copia literal de la constitución de España de 1812, y corresponde al 243, título V, capítulo I, que dice : « Ni las cortes ni el rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos. »







« Art. 96. — Los jueces de la Corte suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuída en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. »

Art. 96. — Los jueces de la alta corte y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley en *condiciones que garanticen la independencia de su carácter*, y que no podrá ser disminuída en manera alguna mientras permanecieren en sus funciones. *El cargo de juez es incompatible con toda otra comisión ó empleo público ó particular, sea ó no rentado.*

Basta enunciar la reforma introducida en este artículo para demostrar la importancia que ella encie-



rra y el móvil que la informa. Porque como he dicho en los comentarios á los artículos 94 y 95, la justicia es algo de lo más grande que existen en el mecanismo del gobierno, cualquiera que sea la forma adoptada. La fe pública le pertenece y sus sanciones son la última palabra del derecho.

Así es como tenemos que mirar la justicia y como ella se manifiesta por las personas que la administran, ó que aplican las leyes, es preciso que, aparte de las condiciones de competencia y honorabilidad que les son inherentes, deben poseer las calidades de independencia, que son tan importantes como las primeras.

El temperamento levantado de una persona juez ó sea la nobleza de sus rasgos atávicos no son suficiente para asegurar su independencia de tal.

La economía desahogada, es uno de los más poderosos factores que garantizan la independencia personal y á este fin tiende mi reforma.

La justicia está mal remunerada en nuestro país, y es conveniente que en la ley de las leyes esté determinada la categoría de la remuneración que se ha de acordar para garantizar la independencia de los que la desempeñan, para hacerlos inmunes á incorrecciones hijas de la necesidad.



Dada la categoría de nuestros actuales presupuestos, los miembros de la alta corte de justicia no pueden tener menos de cinco mil pesos mensuales de sueldo y los jueces inferiores de esta Capital, no menos de tres mil pesos.

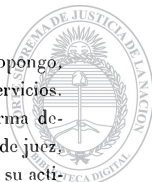
Además de que es ya considerable la densidad de la población de esta Capital y de que ella se acrecienta extraordinariamente, día á día, los intereses que se ventilan en los tribunales son muy valiosos, y por lo general tienen grandes ramificaciones económicas y sociales.

Dados los términos de la reforma que propongo en el artículo 94 y siguientes, los tribunales y juzgados inferiores de las provincias y territorios nacionales, no pueden tener menos de tres mil á un mil quinientos pesos respectivamente.

Con remuneraciones de esta categoría, verdadero estímulo para la recta y pronta justicia, es posible hacer mayores exigencias á los encargados de administrarla y hasta imponer una condición análoga á la estatuida en California y otros estados de Norte América, que dice, que los jueces no podrán recibir sus emolumentos sino después de haber atestiguado que no queda á juzgar sino causas que le han sido sometidas desde menos de noventa días.

La categoría de la remuneración que propongo, es apropiada á la clase de prestación de servicios. Los jueces, en las condiciones de esta reforma dedicarán todos los años de su vida á la carrera de juez, ajenos á los negocios y otras ocupaciones de su actividad, y es justo que los sueldos que perciban les permitan un ahorro, además de la satisfacción de una vida holgada y honesta.

La condición de no poder desempeñar comisión ni empleo alguno público ó particular es por demás importante, porque además de evitar las cuestiones de incompetencia, coloca á los jueces en circunstancias de aplicar las leyes con la más estricta honradez.





« Art. 98. — En la primera instalación de la Corte suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad á lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma corte. »

Art. 98. — Los jueces y secretarios se comprometerán solemnemente á cumplir las funciones del cargo con estricta honradez, de acuerdo con lo que dispone la Constitución y las leyes de la Nación, ante el presidente de la respectiva corte.

Las razones que tengo para la modificación de este artículo, están dadas en los comentarios del 80, al que me refiero.





« Art. 99. — La Corte ^{suprema} dictará su reglamento interior y económico y nombrará todos sus empleados subalternos. »

Art. 99. — La *alta corte* dictará su reglamento interior y económico, *así como el de los tribunales de provincia*, y su presidente enviará al Congreso, el día de la apertura de sus sesiones ordinarias, un mensaje exponiendo el estado de la justicia, con datos estadísticos, é indicando las necesidades y todo cuanto sea conveniente, en sentido de que la justicia sea recta, pronta y barata.

El agregado de este artículo es consecuencia lógica de la independencia que asigno al poder judicial. No estando subordinado al poder ejecutivo y siendo necesario hacer conocer del Congreso el estado de la justicia y sus necesidades, es evidente que este rol pertenece á la alta corte de justicia. No debo procurar antecedentes al respecto, porque como he dicho antes, éstos no se encuentran en ningún país democrático.



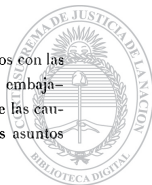


« Art. 100. — Corresponde á la Corte *suprema* y á los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, *con la reserva hecha en el inciso 11º del artículo 67* : y por los tratados con las naciones extranjeras : de las causas concernientes á embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros : de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima : de los asuntos en que la Nación sea parte : *de las causas que se susciten entre dos ó más provincias ; entre una provincia y los vecinos de otra ; entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia ó sus vecinos contra un estado ó ciudadano extranjero.* »

Art. 100. — Corresponde á la alta corte de justicia y demás tribunales de la Nación, el conocimiento de decisión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Cons-

titución y por las leyes de la Nación ; por los tratados con las naciones extranjeras ; de las causas concernientes á embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros ; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima y de los asuntos en que la Nación sea parte.

Las supresiones que introduzco á este artículo están explicadas en los comentarios correspondientes á los artículos 94 y 109, á los que me remito.





« Art. 101. — En estos casos la Corte suprema ejercerá su jurisdicción, por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes á embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. »

Art. 101. — La alta corte ejercerá jurisdicción originaria y exclusiva en todos los asuntos concernientes á embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en apelación, en los casos en que determinará una ley especial.

De conformidad al plan de una sola justicia en todo el territorio de la Nación, comprendido en los artículos 94 al 99, la organización jurisdiccional y de competencia de los tribunales debe ser materia de una ley especial, razón por la que modifíco el artículo en la forma propuesta.





« Art. 102. — Todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedida á la Cámara de diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial, el lugar en que haya de seguirse el juicio. »

La supresión que propongo de este artículo se explica por los comentarios al artículo 24, sobre supresión del juicio por jurados.





« Art. 108. — Las provincias no ejercen el poder delegado de la Nación.

« No pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio ó navegación interior ó exterior ; ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso federal ; ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, *después que el Congreso los haya sancionado* ; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización ; bancarrotas falsificación de moneda ó documentos del Estado ; ni establecer derechos de tonelaje ; ni armar buques de guerra ó levantar ejércitos, *salvo el caso de invasión exterior, ó de un peligro tan inminente que no admita dilación ; dando luego cuenta al gobierno federal* ; ni nombrar ó recibir agentes extranjeros ; ni admitir nuevas órdenes religiosas. »

Art. 108. — Las provincias no ejercen el poder delegado á la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio ó navegación interior ó exterior; ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso federal; ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización; bancarrotas, falsificación de moneda ó documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra ó levantar ejércitos; ni nombrar ó recibir agentes extranjeros; ni admitir nuevas órdenes religiosas.

Las reformas propuestas á este artículo, consisten en dos supresiones; la primera: «después que el Congreso las haya sancionado», es de forma. Hace años que tenemos códigos nacionales y como la prohibición á las provincias para dictarlos era hasta que el Congreso los hubiera sancionado, esa cláusula, si bien no daña la disposición, no la beneficia tampoco: está demás.

La segunda parte que suprimo, en lo referente á armar buques de guerra y levantar ejércitos, es una atribución que no se debe acordar á los gobiernos de provincia. Esta facultad fué acordada cuando el aislamiento de los pueblos era la característica argentina, cuando las comunicaciones eran tardías y difi-



ciles, separadas unas de otra por inmensas distancias y dilatadas regiones desiertas pobladas por indios y malhechores. En tales condiciones se podía acordar esa facultad privativa del Congreso de la Nación, pero hoy, con la instantánea comunicación por telégrafo y la rapidez de los transportes que nos ofrecen el ferrocarril y los buques de vapor, no es posible dejarla en vigencia.





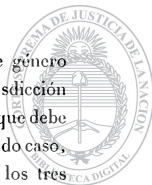


« Art. 109. — Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra á otra provincia. *Sus quejas deben ser sometidas á la Corte suprema de justicia y dirimidas por ella.*

« Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil calificados de sedición y asonada que el *gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme á la ley.* »

Art. 109. — Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra á otra provincia. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición y asonada que el *Congreso debe resolver, así como cualquier otra disidencia de carácter político.*

Según este artículo de la Constitución, los inconvenientes de orden político entre las provincias deben ser dirimidos por la justicia, y los mismos con hostilidades de hechos, por el gobierno, con las represiones del caso.



Por una parte, debo hacer notar que este género de conflictos no puede pertenecer á la jurisdicción de la justicia porque no es el cuerpo político que debe entender sobre ellos: y por otra, en el segundo caso, es preciso puntualizar cuál es el poder de los tres que forman el gobierno federal, á quien corresponde la misión de juez, y nunca la de sofocar y menos reprimir á que se refiere.

La primera parte de este artículo fué estatuida en época en que los retoños del manzanillo de la guerra civil, nacían vigorosos para hacer ineficaces los anhelos de paz y confraternidad é impedir el goce de los frutos de la unidad nacional, y se dijo: la Corte suprema dirimirá las contiendas que entre las provincias pueden originar conflictos guerreros. En la segunda parte, con motivo de hostilidades de hecho entre las provincias, acostumbradas á agredirse por motivos de predominio político, tendencia hija de la anarquía, que durante tantos años había sido la característica de la normalidad argentina, dice que el gobierno federal debe sofocar y reprimir.

No es posible saber cuál haya sido la mente de los convencionales al estatuir que la corte suprema debe dirimir las causas capaces de originar conflictos guerreros entre los estados, porque no hay antecedentes



al respecto, pero de cualquier manera que esta cuestión sea considerada, ella no debe ser materia que entra en los resortes del poder judicial.

Los asuntos que pueden originar divergencias capaces de producir conflictos bélicos entre las provincias, atentar las estipulaciones de la Constitución, no pueden ser sino de origen político, y es por esto que he afirmado que la justicia no puede definir este género de cuestiones : es al Congreso á quien le pertenecen : al poder eminentemente político, de los tres que componen el gobierno.

Cuando en la convención de 1860 (sesión de 7 de mayo), se discutía el contenido del artículo 78, ó sea el 100 de la Constitución vigente, sobre las atribuciones del poder judicial, el eminente estadista Vélez Sarsfield, oponiéndose á la competencia de la Corte suprema en los conflictos entre los poderes públicos de una misma provincia, cuya tesis triunfó en la controversia, decía : « esta parte es una adición singular que se ha hecho á la constitución de Estados Unidos, dando facultad á la Suprema corte de justicia para decidir los conflictos entre los poderes públicos de una provincia ».

« Esto destruye completamente el sistema federal, porque un poder extraño, el poder nacional judicial,



viene á entrometerse en las cuestiones interiores de los poderes públicos de una provincia.

« Destruiríamos las constituciones de los estados particulares y la independendencia interior de cada provincia, si el poder nacional judicial tuviere que resolver las cuestiones políticas que pueden nacer entre los poderes públicos de una provincia. »

¿ Por qué llamaba el doctor Vélez Sarsfield, poder extraño, al poder judicial ?

Porque el poder judicial no es poder político, su rol es muy diverso, y por consiguiente no es el llamado á dirimir las diferencias entre los poderes de un estado, y mucho menos las que se suscitaren entre dos ó más estados. Esta es atribución del Congreso, rama que en sí reúne la genuina representación de la soberanía popular delegada, rama directriz y reguladora de la vida nacional en sus múltiples manifestaciones.

Es por esto que el gran Vélez Sarsfield consideraba que la intervención de la justicia en las disidencias de la política de los poderes de las provincias, hubiese sido atentatoria de la constitución de las mismas, de la independendencia de sus funciones y en suma, del sistema representativo republicano de gobierno ; no por su carácter nacional, porque es tam-



bién nacional el Congreso, sino por la calidad de sus funciones, ajenas al principio político que confirma los poderes.

La primera parte del artículo vigente ha sido tomado de lo que dispone la sección 2ª del artículo 3º de la constitución de Estados Unidos, razón suficiente para que al gran Sarmiento le pareciera aceptable sin discusión.

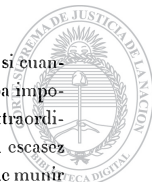
La segunda parte del artículo, dice, que el gobierno federal debe sofocar y reprimir las hostilidades de hecho entre las provincias. Lo de sofocar y reprimir, no tiene aplicación al presente porque nos encontramos muy alejados del 53, sin ni asomos de guerra civil, por no existir causas capaces de originarla; y lo de gobierno federal es una mala redacción para hoy.

Al recorrer las primeras sesiones del Congreso en la década de nuestra organización política, se ve en diversas partes en los discursos de los oradores, que se confunde la expresión gobierno, con poder ejecutivo, como si tuvieran el mismo significado, y se comprende que se ha querido expresar que es el ejecutivo quien debe sofocar y reprimir, por disponer también de la fuerza y no ser una autoridad intermitente. Esta es una facultad que el Congreso no puede

delegar: le pertenece por derecho propio, y si cuando se sancionó la Constitución se consideraba imposible la reunión del Congreso en sesiones extraordinarias por el aislamiento de los pueblos y la escasez de comunicaciones, además de la necesidad de munit al poder ejecutivo con los atributos de una autoridad realmente ejecutiva, hoy nos encontramos en condiciones muy diversas de aquéllas, el Congreso puede reunirse inmediatamente de convocado, conforme á la gravedad de los acontecimientos que lo requieran.

Este género de asuntos es de los que entran en las atribuciones intervencionistas del Congreso para garantizar la autonomía de los estados, como lo dice la última parte del artículo 6°, el 23 y el 67, en su inciso 26°.

Estas son las razones que informan las modificaciones que propongo á este artículo.





« Art. 110. — Los gobernadores de provincia, son agentes naturales, del Gobierno federal, para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. »

Propongo la supresión de este artículo, porque la autonomía de los estados se reciente con la agencia natural de sus gobernadores, respecto al gobierno federal. Agente, quiere decir subalterno, dependiente, ¿de quién? Del gobierno federal. ¿Quiénes forman el gobierno federal? Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; pero como el primero y el tercero, puede decirse que no tienen relaciones directas con los gobernadores y sólo los tiene el ejecutivo, resulta que en este caso, gobierno quiere decir poder ejecutivo: de manera que los gobernadores ó poderes ejecutivos provinciales son agentes del poder ejecutivo nacional, lo cual en el régimen de

gobierno republicano federal, es un contrasentido.

Si viviéramos en el régimen unitario, los gobernadores de provincia nombrados por el poder ejecutivo nacional podrían ser los agentes naturales del poder que les da el sér, que son parte de su esencia, pero no en el federal. Los poderes que forman el gobierno de las provincias, como fruto de entidades soberanas, no son una dependencia de ninguno de los poderes de la Nación, son poderes autónomos dentro de los estados que les ha dado su sér, son agentes de la soberana voluntad del pueblo de las respectivas provincias.

El ejecutivo nacional tiene sus relaciones oficiales con los ejecutivos de provincia, pero no las debe tener en forma de que amengüe la entidad de éstos, como cuando un superior ordena ó manda á su encargado ó agente. Todos los habitantes de la República tenemos el deber de conocer y cumplir con las disposiciones de la Constitución y leyes nacionales, sin necesidad que para ésto los gobernadores sean agentes del poder ejecutivo de la Nación.

Si en los primeros tiempos de nuestra organización, con sociedades incultas, mantenidas en el ais-



lamiento y dada la forma más monárquica que republicana de nuestras instituciones, pareció conveniente y hasta necesario este artículo, hoy no lo es más, y es preciso borrar este inconveniente que amengua la soberanía de los estados.





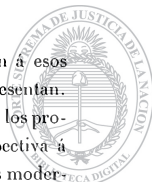
RESUMEN



Los pueblos no han satisfecho aún el programa social que exige sus anhelos, porque éstos no vienen de golpe sino por grados sucesivos. Cada momento de su existencia impone nuevos adelantos, un nuevo modo de ser orgánico. La vida es una cadena en la que cada eslabón representa una conquista, y es á la vez eje de la conquista venidera. Sus triunfos de ayer, son pedestales de los de hoy, y éstos, de los de mañana. Pueblo que se estaciona, es pueblo que muere ó que se atrasa. Además del crecimiento de la población, las ciencias, artes y letras : las máquinas, las industrias, la producción en general, en su constante movimiento, como factores de la universal armonía, comportan evoluciones del pensamiento generador y verdaderos progresos en las entidades de los pueblos y es preciso conformar su estructura

adaptándolos á instituciones que respondan á esos adelantos y al estado de civilización que representan.

Las instituciones miden las capacidades y los progresos de los pueblos. Una mirada retrospectiva á sus orígenes, á la edad media, á los tiempos modernos y á los contemporáneos, nos hará ver su encadenamiento constante y paulatino. Si comparamos las instituciones europeas con las americanas, encontraremos más liberales y adaptadas á la época á éstas que á aquéllas : pero si comparamos estas mismas con lo que realmente exige el progreso social contemporáneo, el pensamiento reaccionario de verdad republicano, en contra de principios inadecuados al gobierno libre, copias serviles de las monarquías, nos daremos cuenta que hoy estamos en atraso y que es preciso fundir en un nuevo molde el derecho público americano. Me refiero al derecho público americano porque todas las naciones de América se dicen constituidas en repúblicas, á base de libertad y todas adolecen del mal de la monarquía. En todas estas constituciones se ha dicho, no instituyamos reyes *per vitam*, sino presidentes *per tempore*, con los mismos atributos que aquéllos y á éstos debe estar subordinado el Congreso y la justicia, sin cuya venia el primero no puede funcionar, y con la facultad de





rever los actos de la segunda, de manera que en realidad de verdad, éstos no sean poderes, atributo propio de la fuerza, radicada en el poder ejecutivo.

Como los pueblos americanos, están habituados á oír hablar de libertad, de *self government*, por más que ninguno lo ha ejercitado en verdad, esa sola aspiración, ese anhelo, impone la necesidad de la reforma. La América libre, quiere y necesita gobiernos de opinión, que sean verdadera encarnación de la soberana voluntad de los pueblos: necesita la justa delimitación de los poderes y su más regular funcionamiento, para que en verdad se considere que vive en la república.

Me refiero á la América, porque todos los Estados en que se encuentra dividida, con pequeñas diferencias de forma, acusan iguales instituciones en su organismo político.

Concretando el pensamiento, por lo que á nosotros corresponde, debo manifestar que es preciso que demos el último adiós á las gobiernos fuertes del pasado y saludemos la reforma institucional que abre las puertas de una nueva vida para todas las legítimas aspiraciones, para el reinado de la paz, del orden y del progreso social del presente y del porvenir.

Como dice Spencer, el acrecentamiento de volu-



men de las sociedades, implica acrecentamiento en su estructura, y la nueva estructura impone un cambio de función. La unidad de la familia argentina, el creciente aumento de la población por función propia y por agregados nuevos; la ilustración de las masas y los múltiples progresos de la actividad nacional, hacen necesario imprimir un nuevo rumbo a las instituciones, en armonía con este nuevo estado social, diametralmente opuesto al de 1853. El gobierno triunfó sobre el caudillismo, mató el monstruo de la anarquía, es decir, llenó el fin para el que fué creado dió todo lo que debía dar para la época de atraso en que nació, pero hoy no tiene existencia legal, al presente es manjar indigesto. Hoy se hace necesario el gobierno de la razón, el gobierno del derecho, de la justicia, de la libertad, de la verdad institucional, de la honradez ciudadana, y esto no puede darnos la constitución del 53. La reforma se impone con apremio.

Con motivo de un proyecto de elecciones que se debatía en la Cámara de senadores de 1883, el doctor Nicolás Avellaneda, decía: «Desde que ocupo una banca en este recinto, desde que nuestras sesiones se abrieron, día por día sentimos el movimiento de progreso, de industria y de riqueza que se desen-



vuelve en el país : cada día discutimos un nuevo proyecto para prolongar nuestros ferrocarriles, ó para poblar nuestros campos desiertos : ó para radicar el capital que viene de afuera y que busca colocación en una industria.

« El progreso es indudablemente grande : y sabiendo de lo industrial y subiendo á la esfera de los poderes públicos, yo digo, señor presidente, que todo crece : crece la renta, crece el ejército, crece la marina, crece hasta nuestra deuda, que, si es un gravamen para el futuro, da por el momento medios cuantiosos de acción.

« Pues bien, en medio de todo este cuadro de prosperidad material, siento decir que no encuentro al mismo tiempo visible el desarrollo progresivo de nuestras instituciones, y que si éstas no siguen el mismo movimiento ascendente, si no consolidan cada día su poder, todos sabemos, — y mi voz no es una advertencia, porque esa advertencia la llevan todos en sus sentimientos patrióticos y en ejemplos tristemente conocidos — todos sabemos, que si nosotros no procuramos con incesante anhelo, que nuestras instituciones crezcan con el aumento de la riqueza, de la fortuna privada y de la fuerza pública, nos pondremos á sabiendas sobre una pendiente funesta.

Los pueblos que sólo cultivan y desarrollan la fuerza, caen aplastados por la fuerza. »

Si así pensaba este eminente hombre público en aquella época, es de suponer el contenido de las castilnarias que hubiera lanzado hoy, si hubiéramos tenido la gloria de que actuara en el momento presente.

Un cuarto de siglo ha transcurrido desde que fueron pronunciadas aquellas palabras, y hasta ahora, nuestras instituciones se mantienen rígidamente incommovibles favoreciendo la existencia de un solo poder que es el ejecutivo, el cual tiene en sus manos las riendas del semipoder legislativo y del semipoder judicial, amén de la facultad de elegir gobernadores de provincia, senadores y diputados nacionales, de nombrar jueces, de manejar el ejército de tierra y de mar á su albedrío, y de elegir finalmente el presidente que ha de sucederle en el mando.

Un cuarto de siglo ha transcurrido, y parece que estuviéramos en inferiores condiciones á los que informaba el punto de partida de la era constitucional en materia de civismo. Nos encontramos en vísperas de la elección (*sic*) presidencial, y todos permanecemos atentos y con la boca abierta, á la espera de la católica palabra del presidente de la república, que



nos diga: ¡X es el candidato para presidente y Z para vice!

Un cuarto de siglo ha transcurrido, desde aquella fecha, y el Congreso espera el decreto ó bando del jefe supremo de la Nación para reunirse en sesiones ordinarias, de prórroga ó extraordinarias. El presidente lleva la anarquía á todas las provincias: interviene en ellas cuando y como quiere, sea para derrocar gobernadores ó para reponerles *manu militari*: dispone del ejército á su amplia voluntad, lo distribuye previsora-mente en las capitales de provincia para garantizar el éxito oficial en todas las elecciones: asiste á las revistas del ejército de tierra, celebradas con gran pompa, y á las navales donde se dan funciones dramáticas desempeñadas por los conscriptos, y se practican simulacros de guerra en los que en pocos minutos se lanzan algunos tiros de cañón por valor de 15 ó 20.000 pesos oro.

Lo único que al poder ejecutivo preocupa hoy es el ejército: todo se hace por él y para él, y como el modelo de ejército-máquina, de depresión subalterna es el *kaiserlich*, el nuestro, viva imitación de aquél, está germanizado en cuanto á su organización, á la indumentaria y otros detalles pero felizmente no en la sangre ni tampoco en las tendencias propias de





nuestra raza hacia la libertad. La frase sacramental para hacer aceptar las reformas más ridículas en este sentido es ésta: *esto lo hemos copiado de Alemania, ó así se hace en Alemania*, y no hay más que hablar, la sanción está hecha.

Cuando se debatía en el Congreso de 1856 la primera ley de organización del ejército en la Cámara de diputados, el miembro informante de la comisión respectiva, coronel Alfredo M. du Grati, entre otras consideraciones, expuso las siguientes: « El sistema militar de la confederación debe ser *defensivo y no ofensivo*, porque la Constitución de mayo ha creado una nación industrial, agrícola y comercial, y no una nación guerrera y conquistadora.

« La creación de un ejército y su organización son indispensables, no con el objeto de hacer la guerra sino de cubrir y defender las fronteras abiertas á las incursiones de los indios salvajes. Esta es la misión del ejército en circunstancias normales, pues para la defensa de la patria, el sostenimiento del orden y de las instituciones todo ciudadano argentino está obligado á tomar las armas.

« *Sería un error creer que la paz interna deba afianzarse ó mantenerse por el poder de la fuerza armada permanente.* »



« El día que se pudiera probar que la tranquilidad interna de la confederación reposa sobre el poder de la fuerza armada, que sus instituciones deben sostenerse por la fuerza de las bayonetas, *poca esperanza tendríamos en el porvenir de la patria.* »

¡ Cuán lejos estamos al presente, de pensar de la misma manera que aquel distinguido jefe de nuestro ejército, ó de corroborar con hechos el pensamiento de Avellaneda !

Gastamos un lujo inmoderado en el ejército y hay tal preocupación del *jefe supremo del estado*, hacia esta institución, en la que hace reposar su poder, que descuida todo lo demás que le está sometido, en favor de lo primero. Diariamente se envía jefes y oficiales á Europa á estudiar regimenes, prácticas, modalidades y otras cosas más inadecuadas del ejército del Kaiser, para aplicar al nuestro, en este país cuya grandeza futura no ha de ser la resultante de las armas, sino de la población, de la energía del trabajo y de las instituciones sabias y ponderadas. En el ejército se gasta dinero sin medida para darnos el lujo de decir que tenemos ejército montado á la europea, es decir, á la alemana, y ésto ha de acontecer mientras el gremio obrero no se dé cuenta que él paga esos derroches, ó hasta que se resuelva á hacer la gran huelga del si-

glo en demanda de la supresión de impuestos á sus consumos.

La autoridad del poder ejecutivo reposa en el ejército, y por consiguiente, los ascensos están siempre á la orden del día para los más fieles servidores automáticos. Como consecuencia de este hecho, el gobierno de este país democrático, puede sintetizarse en esta frase : *mucha fuerza y poca razón*. Si un jefe de cuerpo destacado en provincia se niega á cumplir la orden superior (no escrita) de ponerse al servicio del gobernador, sabe de antemano que no solamente pierde el comando de su cuerpo, sino también que su ascenso será postergado indefinidamente. Los ascensos se practican según el grado de obediencia hacia lo que se llama la política del presidente, es decir, de la *unidad electoral* : esta es la esencia de la disciplina militar. Consecuencia : los jefes y oficiales no debieran ser argentinos ; valdría más que fueran mercenarios, extranjeros. Otro caso de disciplina militar es el siguiente : un oficial que ha recibido bofetadas propinadas por su inmediato jefe, hace uso de la arma que la nación ha depositado en él para defender la dignidad nacional y su propio decoro, y en ese acto primo, lava su honra con un tiro certero sobre su agresor, y la justicia *ad hoc*, contraria al ar-



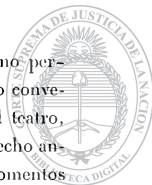
tículo 18 de la Constitución, le confina á presidio por tiempo indeterminado. La razón de esta sentencia es muy clara : es preferible la *indignidad* de un oficial para conservar su grado en homenaje á la disciplina y al superior gerárquico, antes que la altiva honradez.

Este es el resultado de la ley del automatismo copiado de Alemania. Vale más una voluntad pasiva que otra consciente y digna, en este gran país constituido para la libertad.

Evidente es á todas luces, que las sanas instituciones no hacen camino en nuestro país, ó más bien dicho, van de mal en peor, casi retrogradan al punto de partida. El país está enfermo, constitucionalmente enfermo.

Hemos olvidado de tal manera que debiéramos vivir en la república democrática, que hasta los diarios más importantes de esta Capital, heraldos de la sana opinión, sin el menor espíritu de crítica, llenan sus columnas con minuciosos detalles de viajes de placer que efectúa el presidente, acompañado de familias por el mar ó por los ríos, fletando barcos y efectuando gastos enormes que costea el tesoro nacional : conforme á lo ordenado por el intendente municipal (hechura del poder ejecutivo, porque esta Capital carece de la cultura necesaria para elegir





este mandatario), los agentes de policía, no permiten que se aproxime coche alguno al sitio conveniente para las familias que abandonan el teatro, mientras el señor presidente no lo haya hecho antes que todos los concurrentes: en estos momentos se tramita la compra de un palacio, con fondos del tesoro de la Nación, cuyo costo asciende á millones de pesos, y probablemente, haciendo honor á los refinamientos del arte, se encargarán á Europa ó más allá, telas de Esmirna, valiosas obras de arte y lechos de marfil, imitando el lujo de oriente y de Roma en su opulencia, para residencia del monarca y pontífice de la religión protegida, que ostenta el democrático título de presidente de esta seudorepública.

Hemos llegado insensiblemente y por grados á una corrupción política sin igual, cual si estuviéramos próximos á iniciar la curva de descenso propia de los pueblos envejecidos y arruinados: vivimos en plena monarquía, connaturalizados con el poder supremo y una fastuosidad deslumbrante, de tal manera que á todos nos parece muy natural que á los presidentes se les dispense honores propios de los reyes ó emperadores. Ese palacio que importará millones, costeados con los fondos que proporciona el obrero con el permanente desgaste de su sangre, de



su fuerza vital, estaría mejor destinado, si es que se lleva á cabo el escándalo de su compra, para un asilo de pobres, ó para el museo de recuerdos históricos de los prohombres argentinos. ó de una biblioteca popular.

A. Carnegie, en su libro *El triunfo de la democracia*, dice : « El presidente de Estados Unidos viaja como otro ciudadano cualquiera, en los trenes ordinarios, sin escolta ni séquito de ninguna clase. Cuando va á Nueva York, para en un hotel sin previo aviso y apenas si su arribo es anunciado en los periódicos. Por donde quiera que va, se ve rodeado de pruebas de sincera atención y deferencia, pero sin aparatos ni aplausos. Se ha dado el caso de que los carruajes del presidente en Washington, hayan sido más sencillos que los de muchos ciudadanos, pero nunca ha sido de los más lujosos.

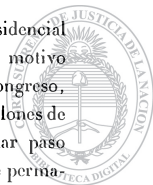
« Los cortejos de gran ceremonia de Inglaterra parecen á los americanos grotescas mascaradas y los coches de gala en los que la realeza se pasea, una función de circo en la que buscan el *clown* y sólo perciben la figura de un rey coronado. »

Bien pues, este relato de Carnegie es una crítica sangrienta á la fastuosidad de la corte argentina, que no le va en zaga á ninguna del tipo monárquico eu-

ropeo. La guardia de honor ó la escolta presidencial está siempre en movimiento continuo con motivo de cualquier fiesta, y á la apertura del Congreso, además de ésta, se forma un cordón de batallones de línea y hasta se interrumpe el tráfico para dar paso libre á *su majestad*. La casa de gobierno tiene permanentemente el aspecto de una plaza de guerra preparada para el combate.

Es de indispensable necesidad corregir estos defectos, si queremos vivir en plena democracia, y en el conjunto de las reformas que propongo, ellas quedan comprendidas : porque lo que induce á los presidentes á desempeñar el papel de monarcas, es el supremo y discrecional poder de que disponen.

Cada día que pasa se nota que la autoridad ejecutiva toma mayores bríos y es más absorbente que nunca y por consiguiente, el civismo sigue encarrilado en la mayor decadencia. Los primeros presidentes, no obstante en la difícil época en que actuaron, no hicieron uso de los resquicios ó puertas falsas de la Constitución, sino llenando premiosas necesidades de salud pública, y hasta cierto punto con timidez; pero los últimos han colmado la medida, con la diferencia que antes se levantaban protestas por cualquier disposición que el pueblo consideraba abusiva.





y hoy permanecemos sordos, mudos y ciegos. ¿Por qué no decirlo? Los presidentes hacen gala y ostentación del poder tanto en sentido político como en los usos de la vida social.

Estas anormalidades, me hacen pensar en una monarquía decadente, propia de otras edades y de otro medio.

Antes de manifestar estas ideas, he pensado si debía ó no exponerlas con la crudeza que lo hago, en esta obra que abarca un campo de seriedad é impersonalidad extremas, por tratarse de nuestra Magna Carta y he optado por hacerlo así, porque éstas representan nuevos argumentos que abonan la tesis de la reforma inmediata de la Constitución, y por que es preciso salir de esta atonía en que vivimos, de esta ecuanimidad rayana en tontera ó en algo peor, que nos conduce á un camino sin salida.

Acontece á menudo que las palabras más vulgarizadas son las menos analizadas y conocidas en su verdadera acepción. Se habla de los poderes públicos, y no se tiene el verdadero concepto del poder : se habla de gobierno democrático representativo, y no se sabe cuál es la forma de gobierno que nos rige : se discute sobre regímenes de gobierno, y hay per-



sonas de primera fila que auspician la república unitaria que no es sino una forma de la monarquía constitucional, porque creen, sin examen, que la forma en que vivimos, es representativa republicana federal democrática, cuando es perfectamente monárquica.

Como existe una tan grande anarquía en estas cuestiones, conviene que exponga algunas ideas fundamentales que, á mi manera de entender, son la base de este estudio y que no han sido tratadas en el curso del mismo.

¿Qué es gobierno?

Gobierno quiere decir dirección, administración, justicia, equidad, orden, progreso, vida, humanidad y en los ribetes de nuestro régimen significa algo más: libertad, igualdad, soberanía popular, delegación de facultades, autonomía: y no obstante ésto, nuestros gobernantes que sólo se manejan por las puertas falsas de la Constitución creen todo lo contrario, y así, concretando todas sus acciones, nos es dado definir el concepto que del gobierno tienen. Para ellos significa poder supremo, suma de autoridad incontrolable, monarquía absoluta, máquina de fabricar honores, de hacer dinero y de mantenerse en las alturas por medio de elecciones populares (*sic*).



presupuesto á base de extorsiones tributarias, oligarquía, imposiciones, audacia, inconsecuencia, tiranía, unicato.

Esta manera de entender el gobierno *ad usum imperator*, es la enfermedad orgánica de la república; y es por demás sabido que cuando el mal empieza en la cabeza y se localiza en ella, el enfermo es de gravedad, y como esta parte del cuerpo es la que dirige todos los movimientos de los miembros del mismo, éstos que en nuestro caso representan los estados, bajo la faz política de pueblo, están desarticulados, padecen de ataxia locomotriz.

Examínese la comparación, medítese sobre el mal que enerva todas las energías cívicas de las provincias y del país en general, y se verá con cuanta razón extremo á veces la nota del apóstrofe y no la extremo lo necesario si se quiere, en pro de un cambio radical en nuestra carta orgánica para poder decir en verdad que vivimos en república.

¿Qué quiere decir república?

Cosa pública, intereses de todos, gobernados ó administrados por todos, en contraposición á monarquía que significa cosa del rey ó de la reina, del emperador ó de la emperatriz, del zar ó de la zarina.

República y monarquía son términos que se ex-

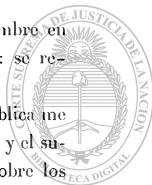
cluyen, son como los polos del mismo nombre en los imanes ó en las corrientes eléctricas : se rechazan.

Cuando como en este caso hablo de república me refiero á la federativa que excluye la unidad y el supremo poder de un mandatario que está sobre los demás poderes y sobre los magistrados de los estados que forman el conjunto nación ; me refiero á la voluntad directamente expresada por la suprema voluntad del pueblo que delega facultades intransferibles é interdiversables, sin tutorías ni supremacías deprimentes : me refiero al respeto de la ley basada en la verdad institucional, al respeto de la igualdad social y del progreso para todos.

¿ Queremos vivir en república ?

Organicémonos para ello, no auspiemos la monarquía ; no la estrechemos en nuestros brazos, porque al estrecharla matamos la libertad. En el caso presente, es decir, con la Constitución vigente no hacemos vida republicana porque nuestra organización es monárquica ; no vivimos en la libertad porque soportamos la tiranía, no vemos la luz porque nos hemos acostumbrado á la sombra ó á las tinieblas.

La cosa pública entre nosotros, es patrimonio de



unos cuantos, porque la vida y la fortuna de los argentinos están en manos de filibusteros ó traficantes políticos.

Conocido el mal y su localización, preciso es curar al enfermo, asistirlo en junta de facultativos. ¿Quiénes deben ser éstos? Los verdaderos argentinos de corazón, los estudiosos y los que tienen en sus manos la alta dirección de los destinos del país, inspirados en anhelos generosos y patrióticos: los que llevan en su alma herencias nobles y son defensores de los derechos de los pueblos: los amantes del bien, de la verdad institucional: los que comprendiendo que hemos llegado á la mayor edad, se den cuenta que debemos tener instituciones propias de un organismo sano y robusto, los que poseen el más legítimo de los egoismos, legar á la patria sus desvelos y su nombre á la posteridad: y ¿qué es el hombre en sociedad sin estas encomiables aspiraciones? Un mercader, si es un hombre de pensamiento lejos de la dirección de la cosa pública, y un mentiroso, si forma en las filas de esa dirección.

En distintas ocasiones, los heraldos de la opinión, han dicho: «El unicato se va... ya se fué A, se fué B: los nepotismos terminaron su evolución: el pueblo entra al pleno goce de sus derechos, etc., etc., y

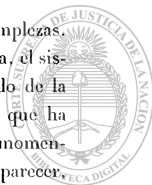


todos hemos consentido en semejantes simplezas.
¡ Ciegos ! La máquina está siempre montada, el sistema es el mismo, el manubrio será movido de la misma manera, por obra de la constitución que ha creado el gobierno fuerte apropiado á otro momento. El régimen de los unicatos no puede desaparecer, irán unos y volverán otros corregidos y aumentados.

¿ Dónde está el fruto de tanto anhelo libertario ?
¿ En el oscuro horizonte de nuestra política nepótica, manejada desde la casa rosada por intermedio de los « agentes naturales » del presidente de la república ?

Cambiar de nombres no es ganar en sentido de las libertades públicas. Políticamente estamos hoy como en el punto de partida: si no somos náufra-gos, estamos empantanados sin atinar dónde hemos de fijar nuestra mirada para pisar tierra firme.

En el banquete dado al doctor Pellegrini por la juventud autonomista en el Prince Jorge's Hall, el 24 de agosto de 1905, este eminente hombre público, decía : « *La causa fundamental de los males de nuestra actualidad política es que todo nuestro régimen institucional es una simulación y una falsedad.* Nuestra Constitución proclama como base institucional la soberanía popular, y la soberanía popular no existe... »

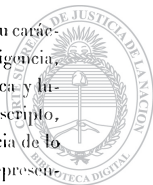


El doctor Pellegrini, con las energías de su carácter que le eran peculiares y su despejada inteligencia, quién desempeñó la presidencia de la república y luchó también en el llano, en el párrafo transcrito, puso la mano en la llaga con entera conciencia de lo que afirmaba : nuestra Constitución no es representativa republicana federal democrática, ni es tampoco unitaria, porque es más que ésto : es monárquica.

Y es el caso de preguntar, ¿ qué es lo que nuestros hombres de gobierno nos ofrecen para emerger á una nueva vida que satisfaga la necesidad suprema del ejercicio de verdad de la soberanía popular, del reinado del gobierno libre ?

Tengo á la vista el mensaje de apertura de las cámaras, leído por el Presidente de la República el día 15 de mayo de este año, y de él tomo lo que sigue : « La opinión pública se mantiene indefinida y ajena todavía á toda actuación política relacionada con el problema de la renovación relativamente próxima del gobierno general : pero no sería lógico pensar que esa situación ha de prolongarse indefinidamente, ni es lícito atribuirle á la indiferencia inexcusable por la gestión pública de los más grandes intereses políticos de la Nación... »

« A este efecto sólo se requiere la posibilidad de garan-





tizar comicios libres, piedra angular del edificio de nuestras instituciones: y sobre esa base es de esperar que se organicen y reconstituyan los partidos políticos en que la opinión se divide, desarticulados y dispersos en su mayor parte desde hace tanto tiempo, por causas tan complejas: y á ese efecto reitero, pues, la seguridad de que en breve ha de tener el honorable Congreso á su consideración las reformas fundamentales del régimen electoral, que aseguren la emisión ampliamente garantizada del voto público.

« Séanos entonces permitido afirmar como voto y aspiración suprema, la convicción de que el más alto relieve de nuestra gran conmemoración patriótica, ha de consistir en las próximas elecciones políticas, practicadas en comicios constituidos por la opinión verdadera del país, que en pleno goce de sus derechos, de su poder creciente, de su prosperidad y su riqueza, afianzados en su organismo moral los principios de orden, de libertad y de trabajo, en paz exterior é interna y en ejercicio de sus altos atributos de *pueblo libre*, pronuncie su veredicto soberano y constituya el futuro gobierno de la república. »

El presidente de la república nos habla en este documento de opinión pública, de partidos, de la posibilidad de comicios libres y de un plan *funda-*

mental de reformas al régimen electoral para asegurar la emisión ampliamente garantizada del voto público, para poder constituir ó renovar el futuro *gobierno general de la república*.

Previamente, debo hacer notar el error en que incurre el presidente, al referirse á la renovación del *gobierno general*. Es por demás elemental que el gobierno general de la Nación está formado por tres poderes : legislativo, ejecutivo y judicial, de manera que cuando se dice gobierno general, se hace referencia al conjunto de los tres poderes. El primero de éstos se renueva por partes y constantemente, el tercero no es electivo y los que lo desempeñan duran tanto como su vida y su buena conducta: así es que, en este caso, lo que se va á renovar es la presidencia de la república, se va á elegir un nuevo presidente que es quien desempeña el poder ejecutivo, no estamos para elegir, constituir ó renovar el gobierno general.

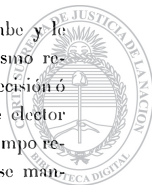
Este error viene de varios artículos constitucionales en los que se ha puesto « gobierno », en vez de « congreso », á fin de que se entienda también poder ejecutivo.

¿ Para qué decirnos que la opinión pública está indefinida y ajena al problema de la elección del fu-



turo presidente de la Nación, cuando él sabe y le consta que el ungido ha de ser el que él mismo resuelva que sea; y sabe también que esta indecisión ó esta falta de opinión satisface sus deseos de elector para imponer cualquier candidato en un tiempo relativamente angustioso? Y si el Presidente se mantuviera con firmeza, ajeno en verdad á la designación de la persona que ha de sucederle; ¿cree, acaso, que la persona que le sucediera en el alto cargo, sería el exponente del voto popular libremente emitido? ¿No le consta que los verdaderos electores serían los gobernadores de provincia sostenidos por cuerpos del ejército de la Nación, que él mismo los ha destacado para hacer respetar la administración deshonestá de éstos?

La Prensa del 3o de mayo en su editorial *Utti possidetis electoral*, dice: «El mejor y más noble monumento que pudiera erigirse á la patria, en recuerdo de la revolución de mayo, es el repudio de las prácticas políticas viciosas y el entronizamiento del principio democrático en el comicio y en el gobierno. El año venidero debiera marcar el punto de arranque de una vida política nueva, tal como la concibieron y anhelaron los campeones ilustres de aquella jornada gloriosa.





« Laten en el fondo del alma el deseo y la necesidad suprema de una depuración de las costumbres públicas al calor de las virtudes republicanas.

« Las tramitaciones electorales se debaten en niveles inferiores, calcadas sobre la eliminación de la entidad pueblo, la más grande figura de la revolución de mayo. Las aspiraciones buscan el hogar oficial, porque allí radica todo el poder electoral. Es así como la democracia argentina se perfila con las líneas de la caricatura grotesca. »

Esta ha debido ser la forma de la literatura presidencial, ofreciéndonos al mismo tiempo reformas institucionales de verdadera transcendencia para la eficiencia del gobierno.

Nos dice también « que la posibilidad de garantizar comicios libres », servirá de base para la organización de los partidos políticos desarticulados y dispersos por « causas tan complejas », y termina diciendo que promete mandar en breve al Congreso un proyecto de reformas del régimen electoral que asegurará *la emisión ampliamente garantizada* del voto público » (1).

(1) En el mensaje respectivo presentado el 15 de junio de este año, dice : « No obstante la bondad del origen asignado á estas reformas y el alto propósito que las ha inspirado, el poder ejecutivo reconoce que dis-

El pueblo argentino no es libre, porque ha instituido un poder ejecutivo con plenos poderes para que le impida serlo. Las urnas libres son solemne



tan algún tanto de las aspiraciones que deben animarnos por el perfeccionamiento de nuestro régimen electoral », que el ambiente de nuestra vida democrática y la heterogeneidad de elementos é intereses concurrentes, imponen no preferir las más modernas teorías de la ciencia, sino cuando ellas se ajusten á nuestras necesidades actuales. « Á este respecto, una exigencia de la actualidad política es, no ya de garantizar eficazmente la emisión libre y constante del voto, sino la de facilitar y estimular el ejercicio de los derechos cívicos. »

Como se ve, el proyecto presentado no responde á la expectativa y á los términos de la promesa del mensaje de apertura del Congreso. Quiere decir que el proyecto presentado no es sino para estimular á asistir á los atrios á objeto de consagrar los candidatos del oficialismo; no es una reforma fundamental y mucho menos la última palabra de la ciencia política, pero ni tampoco importa la garantía eficaz de la emisión libre y constante del voto público.

¿Y es posible creer que con esta terapéutica hemos de levantar al enfermo de la postración en que se encuentra ?

Evidentemente, los médicos están más enfermos que el paciente; estamos dentro de un período de perfecto desvarío, lejos de una idea salvadora, sin rumbo, manejando la nave de nuestras instituciones, sin timón, á merced del capricho de los vientos y de las olas, cual si nos mantuviésemos á la espera de la deseada calma auspiciosa de mejores días que viene siempre después de la tempestad.

Pero no es esto todo. En el proyecto de ley electoral, hay la siguiente disposición : « Art. 12. — La calidad de elector se comprobará en todo tiempo por la matrícula de enrolamiento... » « Art. 20. — El ministerio de guerra enviará á las juntas electorales de la capital de la Nación y de las provincias copia legalizada del padrón militar y la relación de los enrolados cada año. »

Esto quiere decir que la dirección electoral se radica en el ministerio

mentira. El pueblo argentino se ha constituido estableciendo para sí el suplicio de Tántalo : urnas libres y suma del poder público, son términos que se excluyen.

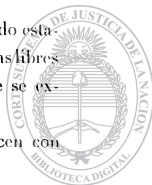
¿ Será factible que los partidos se organicen con

de guerra, para que todo se haga por la fuerza, más que hoy mismo en forma militar, lo que permite que los reacios al enrolamiento se encuentren imposibilitados para el voto. Raro hubiera sido que este proyecto no contuviera este rasgo de militarismo para cimentar con más vigor su imperio.

La última parte del artículo 12, dice : « Todo ciudadano argentino natural ó *naturalizado* desde los diez y ocho años cumplidos en adelante, *está obligado á enrolarse en los padrones militares*, en la forma y tiempo que determinen las leyes respectivas », pero no se ha tomado en consideración lo que dispone el artículo 21 de la Constitución, que dice : « Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar ó no este servicio (armarse en defensa de la patria y de la Constitución, conforme á las leyes y decretos que se dicten) por el término de diez años, contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía ». Si durante este periodo, los ciudadanos naturalizados no están obligados á prestar este contingente de sangre, menos se les puede exigir que se enrolen en el ejército nacional.

Además de ésto, la segunda parte del mismo artículo 12 del proyecto dice, que no se podrá desempeñar cargo ó empleo alguno sin acreditar la calidad de ciudadano con la exhibición de la matricula de enrolamiento.

En la portada de nuestra gran carta, invitamos á todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo ; el artículo 14, estatuye que todos los habitantes de la nación tienen iguales derechos para ejercer toda industria lícita, etc., etc. ; el 20, que los extranjeros « no están obligados á admitir la ciudadanía, y gozan de todos los derechos civiles del ciudadano ; y el 28, dice : « Los principios, garantías y derechos





solo la *posibilidad* de garantía de comicios libres para la elección del futuro presidente? ¿Y esa posibilidad existe? No, y mil veces, no! El cambio de régimen electoral dentro de las prescripciones constitucionales hará para el pueblo el mismo efecto que para un

reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio », y no obstante todo ésto, se exige la ciudadanía demostrada con la papeleta de enrolamiento para desempeñar cualquier empleo ó cargo público. Más de una vez hemos hecho venir de Europa distinguidas personas competentísimas en cuestiones científicas diversas y nos han prestado servicios de verdadera importancia sin haberles obligado á tomar carta de ciudadanía, y hoy mismo si se sancionara este artículo tendrían que quedar cesantes varios empleados de categoría, por lo menos, por no tener los dos años de residencia que exige la Constitución para poder ser naturalizados, y como es consiguiente, nos veremos obligados á no recurrir ni poder aceptar el contingente valioso de extranjeros de reconocida competencia en las ciencias, artes y letras para nuestros institutos de enseñanza, para nuestros museos, observatorios astronómicos y dirección de trabajos especiales de obras públicas.

Finalmente, conforme á este proyecto de ley, los ciudadanos bajo banderas y enganchados son hábiles para el voto, y quedará consagrado el triunfo de los candidatos jefes del ejército, ó se garantizarán con más vigor las candidaturas oficiales. Esto excede al veto del general Urquiza á la ley electoral del 56. Con cuanta razón he dicho que en materia de instituciones, estamos en el punto de partida, no obstante la cultura que hemos alcanzado, rayana en candidez.

En resumen, este proyecto de ley electoral solemnemente prometido no responde á los anhelos populares, no corrige ninguno de tantos males de que adolece la Constitución vigente, porque, al contrario, los aumenta: es una pincelada de tintura de yodo aplicada en carne viva de un canceroso.



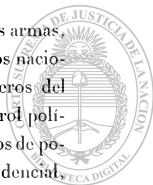
diabético un régimen alimenticio á base de azúcar. El país ha perdido la noción de la libertad y esto lo sabe muy bien el presidente y para mencionarle un caso práctico de palpitante actualidad, ahí está la provincia de Buenos Aires en la que nada se resuelve sin su tutoría, y no se diga que esto acontece porque el presidente sea A, lo mismo sucedería si fuese B, como cuando estuvieron los anteriores. Nuestro mal es constitucional, el pueblo ha nacido afectado de parálisis orgánica, no obstante poseer la plenitud de sus facultades mentales.

El cuadro que presenta una tribu en el momento en que el cacique distribuye el botín, en el que la avidez es la característica de todos los semblantes, tiene su similitud en los momentos que preceden á la formación de las candidaturas para presidente de la república ó para gobernadores de provincia. Todos gritan : ¡ á la lucha ! y la lucha consiste en la mayor simpatía que es posible despertar en el *jefe supremo*, en quien todas las miradas están fijadas, en espera del *exequatur*.

La vida cívica argentina es un desastre. Doloroso es ver cómo perdemos el tiempo en formar agrupaciones ó partidos de oposición á la política presidencial, cuando el pueblo está cohibido de ejercitar sus

derechos porque se lo impide la fuerza de las armas, ó porque los sesenta ó setenta mil empleados nacionales y otros tantos provinciales, los jornaleros del puerto y peones municipales, sin contar el rol político que en esta Capital juegan los comisarios de policía, representantes de la voluntad presidencial, aplastan toda iniciativa independiente, todo esfuerzo cívico, toda acción consciente ciudadana.

Yo también he creído en otros momentos que el mejoramiento político podríamos alcanzarlo por un esfuerzo grande y heroico ; lo creí de buena fe y había puesto decidido empeño en este sentido, como lo hacían muchos otros del mismo credo político del mío : he creído con la mayor buena fe, en que hasta la revolución era obra santa en contra de los gobernantes espúreos, que alcanzan el poder mediante simulacros de elecciones siempre canónicas ; pero hoy me encuentro plenamente convencido que perderíamos lastimosamente el tiempo, y que, triunfantes, para vivir bajo la égida de la Constitución vigente, hubiese sido preferible renunciar el cometido repitiendo las inmortales palabras del genio de la independencia americana, general San Martín : « triunfante me vería en el caso de llorar la victoria con los mismos vencidos ».



Si llevásemos al poder un hombre honrado, patriota de verdad, para dirigir los destinos del país, con la actual Constitución, no podría permanecer con la alta investidura, ó tendría que contaminarse con la atmósfera de la política menguada, los malos ejemplos anteriores y el enorme poder que coloca en sus manos la Constitución, sin necesidad de decir como Rosas: «no me llevéis á la silla de los tiranos».

La carta orgánica de nuestro país no debe contener principios que importen la negación de los derechos inalienables acordados al pueblo. Para que nuestra Constitución sea realmente buena, es preciso que ella contenga el linde perfecto de los tres poderes que constituyen el gobierno general y que garanticen en todas sus prescripciones la espontánea y fiel expresión del pueblo, de su voluntad soberana en la delegación de sus poderes. Es éste el principio fundamental del gobierno libre, y su eficiencia requiere los prestigios de la ley suprema institucional, para asegurar sus beneficios, sin consideración alguna que permita á los mal intencionados desvirtuar sus fines y propósitos. Esta y no otra es la política que nos corresponde hacer en este histórico momento de corrupción y de alta depresión moral y en vis-



peras del centenario de la gran epopeya argentina, y más que argentina, americana.

Nos encontramos en vísperas de la elección presidencial para un nuevo período y todos nos preguntamos : ¿Dónde está la opinión pública, quién es ó dónde está su candidato? ¿Cuáles son las fuerzas ó partidos que actúan en la lucha, ó cuál el que lo levanta?

En primer lugar, no hay lucha, porque no hay partidos, y no hay candidatos populares porque no hay pueblo, pero en defecto de estas cosas de poca monta, hay un presidente argentino, católico, apostólico, romano, *jefe supremo de la Nación*, que sin encontrarse agobiado por el enorme peso de responsabilidades que le origina la vasta administración del país, hace el sacrificio de ser el gran elector.

No hay propiamente vaguedad ó indecisión en nuestra atmósfera política en este asunto, porque todos tenemos fija la mirada en el presidente, indagando ó escudriñando las afinidades y tendencias del que se dice candidato, para volcar el bagaje de nuestras adhesiones en su balanza. Á nadie se le ocurre pensar en partidos que no existen, á no ser en los de ocasión, constituidos ex profesamente para el candi-





dato, ni en los hombres sin vinculaciones con el presidente ó de condiciones relevantes y de carácter, porque éstos son desheredados, fracasados políticos, representan el rol de papeles viejos en un canasto; el triunfo es de las medianías ó de los más ecuanímes. Debe ser á veces triste cosa no poder ser políticamente ecuaníme, cuando uno se encuentra apto para hacer el bien al país desde las alturas.

¡ Qué desorientación tan grande ! ¡ Cuánto achata-
tamiento cívico ! Y ¿ éste es un país libre ?

Creo no equivocarme, al afirmar que cualquier ciudadano argentino medianamente ilustrado haría una gran presidencia con las reformas que propongo y cualquier gobernante de provincia será un dechado de virtud ; é inversamente, el estadista más encumbrado hará una presidencia desastrosa bajo los auspicios de la Constitución vigente.

He leído un discurso de un distinguido abogado, radical de primera fila, pronunciado el próximo pasado año (1908), el cual contiene las mejores ideas de sana doctrina político-económicas : he descubierto en él un hombre patriota y de gran pensamiento — creo que nunca fué gobernador ni congresal — y á quien no conozco ni de vista, y creo, que si llegara á la presidencia de la república con la Constitución que

hasta hoy nos rige, terminaría aquélla designando sucesor, acompañado en esta grata tarea por un Congreso dócil y por catorce gobernadores de provincia ó señores feudales apuntalados por batallones de línea. ¿Por qué? Porque procediendo de esa manera no se hace sino interpretar fielmente lo que la Constitución ha querido que se haga.

Se dice que el partido autonomista nacional (dividido hace pocos años en nacional y autonomista), ha hecho muchos males al país, porque es el único que gobierna desde hace más de un cuarto de siglo.

Si designamos ó si el presidente impone un sucesor de filiación radical, republicano, autonomista, nacional, presidencial ó de ocasión, para que dirija los destinos del país, conforme á la Constitución actual, cualquiera será lo mismo. Digase al elegido, como dice la Constitución : el honorable Congreso no funciona sin su orden ó beneplácito: su autoridad es colegisladora y está facultado para vetar las resoluciones de las cámaras como en las monarquías: usted puede situar el ejército de la Nación en las capitales de provincia ó puntos del territorio de la Nación donde crea conveniente, porque es jefe supremo de todas las fuerzas de mar y tierra: nombra y remueve



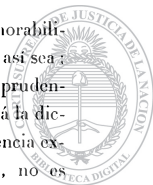
á voluntad y cuando le parece bien todos los empleados de la administración general de la Nación; otorga empleos rentados y comisiones á congresales sin *previo* consentimiento de la cámara respectiva (contrariamente al art. 64) para hacerlos partidarios de su política, y como con las fuerzas de línea se sostiene *fácilmente* gobernadores de provincia huérfanos de opinión, puede usted acordar reelecciones á senadores y diputados : usted interviene en las provincias á su amplia voluntad y decreta en estado de sitio todo el territorio de la Nación en el receso de las cámaras cuando le parezca conveniente hacerlo : usted hace obispos, nombra jueces y veta las sentencias de éstos ó conmuta penas : en una palabra, usted es todo, es el gobierno general de la Nación (*sic*) ; es irresponsable como los soberanos europeos y asiáticos, porque nadie le pide cuenta de nada, y finalmente, usted declina la herencia presidencial en la persona de su agrado, aunque se tratara de un pariente cercano, porque la voluntad popular es un mito : dígame ésto á un presidente de esta llamada república y contéstese si es posible que el elegido pueda substraerse á tanto poder y que el pueblo esté en condiciones de ejercitar su soberanía. Pudiera ser que por una coincidencia inexplicable, quizá, el futuro presidente sea una per-



sona de relevantes prendas de carácter, honorabilidad, competencia y patriotismo y ojalá que así sea ; que ejercite el poder con toda ecuanimidad y prudencia, sin hacer uso de tanto poder que invita á la dictadura ; en este caso tendríamos una presidencia excepcionalmente buena, histórica ; empero, no es posible que fundemos la felicidad y los grandes destinos de la Nación en hombres dioses, porque éstos no se cuentan por docenas.

Invoco el testimonio de cualquier hombre honrado, que poniendo la mano en su corazón de argentino, é intensificando su pensamiento sobre los destinos de esta Nación joven y robusta y sobre lo que se entiende por gobierno representativo republicano federal democrático, niegue que vivimos en pleno régimen de la monarquía, decorado con artísticos toques de republicanismó ; que la honradez política en este largo período, es una expresión vana y sin sentido ; que el pueblo no gobierna, porque no tiene ni voz ni voto libre ; que es imposible ser políticamente honrado, cuando la Constitución induce á seguir el camino contrario.

; Cuánto tiempo hemos perdido en luchas infecundas sin acometer el mal en su origen, discutiendo hombres y arrojando dictérios á todos los presiden-





tes, cuando el mal, propiamente no radicaba en ellos sino en la Constitución.

Mi principal objeto al emprender esta obra, para decirlo en dos palabras, ha sido el siguiente: establecer el sufragio de verdad: la fiel y genuina representación del pueblo de la república en sus mandatarios, la libertad en todas las manifestaciones de la vida y en todos los ámbitos del territorio, y el conjunto de las reformas que propongo responden á este laudable propósito, sin que haya descuidado corolarios que importan prescripciones cuya innegable virtud responden á los más sanos principios del gobierno democrático.

Desde luego, un plan racional de restricciones á las facultades del poder ejecutivo acordadas por la Constitución vigente, se impone al fin indicado, y correlativamente, reformas de importancia á las facultades y organización de los poderes legislativo y judicial: en una palabra necesario é indispensable es delimitar las atribuciones de cada poder, de los tres que constituyen el gobierno general, á fin de evitar tanto abuso que hasta el presente hemos palpado y de que el pueblo ejercite su voluntad soberana.

Si el poder ejecutivo no puede por su sola y exclusiva voluntad situar ó distribuir el ejército en las provincias.

sino en las fronteras del territorio de la Nación ó en los territorios nacionales desiertos ; si arrancamos del cetro esta arma de sojuzgamiento de los pueblos, dispuesta para derrocar ó sostener gobernantes sin ni nociones de moral política ; *si al presidente le está prohibido intervenir en las provincias*, salvo el caso de hacerlo en cumplimiento de leyes expresas : *si no puede dictar el estado de sitio*, facultad, hija de la tiranía, « de que hicieron uso nuestros gobiernos patrios, durante las épocas más tempestuosas de la revolución argentina, para defenderse, precaverse, vengarse y perseguir » (2) : ¿ es concebible la idea de los presidentes electores ?

Como consecuencia de estas restricciones al poder ejecutivo, *si los gobernadores de provincia no pueden recibir el calor oficial nacional*, de que hoy disponen á voluntad, mediante el ejército de línea, ¿ á qué quedará reducida la actuación de éstos ? Á la expresión del más sincero patriotismo y del más honesto cumplimiento de las prescripciones constitucionales y de la ley.

Otra consecuencia más, *si el presidente no puede*

(2) J. BARRAQUERO, *Espíritu y práctica de la Constitución argentina*, pág. 358.



hacer reelecciones de diputados y senadores, porque no habrá gobernador que se atreva á ser su instrumento para estos fines, porque este asunto será del resorte de comicios libres y más que todo porque las reelecciones están prohibidas. ni puede otorgar empleos ni comisiones de ningún género á diputados ni senadores, ¿es posible que el presidente disponga, no digo de la mayoría legislativa, pero ni de una simple minoría?

Si los congresales no pueden ser reelectos por el presidente, ni pueden recibir empleo ó comisión alguna del mismo, ¿cuál será la esfera de acción de este alto cuerpo directriz de los destinos de la república? ¿Quién no sabría contestar esta interrogación? La independencia más absoluta de su carácter. Allí estaría representado el saber, la honorabilidad, el patriotismo : el Congreso sería ciencia, luz, humanidad !

Si los gobernadores y ministros de provincia no pueden ser senadores ni diputados, sino después de un año de fenecido el periodo para el que fueron elegidos, ¿cuál será la conducta de éstos para alcanzar tan alta distinción de sus conciudadanos? Irreprochable, dentro de lo humanamente posible.

Si los empleados de la administración general de la Nación son nombrados por seis años mientras dure



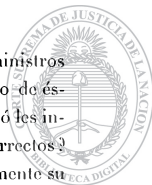
su buena conducta, ¿el presidente ó los ministros estarán en condiciones de influir en el ánimo de éstos en favor de determinadas candidaturas, ó les inducirán á prestarse á negocios ó asuntos incorrectos?

Ni pensarlo. Un hombre que gana honradamente su jornal, cumpliendo con los deberes de su puesto, inmune á las sollicitaciones interesadas de los superiores gerárquicos es una potencia, y se encontrará en entera independencia personal.

Si los empleados de la administración son nombrados por el poder ejecutivo á propuesta de los ministros y jefes de repartición, ¿es posible imaginar que el presidente haga valer su firma puesta al pie de un nombramiento?

Si los contratos y operaciones de compra de cosas que necesita el gobierno deben hacerse por licitación, y se publica mensualmente los ingresos y egresos de tesorería en los diarios de la Capital, ¿es posible suponer *negotium* por parte de los empleados públicos que intervienen?

Si el poder ejecutivo no puede hacer política y el Congreso es un cuerpo independiente, constituido por los hombres más representativos del país, ¿es posible que los ferrocarriles del Estado, estén mal administrados?



Si en el Congreso están representados los distintos matices de la opinión proporcionalmente á la capacidad de los partidos, ¿son posibles las unanimidades partidistas ó las disposiciones inconsultas para satisfacer propósitos inconfesables?

Si los presidentes y vicepresidentes de la república han de ser los exponentes de la soberana voluntad popular, directamente elegidos en comicios libres y bajo el régimen proporcional, ¿imperará en la designación la voluntad de unas cuantas personas que bajo el pomposo título de *notables*, se adjudican los derechos del pueblo, dándonos el espectáculo de una sección teatral dirigida é inspirada por el presidente que termina?

Si las sesiones de prórroga sólo pueden ser resueltas por el Congreso, ¿será posible que el Presidente se vea nuevamente en el caso de dictar otro decreto de 25 de enero?

Si el jornal del obrero no está gravado con impuestos y por consiguiente éste se encuentra en condiciones económicas desahogadas, ¿serán posible las huelgas, si la dirección de este gremio está inspirada en fines patrióticos y humanitarios?

Si la masa del pueblo goza de bienestar económico por la baratura de la vida y las innumerables fuentes



de trabajo de que disponemos, aparte de otros progresos morales que son inherentes á la prosperidad material, ¿no es cierto que tendrán voto consciente y que serán verdaderos factores eficientes del progreso social?

Si la justicia no es una dependencia del poder ejecutivo, bajo ningún concepto, ¿no es cierto que se levanta el poder moral de este santuario de la fe pública?

Si los nombramientos de los jueces de provincia no son hechos por los gobernadores, ¿será posible que éstos tengan influencia sobre aquéllos?

Si ningún miembro del poder judicial no puede en manera alguna intervenir en escrutinios de elecciones ó en otros actos relativos á éstos, ¿no es cierto que son inmunes á las acechanzas de la politiquería y que el papel de sus altas funciones está garantizado?

Las interrogaciones que anteceden, llevan en sí mismo las contestaciones, y ellas demuestran con toda evidencia, á la luz de hechos incontrovertibles, la bondad de las reformas que propongo.

En el incesante flujo y reflujo de las pasiones humanas en el gran escenario de la vida de los pueblos



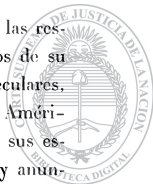
en ese engranaje de sus continuos progresos, en ese
efluvio de sus conquistas sucesivas hay siempre cla-
ros que se cierran y puertas que se abren para reci-
bir el fruto de los nuevos esfuerzos del ingenio hu-
mano, en la labor constantemente anhelosa de alcan-
zar las últimas fronteras de las ciencias, de la verdad
en todas las manifestaciones de la vida, del progreso
social. Allí vamos todos, allí marchamos por diversos
rumbos al parecer opuestos, unas veces retardados y
otras con acelerado paso, aprovechando en este caso
la experiencia ajena, allí también me dirijo con este
mi modesto bagaje.

Las instituciones de los pueblos no son ni fueron
obra de un día ni es posible que permanezcan en la
contemplación de los siglos, desafiando en edad á
las ciclópeas pirámides de Egipto. Las instituciones
marcan ciclos porque ellas son expresión de los pro-
gresos sociales, evolucionan con las nuevas tenden-
cias y anhelos de los pueblos, son la síntesis del es-
piritu que las rige, la forma del pensamiento que
entrevé nuevos gérmenes de felicidad social.

Largo tiempo ha prevalecido la idea de que las
constituciones que rigen los pueblos deben ser como
las vestales: intangibles, en favor de lo cual debe
existir una especie de veneración, sean ó no adapta-



das á la índole, tendencia y aspiraciones de las respectivas sociedades, en los diversos periodos de su existencia. Sin referirme á los organismos seculares, he visto esta significativa tendencia en Norte América hasta estos últimos años, hasta que hoy, sus escritores de nombradía recorren el velo, y anuncian que la Constitución, basada en un todo en el régimen monárquico de Inglaterra, tiene establecido simplemente como forma de gobierno, el sistema representativo, pero no el democrático, contra el que directamente se opuso Madison y otros convencionales de la constituyente. Nosotros mismos hemos tenido esa idea y en la actualidad no han de faltar adoradores idólatras como los emperadores romanos que fulminaban al Cristo Redentor y á sus apóstoles. Estos ecos hemos sentido en la convención de 1898, y aun es posible notarlos, emitidos por cierto estado de miopía propio del defecto de no pensar. Además de esto, es por demás sabido que los pueblos son como los niños, inexperientes de la hora en que viven, no saben lo que les conviene : pero es preciso hacerles saber, no con el lema chileno : por la razón ó la fuerza : no, simplemente con la razón, por medio del convencimiento que inoculan la demostraciones concluyentes, la buena fe, la sinceridad



equilibrada, sin apresuramientos ni aspiraciones inconfesables.

Á propósito de estas ideas, el vigoroso escritor Eugenio Caballero (3), dice : « Los cortesanos del despotismo y los prevaricadores, por el mismo interés que el amo, pretenderán perpetuar un orden de cosas que lleve al pueblo uncido al carro del pasado, haciendo un alto definitivo en las barreras del presente. Toda propuesta de innovación será para ellos un peligro, una locura.

« Los que han nacido con el alma mezquina, faltos de sabia y de aspiraciones, se asustan de toda novedad. En cualquier movimiento de opinión, de ideas, estarán siempre por los términos medios : nada les importa que una verdad política sucumba á las resistencias de la preocupación ó del interés personal : su opinión será siempre que se evite toda lucha y que la conciencia se amoldeá lo que existe, pasando por las horcas caudinas de transacciones y aplazamientos : son como las nodrizas de la sociedad habituadas á asustarla con fantasmas para imponer silencio.

« Los retrógados no se contentan con rechazar una

(3) *Estudios y paralelos de los gobiernos centralistas y federativo*, página 328.



reforma : para éstos las doctrinas nuevas son blasfemias, la civilización es corrupción, licencia las prácticas de la libertad. »

Por más que haya hombres recalcitrantes á toda tendencia libertaria, ancianos de escalar el poder pretendiendo tener en sus manos la suerte y los destinos de la Nación, creo, animado por sentimientos del más puro patriotismo, que es deber de conciencia, de solidaridad social y de humanidad, acometer la empresa de la reforma de la Constitución en la forma que propongo.

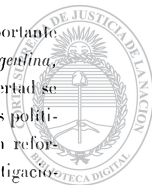
El gran Sarmiento dijo en cierta ocasión : « La paz inalterable del pueblo más movable del mundo estriba en esa seguridad y facilidad de corregir los defectos de sus instituciones fundamentales : y en los Estados Unidos se lleva á tal grado esta práctica que al llenar las planillas del censo se pregunta á cada ciudadano *individualmente*, si cree necesario corregir la Constitución, procediéndose inmediatamente á convocar una convención, si resulta una mayoría por la afirmativa. »

Esto prueba que en Estados Unidos hay conciencia hecha del espíritu que debe regir las instituciones, conformándolas en cada periodo á los progresos generales de la Nación.



El doctor Julián Barraquero, en su importante libro *Espíritu y práctica de la Constitución argentina*, dice: « Todos los pueblos amantes de su libertad se han preocupado en modelar sus instituciones políticas sobre la última palabra de la ciencia y en reformarlas á medida que ésta avanza en sus investigaciones. Sólo así serán el reflejo de su desarrollo y movimiento y el motor más poderoso de su civilización y prosperidad. Pero si permanecen estacionarios, sino se adaptan á las nuevas necesidades que el progreso trae consigo, las instituciones políticas, que eran protectoras del orden y la libertad, se convierten en instrumento de opresión y de anarquía. Así la dictadura pudo ser salvadora de la libertad en los tiempos de Washington y de San Martín porque la magnitud de la tormenta que amenazaba á la patria, sólo podía conjurarse con la fuerza del absolutismo.

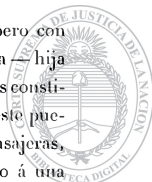
« Pero cuando las épocas de convulsión han pasado, cuando los pueblos han afirmado su independencia, la dictadura es un sarcasmo, una ironía sangrienta de las prerrogativas que garanten la vida, el honor y la propiedad de los ciudadanos. Es por esto que todos los pueblos del mundo han proscripto del catálogo de sus instituciones políticas todo espíritu de despotismo, todo germen de arbitrariedad. »



Llego al fin de la jornada, sin fatiga, pero con dejo de amarga tristeza — ojalá se desvanezca — hija de un profundo convencimiento de los males constitucionales anotados y de la indiferencia de este pueblo por todo lo que no sea el fruto de cosas pasajeras, al alcance de todos, de frivolidades, afecto á una literatura ampulosa y efímera, inadecuada á la vigorosa energía intelectual característica del tipo argentino. Empero, si al juicio sereno de mis contemporáneos, no he dado en el blanco, en este ejercicio de tiro en que solo me debato, por lo menos, cábe-me la satisfacción de iniciar una cuestión de la más alta transcendencia para los destinos futuros de la república.

¡ Cuánto tiempo perdido y cuánto nos resta aún para emerger al régimen político de la verdadera vida!

Hombres de ciencia, estadistas, hombres de ley, políticos, ciudadanos, todos, estudiad estas cuestiones con espíritu de sincera honradez y resolvedlas con criterio patriótico para bien de todos y de cada uno : este es mi único anhelo, la única recompensa que solicito, la última expresión de mi alma inspirada en sentimientos grandes y generosos. Procedamos de manera que en día no lejano, las ligaduras que oprimen al país se rompan y las libertades brillen, la feli-



ciudad social destelle en todos los ámbitos, por su glorias, por su territorio inmenso, por sus instituciones y por sus hombres en el gran escenario de la República.

Con este trabajo, creo haber cumplido con un deber de conciencia y de patriotismo, y ojalá que así lo considere la opinión nacional. De todos modos, diré con Pelletan : *He puesto las manos sobre el corazón de mi país, he sentido sus palpitaciones y he escrito este libro.*

Alea jacta est; de los resultados se encargarán de darnos cuenta los que vengan, grabándolos en la pizarra de los tiempos.





CONSTITUCIÓN NACIONAL



VIGENTE

Nos, los Representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso general constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer á la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina.

REFORMAS PROPUESTAS

Nos, los Representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso general constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer á la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que la anhelan y que procurando la felicidad social dentro del orden (1), quieran habitar en el suelo argentino : invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina.

(1) Este agregado tiene por objeto, facilitar la acción de los poderes públicos, á fin de seleccionar la inmigración y legalizar la ley de residencia, porque la amplitud de los términos en que está concebido el preámbulo vigente se opone á estas disposiciones.



PARTE PRIMERA

CAPÍTULO ÚNICO

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS

Art. 1°. — La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución.

Art. 2°. — El gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano.

Art. 3°. — Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una ó más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse.

Art. 4°. — El gobierno federal provee á los gastos de la Nación con los fondos del tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación del de la venta ó locación de tierras de propiedad nacional; de la renta de correos; de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente á la población imponga el

Art. 2°. — El Gobierno federal estará constituido por tres poderes independientes entre sí : Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuyas funciones serán regidas por las disposiciones contenidas en esta Constitución.

Art. 4°. — El gobierno federal satisface los gastos ordinarios de la Nación con los fondos del tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, impuesto sobre la renta ó lo que es susceptible de ella sin incidencia sobre los consumos del gremio obrero, del de la venta ó locación de tierras de propiedad

Congreso general, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencias de la Nación ó para empresas de utilidad nacional.

nacional; de la renta de correos, telégrafos, ferrocarriles, canales artificiales de navegación y otros servicios públicos; y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el Congreso para urgencias de la Nación ó para empresas de utilidad nacional.

La aduana no es arma de represalia comercial, ni instrumento de extorsión para el pueblo de la República. En el espíritu de las leyes basadas en este artículo, deberá primar la idea de la exención de impuestos á los gremios obreros, á cuyo fin, se harán disminuciones paulatinas á los gravámenes de sus consumos.

Art. 5º. — Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el gobierno federal garantiza á cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Art. 6º. — El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizarla forma republicana de gobierno, ó repeler invasiones exteriores, y á requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas ó restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición ó por invasión de otra provincia.

Art. 7º. — Los actos públicos y

Art. 5º. — Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional, y que asegure su régimen municipal electivo. Bajo de estas condiciones el gobierno federal garantiza á cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Art. 6º. — El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, ó repeler invasiones exteriores y á requisición de sus autoridades constituidas, ó cuando un grave acontecimiento imponga esta medida.





procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás: y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.

Art. 8º. — Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios é inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias.

Art. 9º. — En todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales régiran las tarifas que sancione el Congreso.

Art. 10. — En el interior de la república es libre de derechos la circulación de los efectos de producción ó fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores.

Art. 11. — Los artículos de producción ó fabricación nacional ó extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia á otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques ó bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.

Art. 12. — Los buques destinados de una provincia á otra, no

Art. 12. — Los buques destinados de una provincia á otra, no

serán obligados á entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin que en ningún caso puedan concederse preferencias á un puerto respecto de otro, por medio de leyes ó reglamentos de comercio.

Art. 13. — Podrán admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra ú otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.

Art. 14. — Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme á las leyes que reglamenten su ejercicio, á saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar á las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y de aprender.

Art. 15. — En la Nación Argentina no hay esclavos; los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta constitución, y una

serán obligados á entrar, anclar y pagar derechos por causas de tránsito; sin que por ningún caso puedan concederse preferencias á un puerto respecto de otro, por medio de leyes ó reglamentos de comercio, con excepción de lo que dispone el inciso 1º del artículo 67.

Art. 13. — Los actuales territorios federales serán erigidos en provincias, cuando á juicio del Congreso y según leyes especiales, el crecimiento de la población y el desarrollo de la respectiva economía, les permita bastarse á sus necesidades públicas; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra ú otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.





ley especial reglará las indemnizaciones á que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas, es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano ó funcionario que lo autorice; y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la república.

Art. 16. — La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra consideración que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Art. 17. — La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley ó de sentencia fundada en ley.

Todo autor ó inventor es propietario exclusivo de su obra, invento ó descubrimiento, por el término que le acuerde la ley.

La confiscación de bienes queda

Art. 16. — La Nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos y cargos públicos, sin otra consideración que la idoneidad. La igualdad es la base de las cargas públicas, y la relativa capacidad económica la del impuesto.

borrada para siempre del código penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

Art. 18. — Ningún habitante de la nación, puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ó sacado de los jueces designados por la ley, antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado á declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse á su allanamiento y ocupación. Quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias: para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que á pretexto de precaución conduzca á mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorize.

Art. 19. — Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y á la moral pública, ni perjudiquen á un tercero, están sólo reservadas á Dios, y exentas de la autoridad de

Art. 18. — Ningún habitante de la Nación, puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ó sacado de los jueces designados por la ley, antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado á declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse á su allanamiento y ocupación. Queda abolida para siempre la pena de muerte. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias: para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida que á pretexto de precaución conduzca á mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice y á los empleados que la ejecuten.





los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado á hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Art. 20. — Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano: pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme á las leyes. No están obligados á admitir la ciudadanía, ni á pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la nación; pero la autoridad puede acortar este término á favor del que lo solicite, alegando y probando servicios á la república.

Art. 21. — Todo ciudadano argentino está obligado á armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme á las leyes que al efecto dicte el Congreso y á los decretos del ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar ó no este servicio por el término de diez años, contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.

Art. 22. — El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades

Art. 20. — Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano: pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme á las leyes. Todos los extranjeros que posean el idioma nacional, sepan leer y escribir y tengan cuatro ó más años de residencia inmediata en el país, ó no sabiendo leer y escribir, sean propietarios ó casados en el país, están de hecho naturalizados, y obligados á tomar su carta de ciudadanía, é inscribirse en el registro cívico nacional. La naturalización del jefe de familia, se extiende, á su mujer é hijos menores radicados en el país.

Art. 21. — Todo ciudadano argentino, nativo ó naturalizado, está obligado á armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme á las leyes que al efecto dicte el Congreso y á los decretos del ejecutivo nacional.

creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada ó reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione á nombre de éste, comete delito de sedición.

Art. 23. — En caso de conmoción interior ó de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia ó territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la república condenar por sí, ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso, respecto de las personas, á arrestarlas ó trasladarlas de un punto á otro de la nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

Art. 24. — El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados.

Art. 25. — El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias é introducir y enseñar las ciencias y las artes.

Art. 26. — La navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente á los reglamentos

Art. 23. — Toda enajenación de bienes del Estado, compras y demás contratos susceptibles de licitación, se harán precisamente en esta forma y públicamente, bajo pena de nulidad imprescriptible y de responsabilidad personal de los funcionarios, si hubiere defraudación, salvo las excepciones y limitaciones que la ley estableciere.

(Suprimido.)





que dicte la autoridad nacional.

Art. 27. — El gobierno federal está obligado á afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecido en esta Constitución.

Art. 28. — Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Art. 29. — El Congreso no puede conceder al ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales á los gobernadores de provincia, *facultades extraordinarias*, ni *la suma del poder público*, ni otorgarles *sumisiones ó supremacías*, por los que la vida, el honor ó las fortunas de los Argentinos queden á merced de Gobiernos ó persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán á los que lo formulen, consientan ó firmen, á la responsabilidad y pena de los infames traidores á la patria.

Art. 30. — La Constitución puede reformarse en el todo ó en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto.

Art. 31. — Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las poten-



cias extranjeras, son la ley suprema de la nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas á conformarse á ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes ó constituciones provinciales. Salvo para la provincia de Buenos Aires los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859.

Art. 32. — El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, ó establezcan sobre ella la jurisdicción federal.

Art. 33. — Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Art. 34. — Los jueces de las Cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia; ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar, da residencia en la provincia en que se ejerza y que no sea la del domicilio habitual del empleado; entendiéndose ésto para los efectos de optar á empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentre.

Art. 35. — Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, á saber: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente

Art. 32. — El Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

Art. 34. — El desempeño de funciones en el orden federal, tanto en lo civil como en lo militar, no da residencia en la provincia en que se ejerzan y que no sea la del domicilio habitual del empleado; entendiéndose esto para los efectos de la representación en Congreso y para optar á empleos ó cargos en la provincia en que accidentalmente se encuentre.

para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras: *Nación Argentina* en la formación y sanción de las leyes.



PARTE SEGUNDA

AUTORIDADES DE LA NACIÓN

TÍTULO I

GOBIERNO FEDERAL

SECCIÓN I

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 36 — Un Congreso compuesto de dos cámaras, una de Diputados de la nación y otra de Senadores de las provincias y de la capital, será investido del poder legislativo de la Nación.

CAPÍTULO I

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Art. 37. — La Cámara de diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la capital, que se consideran á este fin como distritos electorales de un

Art. 37. — La Cámara de diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de la República Argentina, á razón de uno por cada treinta y tres mil ciudadanos ó

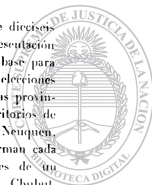
solo estado y á simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes ó fracción que no baje de dieciseis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

fracción que no baje de dieciseis mil quinientos. La representación proporcional, servirá de base para ésta, como para todas las elecciones populares. Á este fin, las provincias, la Capital, los territorios de la Pampa, Misiones, Neuquen, Chaco y Río Negro, forman cada uno distritos electorales de un solo Estado; y Formosa, Chubut, Santa Cruz, Los Andes y Tierra del Fuego formarán un solo distrito, mientras no tenga el número de ciudadanos que permita á cada uno de éstos enviar un diputado.

Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

Art. 38. — Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: por la provincia de Buenos Aires, doce (12); por la de Córdoba, seis (6); por la de Catamarca, tres (3); por la de Corrientes, cuatro (4); por la de Entre-Ríos, dos (2); por la de Jujuy, dos (2); por la de Mendoza tres (3); por la de Rioja, dos (2); por la de Salta, tres (3); por la de Santiago, cuatro (4); por la de San Juan, dos (2); por la de Santa Fe, dos (2); por la de San Luis, dos (2); y por la de Tucumán, tres (3).

Art. 39. — Para la segunda legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse á él el número de diputados: pero este censo só-





lo podrá renovarse cada diez años.

Art. 40. — Para ser diputado, se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, ó con dos años de residencia inmediata en ella.

Art. 41. — Por esta vez las legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los Diputados de la nación; para lo sucesivo el Congreso expedirá una ley general.

Art. 42. — Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; pero la sala se renovará por mitad cada bienio; á cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer período.

Art. 43. — En caso de vacante, el gobierno de provincia ó de la capital, hace proceder á elección legal de un nuevo miembro.

Art. 40. — Todo elector puede ser diputado al Congreso, dentro de las condiciones siguientes: ser ciudadano civil ó militar; haber cumplido la edad de treinta años, ser natural de la provincia que lo elija, ó no siéndolo, que tenga dos años de residencia inmediata en ella, y cinco años de ciudadanía en ejercicio; la residencia de veinte años consecutivos, aunque no tenga la inmediata, lo coloca al oriundo de otra provincia en iguales condiciones al nativo; pagar contribución directa de doscientos pesos desde dos años antes de la elección ó disponer de una entrada anual de cinco mil pesos.

Art. 42. — Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles después del intervalo de un período. La Cámara se renovará por mitad cada bienio.

Art. 43. — En caso de vacante, el gobierno de provincia ó de la Capital, convocará al pueblo á elección legal de un nuevo miembro hasta completar el período, dentro de los quince días siguientes al de la vacancia.



Art. 44. — Á la Cámara de diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.

Art. 45. — Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, sus ministros y á los miembros de la Corte Suprema y demás tribunales inferiores de la Nación, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño ó por delito en el ejercicio de sus funciones, ó por crímenes comunes; después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar á formación de causa por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.

CAPÍTULO II

DEL SENADO

Art. 46. — El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia, elegidos por sus legislaturas á pluralidad de sufragios, y dos de la Capital elegidos en la forma prescripta para la elección del presidente de la Nación. Cada senador tendrá un voto.

Art. 47. — Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes, ó de una entrada equiva-

Art. 47. — Son requisitos para ser elegido senador : ser ciudadano civil ó militar con goce de derechos políticos y civiles, tener cuarenta años de edad, diez años de ciudadanía en ejercicio, pagar

lente y ser natural de la provincia que lo elija, ó con dos años de residencia inmediata en ella.

Art. 48. — Los senadores durarán nueve años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará por terceras partes cada tres años, decidiéndose por la suerte, luego que todos se reunan, quiénes deben salir en el primero y segundo trienio.

Art. 49. — El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.

Art. 50. — El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, ó cuando este ejerce las funciones de presidente de la Nación.

Art. 51. — Al Senado corresponde juzgar en juicio público á los acusados por la Cámara de diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte

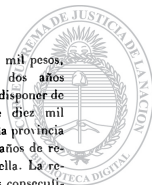
contribución directa de mil pesos, cuando menos, desde dos años antes de la elección, ó disponer de una entrada anual de diez mil pesos y ser natural de la provincia que lo elija ó con dos años de residencia inmediata en ella. La residencia de veinte años consecutivos, aunque no tenga la inmediata, lo coloca al oriundo de otra provincia en las mismas condiciones del nativo.

Art. 48. — Los senadores durarán nueve años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles después de un periodo de cuatro años. El Senado se renovará por terceras partes cada tres años.

(Suprimido.)

Art. 50. — La Cámara estará presidida por un presidente y en su defecto por dos vicepresidentes, primero y segundo, elegidos anualmente de su seno.

Art. 51. — Al Senado corresponde juzgar en juicio público á los acusados por la Cámara de diputados. La culpabilidad del acusado será declarada por mayoría de dos tercios de votos de los presentes.





Suprema. Ninguno será declarado culpable sino á mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.

Art. 52. — Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza, ó á sueldo en la nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta á acusación, juicio y castigo conforme á las leyes, ante los tribunales ordinarios.

Art. 53. — Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la nación para que declare en estado de sitio uno ó varios puntos de la república, en caso de ataque exterior.

Art. 54. — Cuando vacase alguna plaza de senador, por muerte, renuncia ú otra causa, el gobierno á que corresponda la vacante, hace proceder inmediatamente á la elección de un nuevo miembro.

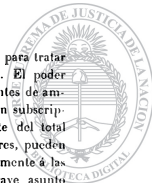
(Suprimido.)

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMUNES Á AMBAS CÁMARAS

Art. 55. — Ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1° de mayo hasta el 30 de septiembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación, ó prorrogadas sus sesiones.

Art. 55. — Ambas cámaras se reunirán todos los años en sesiones ordinarias por derecho propio, sin necesidad de convocatoria, desde el 1° de mayo hasta el 30 de septiembre. Pueden también ser prorrogadas sus sesiones por resolución de las mismas y por simple mayoría, antes de fenecido el pe-



riodo de las ordinarias, para tratar las asuntos pendientes. El poder ejecutivo ó los presidentes de ambas cámaras por petición suscrita por una cuarta parte del total de diputados y senadores, pueden convocar extraordinariamente á las cámaras, cuando un grave asunto de interés ó de orden público lo requiera.

Art. 55 a. — Si iniciada la acusación de juicio político á altos magistrados ó funcionarios de la nación en sesiones ordinarias, no hubiese terminado el 30 de septiembre, las sesiones quedan de hecho prorrogadas hasta la terminación de aquél.

Art. 56. — Cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto á su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; pero un número menor podrá compeler á los miembros ausentes á que concurran á las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada cámara establecerá.

Art. 57. — Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días sin el consentimiento de la otra.

Art. 58. — Cada cámara hará su reglamento, y podrá con dos tercios de votos corregir á cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus



funciones, ó removerlo por inhabilidad física ó moral sobreviniente á su incorporación, y hasta excluirlo de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renunciaciones que voluntariamente hicieren de sus cargos.

Art. 59. — Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad á lo que prescribe esta Constitución.

Art. 60. — Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado, por las opiniones ó discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.

Art. 61. — Ningún senador ó diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido *infraganti* en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante ú otra afflictiva; de lo que se dará cuenta á la cámara respectiva con la información sumaria del hecho.

Art. 62. — Cuando se forme querrela por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador ó diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerle á disposición del juez competente para su juzgamiento.



Art. 63. — Cada una de las cámaras puede hacer venir á su sala á los ministros del poder ejecutivo, para recibir las explicaciones ó informes que estime convenientes.

Art. 64. — Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo ó comisión del poder ejecutivo, sin previo consentimiento de la cámara respectiva, excepto los empleos de escala.

Art. 65. — Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.

Art. 66. — Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el tesoro de la Nación con una dotación que señalará la ley.

Art. 63. — Es facultativo de los ministros del poder ejecutivo, asistir ó enviar una exposición á las cámaras, cuando éstas requieran informes ó explicaciones, sea en sesiones ordinarias, de prórroga ó extraordinarias.

Art. 64. — Ningún miembro del Congreso podrá retener ó recibir empleo ó comisión alguna del poder ejecutivo, sea ó no rentado. La aceptación de cualquiera de éstos, importa la renuncia del de congresal.

Art. 65. — Los eclesiásticos no pueden ser miembros del Congreso; ni los gobernadores ni los ministros de provincia, hasta pasado un año de fenecido el periodo legal correspondiente al primero, y un año después de la renuncia ó cese del segundo.

Art. 66. — Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el tesoro de la nación con una dotación que señalará la ley por cada sesión á que asistan, y que no podrá aumentarse en favor de los que estuviesen en ejercicio. Los permisos se acordarán en todo caso sin goce de dieta.

CAPÍTULO IV

ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

Art. 67. — Corresponde al Congreso:

1º Legislar sobre las aduanas

Art. 67. — Corresponde al Congreso:

1º Legislar sobre aduanas exte-



exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales así como las evaluaciones sobre que recaigan, serán uniformes en toda la Nación; bien entendido que ésta, así como las demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que fuese corriente en las provincias respectivas por su justo equivalente. Establecer igualmente los derechos de exportación;

2º Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del estado lo exijan;

3º Contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Nación;

4º Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional;

5º Establecer y reglamentar un Banco Nacional en la Capital y sus sucursales en las provincias, con facultad de emitir billetes;

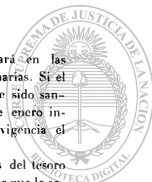
6º Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación;

7º Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Nación y aprobar ó desechar la cuenta de inversión;

riores y establecer los derechos de importación y exportación, los cuales así como las evaluaciones sobre que recaigan, serán uniformes en toda la Nación. Podrá sin embargo con dos tercios de votos de los miembros presentes, disminuir ó suprimir los derechos aduaneros en las aduanas terrestres y en los puertos de las costas marítimas ó fluviales de los territorios nacionales del sur, que estime conveniente y por tiempo determinado, para el consumo y producción de los mismos. Esta facultad la tendrá el Congreso hasta que estos territorios sean erigidos en provincias.

2º Imponer contribuciones indirectas por tiempo determinado, equitativas y proporcionales á la población general de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan;

7º Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Nación y aprobar ó desechar la cuenta de inversión que el po-



der ejecutivo presentará en las primeras sesiones ordinarias. Si el presupuesto no hubiese sido sancionado hasta el 1° de enero inmediato, quedará en vigencia el del año anterior;

8° Acordar subsidios del tesoro nacional á las provincias cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, á cubrir sus gastos ordinarios;

9° Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes y crear y suprimir aduanas, sin que puedan suprimirse las aduanas exteriores que existían en cada provincia, al tiempo de su incorporación;

10° Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación;

11° Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales; correspondiendo su aplicación á los tribunales federales ó provinciales, según que las cosas ó las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía, con sujeción al principio de la ciudadanía natural; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado y las que requieran el establecimiento del juicio por jurados;

8° Acordar subsidios del tesoro nacional á las provincias que lo soliciten en casos de calamidad pública.

11° Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía natural; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de monedas y documentos públicos del Estado;

12º Reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí;

13º Arreglar y establecer las pos-
tas y correos generales de la Na-
ción;

14º Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen á las provincias;

15º Proveer á la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo;

16º Proveer lo conducente á la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo;

17º Establecer tribunales inferiores á la Suprema Corte de justicia, crear y suprimir empleos, fijar sus

13º Legislar sobre correos, telé-
grafos y teléfonos de la Nación y
todo otro medio de comunicación;

15º Proveer á la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos á la vida civilizada;

17º Establecer tribunales inferiores á la Suprema Corte de justicia, crear y suprimir empleos, fijar sus



atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales;

18° Admitir ó desechar los motivos de dimisión del presidente ó vicepresidente de la república y declarar el caso de proceder á nueva elección; hacer el escrutinio y rectificación de ella;

19° Aprobar ó desechar los tratados concluídos con las demás naciones y los concordatos con la Silla Apostólica, y arreglar el ejercicio del Patronato en toda la Nación;

20° Admitir en el territorio de la Nación otras órdenes religiosas á más de las existentes.

21° Autorizar al poder ejecutivo para declarar la guerra ó hacer la paz;

22° Conceder patentes de corso y de represalias, y establecer reglamentos para las presas;

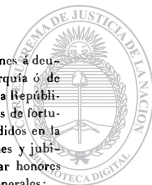
atribuciones, dar pensiones á deudores de militares de jerarquía ó de servidores especiales de la República, que no posean bienes de fortuna y no estén comprendidos en la caja nacional de pensiones y jubilaciones civiles; decretar honores y conceder amnistías generales;

19° Aprobar ó desechar los tratados firmados con las demás naciones, á que se refiere el inciso 14° del artículo 86;

20° La Nación deberá procurar que todas las vías férreas, canales de navegación y telégrafos de la república, sean de propiedad del Estado;

21° *b* Designar, de entre los jefes de mayor graduación del ejército, la persona que ha de desempeñar el cargo de comandante en jefe de las fuerzas de mar y de tierra de la Nación en caso de guerra;

22° Decretar intervención en el territorio de las provincias, conforme al artículo 6°, porque ésta es facultad exclusiva é indelegable del Congreso;





23° Fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y guerra; y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos;

23° Fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y de guerra; y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos. El ejército permanente de tierra en tiempo de paz será formado por voluntarios enganchados, destinados y conscriptos, en número necesario para guardar las fronteras del territorio y efectuar la conquista pacífica del desierto. Sólo pueden ser conscriptos, los analfabetos de 18 á 25 años. En igual época, el de mar, tendrá el personal necesario para el sostenimiento de la escuadra y vigilancia de costas. La marinería, estará constituida por la población marítima de la Nación, comprendidos los mecánicos y obreros de navíos;

24° Autorizar la reunión de las milicias de todas las provincias ó parte de ellas cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones ó repeler las invasiones. Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la nación, dejando á las provincias el nombramiento de sus correspondientes jefes y oficiales y el cuidado de establecer en su respectiva milicia la disciplina prescripta por el Congreso;

25° Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio

24° Legislar sobre organización, disciplina, armamentos y demás disposiciones pertinentes al ejército. Dictar planos generales de ejercicios militares en las escuelas y colegios de la Nación y polígonos de tiro en éstos y en todos los centros de población de la República. Decretar la reunión de todas las fuerzas de mar y de tierra de la Nación en caso de guerra, en las condiciones que estime más conveniente;



de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él;

26° Declarar en estado de sitio uno ó varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior y aprobar ó suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el poder ejecutivo;

27° Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la Nación, y sobre los demás lugares adquiridos por compra ó cesión en cualquiera de las provincias para establecer fortalezas, arsenales, almacenes ú otros establecimientos de utilidad nacional;

28° Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes, antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina.

(Suprimido.)

27° Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la Nación y demás territorios federales, así como sobre los demás lugares adquiridos por compra ó cesión en cualquiera de las provincias para establecer fortalezas, arsenales, almacenes ú otros establecimientos de utilidad nacional.

CAPÍTULO V

DE LA FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LAS LEYES

Art. 68. — Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros ó por el poder ejecutivo, excepto las relativas á los objetos de que trata el artículo 44.

Art. 69. — Aprobado un proyecto por la cámara de su origen, pasa

Art. 69. — Aprobado un proyecto de ley por la cámara de su

para su discusión á la otra cámara. Aprobado por ambas, pasa al poder ejecutivo de la nación para su examen; y si también obtiene su aprobación lo promulga como ley.

Art. 70. — Se reputa aprobado por el poder ejecutivo, todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles.

Art. 71. — Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuere adicionado ó corregido por la cámara revisora, volverá á la de su origen; y si en ésta se aprobasen las adiciones ó correcciones por mayoría absoluta, pasará al poder ejecutivo de la nación. Si las adiciones ó correcciones fuesen desechadas, volverá segunda vez el proyecto á la cámara revisora y si aquí fueren nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, pasará el proyecto á la otra cámara y no se entenderá que ésta reprueba dichas adiciones ó correcciones si no concurre para ello el voto de las dos terceras parte de sus miembros presentes.

Art. 72. — Desechado en todo ó en parte un proyecto por el poder ejecutivo, vuelve con sus objeciones á la Cámara de su origen: esta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez á la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el

origen, pasa para su discusión á la otra cámara. Si ésta lo aprueba sin observaciones queda convertido en ley.

(Suprimido.)

Art. 71. — Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuere adicionado ó corregido por la cámara revisora, volverá á la de su origen; y si en ésta se aprobasen las adiciones ó correcciones por mayoría absoluta, quedará convertido en ley. Si las adiciones fuesen desechadas, volverá segunda vez el proyecto á la cámara revisora y si aquí fueren nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros pasará el proyecto y no se atenderá que ésta reprueba dichas adiciones ó correcciones si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

(Suprimido.)





proyecto es ley, y pasa al poder ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí ó por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del poder ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Art. 73. — En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: «El Senado y Cámara de diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., decretan ó sancionan con fuerza de ley. »

SECCIÓN II

DEL PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I

DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN

Art. 74. — El poder ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano, con el título de *Presidente de la Nación Argentina*.

Art. 75. — En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia ó destitución del presidente, el poder ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución,

Art. 75. — En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, renuncia ó destitución del presidente, el poder ejecutivo será ejercido por el vicepresidente primero, y en defecto de éste, por el vice-



muerte, dimisión, ó inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad ó un nuevo presidente sea electo.

Art. 76. — Para ser elegido presidente ó vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino ó ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, pertenecer á la comunión católica, apostólica, romana, y las demás calidades exigidas para ser elegido senador.

Art. 77. — El presidente y vicepresidente duran en sus empleos el término de seis años; y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un período.

Art. 78. — El presidente de la Nación cesa en el poder el día mismo en que expira su período de seis años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser mo-

presidente segundo de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión ó inhabilidad del presidente y vicepresidente primero y segundo de la Nación, el poder ejecutivo será desempeñado en primer lugar por el presidente del Senado y en segundo por el presidente de la Cámara de diputados, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad, ó un nuevo presidente y vicepresidente primero y segundo sean elegidos, á cuyo efecto se convocará á elección dentro de los diez días siguientes al de la asunción del mando.

Art. 76. — Para ser elegido presidente ó vicepresidente primero y segundo de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, ó ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. Son inelegibles como presidente ó vice los parientes dentro del primer grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente ó vice en ejercicio.

Art. 77. — El presidente y vicepresidentes primero y segundo duran seis años en el ejercicio de sus funciones; y no pueden ser reelegidos, ni alternando los cargos, sino con intervalo de un período.



tivo de que se le complete más tarde.

Art. 79. — El presidente y vicepresidente disfrutarán de un sueldo pagado por el tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna.

Art. 80. — Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente, prestarán juramento en manos del presidente del senado (la primera vez del presidente del Congreso Constituyente), estando reunido el Congreso, en los términos siguientes: « Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (ó vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden. »

Art. 79. — El presidente y vicepresidentes primero y segundo disfrutarán de un sueldo pagado por el tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Nación ni de provincia alguna.

Art. 80. — Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidentes primero y segundo, ante la asamblea legislativa presidida por el presidente del Senado, harán la afirmación siguiente: Yo, N. N., presidente (ó vice primero ó segundo) de la Nación Argentina, prometo solemnemente cumplir la Constitución y las leyes de la nación; y velar por la integridad de su territorio y el mantenimiento de su soberanía. »

CAPÍTULO II

DE LA FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN

Art. 81. — La elección del presidente y vicepresidente de la Nación se hará del modo siguiente:

La Capital y cada una de las

Art. 81. — La elección del presidente y vicepresidentes primero y segundo de la Nación, se practicará directamente por el pueblo de

provincias nombrarán por votación directa, una junta de electores, igual al duplo del total de diputados y senadores que envían al Congreso con las mismas calidades y bajo las mismas formas prescriptas para la elección de diputados.

No pueden ser electores los diputados, los senadores, ni los empleados á sueldo del Gobierno federal.

Reunidos los electores en la capital de la Nación y en la de sus provincias respectivas, cuatro meses antes que concluya el término del presidente cesante, procederán á elegir presidente y vicepresidente de la Nación por cédulas firmadas, expresando en una la persona por quien votan para presidente y en otra distinta la que eligen para vicepresidente.

Se harán dos listas de todos los individuos electos para presidente, y otras dos de los nombrados para vicepresidente con el número de votos que cada uno de ellos hubiere obtenido. Estas listas serán firmadas por los electores y se remitirán cerradas y selladas dos de ellas (una de cada clase) al presidente de la legislatura provincial y en la Capital al presidente de la Municipalidad, en cuyos registros permanecerán depositadas y cerradas; y las otras dos al presidente del Senado (la primera vez al presidente del Congreso Constituyente).

Art. 82. — El presidente del

la república, seis meses antes de la expiración del término del presidente cesante.

La capital federal, las provincias y los territorios nacionales, conforme á la clasificación establecida en el artículo 37, formarán distritos electorales, de manera que cada uno tenga un solo voto para cada cargo, que será el que resulte de la simple mayoría de los sufragantes dentro del sistema proporcional, de tal manera que las tres mayores unidades de votantes, en orden decreciente respondan al presidente y vicepresidentes primero y segundo.

Art. 82. — A los treinta días



Senado (la primera vez el del Congreso Constituyente) reunidas todas las listas, las abrirá á presencia de ambas cámaras. Asociados á los secretarios cuatro miembros del Congreso sacados á la suerte, procederán inmediatamente á hacer el escrutinio y anunciar el número de sufragios que resulte en favor de cada candidato para la presidencia y vicepresidencia de la Nación. Los que reunan en ambos casos la mayoría absoluta de todos los votos, serán proclamados inmediatamente presidente y vicepresidente.

Art. 83. — En el caso de que por dividirse la votación no hubiese mayoría absoluta, elegirá el Congreso entre las dos personas que hubieren obtenido mayor número de sufragios. Si la primera mayoría hubiese cabido á más de dos personas, elegirá el Congreso entre todas éstas. Si la primera mayoría hubiese cabido á una sola persona, y la segunda á dos ó más, elegirá el Congreso entre todas las personas que hayan obtenido la primera y segunda mayoría.

después de la elección, reunida en cada distrito una junta popular igual al duplo de diputados y senadores de cada uno, en los que tengan por lo menos cinco congresales, y en los de inferior representación en número de diez, procederán á hacer el primer escrutinio, el que será público, dentro de diez días consecutivos, cuyo resultado lo proclamarán y comunicarán, adjuntando los antecedentes electorales, á los presidentes de ambas cámaras del Congreso.

Art. 83. — Á los sesenta días de practicada la elección directa del pueblo, se reunirá en asamblea el Congreso presidida por el presidente del Senado ó en su defecto por el presidente de la Cámara de diputados. En este acto se abrirán los pliegos cerrados y sellados de las elecciones, á cuyo fin actuarán como secretarios tres congresales de cada partido militante en las elecciones, elegidos por votación nominal de la asamblea, y se procederá á hacer el escrutinio general y definitivo en una sola sesión pública, computando un solo voto por cada distrito electoral, y proclamarán los nombres de los electos para los respectivos cargos de presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. En caso de igual número de sufragios, será reputado elegido el de mayor edad. El resultado se publicará por los diarios y se comunicará á los electos.





Art. 84. — Esta elección se hará á pluralidad absoluta de sufragios y por votación nominal. Si verificada la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará segunda vez, contrayéndose la votación á las dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la votación y si resultare nuevo empate, decidirá el presidente del Senado (la primera vez el del Congreso Constituyente). No podrá hacerse el escrutinio ni la rectificación de estas elecciones, sin que estén presentes las tres cuartas partes del total de los miembros del Congreso.

Art. 85. — La elección del presidente y vicepresidente de la nación, debe quedar concluida en una sola sesión del Congreso, publicándose en seguida el resultado de ésta y las actas electorales por la prensa.

Art. 84. — Las legislaturas de provincia y el Congreso, para la Capital y territorios nacionales, nombrarán por sorteo de entre los ciudadanos mayores contribuyentes la junta popular. No podrán formar parte de esta junta los diputados y senadores nacionales, los legisladores de provincia, ni ningún empleado á sueldo ó en comisión remuneratoria de la Nación ó de las provincias.

Art. 85. — Una ley especial será dictada dentro de las prescripciones que anteceden, á los fines de asegurar la mayor libertad y eficiencia de la elección.

CAPÍTULO III

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Art. 86. — El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

1º Es el jefe supremo de la Nación y tiene á su cargo la administración general del país;

2º Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para

Art. 86. — El presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones:

1º Es el jefe de la administración de la Nación;



la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias;

3° Es el jefe inmediato y local de la capital de la Nación;

4° Participa de la formación de las leyes con arreglo á la Constitución; las sanciona y promulga;

5° Nombra los magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales inferiores, con acuerdo del Senado;

6° Puede indultar ó conmutar las penas por delitos sujetos á la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de diputados;

7° Concede jubilaciones, retiros, licencias y goces de monte-píos, conforme á las leyes de la nación;

8° Ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de obispos para las iglesias catedrales, á propuesta en terna del Senado;

9° Concede el pase ó retiene los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice de Roma con acuerdo de la Suprema Corte, requiriéndose una ley cuando contienen disposiciones generales y permanentes;

10° Nombra y remueve á los ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; y por sí solo nombra y remueve los ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías,

4° Participa de la formación de las leyes con arreglo á la Constitución;

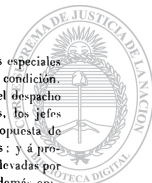
5° Nombra los interventores, en los casos del inciso 22° del artículo 67, con acuerdo del Senado;

(Suprimido.)

(Suprimido.)

(Suprimido.)

10° Nombra ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, directores de bancos y de la caja de conversión, jefe de la contaduría y del tesoro, con acuerdo del Senado, y otros que por esta



los agentes consulares y demás empleados de la administración cuyo nombramiento no está reglado de otra manera por esta Constitución ;

Constitución y por leyes especiales deban satisfacer esta condición. Nombra los ministros del despacho y los agentes consulares, los jefes de reparticiones á propuesta de los ministros respectivos ; y á propuesta de los mismos, elevadas por los primeros, todos los demás empleados de la administración, excepto los comprendidos en el artículo 89, y de los porteros y ordenanzas de las oficinas que deben ser nombrados por los jefes de las respectivas reparticiones. Con excepción de los ministros del despacho, todos estos nombramientos, á base de competencia y buena conducta, terminan treinta días después de la expiración del mandato presidencial, pudiendo recaer los nuevos nombramientos en la mismas personas.

No podrá acumularse en una persona dos ó más empleos ; pero los profesores podrán tener hasta tres cátedras ;

11° Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras en la sala del Senado dando cuenta en esta ocasión al Congreso del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando á su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes ;

11° Concorre anualmente á la apertura de las sesiones del Congreso el 1° de mayo. Reunidas ambas cámaras en el recinto del Senado, presididas por el presidente de este cuerpo y en su defecto por el presidente de la de diputados, dará cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando á la consideración del Congreso las medidas que juzgue necesarias y convenientes ;

12° Prorroga las sesiones ordina-

12° Convoca el Congreso á se-

rias del Congreso ó lo convoca á sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden ó de progreso lo requieren ;

13° Hace recaudar las rentas de la Nación y decreta su inversión con arreglo á la ley ó presupuestos de gastos nacionales ;

14° Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegación, de alianza, de límites y de neutralidad, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las potencias extranjeras ; recibe sus ministros y admite sus cónsules ;

15° Es comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y de tierra de la Nación ;

16° Provee los empleos militares de la Nación, con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos ó grados de oficiales superiores del ejército y armada, y por sí solo en el campo de batalla ;

17° Dispone de las fuerzas militares, marítimas y terrestres y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación ;

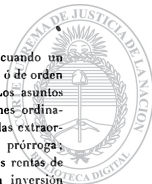
siones extraordinarias, cuando un grave asunto de interés ó de orden público lo requiera. Los asuntos pendientes en las sesiones ordinarias no son materia de las extraordinarias, sino de las de prórroga ;

13° Hace recaudar las rentas de la Nación y decreta su inversión con arreglo á la ley ó presupuestos de gastos nacionales, debiendo mandar publicar mensualmente los ingresos y egresos en un diario de la Capital, por licitación, además del Registro oficial. Todo funcionario que intervenga en la entrega de sumas de dinero no determinadas por la ley será personalmente responsable ;

14° Firma tratados de paz, de comercio, de navegación, de alianza, de límites, de neutralidad y de arbitraje y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las potencias extranjeras : recibe sus ministros y admite sus cónsules ;

(Suprimido.)

17° Dispone de las fuerzas militares, marítimas y terrestres y corre con su organización y distribución en las fronteras del terri-





torio y en el desierto; y en caso de tener necesidad ineludible de situar parte de ellas en las capitales de provincia, sólo podrá hacerlo con acuerdo del Senado, hasta que haya desaparecido la causa determinante;

18° Declara la guerra con aprobación del Congreso;

18° Declara la guerra y concede patentes de corso y cartas de represalias con autorización y aprobación del Congreso;

19° Declara en estado de sitio uno ó varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde á este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23;

(Suprimido.)

20° Puede pedir á los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su conducto á los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos son obligados á darlos;

21° No puede ausentarse del territorio de la Capital, sino con permiso del Congreso. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por graves objetos del servicio público;

22° El presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado y ocurran durante su receso por medio de nombramientos, en comisión, que expirarán

22° El presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión, que expira-

al fin de la próxima legislatura.

rán en las sesiones extraordinarias inmediatas que se celebren, ó el 31 de mayo de las próximas sesiones ordinarias del Congreso.



CAPÍTULO IV

DE LOS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO

Art. 87. — Ocho ministros secretarios tendrán á su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente, por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Una ley especial deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministros.

Art. 88. — Cada ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.

Art. 89. — Los ministros no pueden por sí solos en ningún caso, tomar resoluciones, á excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.

Art. 87. — Ocho ministros secretarios, á saber : del interior, de relaciones exteriores y justicia, de hacienda, instrucción pública, guerra, marina, obras públicas, comercio y agricultura, tendrán á su cargo el despacho de los negocios de la Nación, refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Una ley deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministros.

Art. 89. — Los ministros nombrarán los oficiales de sus secretarías y demás empleados inferiores, en las mismas condiciones y por igual período de tiempo á que se refiere el inciso 1º del artículo 86. Podrán también por sí solos tomar resoluciones concernientes al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos. Para ser ministro se requiere ser

ciudadano nativo en pleno ejercicio de sus derechos.



Art. 90. — Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho, presentarle una memoria detallada del estado de la Nación, en lo relativo á los negocios de sus respectivos departamentos.

Art. 91. — No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisión de sus empleos de ministros.

Art. 92. — Pueden los ministros concurrir á las sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar.

Art. 93. — Gozarán por sus servicios, de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor ó perjuicio de los que se hallan en ejercicio.

SECCIÓN III

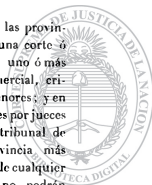
DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO I

DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN

Art. 94. — El poder judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de justicia y por los demas tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.

Art. 94. — El poder judicial será uno solo en todo el territorio de la nación y tendrá su asiento principal en la capital de la República, donde estará formado por la alta corte de justicia y demás tri-



bunales inferiores. En las provincias será ejercida por una corte ó tribunal de apelación y uno ó más jueces en lo civil, comercial, criminal y de pobres y menores; y en los territorios nacionales por jueces con apelación ante el tribunal de la capital de la provincia más inmediata. Los jueces, de cualquier categoría que sean, no podrán tomar participación alguna en elecciones, escrutinios ú otros actos políticos.

Art. 95. — En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes ó restablecer las fenecidas.

Art. 95. — La alta corte de justicia nombra los magistrados de los tribunales inferiores, jueces, secretarios y demás empleados de la Capital y de las provincias, jueces letrados y de paz en los territorios nacionales. Las vacantes se llenarán por ascenso y por antigüedad previamente establecida y en caso de igualdad se elegirá el de mayor edad.

Los jueces de paz de cada provincia serán nombrados por la corte ó tribunal de apelación de la misma.

Art. 96. — Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuída en manera alguna mientras permanecieren en sus funciones.

Art. 96 — Los jueces de la alta corte y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley en condiciones que garanticen la independencia de su carácter, y que no podrá ser disminuída en manera alguna mientras permanecieren en sus funciones. El cargo de juez es incompatible con toda otra comi-



sión ó empleo público ó particular, sea ó no rentado.

Art. 97. — Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de justicia sin ser abogado de la Nación, con ocho años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador.

Art. 98. — En la primera instalación de la Corte Suprema los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la nación, de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente y en conformidad á lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte.

Art. 99. — La Corte Suprema dictará su reglamento interior y económico y nombrará todos sus empleados subalternos.

Art. 98. — Los jueces y secretarios se comprometerán solemnemente á cumplir las funciones del cargo con estricta honradez, de acuerdo con lo que dispone la Constitución y las leyes de la Nación, ante el presidente de la respectiva corte.

Art. 99. — La alta corte dictará su reglamento interior y económico, así como el de los tribunales de provincia, y su presidente enviará al Congreso, el día de la apertura de sus sesiones ordinarias, un mensaje exponiendo el estado de la justicia, con datos estadísticos, é indicando las necesidades y todo cuanto sea conveniente, en sentido de que la justicia sea recta, pronta y barata.

CAPÍTULO II

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL.

Art. 100. — Corresponde á la Corte Suprema y á los tribunales inferiores de la nación, el conoci-

Art. 100. — Corresponde á la alta corte de justicia y demás tribunales de la Nación, el conoci-



miento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la nación, con la reserva hecha en el inciso 11° del artículo 67; y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes á embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos ó más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias ó sus vecinos contra un estado ó ciudadano extranjero.

Art. 101. — En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes á embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.

Art. 102. — Todos los juicios criminales ordinarios que no se derivan del derecho de acusación concedido á la Cámara de diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la república esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la nación contra el Derecho de gen-

miento y decisión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación; por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes á embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima y de los asuntos en que la Nación sea parte.

Art. 101. — La alta corte ejercerá jurisdicción originaria y exclusiva en todos los asuntos concernientes á embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en apelación, en los casos en que determinará una ley especial.

(Suprimido.)

tes, el Congreso determinará por una ley especial, el lugar en que haya de seguirse el juicio.

Art. 103. — La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella ó en unirse á sus enemigos, prestándoles ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito; pero ella no pasará de la persona delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá á sus parientes de cualquier grado.



TÍTULO II

GOBIERNOS DE PROVINCIA

Art. 104. — Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

Art. 105. — Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas.

Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal.

Art. 106. — Cada provincia dicta su propia Constitución conforme á lo dispuesto en el artículo 5°.

Art. 107. — Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de



justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines y con recursos propios.

Art. 108. — Las provincias no ejercen el poder delegado á la Nación.

No pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio ó navegación interior ó exterior; ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso federal; ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda ó documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra ó levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior, ó de un peligro tan inminente que no admita dilación; dando luego cuenta al gobierno federal; ni nombrar ó recibir agentes extranjeros; ni admitir nuevas órdenes religiosas.

Art. 108. — Las provincias no ejercen el poder delegado á la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio ó navegación interior ó exterior; ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer banco con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso federal; ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización; bancarrotas, falsificación de moneda ó documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra ó levantar ejércitos; ni nombrar ó recibir agentes extranjeros; ni admitir nuevas órdenes religiosas.

Art. 109. — Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra á otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas á la Corte Suprema de justicia y dirimidas por ella.

Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición y asonada que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme á la ley.

Art. 110. — Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal, para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.

Art. 109. — Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra á otra provincia. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición y asonada, que el Congreso debe resolver, así como cualquier otra disidencia de carácter político.







ÍNDICE

| Artículo | Página | Artículo | Página |
|----------------------|--------|--------------|--------|
| 55 | 5 | 71 | 221 |
| 55 <i>a</i> | 23 | 72 | 223 |
| 63 | 29 | 75 | 233 |
| 64 | 37 | 76 | 237 |
| 65 | 63 | 77 | 243 |
| 66 | 73 | 79 | 245 |
| 67, 1° | 79 | 80 | 247 |
| » 2° | 89 | 81 | 255 |
| » 7° | 97 | 82 | 271 |
| » 8° | 113 | 83 | 275 |
| » 11° | 117 | 84 | 279 |
| » 13° | 119 | 85 | 281 |
| » 15° | 121 | 86, 1° | 283 |
| » 17° | 125 | » 3° | 287 |
| » 19° | 139 | » 4° | 297 |
| » 20° | 141 | » 5° | 301 |
| » 21° <i>b</i> | 155 | » 6° | 305 |
| » 22° | 163 | » 10° | 311 |
| » 23° | 199 | » 11° | 321 |
| » 24° | 207 | » 12° | 327 |
| » 26° | 213 | » 13° | 333 |
| » 37° | 215 | » 14° | 339 |
| 69 | 217 | » 15° | 343 |
| 70 | 219 | » 17° | 345 |

| Artículo | Página | Artículo | Página |
|---------------|--------|---------------------------|--------|
| 86, 19° | 357 | 101 | 415 |
| » 22° | 359 | 102 | 417 |
| 87 | 363 | 108 | 419 |
| 89 | 365 | 109 | 423 |
| 94 | 369 | 110 | 429 |
| 95 | 397 | Resumen | 433 |
| 96 | 405 | Constitución nacional vi- | |
| 98 | 409 | gente y reformas pro- | |
| 99 | 411 | puestas | 483 |
| 100 | 413 | | |



